Distr.
RESTRINGIDA

LC/R.1461
13 de octubre de 1994

ORIGINAL: ESPAÑOL

CEPAL
Comisión Económica para América Latina y el Caribe

EL TRATAMIENTO A LA INVERSION EXTRANJERA
EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE */

*/ Este trabajo fue preparado por la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD de Empresas Transnacionales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial para ser presentado al Seminario Regional sobre la Modernización de la Legislación Minera en América Latina y el Caribe, La Habana, Cuba, 14 al 16 de noviembre de 1994.

No ha sido sometido a revisión editorial.

94-10-1420

Indice

	<u>Página</u>
Nota introductoria	vii
PAISES DE ALADI	1
I. ARGENTINA	3
I. Organismos competentes y definiciones	5
II. Marco legal	6
II. BOLIVIA	15
I. Organismos competentes y definiciones	17
II. Marco legal	19
III. BRASIL	29
I. Organismos competentes y definiciones	31
II. Marco legal	32
IV. CHILE	43
I. Organismos competentes y definiciones	45
II. Marco legal	46
V. COLOMBIA	59
I. Organismos competentes y definiciones	61
II. Marco legal	63
VI. ECUADOR	77
I. Organismos competentes y definiciones	79
II. Marco legal	81
VII. MEXICO	97
I. Organismos competentes y definiciones	99
II. Marco legal	101
VIII. PARAGUAY	113
I. Organismos competentes y definiciones	115
II. Marco legal	116
IX. PERU	125
I. Organismos competentes y definiciones	127
II. Marco legal	129

X.	URUGUAY	143
	I. Organismos competentes y definiciones	145
	II. Marco legal	146
XI.	VENEZUELA	153
	I. Organismos competentes y definiciones	155
	II. Marco legal	156
PAISES DE CENTROAMERICA		167
XII.	COSTA RICA	169
	I. Organismos competentes y definiciones	171
	II. Marco legal	172
XIII.	EL SALVADOR	187
	I. Organismos competentes y definiciones	189
	II. Marco legal	190
XIV.	GUATEMALA	199
	I. Organismos competentes y definiciones	201
	II. Marco legal	202
XV.	HONDURAS	213
	I. Organismos competentes y definiciones	215
	II. Marco legal	216
XVI.	NICARAGUA	227
	I. Organismos competentes y definiciones	229
	II. Marco legal	230
XVII.	PANAMA	237
	I. Organismos competentes y definiciones	239
	II. Marco legal	240

PAISES DEL CARIBE	255
XVIII. BAHAMAS	257
I. Organismos competentes y definiciones	259
II. Marco legal	260
XIX. BELICE	269
II. Marco legal	271
XX. CUBA	277
II. Marco legal	279
XXI. ISLAS CAIMAN	289
II. Marco legal	291
XXII. REPUBLICA DOMINICANA	295
I. Organismos competentes y definiciones	297
II. Marco legal	298
XXIII. TRINIDAD Y TOBAGO	309
II. Marco legal	311

NOTA INTRODUCTORIA

El presente documento incluye las secciones sobre Organismos Competentes, Definiciones y Marco Legal del Directorio sobre Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe 1993: Marco Legal e Información Estadística (Ref. LC/R.1325, Diciembre 1993) elaborado por la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas Transnacionales de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL.

Dicho Directorio contiene también, información sobre los mecanismos de conversión de la deuda externa y amplia información sobre la estructura del capital extranjero y privatizaciones, en los países de América Latina y el Caribe.

Asimismo, incluye amplio material estadístico sobre el stock y los flujos de inversión extranjera directa (IED), su distribución geográfica y sectorial, la importancia de la IED en las economías nacionales, la distribución de subsidiarias de Empresas Transnacionales (ETNs), las principales operaciones de conversión de la deuda externa, la relación de las empresas de mayor tamaño relativo con participación mayoritaria del capital extranjero, información sobre las empresas regionales con intereses multinacionales, así como una bibliografía seleccionada para cada uno de los países de la región.

Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD
de Empresas Transnacionales

PAISES DE ALADI

I. ARGENTINA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Argentina, actualmente, la inversión extranjera directa no requiere de ningún tipo de autorización oficial y, por ende, no existe la obligatoriedad de efectuar el registro de estas operaciones. Sin embargo, la Ley No. 23697 establece que todas las inversiones extranjeras cualquiera sea su monto o destino pueden inscribirse en el <u>Registro de Inversiones Extranjeras</u> , de la <u>Dirección de Inversiones Externas del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos</u> , y así gozar de las facilidades que la ley otorga, como la remisión de utilidades y la repatriación de capital. Es importante recalcar que este proceso no es obligatorio.
Definición nacional de inversión extranjera directa	En Argentina, la inversión extranjera directa se define como : a) todo aporte de capital perteneciente a inversionistas extranjeros aplicado a actividades de índole económica realizadas en el país y; b) la adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, por parte de inversionistas extranjeros. El inversionista extranjero se define como: a) toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio argentino, titular de una inversión de capital extranjero y; b) las empresas locales de capital extranjero, cuando sean inversionistas en otras empresas locales. La inversión extranjera directa en la Argentina se puede efectuar bajo las siguientes modalidades: a) monedas extranjeras de libre convertibilidad; b) bienes de capital, repuestos y accesorios; c) utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversionistas extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior; d) capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre convertibilidad; e) bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica; f) otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de promoción.
Participación mínima en el capital extranjero	En Argentina se distinguen dos tipos o categorías de empresas: a) empresas locales de capital extranjero, definidas como toda empresa domiciliada en el territorio argentino, en la cual personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49% del capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios; b) empresas locales de capital nacional, definidas como toda empresa domiciliada en el territorio argentino, en la cual personas físicas o jurídicas también domiciliadas en él, sean propietarias directa o indirectamente de no menos del 51% del capital y cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.
Flujo de inversión extranjera directa	El flujo de inversión extranjera directa fue calculado a partir de las inversiones aprobadas por el Poder Ejecutivo o el Ministerio de Economía y, de aquellas que, a pesar de no requerir autorización previa, fueron inscritas en el Registro de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía. Esta información no incluye reinversión de utilidades ni aportes automáticos, es decir, inversiones de bajo monto.
Reinversión de utilidades	El concepto de reinversión de utilidades se define como las utilidades o el capital en moneda nacional pertenecientes a inversionistas extranjeros que son reutilizados en la misma empresa receptora o en otro sector de la economía nacional, siempre que estos recursos se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior. Con excepción de la reserva legal, no se considerará reinversión de capital extranjero, la proporción que corresponda a los inversionistas extranjeros en una empresa local sobre las reservas que ésta constituya estatutaria o voluntariamente o generada por revalúos o actualizaciones contables de cualquier tipo.
Criterios para el registro	En Argentina, el registro de la inversión extranjera directa se efectúa en la moneda extranjera en que se declara la inversión. Además, se adopta como criterio, la identificación del domicilio del inversionista extranjero, como forma de clasificación de la nacionalidad de las empresas.
Stock de capital extranjero directo	En Argentina, el stock fue calculado por última vez, de manera oficial, en 1976 por la Dirección de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía. Para los fines de esta publicación la evolución anual del stock fue calculado a partir de esta estimación oficial, sumando las inversiones inscritas en el Registro de Inversiones Extranjeras para los años posteriores. La información sobre inversión inscrita publicada por el Ministerio de Economía no incluyen reinversión de utilidades ni aportes automáticos, es decir, inversiones de bajo monto.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa**
- Ley No. 21382, Ley de Inversiones Extranjeras*, del 12 de agosto de 1976, modificada por la Ley No. 22208 del 11 de abril de 1980, según texto ordenado por el Decreto No. 1853/93 del 9 de septiembre de 1993. Texto ordenado en 1993 donde se establece el marco legal que enfrenta un inversionista extranjero al realizar actividades en la Argentina.
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1980.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, del 24 de junio de 1980.
- Ley No. 23697, Ley de Emergencia Nacional*, del 1 de septiembre de 1989. Establece una serie de reformas para hacer frente a la crisis económica que sacude al país en esos momentos, el Capítulo VI de esta Ley modifica el Régimen Inversiones Extranjeras (Ley No. 21382/80), eliminando la autorización previa de la inversión.
Fecha de entrada en vigor: 15 de septiembre de 1989.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, No. 26725, del 25 de septiembre de 1989.
- Decreto No. 1853/93* del 2 de septiembre de 1993. Aprueba el texto ordenado de la Ley No. 21382 sobre el Régimen de Inversión Extranjera, ley modificada por las Leyes No. 23697 y No. 23760.
Fecha de entrada en vigor: 2 de septiembre de 1993.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, del 8 de septiembre de 1993.
- Leyes sectoriales**
- Ley No. 20652* del 8 de marzo de 1974. Reserva a Yacimientos Carboníferos Fiscales la comercialización de carbón residual del petróleo.
Fecha de entrada en vigor: 8 de marzo de 1974.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, del 28 de marzo de 1974.
- Decreto Ley No. 22477* del 18 de diciembre de 1956. Régimen legal y de comercialización de materiales nucleares, que establece que la propiedad de los mismos está en manos del Estado. Este Decreto fue modificado por el Decreto Ley No. 1647 del 4 de marzo de 1963 en lo que se refiere a su Artículo No. 27 sobre el régimen vigente para las exportaciones de material nuclear, y por la Ley No. 22246 del 27 de junio de 1980. Asimismo, este decreto fue reglamentado por el Decreto No. 5423 del 23 de mayo de 1957 y su modificación a través del Decreto No. 2823 del 21 de abril de 1964.
Fecha de entrada en vigor: 18 de diciembre de 1956.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, del 28 de diciembre de 1956.
- Ley No. 24076* del 20 de mayo de 1992. Regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la Ley No. 17319 la producción, captación y tratamiento.
Fecha de entrada en vigor: 13 de junio de 1992.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27407, del 12 de junio de 1992.
- Ley No. 24065* del 16 de enero de 1992. Establece un marco regulatorio para la generación, transporte y distribución de electricidad.
Fecha de entrada en vigor: 16 de enero de 1992.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27306, del 16 de enero de 1992.
- Ley No. 24145* del 24 de septiembre de 1992. Se transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias que cumplan determinadas características, en lo que no se oponga a lo establecido por otras leyes que regulan el sector.
Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1992.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27509, del 6 de noviembre de 1992.
- Leyes de transferencia de tecnología**
- Ley No. 22426, Ley de Transferencia de Tecnología*, del 12 de marzo de 1981. Reglamenta la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, a favor de personas físicas o jurídicas públicas o privadas domiciliadas en la Argentina. Mediante la Ley No. 24076 del 20 de mayo de 1992, los alcances de esta ley no se extienden a la privatización del Gas del Estado.
Fecha de entrada en vigor: 12 de marzo de 1981.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, marzo 1981.
- Decreto No. 580* del 25 de marzo de 1981. Reglamenta la Ley No. 22426.
Fecha de entrada en vigor: 25 de marzo de 1981.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, del 30 de marzo de 1981.
- Ley No. 23697, Ley de Emergencia Nacional*, del 1 de septiembre de 1989. Establece una serie de reformas para hacer frente a la crisis económica que sacude al país en esos momentos, el Capítulo II de esta Ley establece la suspensión de subsidios y subvenciones y regímenes de promoción industrial.
Fecha de entrada en vigor: 15 de septiembre de 1989.
Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina No. 26725, del 25 de septiembre de 1989.

Leyes sobre
conversión de deuda
externa

Comunicación "A" 1109, Programa de Conversión de Deuda Pública Externa, del Banco Central de la República Argentina, del 27 de octubre de 1987. Entrega los lineamientos generales del régimen de conversión de pasivos externos en inversiones del sector privado en el país. Esta Comunicación modificó lo establecido anteriormente por las Comunicaciones "A" 1035 y "A" 1059 del 1 de junio de 1987 y 3 de agosto de 1987, respectivamente. En la práctica esta norma no se aplica porque el Banco Central no ha llamado a nuevas licitaciones desde 1988.

Fecha de entrada en vigor: 27 de octubre de 1987.

Fuente: NOP Normas Ordenadas Permanentes, Banco Central de la República Argentina.

Comunicación "A" 1056, Programa de Capitalización de los Représtamos ("on lending"), del Banco Central de la República Argentina, del 30 de julio de 1987. Reglamenta los aportes de capital mediante la aplicación de obligaciones externas del sector privado.

Fecha de entrada en vigor: 30 de julio de 1987.

Fuente: NOP Normas Ordenadas Permanentes, Banco Central de la República Argentina.

Comunicación "A" 1194, Régimen de Préstamos y Redescuentos, del Banco Central de la República Argentina, de mayo 1988. Reglamenta la posibilidad que los deudores del sistema bancario puedan cancelar sus obligaciones con las entidades financieras con títulos de la deuda externa pública. En la práctica esta norma no se aplica porque el Banco Central no ha llamado a nuevas licitaciones desde 1988.

Fecha de entrada en vigor: mayo de 1988.

Fuente: NOP Normas Ordenadas Permanentes, Banco Central de la República Argentina.

Resolución No. 551 del 29 de abril de 1992. Establece la posibilidad de fijar el precio correspondiente a los procesos de privatización en títulos de deuda pública. Esta norma fue modificada por la Resolución No. 873 del 20 de julio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: mayo de 1992

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1992.

Resolución No. 934 del 5 de agosto de 1992. Determina el uso de títulos de deuda externa referidos a Bonos de Consolidación y Bonos de Consolidación de Deudas Previsionales. Esta norma fue modificada por la Resolución No. 1054 del 1 de septiembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: agosto de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1992.

Leyes sobre
promoción industrial

Ley No. 23697, Ley de Emergencia Nacional, del 1 de septiembre de 1989. Elimina de todos los subsidios públicos para el sector privado y otras facilidades incluidos en los subsidios creados en los programas de promoción industrial. Esta eliminación caducó después de un año de vigencia.

Fecha de entrada en vigor: 15 de septiembre de 1989.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina No. 26725, del 25 de septiembre de 1989.

Decreto No. 2284, Decreto de Desregulación de la Economía, del 31 de octubre de 1991. Este Decreto que abarca a la industria, la agricultura, el comercio y los servicios, pretende destrabar la acción del sector privado y del gobierno, principalmente, en el comercio exterior, dándole mayor competitividad internacional a la economía. La norma dispone además la disolución de una decena de organismos reguladores de diversas actividades productivas, flexibiliza las prácticas comerciales y suprime diversos impuestos y contribuciones. Además se suprimen los cupos de importación y exportación, las intermediaciones previas administrativas, las preferencias adicionales y las reservas de carga, se simplifican los requisitos para inscribirse como importador y exportador, y se establece un régimen de importación temporal. Este último de denomina admisión temporal y permite ingresar productos semiterminados, partes y materias primas para usarlas en bienes que serán exportados.

Fecha de entrada en vigor: 13 de octubre de 1991.

Fuente: *Estrategia* No. 879, del 11 de noviembre de 1991, Santiago, Chile.

Decreto No. 2054 del 1 de diciembre de 1992. Establece un régimen de sustitución de Beneficios Promocionales instando a las empresas a continuar o no dentro de los regímenes de promoción nacional.

Fecha de entrada en vigor: diciembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, 1992.

Leyes sobre zonas de
procesamiento de
exportaciones

Ley No. 22415. Establece el Código Aduanero.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Resolución No. 72 del 7 de enero de 1992. Esta medida regula el Régimen de Admisión Temporal, el cual permite la importación libre de impuestos de mercaderías a ser procesadas para la reexportación en un plazo no superior a 180 días. Esta medida pretende promocionar las Zonas de Procesamiento de Exportaciones. El gobierno argentino autorizó una Zona de Procesamiento de Exportaciones en el Puerto de La Plata en 1991, y una segunda será instalada en Entre Ríos en 1992. Esta norma no ha sido aún implementada.

Fecha de entrada en vigor: 7 de enero de 1992.

Fuente: *Business Latin America* del 10 de febrero de 1992.

Ley No. 19640 del 16 de mayo de 1972. Crea un sistema de excepción que hace de Tierra del Fuego un área aduanera especial.

Fecha de entrada en vigor: 3 de junio de 1972.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina del 2 de junio de 1972.

Leyes sobre
privatizaciones

Ley No. 23696 de Reforma del Estado del 23 de agosto de 1989. Esta Ley enmarca todas las privatizaciones de empresas del Estado, excepto el caso específico de Gas, Energía Eléctrica e Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).

Fecha de entrada en vigor: 23 de agosto de 1989.

Fuente: "Privatization in Latin America", Suplemento de Latin Finance, mayo 1991.

Decreto No. 2284, del 8 de noviembre de 1991, establece el cronograma para las privatizaciones, proceso que debe estar cumplido en su totalidad en diciembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.

Fuente: *Diario Ambito Financiero*, Año XV No. 3789, miércoles 13 de noviembre de 1991, Buenos Aires Argentina.

Ley No. 24076 del 20 de mayo de 1992. Regula el transporte y distribución de gas natural que constituyen un servicio público nacional, siendo regidos por la Ley No. 17319 la producción, captación y tratamiento. Además se declara sujeta a privatización bajo el régimen de la Ley No. 23696 a Gas del Estado Sociedad del Estado.

Fecha de entrada en vigor: 13 de junio de 1992.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27407, del 12 de junio de 1992.

Ley No. 24065 del 16 de enero de 1992. Establece un marco regulatorio para la generación, transporte y distribución de electricidad. Además se declara sujeta a privatización total la actividad de generación y transporte a cargo de las empresas Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires Sociedad Anónima, Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado e Hidroeléctrica Norpatagónica Sociedad Anónima.

Fecha de entrada en vigor: 16 de enero de 1992.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27306, del 16 de enero de 1992.

Ley No. 24145 del 24 de septiembre de 1992. Se transfiere el dominio público de los yacimientos de hidrocarburos del Estado Nacional a las provincias que cumplan determinadas características, en lo que no se oponga a lo establecido por otras leyes que regulan el sector. Asimismo, se aprueba la declaración de "sujeto a privatización" del capital social de YPF Sociedad Anónima.

Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1992.

Fuente: Boletín Oficial de la República Argentina, Año C, No. 27509, del 6 de noviembre de 1992.

Acuerdos
Internacionales

Convenio Constitutivo de la Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones (MIGA) del 29 de noviembre de 1990. Este Convenio fue ratificado por el Congreso.

Fecha de entrada en vigor: 29 de noviembre de 1990.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (CIADI) de 1991. Este Convenio no ha sido ratificado por el Congreso.

Fecha de entrada en vigor: 1991.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio del Overseas Private Investment Corporation (OPIC) de 1959. Este Convenio fue ratificado mediante la Ley No. 15803 de 1961. En mayo de 1990 se firmó un Protocolo Anexo.

Fecha de entrada en vigor: 1961.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Alemania en Bonn, el 9 de abril de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24098 del 10 de junio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Canadá en Toronto, el 5 de noviembre de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24125 del 26 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y España en Buenos Aires, el 3 de octubre de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24118 del 5 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 28 de septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Estados Unidos en Washington, el 14 de noviembre de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24124 del 26 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Francia en París, el 3 de julio de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24100 del 10 de junio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdos
internacionales
(continuación)

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Italia en Buenos Aires, el 22 de mayo de 1990. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24122 del 26 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Polonia en Buenos Aires, el 31 de julio de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24101 del 10 de junio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Suiza en Berna, el 12 de abril de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24069 del 10 de junio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y Suecia en Estocolmo, el 22 de noviembre de 1991. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24117 del 5 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 28 de septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Acuerdo de Promoción y Protección de Inversión firmado por la República Argentina y la Unión Belgo-Luxemburgo en Bruselas, el 28 de junio de 1990. Este Acuerdo fue aprobado por la Ley No. 24123 del 26 de agosto de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1992.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital entre Argentina y Alemania Federal, firmado en Buenos Aires el 13 de julio de 1978 y aprobado por la Ley No. 22025.

Fecha de entrada en vigor: 26 de octubre de 1979.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y el capital entre Argentina y Austria, firmado en Buenos Aires el 13 de septiembre de 1979 y aprobado por la Ley No. 22589.

Fecha de entrada en vigor: 17 de enero de 1983.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio, entre Argentina y Bolivia, firmado en Santa Cruz de la Sierra, el 30 de octubre de 1976 y aprobado por la Ley No. 21780.

Fecha de entrada en vigor: 4 de junio de 1979.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y Protocolo, entre Argentina y Brasil, firmado en Buenos Aires, el 17 de mayo de 1980 y aprobado por la Ley No. 22675.

Fecha de entrada en vigor: 7 de diciembre de 1982.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble tributación en materia de impuestos sobre la renta, ganancias o beneficios y sobre el capital y el patrimonio, entre Argentina y Chile, firmado en Santiago de Chile, el 13 de noviembre de 1976 y aprobado por la Ley No. 23228.

Fecha de entrada en vigor: 19 de diciembre de 1985.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y patrimonio, entre Argentina y Francia, firmado en Buenos Aires, el 4 de abril de 1979 y aprobado por la Ley No. 22357.

Fecha de entrada en vigor: 1 de marzo de 1981.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal con respecto a los impuestos sobre la renta y Protocolo, entre Argentina e Italia, firmado en Roma, el 15 de noviembre de 1979 y aprobado por la Ley No. 22747.

Fecha de entrada en vigor: 15 de diciembre de 1983.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

Convenio para evitar la doble imposición con respecto a los impuestos a los réditos y al capital entre Argentina y Suecia, firmado en Buenos Aires el 3 de septiembre de 1962 y aprobado por el Decreto Ley No. 12821/62.

Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 1963.

Fuente: Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

El régimen que regula la inversión extranjera en la Argentina esta establecido en la Ley No. 21382, según texto ordenado por el Decreto No. 1853 de 2 de septiembre de 1993, modificado por las Leyes No. 23697: Ley de Emergencia Nacional del 1 de septiembre de 1989, y la Ley No. 23760 del 7 de diciembre de 1989, que establece una Reforma Impositiva.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

El primer antecedente relevante de regulación de las inversiones extranjeras en la Argentina son las contenidas en el Decreto No. 337 de 1948, que establecía un sistema de fiscalización de estas inversiones, el cual fue derogado en 1956. En 1953, se dictó la Ley No. 14222, según la cual, las inversiones debían registrarse, en un Registro Nacional, además de fijar las normas para repatriar capital y utilidades. Esta Ley estableció una Comisión Interministerial de Inversiones Extranjeras, además preveía la concesión de ciertos beneficios, como la exención de derechos aduaneros y la declaración de "interés nacional" para algunas inversiones dándoles la posibilidad de acogerse a regímenes de promoción industrial.

Tras la reforma cambiaria de 1955, diversas circulares del Banco Central y algunos decretos regularon en forma parcial las inversiones extranjeras, liberalizando el régimen de la Ley No. 14222, la que fue derogada en el año 1957. Al año siguiente, se dictó la Ley No. 14780, régimen que estaba orientado a estimular la inversión extranjera en el país, el cual se complementó con la Ley No. 14781: Ley de Promoción Industrial. En la Ley No. 14780, se eliminaron las limitaciones impuestas por el régimen anterior, en relación a la repatriación de capital y remesa de utilidades, además de otorgar acceso a nuevos beneficios. En 1969, se creó el Servicio de Promoción de Inversiones Externas, como dependencia del Ministerio de Economía y Trabajo, luego transferido a la Secretaría de Comercio Exterior, asignándole el rol de estudiar las propuestas de inversión acogidas a la Ley No. 14780.

En 1971 estas normas fueron sustituidas por la Ley No. 19151, que estableció un sistema de evaluación previa y registro de las inversiones extranjeras, el nuevo marco jurídico era administrado por la Secretaría de Planeamiento y Acción de Gobierno, en cuyas dependencias se creó un Registro de Inversiones Extranjeras. Las solicitudes que contaran con dictamen positivo deberían ser aprobadas mediante Decreto del Poder Ejecutivo; en el acto de aprobación debían ser fijadas las condiciones de remesas de utilidades y repatriación del capital. La autoridad de aplicación de la Ley debía, además, dar preferencia a las inversiones que propusieran una asociación con capitales nacionales. Asimismo, se estableció el registro de las inversiones preexistentes.

En el año 1973, esta legislación fue sustituida por la Ley No. 20557, la cual introdujo algunas innovaciones importantes. Esta nueva Ley establecía que las inversiones debían instrumentarse mediante "contratos de radicación", sujetas a la aprobación, según los casos, del Poder Ejecutivo o

del Poder Legislativo de la Nación. La repatriación de capital no podía efectuarse antes de 5 años luego de la aprobación del contrato de radicación, ni por montos superiores al 20% anual. Por otra parte, para la remisión de utilidades también se fijaron porcentajes máximos.

En el año 1976, se dicta la Ley No. 21382, base de la legislación actual, la cual a su vez deroga toda la normativa anteriormente vigente. Esta Ley fue modificada por la Ley 22208 en 1980, y ese mismo año fue formalizada por el Decreto No. 1062/80 el cual entrega el Texto Ordenado de la Ley de Inversiones Extranjeras. Estas Leyes modificaron sustancialmente la filosofía y alcances del régimen legal anteriormente vigente, cambiando el énfasis desde el control a la promoción de la inversión extranjera. La Ley No. 22208 avanzó en esta línea, eliminando todo tipo de prohibición en cuanto a sectores de destino de la inversión extranjera directa; estableciendo igualdad de derechos y obligaciones respecto a los inversionistas nacionales y eliminando todo tratamiento diferencial (acceso al crédito interno y a regímenes de promoción); abriendo la posibilidad de invertir en bienes de capital usados y de capitalizar bienes inmateriales y; permitiendo la libre remisión de utilidades y repatriación de capitales. Además unificó las funciones de evaluación y registro en el ámbito de la Subsecretaría de Economía, dependiente del Ministerio de Economía.

En el año 1989, se introducen nuevas modificaciones al Régimen de Inversiones Extranjeras, a través de la Ley No. 23697: Ley de Emergencia Económica, la que deja sin efecto los Artículos Nos. 4, 6, 7 y 10 de la Ley No. 21382, y el Decreto No. 1622/85, los cuales establecían la aprobación previa de la inversión extranjera en los sectores de informática, telecomunicaciones y electrónica. Esta es una normativa que afectó a un número importante de sectores de la economía argentina y se dictó en un período de grave crisis económica con brotes hiperinflacionarios, contracción productiva y graves perturbaciones financieras. La Ley de Emergencia Nacional, en su Capítulo VI, derogó todas aquellas normas por las que se requería la aprobación previa para realizar determinadas inversiones, además dispone la inscripción, optativa, en las dependencias del Registro de Inversiones Extranjeras, del Ministerio de Economía, como requisito para poder remesar utilidades y repatriar capitales. Este último punto era especialmente importante para situaciones de dificultades de pagos externos, como la que vivía Argentina en esos momentos, donde los inversionistas extranjeros inscritos tendrían derecho a recibir en Bonos Externos (BONEX), convertibles en dólares, el equivalente a las sumas que desearan remitir por concepto de utilidades. Sin embargo, al dictarse a principios de 1990 la liberación plena del mercado cambiario, tal inscripción voluntaria en el Registro de Inversiones Extranjeras, no constituyó más un incentivo real para los inversionistas extranjeros.

Finalmente, en septiembre de 1993, mediante un nuevo texto ordenado para la Ley No. 21382, se adecua la normativa de inversión extranjera a la denominada Ley de Convertibilidad (Ley No. 23928) y se regulan algunas actividades no contempladas por la legislación anterior.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Ley No. 21382 define la inversión extranjera directa como: a) todo aporte de capital perteneciente a inversionistas extranjeros aplicado a actividades de índole económica realizadas en el país y; b) la adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, por parte de inversionistas extranjeros.

La misma Ley define al inversionista extranjero como: a) toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio argentino, titular de una inversión de capital extranjero y; b) las empresas locales de capital extranjero, cuando sean inversionistas en otras empresas locales, es decir, empresas domiciliadas en el territorio de la República Argentina, en las cuales personas físicas o jurídicas domiciliadas fuera de él, sean propietarias directa o indirectamente de más del 49% del capital o cuenten directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.

Además, establece que la inversión extranjera directa, en la Argentina se puede efectuar bajo las siguientes modalidades: a) monedas extranjeras de libre convertibilidad; b) bienes de capital, repuestos y accesorios; c) utilidades o capital en moneda nacional pertenecientes a inversionistas extranjeros, siempre que se encuentren legalmente en condiciones de ser transferidos al exterior; d) capitalización de créditos externos en moneda extranjera de libre convertibilidad; e) bienes inmateriales, de acuerdo con la legislación específica; f) otras formas de aporte que se contemplen en regímenes especiales o de promoción.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

En Argentina, los inversionistas extranjeros que invierten capitales en el país en cualquiera de las formas establecidas anteriormente, destinados a la promoción de actividades de índole económica o a la ampliación o el perfeccionamiento de las existentes, tienen los mismos derechos y obligaciones que la Constitución y las Leyes establecen para los inversionistas nacionales. Para estos efectos, se entiende por actividades de índole económica o productivas a todas las actividades industriales, mineras, agropecuarias, comerciales, financieras, de servicios u otras vinculadas a la producción o intercambio de bienes o servicios.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

Los inversionistas extranjeros pueden efectuar inversiones en el país sin necesidad de aprobación previa, en iguales condiciones que los inversionistas domiciliados en el país. Anteriormente, el proceso de autorización era obligatorio, tal como se establecía en la Ley No. 21382, concretamente sus Artículos Nos. 4, 6, 7 y 10, y el Decreto No. 1622/85.

La Ley No. 23697 establece que todas las inversiones extranjeras cualquiera sea su monto o destino pueden inscribirse en el Registro de Inversiones Extranjeras, y así gozar de las facilidades que la Ley otorga. Este proceso no es obligatorio.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Los inversionistas extranjeros pueden transferir al exterior las utilidades líquidas y realizadas provenientes de sus inversiones, así como repatriar su inversión. Estos derechos podrán ser ejercidos en cualquier momento.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

En Argentina, el Régimen de Inversiones Extranjeras establece que la inversión extranjera directa puede radicarse en todos los sectores de la economía. Sin embargo, otras Leyes establecen algunas limitaciones:

a) La Ley No. 20652, del 8 de marzo de 1974, establece que la comercialización de todo el carbón residual que se produzca en el país estará a cargo exclusivo de la empresa estatal Yacimientos Carboníferos Fiscales, con las excepciones que establezca el Poder Ejecutivo.

b) El Decreto Ley No. 22477, del 18 de diciembre de 1956, declara elementos nucleares el uranio, el torio y el plutonio, y establece que los yacimientos, minas, relaves y otros depósitos de elementos nucleares son bienes privados del Estado (nacional o provincial). Su explotación y exploración puede ser concedida a terceros pero, en principio, está prohibida su enajenación.

8. Tributación.

Argentina tiene convenios para evitar la doble tributación con 8 países: Alemania, Austria, Bolivia, Brasil, Chile, Francia, Italia y Suecia.

Las empresas con actividades en la Argentina deben pagar un Impuesto a la Renta del 30% de sus utilidades. Las sucursales de una empresa extranjera también deben pagar un 30%. En Argentina no existen impuestos a las utilidades extraordinarias.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros no están sujetos a tributación. Por otro lado, la remesa de utilidades y capital de una sucursal argentina a su casa matriz en el extranjero tiene una retención del 30%.

Las ganancias producidas por la utilización de regalías (*royalties*) son gravadas con un impuesto del 30%. La tasa de retención por concepto de pago de regalías al extranjero fluctúa entre el 18% y el 27%, dependiendo del tipo de regalía. Para asistencia técnica y consultoría no disponible en el país, la tasa tributaria aplicada sobre el 60% de las regalías remitidas es de 18%; para licencias de patentes e invenciones, la tasa aplicable sobre el 80% de las regalías remitidas es de 24%; para asistencia no incluida en la Ley de Transferencia de Tecnología, la tasa aplicada sobre el 90% de las regalías remitidas es de 27%.

Además existen algunos impuestos sobre los activos (2%), el Impuesto al Valor Agregado (18%), y otros impuestos menores que dependen del tamaño de las operaciones de la empresa (1 - 4.5%).

9. Royalties o regalías.

La Ley No. 22426 de marzo de 1981 regula la transferencia, cesión o licencia de tecnología o marcas por personas domiciliadas en el exterior, en favor de personas físicas o jurídicas públicas o privadas domiciliadas en la Argentina. Los contratos celebrados entre una empresa local de capital extranjero y la empresa que directamente la controle, u otra filial de esta última, serán sometidos a la autorización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (perteneciente a la Secretaría de Industria y Comercio Exterior). Se considera automáticamente aprobada si no manifiesta ninguna objeción en un plazo de 90 días.

Cuando se paguen a beneficiarios del exterior sumas por concepto de regalías se deberá cancelar: a) el 60% de los importes pagados por prestaciones derivadas de servicios de asistencia técnica, ingeniería o consultoría que no fueran obtenibles en el país a juicio de la autoridad competente en materia de transferencia de tecnología; b) el 80% de los importes pagados por prestaciones derivadas en cesión de derechos o licencias para la exportación de patentes de invención; c) el 100% de los importes pagados por las prestaciones mencionadas en los puntos a) y b) precedentes que no cumplan debidamente los requisitos exigidos por la Ley No. 22426.

II. BOLIVIA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Bolivia actualmente no existe una institución oficial que esté encargada de llevar un registro sistemático de las inversiones extranjeras directas. El actual régimen crea mecanismos institucionales para la administración de la Ley, dentro de una perspectiva de promoción de la inversión extranjera, minimizando la importancia del registro. La Ley No. 1182, en su Artículo No. 21, establece que los <u>Ministerios del ramo</u> son los organismos nacionales competentes para los efectos de la ejecución, aplicación y cumplimiento de la Ley de Inversiones en coordinación con el <u>Ministerio de Industria, Comercio y Turismo</u> .
Definición nacional de inversión extranjera directa	La inversión extranjera directa en Bolivia, al igual que en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena, se define, a través de la Decisión 291, como los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa. Dichos aportes pueden ser en: a) moneda libremente convertible; b) bienes físicos o tangibles tales como plantas industriales, maquinarias y equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios; c) capitalización de créditos externos o deuda intrafirma, la que es definida como los préstamos efectuados por las empresas matrices a sus empresas subsidiarias, asociadas o afiliadas; d) aportes en moneda nacional, provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior (regalías devengadas, dividendos retenidos, etc.); y e) capitalización de utilidades reinvertidas y otras reservas patrimoniales. No existe una definición estrictamente nacional que esté incorporada a la Ley de Inversiones de Bolivia (Ley No. 1182).
Participación mínima del capital extranjero	En Bolivia, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera. No obstante, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dependiendo de la participación extranjera en el capital con derecho a voto, la empresa receptora es calificada como: a) empresa nacional, menos del 20%; b) empresa mixta, entre 20 y 50% y; c) empresa extranjera, más del 50%. Además, en Bolivia, el capital accionario de las entidades financieras internacionales públicas que no forman parte de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena y de las entidades gubernamentales extranjeras de cooperación para el desarrollo cualquiera sea su naturaleza jurídica, se define como Capital Neutro y es considerado como inversión extranjera directa.
Flujo de inversión extranjera directa	Al no existir en Bolivia un registro sistemático de las entradas anuales de inversión extranjera directa, la Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas Transnacionales ha realizado un levantamiento de información a partir de cuatro fuentes básicas: a) Instituto Nacional de Inversiones (INI); b) Dirección de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA); c) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y d) Banco Central de Bolivia. El flujo de inversión extranjera directa fue calculado en base a la definición entregada por la Decisión 291 de la JUNAC, y corresponde a las inversiones identificadas y autorizadas cada año por las fuentes consultadas.
Reinversión de utilidades	Se considera reinversión a la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en la que se hayan generado.
Criterios para el registro	La Unidad Conjunta CEPAL/UNCTAD sobre Empresas Transnacionales, preparó un levantamiento de información que se efectuó básicamente a partir de cuatro fuentes principales: <ol style="list-style-type: none"> 1) Instituto Nacional de Inversiones (INI): la recopilación de antecedentes en el INI se efectuó en el Departamento de Registro de Inversiones Extranjeras. Dicho Departamento tuvo la misión de registrar las solicitudes de inversión nacionales y extranjeras que se acogían a los beneficios de la Ley de Inversiones (Decreto Ley No. 18751) en el período 1971-1984. A partir de 1985 la nueva política económica (Decreto Supremo No. 21060) deja en la práctica sin efecto la Ley de Inversiones puesto que elimina todo incentivo de tipo arancelario y tributario. Este hecho, trajo como consecuencia una suspensión total del registro de inversiones tanto de capitales nacionales como extranjeros. Por lo tanto, la recopilación de información en esta fuente abarcó el período mencionado (1971-1984), haciendo notar que el monto de inversión extranjera directa que se registra para el año 1970 es un valor acumulado de años anteriores y que fue proporcionado también por el INI y verificado con las otras fuentes consultadas. Teniendo en cuenta que la información existente en esta fuente no se encontraba organizada ni sistematizada, se tuvo que proceder a una revisión cuidadosa de aproximadamente 250 expedientes seleccionándose 139 empresas entre mixtas y extranjeras. Los antecedentes obtenidos en el INI presentaron varios inconvenientes que es interesante enumerar: i) información no organizada ni sistematizada; ii) teniendo en cuenta que el INI no aplicó un seguimiento en forma continua, por limitaciones en recursos humanos y financieros muchos expedientes se encontraban incompletos e inclusive existían algunos casos de falta total de documentación; iii) falta de uniformidad en los formularios aplicados; iv) es necesario hacer notar que en el período mencionado el personal técnico fue disminuyendo en número, con una rotación permanente, hasta quedar reducido a dos funcionarios y; v) en los expedientes analizados no se encontró información precisa sobre: empleo, ventas, utilidades, reinversiones, remesas, fusión de empresas y, compromisos de transformación.

Criterios para el registro
(continuación)

- 2) Dirección de Comercio y Sociedades por Acciones (RECSA): la recopilación de datos en RECSA se efectuó en su Departamento de Archivos. RECSA depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y tiene como función principal el de registrar a todas las empresas instaladas en Bolivia de acuerdo al Código de Comercio. Esta acción la realiza tanto para Sociedades Anónimas como para Sociedades de Responsabilidad Limitada. La recopilación de información se hizo para el período 1976 a 1990. En la categoría de Sociedades Anónimas, están incluidas las empresas extranjeras bajo la denominación de "sucursales". Sin embargo, estas empresas no están obligadas a suministrar información sobre la estructura del capital social, origen del capital y otros datos sobre las características de estas empresas. Por otro lado, en el grupo de Sociedades Anónimas también están incluidas empresas que sin pertenecer a la calidad de "sucursales", poseen capitales extranjeros. En este sentido, la búsqueda estuvo dirigida a estos dos tipos de empresas, para lo cual, se analizó el libro de registro del Departamento de Archivo, seleccionando inicialmente 290 expedientes, de los cuales se obtuvieron datos de 261, el resto no correspondía a la categoría de empresas extranjeras o su expediente no se encontraba en el archivo. En el proceso de recopilación de información se presentaron múltiples dificultades de las mismas características a las encontradas en el INI.
- 3) Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB): a través de esta fuente fue posible obtener antecedentes sobre la inversión extranjera directa de las empresas contratistas de YPFB en el período 1973-1990. Identificando 13 empresas extranjeras que han operado en el país tanto en la fase de exploración como de explotación. La información obtenida en esta institución provino de la Dirección de Negociaciones de La Paz y de la Junta de Control en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
- 4) Banco Central de Bolivia: a través de la Gerencia de Estudios Económicos se obtuvieron antecedentes sobre el programa de conversión de deuda externa en capital. Además se obtuvieron algunos antecedentes referenciales y globales sobre los flujos de inversión extranjera directa en el país.

Los antecedentes obtenidos a través de este levantamiento, a partir de varias fuentes diferentes, están en dólares corrientes. Sin embargo, solamente la información del INI estaba originalmente en moneda libremente convertible, la información obtenida de RECSA estaba en moneda local, lo que significa un inconveniente, sobre todo en los últimos años de la década de los ochenta en que Bolivia sufrió una alta inflación. Las estadísticas sobre origen de la inversión, reflejan tan sólo la procedencia del capital.

Stock de capital extranjero

Se entiende como stock de capital extranjero, al monto total, valor libro o valor histórico de los activos al momento en que fueron comprados, expresado en moneda de libre convertibilidad, del capital accionario y reservas, más la deuda intrafirma neta y, más la reinversión de utilidades. El stock fue calculado como el valor acumulado de los flujos anuales.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena; Lima-Perú, marzo de 1991.
- Ley No. 1182* del 11 de septiembre de 1990. Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera en Bolivia.
Fecha de entrada en vigor: 17 de septiembre de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 1194* del 1 de noviembre de 1990. Establece la nueva Ley de Hidrocarburos.
Fecha de entrada en vigor: 1 de noviembre de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX; No.1668. Publicada el 8 de noviembre de 1990.
- Ley No. 1243* del 4 de abril de 1991. Eleva a rango de Ley el Código de Minería, aprobado por el Decreto Ley No. 07148 del 7 de mayo de 1965.
Fecha de entrada en vigor: 11 de abril de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXXI, No.1687. Publicada el 23 de abril de 1991.
- Decisión 28* de diciembre de 1970. Establece la nómina de productos que no se producen en ningún país de la subregión, que no han sido reservados para programas sectoriales de desarrollo industrial y que se reservan para ser producidos en Bolivia y Ecuador. Esta Decisión fue modificada por las Decisiones 62, 108, 137 y 162.
Fecha de entrada en vigor: diciembre de 1970.
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en los países de la ALADI. VII. Grupo Andino, Volumen 1. Régimen Común-Bolivia; Buenos Aires 1985.
- Decreto Supremo No. 9816* del 9 de julio de 1971. Aprueba y ratifica la Decisión 28.
Fecha de entrada en vigor: 9 de julio de 1971.
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en los países de la ALADI. VII. Grupo Andino, Volumen 1. Régimen Común-Bolivia; Buenos Aires 1985.
- Decreto Supremo No. 14352* del 14 de febrero de 1977. Aprueba las modificaciones a la Decisión 28 introducidas a través de la Decisión 108.
Fecha de entrada en vigor: 14 de febrero de 1977.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.
- Decreto Ley No. 11686* del 13 de julio de 1974. Reserva la propiedad de bosques naturales a empresas bolivianas o mixtas.
Fecha de entrada en vigor: 15 de agosto de 1974.
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en los países de la ALADI. VII. Grupo Andino, Volumen 1. Régimen Común-Bolivia; Buenos Aires 1985.
- Decisión 91* de agosto de 1975. Establece el Programa Sectorial de la Industria Petroquímica. Esta Decisión fue modificada por las Decisiones 130 y 170.
Fecha de entrada en vigor: agosto de 1975.
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de las inversiones extranjeras en los países de la ALADI. VII. Grupo Andino, Volumen 1. Régimen Común-Bolivia; Buenos Aires 1985.
- Decisión 300* del 16 de mayo de 1991. Establece el Programa de Integración Industrial Metalmeccánico. Sustituye a la Decisión 146 de julio de 1979 que establecía el Programa de la Industria Metalmeccánica.
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año VIII, No. 82, Lima, 12 de junio de 1991.
- Ley No. 1333* del 27 de abril de 1992. Regula la protección y conservación del medio ambiente y los recursos naturales y establece la política ambiental y el sistema nacional de información ambiental.
Fecha de entrada en vigor: 27 de abril de 1992.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Leyes sobre transferencia de tecnología** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena; Lima-Perú, marzo de 1991.
- Ley No. 1182* del 11 de septiembre de 1990. Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera en Bolivia.
Fecha de entrada en vigor: 17 de septiembre de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.

- Leyes de transferencia de tecnología (continuación)**
- Decisión 84* de junio de 1974. Establece las bases para una política tecnológica subregional.
Fecha de entrada en vigor: junio de 1974.
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de la transferencia de tecnología en los países de la ALADI. II. Grupo Andino, Régimen Común; Buenos Aires, 1986.
- Decisión 154* de junio de 1974. Establece el Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT).
Fecha de entrada en vigor: junio de 1974
Fuente: BID-INTAL. Régimen jurídico de la transferencia de tecnología en los países de la ALADI. II. Grupo Andino, Régimen Común; Buenos Aires, 1986.
- Decreto Supremo No. 19133* del 10 de septiembre de 1982. Ratifica e incorpora a la legislación de Bolivia la Decisión 154 sobre el SAIT.
Fecha de entrada en vigor: 10 de septiembre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.
- Decreto Supremo No. 21596* del 7 de mayo de 1987. Crea un Grupo Formador de Negociadores en Tecnología e Inversiones bajo la Dirección de Ciencias y Tecnología del Ministerio de Planeación y Coordinación.
Fecha de entrada en vigor: 7 de mayo de 1987.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.
- Decreto Supremo No. 22908* del 23 de septiembre de 1992. Crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Fecha de entrada en vigor: 23 de septiembre de 1992.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Leyes sobre propiedad industrial**
- Ley del 16 de noviembre de 1916.* Establece y regula los privilegios industriales.
Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 1917.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio de Bolivia. Departamento de Propiedad Industrial.
- Ley Reglamentaria de 1918.* Regula la tramitación y concesión de marcas, rótulos denominativos de origen, símbolos, etc., por parte de la oficina de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Exportaciones y Competitividad Económica (MECE).
Fecha de entrada en vigor: 1918.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Decisión 311* del 8 de noviembre de 1991. Establece el nuevo Régimen Común sobre Propiedad Industrial.
Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año VIII, No. 96, Lima, 12 de diciembre de 1991.
- Ley No. 1322* del 13 de abril de 1992. Regula el régimen de protección del derecho de autoría sobre las obras de ingenio de carácter original, sean de índole literaria, artística o científica.
Fecha de entrada en vigor: 13 de abril de 1992.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Leyes sobre promoción de exportaciones**
- Decreto Supremo No. 22753* del 15 de marzo de 1991. Amplía y complementa las medidas que facilitan y apoyan las exportaciones, eliminando el certificado de Reintegro Arancelario (CRA) e instituyendo en su reemplazo el Régimen Integro del Gravamen Aduanero Consolidado (*Drawback* o devolución de derechos).
Fecha de entrada en vigor: 15 de marzo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones**
- Ley No. 1182* del 11 de septiembre de 1990. Se estimula y garantiza la inversión nacional y extranjera en Bolivia. Además establece que las zonas francas industriales orientadas a la exportación, zonas francas comerciales o temporales de depósito, así como el Régimen de Internación Temporal para la exportación, funcionan bajo el principio de segregación aduanera y fiscal con exención de imposiciones tributarias y arancelarias.
Fecha de entrada en vigor: 17 de septiembre de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXX, No.1162. Publicada el 26 de septiembre de 1990.
- Decreto Supremo No. 21660* del 10 de julio de 1987. Establece los lineamientos de la reactivación económica. Entre ellos, se autoriza el establecimiento de enclaves de "Zonas Francas Industriales".
Fecha de entrada en vigor: 10 de julio de 1987.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXVI, No.1521. Publicada el 10 de julio de 1990.
- Decreto Supremo No. 22410* del 11 de enero de 1990. Autoriza la instalación de Zonas Francas, Régimen de Importación Temporal de bienes y mercancías en el territorio boliviano y maquila.
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Decreto Supremo No. 22526* del 13 de junio de 1990. Promulga el Reglamento del Régimen de Zonas Francas e Internación Temporal.
Fecha de entrada en vigor: 13 de junio de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.
- Leyes sobre conversión de deuda externa**
- Decreto Supremo No. 21660* del 10 de julio de 1987. Establece los lineamientos de la reactivación económica. Entre ellos, se autoriza la emisión de bonos de inversión para su canje por deuda externa.
Fecha de entrada en vigor: 10 de julio de 1987.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXVI, No.1521. Publicada el 10 de julio de 1987.

Leyes sobre
Privatizaciones

Decreto Supremo No. 22407 del 11 de enero de 1990. Crea la Comisión Evaluadora de la Empresa Pública.
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1990.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia.

Decreto Supremo No. 22836 del 14 de junio de 1991. Establece las normas generales para el reordenamiento de todas las empresas públicas y para la privatización de algunas de ellas.
Fecha de entrada en vigor: 1 de julio de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia; Año XXXI, No.1698. Publicada el 1 de julio de 1991.

Ley No. 1330 de Privatizaciones del 24 de abril de 1992. Establece los lineamientos para la privatización de empresas estatales. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto Supremo No. 23170 de junio de 1992 y complementada por el Decreto Supremo No. 23287 de 8 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: mayo de 1992.
Fuente: "Privatization Update" Suplemento del *Latin Finance*, No. 39, 1992.

Acuerdos
Internacionales

Convenio constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA), suscrito por Bolivia el 5 de mayo de 1986 en Washington. Este Convenio fue ratificado por la Ley No. 1126.
Fecha de entrada en vigor: 1986.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Garantías de Inversiones, representado por la Overseas Private Investment Corporation (OPIC) y suscrito entre Bolivia y Estados Unidos el 19 de diciembre de 1985.
Fecha de entrada en vigor: 1985.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convenio sobre doble tributación firmado por Bolivia y Alemania el 20 de septiembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 1992.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Tratado sobre ventas suscrito entre Bolivia y Alemania el 23 de marzo de 1987, con una duración de diez años.
Fecha de entrada en vigor: 9 de noviembre 1990.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo para formar el Consejo sobre el Comercio y la Inversión entre Bolivia y Estados Unidos, firmado el 8 de mayo de 1990.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Bélgica/Luxemburgo, firmado el 25 de abril de 1990.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convenio sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y China Popular firmado el 8 de mayo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y España firmado el 24 de abril de 1990.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convenio sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Francia firmado el 25 de octubre de 1989.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Italia firmado el 30 de abril de 1990.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Holanda firmado el 10 de marzo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido ratificado.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convenio sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Reino Unido firmado el 24 de mayo de 1988.
Fecha de entrada en vigor: 16 de febrero de 1990.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Convenio sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Suecia firmado el 20 de septiembre de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 3 de julio de 1992.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Acuerdo sobre Promoción y Protección de Inversiones entre Bolivia y Suiza firmado el 6 de noviembre de 1987.
Fecha de entrada en vigor: 15 de mayo de 1991.
Fuente: Ministerio de Relaciones Exteriores.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Bolivia la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley No. 1182 dictada el 11 de septiembre de 1990. No obstante, al igual que en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena, la inversión extranjera en Bolivia se rige por la Decisión 291 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de marzo de 1991. Sin embargo, hasta el momento, en la legislación boliviana no existe ninguna norma que ratifique la Decisión 291.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

La primera ley de fomento a la inversión de capital extranjero fue la Ley No. 48 de 1960. En 1965, con el objeto de ampliar el contenido del régimen de incentivos a la inversión se dicta el Decreto Ley No. 7366 que crea el Instituto Promotor de Inversiones en Bolivia (INPIBOL), el cual es reglamentado por el Decreto Supremo No. 790. Estos Decretos contenían algunas disposiciones sobre la libre disponibilidad y convertibilidad para las transferencias de capitales al exterior; establecían la garantía de indemnización por expropiación y; otorgaban el derecho a repatriar los montos correspondientes a esa indemnización. Además, se estableció un esquema de jerarquización de sectores.

La evolución posterior del tratamiento de la inversión extranjera en Bolivia está estrechamente ligada a los cambios producidos en las Decisiones del Grupo Andino que han regulado en esta materia y, de manera especial, a la Decisión 24 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en junio de 1971.

En efecto, mediante el Decreto Ley No. 09798 del 30 de junio de 1971 la Decisión 24 fue incorporado a la legislación interna. La nueva norma supra-regional fue dictada con la finalidad de limitar la influencia financiera exterior y asegurar una mayor contribución del sector privado local al desarrollo nacional. Asimismo, contemplaba la reducción progresiva a una posición minoritaria de las participaciones extranjeras en las empresas locales, la eliminación del capital extranjero en los sectores claves, la limitación del derecho a remitir utilidades al exterior y muchas otras disposiciones de carácter restrictivo.

Posteriormente, por medio del Decreto Ley No. 10045 del 10 de diciembre de 1971, se modifica la normativa vigente estableciendo el régimen de tratamiento especial para las inversiones nuevas, nacionales o extranjeras y las reinversiones, siempre que se concentraran en los sectores de industria, minería, agricultura, ganadería, recursos naturales renovables, construcción y turismo. Asimismo, establecía una serie de incentivos como la liberación de derechos arancelarios, exenciones de impuestos, regímenes de depreciación de activos, concesiones de tierras para explotación agropecuaria, etc.. Para el cumplimiento de estas disposiciones se crea, además, el Instituto Nacional de Inversiones (INI). Este hecho creó incertidumbre acerca del tratamiento en Bolivia al capital

extranjero, producto de la coexistencia de esta nueva legislación con la Decisión 24, ratificada internamente.

El 14 de diciembre de 1981, la legislación fue nuevamente modificada, dictándose el Decreto Ley No. 18751 (Ley de Inversiones), el cual otorgaba mayores garantías y beneficios fiscales a las empresas privadas que desearan invertir en Bolivia. Este Decreto creaba un régimen de franquicias fiscales con exenciones y rebajas tributarias.

Después de dieciséis años de haber entrado en vigor y haber sufrido múltiples modificaciones, el 18 de mayo de 1987 la Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220. Por medio de esta norma se flexibiliza el tratamiento de la inversión extranjera eliminando algunos requisitos de registro y autorización de las inversiones y remesas de utilidades al exterior, suprimiendo los sectores reservados y otorgando la posibilidad de que cada país miembro pudiera legislar en forma individual en materia de inversión extranjera. La Decisión 220 no fue ratificada por la legislación interna de Bolivia, sin embargo sus planteamientos fueron incorporados implícitamente a la normativa de la inversión extranjera en el país.

En 1989, el INI fue disuelto y transferido al Instituto Nacional de Promoción de Inversiones (INPROIN).

En 1990, Bolivia volvió a modificar la Ley de Inversiones, mediante el dictado de la Ley No. 1182, la cual derogó al Decreto Ley No. 18751.

En 1991, con el fin de estimular y promover mayores flujos de capitales y tecnologías extranjeras hacia las economías andinas se volvió a modificar el Régimen Común, sustituyendo la Decisión 220 por la Decisión 291. Esta norma subregional tampoco ha sido ratificada por la legislación interna de Bolivia.

De esta manera, son dos las normas que en la actualidad rigen la inversión extranjera en Bolivia; la Decisión 291 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en marzo de 1991, que sustituye a la Decisión 220 y la Ley No. 1182 de septiembre de 1990, actual Ley de Inversiones en Bolivia. Ambas normas establecen la liberalización y desregulación de la inversión extranjera en el país.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Decisión 291 define como inversión extranjera directa los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

Por otro lado, la Ley No. 1182 no contiene una definición nacional específica sobre inversión extranjera.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

Tanto en la Decisión 291 como en la Ley No. 1182 se reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o sociedad en que éste participe, los mismos derechos, deberes y garantías que las Leyes y los Reglamentos otorguen a los inversionistas nacionales, sin otras limitaciones que las establecidas por la Ley.

Específicamente, la Ley No. 1182, establece una serie de garantías, tanto a inversionistas nacionales como extranjeros, tales como: a) el derecho de propiedad; b) la libertad cambiaria, no existiendo restricciones para el ingreso y salida de capitales, ni para la remisión al exterior de utilidades, intereses o regalías; c) la libre convertibilidad de la moneda, lo que permite efectuar actos jurídicos, operaciones o contratos tanto en moneda nacional como extranjera; d) la libertad para contratar seguros de inversión en el país o en el exterior; e) la libertad de importación y exportación de bienes y servicios; f) la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios, así como la libre determinación de precios; g) el derecho de los inversionistas nacionales y extranjeros a someter sus diferencias a tribunales arbitrales y; h) la libertad para acogerse a los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La Decisión 291 señala en su Artículo No. 3 que la inversión extranjera directa, las reinversiones y la venta de acciones, participaciones y derechos de los inversionistas extranjeros podrán ser registradas ante el organismo nacional competente, de acuerdo con lo que disponga la legislación de cada país miembro.

En este sentido, la Ley de Inversiones en su Artículo No. 3 dispone expresamente que la inversión privada, tanto nacional como extranjera, no requiere de autorización previa ni registro adicional, salvo si es establecido por Ley. Asimismo, se señala como autoridad competente en materia de inversión extranjera a los Ministerios del ramo, en coordinación con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

La Decisión 291 en los Artículos Nos. 4 y 5 establece el derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas que provengan de la inversión extranjera directa y a remesar el producto de la venta de acciones participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes. En el caso de la venta de acciones, participaciones o derechos, dicha transacción no es considerada como reexportación de capital.

De la misma forma, la Ley No. 1182 dispone libertad cambiaria e irrestricta remisión al exterior de dividendos, intereses y regalías por transferencia de tecnología u otros conceptos mercantiles, así como la libre entrada y salida de capitales, previo pago de los impuestos que la Ley establezca.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Entre los dispositivos legales que señalan las restricciones para la inversión extranjera en algunos sectores reservados al capital nacional se encuentran:

a) El Código de Minería: Decreto Ley No. 07148/65 modificado por la Ley No. 1243 del 4 de abril de 1991, establece: i) todas las sustancias, cualquiera sea su origen o forma de yacimiento, pertenecen al dominio del Estado (Artículo No. 1); ii) las personas individuales o colectivas extranjeras no pueden adquirir ni poseer, a ningún título, concesiones mineras dentro de los 50 kilómetros de las fronteras internacionales de Bolivia, directa o indirectamente, excepto el caso de necesidad nacional declarada por una Ley específica (Artículo No. 14).

b) La Ley de Hidrocarburos: Ley No. 1194 del 1 de noviembre de 1990, establece en su Artículo No. 4 que las empresas extranjeras pueden realizar actividades de exploración, explotación, refinamiento e industrialización, instalación de plantas industriales de procesamiento y transformación de hidrocarburos sólo en relación contractual con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), ente responsable de dichas actividades, sin mayores limitaciones que las señaladas por la Constitución y las Leyes vigentes.

c) La Constitución Política del Estado en su Artículo No. 139 establece que los yacimientos de hidrocarburos, cualquiera que sea el estado físico en que se encuentren o forma en que se presenten son de dominio directo, inalienable e imprescriptible del Estado. Ninguna concesión o contrato puede conceder la propiedad de los yacimientos de hidrocarburos. Esta normativa queda también establecida en el Artículo No.1 de la Ley de Hidrocarburos del 1 de noviembre de 1990.

d) Bolivia, como país miembro del Acuerdo de Cartagena, no puede autorizar la inversión extranjera directa en su territorio, ni la celebración de contratos de importación de tecnología para la elaboración de productos pertenecientes a la industria petroquímica que no les hubieren sido asignados, incluidos en los anexos de la Decisión 91 de agosto de 1975 y en las posteriores modificaciones incluidas en las Decisiones 130 y 170. No obstante, pueden producirse algunas

excepciones, siempre y cuando estén sujetas a las cláusulas y restricciones establecidas en la Decisión 91 y sus modificaciones.

e) El Decreto Ley No. 11686 del 13 de julio de 1974, reserva la propiedad forestal en bosques naturales a empresas bolivianas o mixtas.

f) La Constitución Política del Estado prohíbe a los extranjeros la posesión o adquisición de terrenos dentro de los 50 kilómetros de las fronteras de Bolivia.

A excepción de las restricciones anteriores, la Ley No. 1182 garantiza la libertad de producción y comercialización de bienes y servicios en general por parte de los inversionistas extranjeros.

8. Tributación

Bolivia tiene convenios para evitar la doble tributación con 2 países: Argentina y Alemania.

Las inversiones extranjeras en Bolivia, al igual que las nacionales, están sujetas al Régimen Tributario en vigencia. Así, todas las entidades empresariales necesitan registrarse para obtener residencia en el país para los efectos tributarios. En Bolivia todas las empresas deben pagar un Impuesto a la Renta del 3% sobre sus utilidades. En Bolivia no existen impuestos a las utilidades extraordinarias.

En el caso de una sucursal de una empresa extranjera sus utilidades están también afectas al pago del 2% de impuestos.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros tiene en Bolivia una retención del 13%.

Los intereses constituyen gastos deducibles, pero el Banco Central de Bolivia tiene el derecho de hacer objeciones y, si así fuera debe pagarse un impuesto de 36%. La tasa de retención de una remesa de intereses es de 13%. Si el inversionista extranjero tuviera residencia en Alemania o Argentina hay una tasa más baja, 10% y 12.5% respectivamente, producto de los acuerdos de eliminación de doble tributación. Asimismo, los pagos por intereses, asistencia técnica, royalties y otros gastos generales administrativos son gastos deducibles para la empresa, y la tasa de retención al momento de pago es de 13%.

En Bolivia el Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza al 13%, más un 2% de impuesto a las transacciones.

Adicionalmente, existen algunas disposiciones específicas en materia de hidrocarburos y minería. En el primer caso, la Ley de Hidrocarburos (Ley No. 1194, Título III) señala que la producción de hidrocarburos está sujeta a:

a) Un impuesto nacional de 19% sobre la producción en boca de pozo.

- b) Un impuesto a las utilidades del 40% sobre la utilidad neta de los contratistas.
- c) Una participación departamental, denominada Regalía, equivalente al 11% de la producción bruta en boca de pozo.
- d) Una Regalía Nacional Compensatoria del 1% de la producción bruta en boca de pozo.

Este tratamiento tributario se refiere exclusivamente a las fases de exploración y explotación, estando las otras fases sujetas a régimen tributario general. Finalmente los aportes al seguro social y otras contribuciones sobre las remuneraciones son también obligaciones tributarias de los inversionistas.

En cuanto al sector minero, el Código de Minería (Ley No. 1243, Artículos No. 118, 119, 120, 200 y Artículo Transitorio) establece un régimen impositivo constituido por dos elementos:

- a) Un anticipo del impuesto sobre las utilidades equivalente al 2.5% sobre el valor de las ventas netas de la empresa.
- b) Un impuesto a las utilidades del 30% sobre la utilidad neta.

Por otro lado, las empresas mineras están exentas del pago al Impuesto a la Renta Presunta de empresas y al impuesto a las transacciones, en el caso de la comercialización de minerales o metales en el mercado interno. También, el Código de Minería establece en su Artículo Transitorio que las empresas mineras existentes antes de la promulgación de dicho Código, estarán sujetas al actual régimen de regalías, no pudiendo en ningún caso pagar un monto que sea inferior al 2.5% del valor de sus ventas netas.

Finalmente, tanto la exportación de productos mineros como de hidrocarburos están exentos del pago de impuestos. Sin embargo, las exportaciones de petróleo, gas natural, sus derivados y subproductos quedan exentos de todo impuesto, menos los establecidos por la Ley de Hidrocarburos.

9. Royalties o regalías

Para los efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o patentes, Bolivia junto con los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena debe tener en cuenta que dichos contratos no contengan, entre otras cosas, cláusulas que obliguen a pagar regalías por patentes o marcas no utilizadas o vencidas. Esto queda establecido en el Artículo No. 14 (inciso g) de la Decisión 291.

Por otra parte, el Artículo No. 15 señala que las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida que no constituyen aportes de capital, darán derecho al pago de regalías. Además, las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, previo pago de los impuestos correspondientes. Finalmente, cuando esas contribuciones tecnológicas sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en los casos previamente calificados por el organismo nacional competente de Bolivia.

III. BRASIL

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Brasil la institución responsable del registro, control y seguimiento de la inversión extranjera directa es el <u>Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros (FIRCE)</u> del Banco Central do Brasil.
Definición nacional de inversión extranjera directa	La inversión extranjera directa en Brasil se define como los bienes, máquinas y equipos ingresados al país sin desembolsos iniciales de divisas, o bien, los recursos financieros o monetarios introducidos al país para su utilización en actividades económicas; en ambos casos, estos recursos deben pertenecer a personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas o con sede en el exterior.
Participación mínima del capital extranjero	En Brasil, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera. No obstante, pese a no existir un porcentaje mínimo, el Banco Central do Brasil considera como subsidiarias a las empresas controladas, directa o indirectamente, por inversionistas extranjeros en más de 50 % del capital con derecho a voto, y como filiales aquellas cuyo control del capital con derecho a voto es de 100%.
Flujo de inversión extranjera directa	Los flujos de inversión extranjera directa comprenden los siguientes elementos: a) inversión en bienes, desembolsos de divisas, reinversión de utilidades, conversión de créditos externos en inversión y conversión en inversión de otros bienes pertenecientes a residentes en el exterior, menos; b) retornos de la inversión y, las pérdidas y ganancias de capital. El Banco Central do Brasil entrega solamente cifras desagregadas para el stock de capital extranjero, calculado como el valor acumulado de los flujos. Para los fines de esta publicación, los flujos de inversión extranjera directa en el Brasil fueron calculados como la diferencia entre los stocks de capital extranjero invertido en el país, para dos años consecutivos. Los datos sobre flujos anuales representan la inversión extranjera directa registrada en el Banco Central do Brasil cada año. De acuerdo a la Ley, el registro debe hacerse en un plazo no superior a los 30 días luego del ingreso de las divisas, maquinarias y equipos pertenecientes al inversionista extranjero; siendo necesario además entregar antecedentes contables de la empresa receptora como prueba de la materialización de las inversiones en el Brasil. Con estos antecedentes, el Banco Central emite un certificado de registro de la inversión extranjera que posibilita al inversionista a realizar remesas de capital y utilidades al exterior. Este trámite no siempre se realiza dentro de los plazos establecidos, lo que significa un desfase entre el registro del capital y su efectivo ingreso al país. Esta es una de las causas más importantes de la dificultad para comparar los flujos reales con los flujos derivados del stock registrado en el Banco Central do Brasil.
Reinversión de utilidades	El concepto de reinversión se define como los rendimientos producidos por empresas establecidas en el país, atribuidos a residentes o domiciliados en el exterior, que fueron reutilizados en las mismas empresas que los producen o en otro sector de la economía. El Banco Central do Brasil entiende por reinversión en otro sector de la economía nacional a la reutilización de utilidades en otras sociedades diferentes a la empresa original, siempre que: a) no sean utilizadas en actividades consideradas especulativas, como negociaciones en Bolsas de Valores y negocios inmobiliarios; b) sea comprobado que las reinversiones permitan a la empresa receptora desarrollar nueva tecnología y, aumentar la productividad y el capital de giro.
Deuda intrafirma	En Brasil, los préstamos de corto y largo plazo entre la casa matriz y su filial local, así como otros créditos asociados otorgados desde el país de origen de la inversión, no son clasificados como inversión directa, sino que son contabilizados como deuda externa del país.
Remesas al exterior	Las remesas por concepto de regalías (royalties), son las cantidades remitidas por pagos de licencias por explotación de patentes o uso de marcas industriales y comerciales en el país. La legislación brasilera establece algunas restricciones a las remesas por concepto de royalties; a) no son permitidos pagos de regalías entre filiales o subsidiarias en Brasil y su casa matriz con sede en el exterior, b) tampoco son permitidos cuando la mayoría del capital de la empresa en Brasil pertenezca a los titulares que reciben los pagos por royalties en el exterior.
Criterios para el registro	Los valores registrados en el Banco Central do Brasil son contabilizados en la moneda extranjera efectivamente ingresada al país y en moneda local, luego son convertidos en dólares americanos a la tasa de cambio vigente al final de cada trimestre. Las series históricas registradas en el Banco Central do Brasil, representan los valores del stock de capital en la moneda del país de origen actualizados a cada año por la tasa de cambio del final del período entre el dólar americano y la moneda de dicho país. Esto significa que eventuales modificaciones ocurridas en los valores del stock en dólares de la inversión de un determinado país, de un año para otro, se pueden referir a aumentos o disminuciones del flujo de inversión de ese país en el Brasil, como puede deberse a eventuales modificaciones de la paridad cambiaria entre ese país y el dólar. El país de origen es el país de donde proviene la inversión directa, realizada por la casa matriz, subsidiaria o por una empresa asociada. Por lo tanto, si una inversión directa es realizada por una filial localizada en un país diferente al de la localización de la matriz, el país registrado es el del origen de la filial. El registro de las reinversiones se realiza simultáneamente en moneda nacional y en la moneda del país al cual podrían haber sido remitidas las utilidades, independientemente de la moneda extranjera en que la inversión fue originalmente registrada.
Stock de capital extranjero directo	El stock de capital extranjero directo, representa los valores históricos de las inversiones extranjeras directas y las reinversiones registradas en el Banco Central do Brasil. No incluye los préstamos intra-firma.
Inversiones nacionales directas en el exterior	El stock de inversiones brasileras en el exterior, representa los valores históricos de los capitales brasileros invertidos en el exterior, registrados en el Banco Central do Brasil, convertidos en dólares a la tasa de cambio vigente a la fecha de cada remesa autorizada al exterior. No existen registros en el Banco Central do Brasil de reinversiones brasileras en el exterior. El flujo de inversiones brasileras en el exterior fue calculado por la diferencia entre los valores de los stocks de capitales brasileros en el exterior entre dos años consecutivos. Los stocks representan los valores remitidos al exterior, no siendo computados los valores de las reinversiones, los retornos de utilidades y capital, y de las eventuales pérdidas producidas.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley No. 4131*, del 3 de septiembre de 1962. Regula la inversión extranjera en Brasil y la remesa de capital y utilidades al exterior. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 4390 del 29 de agosto de 1964, y publicada en el Diário Oficial da União del 11 de septiembre de 1964.
Fecha de entrada en vigor: 27 de septiembre de 1962.
Fuente: Diário Oficial da União del 27 de septiembre de 1962.
- Decreto No. 55762* del 17 de febrero de 1965. Decreto que reglamenta a la Ley No. 4131.
Fecha de entrada en vigor: 18 de febrero de 1965.
Fuente: Diário Oficial da União del 18 de febrero de 1965.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 2004: Ley de Hidrocarburos*, del 3 de octubre de 1953. Esta Ley fue incorporada a la Enmienda Constitucional No. 1 del 17 de octubre de 1969, y ratificada en el Artículo No. 177 de la nueva Constitución de 1988. Establece que la exploración, explotación y refinación de hidrocarburos líquidos o gaseosos es un monopolio estatal.
Fecha de entrada en vigor: 3 de octubre de 1953.
Fuente: Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988.
- Decreto No. 62383* del 11 de marzo de 1968. Este Decreto fue incorporado a la Enmienda Constitucional No. 1 del 17 de octubre de 1969, y ratificado en el Artículo No. 178 de la nueva Constitución de 1988. Establece que la navegación de cabotaje es privativa de empresas nacionales, salvo casos de necesidad pública.
Fecha de entrada en vigor: 11 de marzo de 1968.
Fuente: Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988.
- Constitución de la República Federativa del Brasil, Enmienda Constitucional No. 1* del 17 de octubre de 1969, ratificada en el Artículo No. 222 de la nueva Constitución de 1988. Prohíbe a extranjeros y a empresas con participación extranjera la explotación de actividades periodísticas, de radiodifusión y televisión.
Fecha de entrada en vigor: 17 de octubre de 1969.
Fuente: Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988.
- La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988*, establece en su Artículo No. 176 que la exploración y explotación de recursos minerales y el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica solamente se pueden efectuar con el consentimiento del Estado, por brasileros o empresas brasileras de capital nacional.
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988.
Fuente: Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988.
- La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988*, establece en su Artículo No. 177 que la exploración, explotación, procesamiento, industrialización, comercio de minerales y sustancias nucleares y sus derivadas es un monopolio del Estado.
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988.
Fuente: Constitución de la República Federativa del Brasil, 1988.
- Decreto No. 92319* del 23 de enero de 1986. Regula el funcionamiento de empresas extranjeras que tienen por objeto la explotación del transporte aéreo y de servicios accesorios.
Fecha de entrada en vigor: 23 de enero de 1986.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, II. Brasil, Buenos Aires, 1985. Actualización No. 1, 1987.
- Ley No. 7565* del 12 de diciembre de 1986. Esta Ley establece que las concesiones de transporte aéreo se otorgan solamente a personas jurídicas brasileras, y que las empresas extranjeras de transporte aéreo internacional que operan en Brasil, deben ser designadas por el gobierno de los respectivos países de origen de dichas empresas.
Fecha de entrada en vigor: 12 de diciembre de 1986.
Fuente: Diário Oficial da União, del 12 de diciembre de 1986.
- Ley No. 7232*, del 29 de octubre de 1984. Establece principios, objetivos y directrices de la Política Nacional de Informática. Toda la legislación del área de informática está siendo modificada para terminar con las reservas de mercado hacia el 30 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 29 de diciembre de 1984.
Fuente: Diário Oficial da União, del 30 de octubre de 1984.
- Ley No. 7646*, del 18 de diciembre de 1987. Dispone sobre la protección de la propiedad industrial de programas de computadoras, software, y su comercialización en el país. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto No. 96036 del 12 de mayo de 1988 y publicada en el Diário Oficial da União del 16 de mayo de 1988.
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1987.
Fuente: Diário Oficial da União, del 22 de diciembre de 1987.

Leyes sectoriales
(continuación)

Decreto No. 84067, del 8 de octubre de 1979. Crea la Secretaría Especial de Informática (SEI), modificado por el Decreto No. 85790, del 6 de marzo de 1981.

Fecha de entrada en vigor: 9 de octubre de 1979.

Fuente: Diário Oficial da União, del 9 de octubre de 1979.

Decreto No. 99541, del 21 de septiembre de 1990. Dispone sobre la autorización previa para la importación y producción de bienes de informática.

Fecha de entrada en vigor: 21 de septiembre de 1990.

Fuente: Diário Oficial da União, del 24 de septiembre de 1990.

Ley No. 5709 del 7 de octubre de 1971. Regula la adquisición de bienes inmuebles rurales por parte de extranjeros residentes en el país o personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en Brasil. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto No. 74965 del 26 de noviembre de 1974, publicado en el Diário Oficial da União del 27 de noviembre de 1974.

Fecha de entrada en vigor: 7 de octubre de 1971.

Fuente: Diário Oficial da União, 11 de octubre de 1971.

Resolución del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) No. 3, del 9 de enero de 1986 del Ministerio de Hacienda. Restringe la participación, directa o indirecta, del capital extranjero en compañías de seguros, sociedades de inversión, entidades abiertas de previsión privada con fines de lucro y sociedades corredoras de seguros. Esta Resolución fue modificada por la Resolución del CNSP No. 14 del 3 de julio de 1986.

Fecha de entrada en vigor: 9 de enero de 1986.

Fuente: Diário Oficial da União, 16 de enero de 1986.

Ley No. 4595: Ley del Sistema Financiero Nacional, del 31 de diciembre de 1964. Designa al Banco Central do Brasil para autorizar el funcionamiento de las instituciones financieras en el país. En uso de estas atribuciones el Banco Central limita la participación extranjera en el capital social de bancos comerciales y de inversión. Estas restricciones fueron revisadas por el Consejo Monetario Nacional (CMN) y sancionadas por la Resolución del CMN No. 262 de 1986, e incorporadas al Manual de Normas e Instrucciones de Banco Central do Brasil.

Fecha de entrada en vigor: 31 de diciembre de 1964.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, II. Brasil, Buenos Aires, 1985 y actualizaciones.

Ley No. 6813 del 10 de julio de 1980. Limita la participación de extranjeros en el transporte terrestre de carga.

Fecha de entrada en vigor: 10 de julio de 1980.

Fuente: Diário Oficial da União, 11 de julio de 1980.

Leyes de transferencia
de tecnología

Ley No. 4131, del 3 de septiembre de 1962. Regula la inversión extranjera en Brasil y la remesa de capital y utilidades al exterior. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 4390 del 29 de agosto de 1964, y publicada en el Diário Oficial da União del 11 de septiembre de 1964.

Fecha de entrada en vigor: 27 de septiembre de 1962.

Fuente: Diário Oficial da União del 27 de septiembre de 1962.

Acto Normativo No. 15, del 11 de septiembre de 1975, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El cual establece las normas para la declaración de un contrato de transferencia de tecnología.

Fecha de entrada en vigor: 16 de septiembre de 1975.

Fuente: Recopilación de Actos Normativos referentes a Tecnología, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Desarrollo de la Industria y del Comercio.

Acto Normativo No. 32, del 5 de mayo de 1978, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Establece la consulta previa en las negociaciones de transferencia de tecnología.

Fecha de entrada en vigor: 5 de mayo de 1978.

Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação; Banco Central do Brasil.

Acto Normativo No. 53, del 12 de febrero de 1981, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Dispone sobre los procedimientos para la verificación de actos y contratos de transferencia de tecnología y de uso de patentes, en el área de informática.

Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1981.

Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação; Banco Central do Brasil.

Acto Normativo No. 55, del 20 de agosto de 1981, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Dispone sobre la obligatoriedad de consulta previa en los actos y contratos de servicios técnicos y asistencia técnica.

Fecha de entrada en vigor: 20 de agosto de 1981.

Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação; Banco Central do Brasil.

Acto Normativo No. 56, del 1 de septiembre de 1981, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Dispone sobre la ratificación de los actos y contratos de tecnología para el sector hotelero.

Fecha de entrada en vigor: 1 de septiembre de 1981.

Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação; Banco Central do Brasil.

- Leyes de transferencia de tecnología (continuación)** *Acto Normativo No. 60*, del 13 de abril de 1982, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Establece normas para la contratación en el exterior de servicios técnicos especializados.
Fecha de entrada en vigor: 13 de abril de 1982.
Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação; Banco Central do Brasil.
- Decreto Ley No. 2433*, del 19 de mayo de 1988. Establece instrumentos financieros relativos a la política industrial y deroga incentivos fiscales.
Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 23 de mayo de 1988.
- Decreto No. 96760*, del 22 de septiembre de 1988. Reglamenta el Decreto Ley No. 2433/88.
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de la Transferencia de Tecnología en los Países de la ALADI, I. Argentina - Brasil - México, Buenos Aires, 1985 y actualizaciones.
- Ley No. 8010* del 29 de marzo de 1990. Dispone sobre importaciones de bienes destinados al desarrollo científico y tecnológico.
Fecha de entrada en vigor: 29 de marzo de 1990.
Fuente: Diário Oficial da União del 2 de abril de 1990.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Ley No. 5772*, del 21 de diciembre de 1971. Instituye el Código de Propiedad Industrial.
Fecha de entrada en vigor: 31 de diciembre de 1971.
Fuente: Diário Oficial da União, del 31 de diciembre de 1971.
- Acto Normativo No. 15*, del 11 de septiembre de 1975, del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). El cual establece las normas para la declaración de un contrato de transferencia de tecnología.
Fecha de entrada en vigor: 16 de septiembre de 1975.
Fuente: Recopilación de Actos Normativos referentes a Tecnología, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, Ministerio de Desarrollo de la Industria y del Comercio.
- Leyes sobre arrendamiento (Leasing)** *Ley No. 6099*, del 12 de septiembre de 1974. Dispone sobre el tratamiento tributario de las operaciones de arrendamiento mercantil, la cual fue modificada por la Ley No. 7132, del 26 de octubre de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 12 de septiembre de 1974.
Fuente: Diário Oficial da União del 13 de septiembre de 1974.
- Resolución No. 666*, del 17 de diciembre de 1980, del Banco Central do Brasil. Dispone sobre la celebración de contratos de leasing de bienes producidos en el exterior.
Fecha de entrada en vigor: 17 de diciembre de 1980.
Fuente: Diário Oficial da União, del 19 de diciembre de 1980.
- Resolución No. 788*, del 11 de enero de 1983, del Banco Central do Brasil. Establece las condiciones y plazos para contratos de "sale-lease-back" internacional.
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1983.
Fuente: Diário Oficial da União, del 13 de enero de 1983.
- Resolución No. 980*, del 13 de diciembre de 1984, del Banco Central do Brasil. Regula las operaciones de leasing.
Fecha de entrada en vigor: 13 de diciembre de 1984.
Fuente: Diário Oficial da União, del 14 de diciembre de 1984.
- Resolución No. 1474*, del 29 de marzo de 1988, del Banco Central do Brasil. Faculta a las sociedades de leasing a la adquisición, en el mercado interno, de derechos y obligaciones de contratos de leasing celebrados con entidades en el exterior.
Fecha de entrada en vigor: 29 de marzo de 1988.
Fecha: Diário Oficial da União, del 30 de marzo de 1988.
- Leyes sobre conversión de deuda externa (Programa actualmente suspendido)** *Carta-Circular No. 1125*, del 9 de noviembre de 1984, del Banco Central do Brasil (Conversión sin descuento). Autoriza solamente las conversiones en inversión, de los créditos de instituciones financieras internacionales, no precedidos de la renuncia de sus derechos crediticios, asumiendo tales instituciones la titularidad de la inversión, y de los créditos concedidos originalmente por entidades no financieras del exterior a empresas del país (créditos inter-compañías).
Fecha de entrada en vigor: 9 de noviembre de 1984.
Fuente: Diário Oficial da União, del 13 de noviembre de 1984.
- Resolución No. 1460*, del 1 de febrero de 1988, del Banco Central do Brasil. (Conversión formal). Aprueba el reglamento que regula la conversión en inversión, de créditos sujetos a los acuerdos de reestructuración de la deuda externa brasilera.
Fecha de entrada en vigor: 1 de febrero de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 2 de febrero de 1988.
- Circular No. 1302*, del 18 de marzo de 1988, del Banco Central do Brasil. (Conversión formal a través subastas). Establece reglas generales para la realización de subastas de conversión de deuda vencida en inversión, a ser realizadas en Bolsas de Valores, y fija los procedimientos para la identificación de los recursos factibles de ser convertidos.
Fecha de entrada en vigor: 18 de marzo de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 22 de marzo de 1988.

Leyes sobre
conversión de deuda
externa
(continuación)

Circular No. 1303, del 18 de marzo de 1988, del Banco Central do Brasil. (Conversión formal de deudas vencidas). Establece las reglas para efectuar conversiones de deuda vencida en inversión y fija los procedimientos para el levantamiento de los recursos factibles de ser convertidos. Dispone sobre la conversión de deuda en inversión no sujeta a subasta, de que trata la Resolución No. 1460, del Banco Central do Brasil.
Fecha de entrada en vigor: 22 de marzo de 1988.
Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação. Banco Central do Brasil.

Circular No. 1326, del 30 de junio de 1988, del Banco Central do Brasil. (Reglamentación de las conversiones informales). Determina que los pagos en moneda nacional de la fracción vencida del principal, intereses y otras comisiones de créditos externos sean obligatoriamente efectuados mediante depósitos en una cuenta bancaria y debidamente comunicados al Banco Central do Brasil, inclusive con la identificación detallada del receptor de los recursos.
Fecha de entrada en vigor: 1 de julio de 1988.
Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação. Banco Central do Brasil.

Decreto No. 96915, del 3 de octubre de 1988. (Prohibición de conversiones informales por el Estado). Prohíbe el pago de deudas contraídas en moneda extranjera por entidades del sector público, sin la liquidación de contratos de cambio, junto a las instituciones autorizadas, en la forma establecida por el Banco Central do Brasil.
Fecha de entrada en vigor: 4 de octubre de 1988.
Fuente: Capitais Estrangeiros no Brasil. Legislação. Banco Central do Brasil.

Resolución No. 1530, del 30 de noviembre de 1988, del Banco Central do Brasil. (Prohibición al Estado de acceder al mercado secundario). Prohíbe la participación de entidades del sector público, con sede en el exterior, en la calidad de inversionistas, en la conversión de créditos sujetos a acuerdos de reestructuración de la deuda externa brasilera.
Fecha de entrada en vigor: 1 de diciembre de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 1 de diciembre de 1988.

Resolución No. 1521, del 21 de septiembre de 1988. Regula la conversión de recursos nuevos ingresados al país al amparo del Acuerdo Paralelo de Financiamiento.
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 22 de septiembre de 1988.

Leyes sobre Zonas de
Procesamiento de
Exportaciones

Decreto Ley No. 2452, del 29 de julio de 1988. Dispone sobre el régimen tributario, cambiario y administrativo de las Zonas de Procesamiento de Exportaciones.
Fecha de entrada en vigor: 29 de julio de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 30 de julio de 1988.

Decreto No. 96758, del 22 de septiembre de 1988. Reglamenta el Decreto Ley No. 2452/88.
Fecha de entrada en vigor: 22 de septiembre de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 23 de septiembre de 1988.

Circular No. 1390, del 30 de noviembre de 1988, del Banco Central do Brasil. Reglamenta las operaciones de empresas en las Zonas de Procesamiento de Exportaciones.
Fecha de entrada en vigor: 30 de noviembre de 1988.
Fuente: Diário Oficial da União, del 5 de diciembre de 1988.

Leyes sobre
privatizaciones

Ley No. 8031 del 12 de abril de 1990, que crea el Programa Nacional de Desestatización (PND).
Fecha de entrada en vigor: 12 de abril de 1990.
Fuente: Privatization in Latin America, un suplemento de Latin Finance, 1991.

Decreto No. 99463 del 16 de agosto de 1990. Reglamenta la Ley No. 8031/90, define las empresas sujetas a privatización, especifica métodos operacionales por el cual estas empresas pueden hacer de su privatización proyectos factibles, determina las obligaciones del Comité Directivo, y establece provisiones para el Fondo Nacional de Desestatización.
Fecha de entrada en vigor: 16 de agosto de 1990.
Fuente: Privatization in Latin America, un suplemento de Latin Finance, 1991.

Decreto No. 99464 del 16 de agosto de 1990. Designa al Banco Nacional do Desenvolvimento Economico e Social (BNDES) como el administrador del Fondo Nacional de Desestatización, y enumera las empresas que pueden ser privatizadas.
Fecha de entrada en vigor: 16 de agosto de 1990.
Fuente: Privatization in Latin America, un suplemento de Latin Finance, 1991.

Acuerdos
internacionales

Brasil ha suscrito el tratado de la *Overseas Private Investment Corporation* (OPIC). Además, tiene convenios para evitar doble tributación con 18 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega y Portugal.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Brasil la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley No. 4131 dictada el 3 de septiembre de 1962, la cual fue modificada por la Ley No. 4390 del 29 de agosto de 1964, siendo esta última finalmente reglamentada por el Decreto No. 55762 del 17 de febrero de 1965.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Las primeras disposiciones reguladoras de la inversión extranjera tuvieron en Brasil un origen cambiario. El Decreto Ley No. 9025 de 1946 exigía el registro de los capitales extranjeros en la Fiscalização Bancária (FIBAN) del Banco do Brasil para garantizar la repatriación de capital o el giro de utilidades a la tasa de cambio oficial. La Ley No. 1807 de 1953 derogó esas disposiciones y estableció un registro con fines estadísticos en la Superintendencia da Moeda e do Crédito (SUMOC). Los inversionistas extranjeros podían acceder a un tipo de cambio preferencial, para lo cual se otorgaban registros de prioridad cambiaria para inversiones y préstamos considerados de interés nacional. Sin embargo, estas inversiones estaban sujetas a ciertas limitaciones en cuanto a la remesa de utilidades.

A mitad del decenio de los cincuenta Brasil adoptó una serie de medidas que contribuyeron a atraer el capital extranjero:

a) En 1955, fue adoptada la Instrucción No. 113, la cual permitía importar, sin permiso previo de cambios, bienes de capital nuevos o usados. El registro del pago de estos bienes se hacía a través de un aumento del capital social de la empresa importadora brasilera. Al computar su aporte de capital de esta manera, estas inversiones eran subvencionadas indirectamente, ya que podían capitalizar sus activos a un tipo de cambio mucho más favorable que el de mercado. Este mecanismo fue utilizado casi en forma exclusiva por empresas extranjeras. La Instrucción No. 113 rigió hasta el año 1961.

b) En 1956, en Brasil se dictó un conjunto de incentivos para desarrollar la industria automotriz. El Programa Automotor tenía como principal característica el permitir la importación de accesorios y equipo para la fabricación de automóviles durante un número limitado de años, a cambio de lo cual la empresa debía llegar virtualmente al 100% del valor agregado nacional en los vehículos automotores para el año 1963. El Programa incluía la Instrucción No. 113 y otras ventajas arancelarias y cambiarias adicionales.

Finalmente en 1962, se dictó la actual Ley de Inversiones Extranjeras (Ley No. 4131), y se designó como organismo encargado del registro de tales inversiones a la Superintendencia da Moeda e do Crédito (SUMOC). En 1964, la SUMOC es transformada luego del dictado de la Ley No. 4595:

Ley del Sistema Financiero Nacional, siendo reemplazada en sus responsabilidades por el Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros (FIRCE), que funciona, hasta la fecha, en dependencias del Banco Central do Brasil.

A principios de la década de los sesenta, el creciente desorden político, la declinación de las actividades industriales y la promulgación de la Ley No. 4131 la cual restringía las remesas de utilidades al exterior contribuyeron a la disminución de las inversiones extranjeras. Sin embargo, para mediados de los años sesenta hubo un resurgimiento, en parte como consecuencia del dictado de la Resolución No. 289 de enero de 1965. Esta medida de promoción ofrecía ventajas crediticias a los inversionistas extranjeros, permitiéndoles recibir préstamos en cruzeiros si prestaban dólares americanos al gobierno. Las ganancias de divisas sobre estas transacciones hacían que el costo de estos préstamos fuese muy reducido, especialmente después de 1967, cuando mejoró la situación de balanza de pagos del país.

En 1972, el gobierno establece un nuevo programa de promoción de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, llamado de Benefícios Fiscais a Programas Especiais de Exportação (BEFIEX). Este programa consistía en una serie de incentivos a las exportaciones, concedidos a aquellas empresas que se comprometieran a alcanzar ciertas metas de volumen y calidad para sus exportaciones dentro de un plazo determinado, generalmente de diez años. Los incentivos ofrecidos podían incluir una reducción de entre el 70 al 90% de los derechos e impuestos sobre las exportaciones de maquinaria y equipo; una reducción del 50% sobre los derechos e impuestos de materias primas y productos intermedios; así como la exención total de los derechos e impuestos de importación en casos especiales. El principal beneficiario de este programa fue la industria automotriz brasilera, la cual estaba obligada a alcanzar, por contrato, un nivel de valor agregado nacional en sus exportaciones y un determinado nivel de nacionalización de la producción total. Los contratos BEFIEX fueron utilizados en Brasil hasta el año 1988, fecha en la cual la nueva Constitución eliminó todos los subsidios estatales. Sin embargo, los contratos suscritos con anterioridad a esa fecha fueron respetados.

La Ley No. 4131 se ha mantenido prácticamente sin cambios importantes durante los últimos treinta años, sin embargo, el espíritu de control que la inspiró ha cambiado, siendo reemplazado por un clima más favorable hacia la inversión extranjera. Es así como se han tomado algunas medidas tendientes a liberalizar el acceso al capital extranjero a sectores anteriormente monopolizados por el Estado o por inversionistas privados brasileiros, es el caso de la eliminación de reservas de mercado en el sector informática; también la nueva política de privatizaciones; y el fin del esquema de polos de desarrollo. Quizás una señal en sentido contrario sea la reforma constitucional de 1988, que ratificó las antiguas restricciones al capital extranjero en los sectores de hidrocarburos, comunicaciones, transporte, etc; agregando además limitaciones para sector minero y de energía hidroeléctrica.

Actualmente en Brasil está en discusión modificar la Ley No. 4131, para lo cual ya existe un proyecto de ley (Ley No. 4647) que propone entre otras cosas la eliminación de restricciones al pago de regalías por uso de licencias, marcas y patentes entre una filial brasilera y su casa matriz. Además, está también en discusión la modificación de la Ley de Propiedad Industrial, eliminando las restricciones al pago de licencias a los productos biotecnológicos, elementos básicos para la industria farmacéutica.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Ley No. 4131 en su Artículo No. 1 define como capital extranjero los bienes, máquinas y equipos ingresados a Brasil sin desembolsos iniciales de divisas, destinados a la producción de bienes y servicios, o bien, los recursos financieros o monetarios, introducidos al país para su utilización en actividades económicas; en ambos casos, estos recursos, deben pertenecer a personas físicas o jurídicas residentes, domiciliadas o con sede en el exterior.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

La legislación establece en su Artículo No. 2 que el capital extranjero que se invierte en el país será objeto de un tratamiento jurídico idéntico al concedido al capital nacional en iguales condiciones, siendo vedada cualquier discriminación no prevista por la Ley. Esto permite colocar el capital extranjero en cualquier sector de la economía, en la medida que no existan otras restricciones legales.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La legislación brasilera no contempla el trámite de autorización previa de una inversión extranjera, este proceso es automático. Sin embargo, toda inversión o reinversión que se realice en el país debe ser registrada ante el Banco Central do Brasil, específicamente en el Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros (FIRCE).

En su Artículo No.3 de la Ley No. 4131, se fijan las responsabilidades del Departamento de Fiscalização e Registro de Capitais Estrangeiros (FIRCE), para el registro del capital extranjero, cualquiera sea su forma de ingreso al país. Los derechos del inversionista extranjero son representados por certificados expedidos por el Banco Central cuando se efectúa el registro de:

- a) capital extranjero que ingresa al país en forma de inversión directa, ya sean divisas o bienes;
- b) remesas al exterior;
- c) reinversión de utilidades del capital extranjero;
- d) corrección monetaria del stock de capital de una empresa con presencia extranjera.

El certificado de registro es emitido por el Banco Central do Brasil y constituye un título representativo de las divisas extranjeras invertidas en el país que declara y ampara tres derechos del inversionista extranjero:

- a) el derecho al retorno del capital;
- b) el derecho a remesas de utilidades, y
- c) el derecho a la reinversión en moneda extranjera de las utilidades obtenidas.

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo No. 5 de la Ley No. 4131, el registro de la inversión extranjera será requerido dentro de los 30 días posteriores a la fecha de su ingreso al país, o del respectivo registro contable en el caso de reinversión de utilidades. El registro en nombre del inversionista extranjero deberá ser solicitado por la empresa receptora de la inversión, mediante una comprobación de residencia o de domicilio en el exterior del inversionista extranjero. Además de dicha comprobación, la empresa receptora deberá presentar copias de los estados contables correspondientes a las inversiones que son registradas y confirmar la propiedad del capital accionario, en manos del inversionista extranjero. El registro del capital será efectuado en la moneda extranjera efectivamente ingresada al país, sea cual fuera la residencia o domicilio del inversionista. En el caso que la inversión sea hecha en forma de bienes, ésta será registrada en la moneda del país de procedencia de los mismos, una vez obtenida la autorización del Banco Central.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Las personas naturales y jurídicas que deseen efectuar transferencias al exterior de utilidades, dividendos, intereses, amortizaciones, regalías y asistencia técnica, científica, administrativa y similares, deben presentar al Banco Central do Brasil y a la División de Impuestos Internos, los contratos y documentos que justifiquen la remesa. El monto de las remesas al exterior depende del registro que la empresa haya efectuado en el Banco Central y de la comprobación del pago en Impuesto a la Renta.

El Banco Central tiene la atribución de restringir, por plazo limitado, la remisión de utilidades en el caso de existir graves desequilibrios en la balanza de pagos del país, de suceder esta situación se prohíben las remesas de capital y se limita la repatriación de utilidades a un 10% anual sobre el capital y las reinversiones registradas en el FIRCE, tal como lo indica el Artículo No. 28 de la Ley No. 4131.

Por otra parte, para la inversión extranjera directa en actividades productoras de bienes y servicios de consumo suntuario, el Banco Central limita la remesa de utilidades al exterior a un 8% anual del capital registrado. Si las remesas de utilidades exceden el límite anteriormente señalado, se considerarán como un retorno de capital y son deducidas del registro correspondiente, para efecto de futuras remesas. En caso de desequilibrios de balanza de pagos, la remesa de utilidades de los capitales antes referidos es limitada hasta un máximo de 5% anual sobre el monto del capital registrado, tal como lo indica el Artículo No. 11 de la Ley No. 4390.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Algunos sectores económicos son, por disposiciones legales prohibidos para el capital extranjero, destacándose:

a) La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, en su Artículo No. 177, establece que la exploración, explotación y producción de petróleo, gas natural y otros hidrocarburos

líquidos es un monopolio del Estado. Este mismo Artículo da las mismas características de propiedad a la refinación del petróleo nacional y extranjero; a la importación y exportación de estos productos y sus derivados y al transporte marítimo o por oleoducto del petróleo crudo o sus derivados básicos de origen y producción nacional.

b) La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, establece en su Artículo No. 177, que la exploración, explotación, procesamiento, industrialización y comercio de minerales y sustancias nucleares y sus derivados es un monopolio del Estado.

c) La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, establece en su Artículo No. 176, que los yacimientos de recursos minerales y los potenciales de energía hidroeléctrica constituyen propiedad distinta de la del suelo, para efectos de explotación y aprovechamiento. Estos recursos pertenecen al Estado, el cual garantiza al concesionario los beneficios obtenidos de su explotación. La exploración y explotación de recursos minerales y el aprovechamiento de la energía hidroeléctrica solamente se pueden efectuar con el consentimiento del Estado, por brasileros o empresas brasileras de capital nacional.

d) La Ley No. 7565 del 12 de diciembre de 1986, en su Artículo No. 181, establece que la concesión del transporte aéreo es otorgada solamente a personas jurídicas brasileras. Las empresas extranjeras de transporte aéreo internacional que operan en Brasil, fueron designadas por el gobierno de su respectivo país de origen y obtuvieron la autorización de funcionamiento y operación de sus servicios en Brasil, de acuerdo al Artículo No. 205 del Párrafo No.1 de la misma Ley.

e) La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, establece en su Artículo No. 178, que la navegación de cabotaje para el transporte de mercaderías es exclusiva para naves brasileras, salvo en casos de necesidad pública. Los propietarios, armadores y comandantes de los navíos nacionales, así como dos tercios de la tripulación, por lo menos, deben ser brasileros.

f) La Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988, establece en su Artículo No. 222, que la propiedad y administración de empresas periodísticas y radiodifusoras, incluyendo televisión y radio están vedadas a inversionistas extranjeros, incluso con participación accionaria minoritaria.

g) La Ley No. 7232 del 29 de octubre de 1984, establece que la producción de micro y mini computadores esta prohibida para el capital extranjero. Esta Ley expirará el 30 de octubre de 1992, terminando con las reservas de mercado establecidas en ella.

h) La Resolución del Consejo Monetario Nacional (CMN) No. 262/86, establece algunas restricciones al funcionamiento de bancos comerciales, ya que limita la participación extranjera en el capital social de los bancos nacionales y el aumento de las participaciones ya existentes. Estas restricciones se extienden también a los bancos de inversión, corredores, distribuidores y sociedades de arrendamiento comercial, ya que su participación extranjera está limitada al 50% del capital social y a un tercio del capital con derecho a voto. Estas restricciones fueron insertadas en el Manual de Normas e Instrucciones del Banco Central do Brasil, en el Capítulo No. 3 (Capital), Sección No. 2 (Participaciones Extranjeras) los Artículos No. 16 (Bancos Comerciales), No. 18 (Bancos de

Inversión), No. 19 (Sociedades de Crédito, Financiamiento e Inversión), No. 20 (Sociedades Corredoras), No. 21 (Sociedades Distribuidoras) y No. 24 (Sociedades de Arrendamiento Comercial).

i) La Resolución del Consejo Nacional de Seguros Privados (CNSP) No. 3, del 9 de enero de 1986 del Ministerio de Hacienda, establece que las compañías de seguros, las sociedades de capitalización, las entidades abiertas de previsión privada con fines de lucro y las sociedades corredoras de seguros, tienen restringida la participación, directa o indirecta, del capital extranjero al 50% del capital social de dichas sociedades, limitando tal participación a un tercio del capital con derecho a voto.

j) La Ley No. 5709 del 7 de octubre de 1971 regula la adquisición de bienes inmuebles rurales por parte de extranjeros residentes en el país o personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en Brasil. Tales regulaciones, establecen además algunos límites de extensión territorial para inversionistas extranjeros.

8. Tributación

Brasil tiene convenio para evitar doble tributación con 18 países: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Ecuador, España, Dinamarca, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Luxemburgo, Noruega, Portugal y Suecia.

Las empresas con actividades en Brasil deben pagar un Impuesto a la Renta del 30%, sobre los ingresos resultantes luego del pago de un impuesto de contribución social del 10%, para entidades financieras este último impuesto es del 14%.

En el caso de una sucursal de una empresa extranjera, se debe cancelar un impuesto del 25% sobre las utilidades; bajando a un 15% si las utilidades son reinvertidas en la expansión de la empresa en el transcurso de un año. En Brasil, además deben pagarse impuestos sobre las utilidades extraordinarias, que alcanzan al 10% sobre las utilidades superiores a US\$ 168 mil.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros tiene una retención del 15%. En el caso de los impuestos sobre las regalías (o *royalties*) éste también alcanza a 25%; sin embargo éste puede reducirse para aquellos países con los cuales Brasil tiene tratados, convenios o acuerdos tributarios. Los intereses remitidos están sujetos también a una retención del 25%.

9. Royalties o regalías

Los contratos entre personas jurídicas domiciliadas en Brasil y residentes o domiciliadas en el exterior para el efecto de pagos por concepto de regalías o asistencia técnica, deben ser previamente aprobados por el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) y después registrados en el Banco Central do Brasil. Una vez cumplidos estos trámites, se puede efectuar las remesas correspondientes o registrar dichos aportes como inversión en la moneda del país de origen del

beneficiario de las remesas. A través del Acto Normativo No. 15 del INPI se fijan las reglas básicas para la preparación de este tipo de contratos.

La Ley No. 4131 establece algunas restricciones al pago de regalías. El Artículo No.14 establece que las remesas por concepto de pago de regalías por el uso de marcas y patentes de industria y comercio, no son permitidas entre filiales o subsidiarias de empresas establecidas en Brasil y su casa matriz, con sede en el exterior; o cuando la mayoría del capital de una empresa brasilera pertenezca a los titulares receptores de dichas regalías en el extranjero.

IV. CHILE

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	El <u>Comité de Inversiones Extranjeras de Chile</u> , organismo dependiente del <u>Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción</u> , es el único organismo autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar el ingreso de capitales del exterior y para establecer los términos y condiciones de los respectivos contratos.
Definición nacional de inversión extranjera directa	Se entiende por inversión extranjera los capitales transferidos a Chile desde el exterior por personas naturales o jurídicas extranjeras o por chilenas residentes en el exterior, al amparo de un contrato de inversión extranjera celebrado con el Estado de Chile. Los capitales provenientes del exterior podrán valorizarse de las siguientes formas: <ul style="list-style-type: none"> a) Moneda extranjera de libre convertibilidad. b) Bienes físicos en todas sus formas o estados. c) Tecnología en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser capitalizada. d) Créditos que vengan asociados a una inversión extranjera. e) Capitalización de créditos y deudas externas. f) Capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior. <p>La legislación chilena contempla además otra forma de inversión extranjera que son los llamados Fondos de Inversión. Se entiende por Fondo de Inversión de Capital Extranjero, el patrimonio formado con aportes realizados fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas o, en general, entidades colectivas, para su inversión en valores de oferta pública en Chile, cuya administración en el país corresponderá a una sociedad anónima chilena por cuenta y riesgo de los aportantes.</p> <p>Por otro lado, el Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile de mayo de 1985 permite a cualquier persona residente en el exterior realizar inversiones en Chile, a través de la adquisición y uso de pagarés y títulos de la deuda externa. Las inversiones realizadas bajo esta modalidad no pueden remesar su capital antes de transcurrido un plazo de 10 años contando desde la fecha en que se materializa la inversión. Las utilidades pueden remesarse a partir del quinto año, incluyendo aquellas que se hubieran acumulado durante los primeros cuatro años, las que se remesarán en porcentajes anuales no superiores al 25% de su monto total.</p> <p>Finalmente, el Artículo No. 14 de la Ley de Cambios Internacionales. Régimen administrado por el Banco Central de Chile, permite ingresar aportes de capital desde el exterior sólo en la forma de divisas. El capital puede remesarse a partir del tercer año contando desde su ingreso, en tanto las utilidades que éste genere pueden remesarse en cualquier momento.</p>
Participación mínima del capital extranjero	En Chile no existe ninguna disposición específica o porcentaje mínimo de participación extranjera que permita identificar a una empresa como extranjera. Pero se entiende por empresa receptora de inversión extranjera a aquellas empresas nacionales en las cuales se radican efectivamente los aportes.
Flujo de inversión extranjera directa	El flujo de inversión extranjera directa son los ingresos y egresos realizados por inversionistas extranjeros.
Inversión materializada	Se entiende por ello los aportes que efectivamente el inversionista extranjero ha ingresado al país, en un período de tiempo dado, en cualquiera de las modalidades autorizadas. Los plazos son variables, siendo lo usual que éste sea de hasta 3 años a contar de la fecha del contrato. En proyectos mineros este plazo es de hasta 8 años, los que se pueden ampliar hasta 12 cuando se requieran exploraciones previas. En los proyectos de carácter industrial cuyo monto es superior a US\$ 50 millones, este plazo es hasta 8 años.
Stock de capital extranjero directo	El stock de capital extranjero materializado es calculado como la inversión acumulada que efectivamente ha ingresado al país, considerando las diferentes modalidades de aporte que se han autorizado. De ellas se han deducido los egresos por concepto de pago de créditos y remesas de capital y utilidades.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre Inversión extranjera directa** *Decreto Ley No. 600* del 13 de julio de 1974. Regula el tratamiento de la inversión extranjera en Chile. Este Decreto fue modificado inicialmente por el Decreto Ley No. 1748 del 18 de marzo de 1977 y, posteriormente, por las Leyes No. 18065, No. 18474, No. 18682, No. 18840 y No. 18904, publicadas en el Diario Oficial del 10 de diciembre de 1981, 30 de noviembre de 1985, 31 de diciembre de 1987, 10 de octubre de 1989 y 25 de enero de 1990, respectivamente. Recientemente se ha introducido una nueva modificación mediante la Ley No. 19207 del 25 de marzo de 1993.
Fecha de entrada en vigor: 13 de julio de 1974
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras, Secretaría Ejecutiva, Estatuto de la Inversión Extranjera, Santiago, Chile, 1990.
- Ley No. 18657*, Fondo de Inversión de Capital Extranjero, publicada en el Diario Oficial del 29 de septiembre de 1987.
Fecha de entrada en vigor: 29 de septiembre de 1987.
Fuente: Comité de Inversiones Extranjeras.
- Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambios Internacionales* del Banco Central de Chile. Permite el ingreso de aportes en efectivo al país y garantiza el derecho a la remesa del capital y sus utilidades.
Fecha de entrada en vigor: 1985.
Fuente: Price Waterhouse, Doing Business in Chile, editado en Estados Unidos, 1991.
- Leyes sectoriales** *Decreto Ley No. 1349* del 28 de febrero de 1976. Establece la Comisión Chilena del Cobre, asignándole toda la fiscalización del sector. Adicionalmente, se adecuaron las disposiciones a la nueva institucionalidad y por ello todas las inversiones quedaron bajo el régimen común del sector y a las condiciones establecidas en el Decreto Ley No. 600.
Fecha de entrada en vigor: 28 de febrero de 1976.
Fuente: Langton Clarke, Investing in Chile, Coopers & Lybrand, Santiago, Chile, 1992.
- Decreto Ley No. 1089* de 1975. Establece el Régimen Especial de los Hidrocarburos. En este Decreto se establecen las responsabilidades y atribuciones de la Empresa Nacional de Petróleos (ENAP) en la suscripción de contratos de operación, en nombre del Estado de Chile.
Fecha de entrada en vigor: 1975.
Fuente: Langton Clarke, Investing in Chile, Coopers & Lybrand, Santiago, Chile, 1992.
- Decreto Ley No. 1557* del 30 de septiembre de 1979. Establece el Régimen Especial para Materiales Atómicos. Dicho cuerpo legal faculta a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para suscribir contratos de operación para explorar, explotar y beneficiar materiales atómicos naturales.
Fecha de entrada en vigor: 30 de septiembre de 1979.
Fuente: Langton Clarke, Investing in Chile, Coopers & Lybrand, Santiago, Chile, 1992.
- Decreto Ley No. 3059* de 1979. Establece que el cabotaje, entendiéndose por tal al transporte marítimo, fluvial y lacustre de carga entre puertos del litoral en los ríos y lagos cuyo origen y destino final sea un puerto de la República, queda reservado a las naves chilenas.
Fecha de entrada en vigor: 1979.
Fuente: BID-INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, Argentina, 1984.
- Ley No. 19137* del 6 de mayo de 1992. Establece normas sobre las pertenencias mineras de CODELCO-Chile que no forman parte de los yacimientos en actual explotación.
Fecha de entrada en vigor: 12 de mayo de 1992.
Fuente: Diario Oficial de la República de Chile del 12 de mayo de 1992.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Ley No. 19039* del 25 de enero de 1990. Establece las condiciones para la protección de la propiedad industrial en Chile. Esta Ley fue reglamentada el 30 de septiembre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 30 de septiembre de 1990.
Fuente: English, Jorge, "Industrias Alertas ante Falsificación de Marcas y Productos", El Mercurio, Año CLXV, No. 56365, del 23 de marzo de 1992.
- Leyes sobre conversión de deuda** *Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales* del Banco Central de Chile de mayo de 1985. Permite que personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras con residencia o domicilio en el exterior, realicen inversiones en Chile, a través de la adquisición y uso de pagarés y títulos de la deuda externa.
Fecha de entrada en vigor: mayo de 1985.
Fuente: Banco Central de Chile.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto Ley No. 889* del 21 de febrero de 1975. Esta Ley promueve el desarrollo económico de algunas regiones del país, especialmente aquéllas localizadas en los extremos norte y sur.
Fecha de entrada en vigor: 21 de febrero de 1975.
Fuente: Price Waterhouse, Doing Business in Chile, editado en Estados Unidos, 1991.

**Acuerdos
internacionales**

Convenio Bilateral suscrito con el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) en 1983.

Fecha de entrada en vigor: 1983.

Fuente: Diario El Mercurio, del viernes 9 de abril de 1993; Santiago, Chile.

Convenio Bilateral para Protección de Inversiones, suscrito entre Chile y Alemania, el 30 de marzo de 1964.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 18 de marzo de 1993; Santiago, Chile.

Convenio Bilateral para Protección de Inversiones, suscrito entre Chile y Suiza, el 11 de noviembre de 1991.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 18 de marzo de 1993; Santiago, Chile.

Convenio Bilateral para Protección de Inversiones, suscrito entre Chile y España, el 2 de octubre de 1991.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 18 de marzo de 1993; Santiago, Chile.

Convenio Bilateral para Protección de Inversiones, suscrito entre Chile y Bélgica-Luxemburgo, el 19 de octubre de 1991.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 18 de marzo de 1993; Santiago, Chile.

Convenio Bilateral para Protección de Inversiones, suscrito entre Chile y Francia, en julio de 1992.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 18 de marzo de 1993; Santiago, Chile.

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, firmado entre Chile y Finlandia, en abril de 1993.

Fecha de entrada en vigor: no disponible.

Fuente: Diario El Mercurio, del jueves 15 de abril de 1993; Santiago, Chile.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Chile la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en el Decreto Ley No. 600 del 13 de julio de 1974, el cual fue modificado inicialmente por el Decreto Ley No. 1748, del 18 de marzo de 1977, y posteriormente, por las Leyes No. 18065, No. 18474, No. 18682, No. 18840 y No. 18904, publicadas en el Diario Oficial del 10 de diciembre de 1981, 30 de noviembre de 1985, 31 de diciembre de 1987, 10 de octubre de 1989 y 25 de enero de 1990, respectivamente. Recientemente se ha introducido una nueva modificación mediante la Ley No. 19207 del 25 de marzo de 1993.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

A comienzos de la década de los años treinta, con la Ley No. 5107 se puso término al sistema de libertad cambiaria y se impuso el control sobre las operaciones en moneda extranjera. A partir de entonces, el ingreso y salida de divisas requirió de la autorización previa que debía otorgar el organismo contralor especializado. En vista de la existencia de esta norma, los inversionistas extranjeros tuvieron la necesidad de solicitar el permiso de la Comisión de Cambios Internacionales para poder efectuar sus remesas al exterior. En 1942 se dicta la Ley No. 7200, la cual con su reglamento contenido en el Decreto No. 2044 y conjuntamente con una serie de normas establecidas posteriormente, constituyó el marco específico a que quedaron sujetos los capitales extranjeros.

El 2 de febrero de 1954 se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No. 437 mediante el cual se otorgaban franquicias a las personas naturales o jurídicas extranjeras que aportaran al país nuevos capitales. Estas franquicias fueron sólo aplicables a aquellas inversiones que tenían por objeto iniciar, ampliar o impulsar actividades que tendieran a estimular el desarrollo industrial o a mejorar la explotación de riqueza minera, agrícola o forestal y a perfeccionar o a incrementar los medios de transporte.

En 1960, se dictó el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) No. 258 sobre Estatuto de la Inversión Extranjera. Este Decreto ampliaba la clasificación de las actividades a las cuales podían acceder los inversionistas extranjeros, incorporando el sector pesquero y actividades que fueran consideradas de interés para la economía nacional. Además, le confería exclusivas facultades discriminatorias al Presidente de la República para aprobar o rechazar las franquicias establecidas por la legislación, las cuales se otorgaban por un plazo de 10 años y en casos calificados este plazo podía extenderse hasta un máximo de veinte años. Los únicos sectores de los cuales quedó excluida la inversión extranjera fueron los de hidrocarburos y materiales atómicos (reservados para el Estado) y los de cabotaje y seguros (reservados para inversionistas nacionales). En cuanto a la fiscalización se estableció la obligatoriedad del registro y control de la inversión extranjera y que el Comité de Inversiones Extranjeras, mediante la Corporación de Fomento a la Producción (CORFO), era el ente encargado de vigilar el cumplimiento de las obligaciones del inversionista.

En cuanto a la tributación, las empresas extranjeras estaban sometidas a las mismas obligaciones que las empresas nacionales, pero hubieron algunas ventajas especiales para las empresas extranjeras. Entre estas tenemos el derecho a amortizar con cargo a utilidades los bienes del activo físico en los que se invirtieron los capitales aportados. También, el derecho a revalorizar anualmente sin pago de impuestos el activo inmovilizado y realizable. Los retornos de capital estuvieron exentos del impuesto adicional a las ventas, hubo un régimen de amortización acelerada para maquinaria e instalaciones nuevas cuya vida útil fuera igual o superior a cinco años. Asimismo, las utilidades e intereses gozaban automáticamente de iguales franquicias que el capital original. Por último, las franquicias otorgadas a una empresa extranjera se extendían también a las agencias o empresas que aquélla constituyera en Chile o a la empresa a la cual aportara los bienes para desarrollar las actividades correspondientes a la inversión autorizada.

Finalmente, es preciso señalar que las empresas extranjeras gozaban de una serie de incentivos para las inversiones que se realizaran en ciertas zonas geográficas, las que se orientaran a ciertas actividades industriales y que operaran en actividades de exportación.

En resumen se puede decir que existía un ambiente ampliamente favorable para la inversión extranjera. Esta situación cambió drásticamente cuando Chile se sumó al Pacto Andino y este organismo emitió la Decisión 24 en 1971 que imponía una serie de condiciones a la inversión extranjera. Esta nueva norma supra-nacional contemplaba la reducción progresiva a una posición minoritaria de las participaciones extranjeras en las empresas locales, la eliminación del capital extranjero de los sectores claves, la limitación del derecho de remitir utilidades al exterior. Se impuso la obligación de registro de toda inversión extranjera ante los organismos nacionales y el control de los compromisos contraídos por los inversionistas extranjeros por parte de los organismos nacionales especializados. Se impuso la prohibición a todos los países miembros de avalar o garantizar operaciones de crédito externo celebradas por empresas extranjeras en que no participe el Estado. Se prohibió al acceso a crédito interno de largo plazo. Asimismo, se establecieron restricciones y condicionamientos de todo contrato referente a importación de tecnología o sobre uso de patentes y marcas. Por último, se establecieron incentivos, plazos y sistemas para la transformación gradual y progresiva de las empresas extranjeras en mixtas o nacionales.

Sin embargo, desde 1973 con el cambio de régimen en Chile y de orientación en materia económica, se buscó flexibilizar los criterios hacia la inversión extranjera por lo que el 13 de julio de 1974 promulgó el Decreto Ley No. 600 sobre "Estatuto de la Inversión Extranjera". Este Decreto era contrario a la Decisión 24 del Pacto Andino por lo que Chile terminó retirándose del Acuerdo de Cartagena en 1977.

El Decreto Ley No. 600 estableció en líneas generales el carácter no discriminatorio frente al inversionista extranjero, contratos de estabilidad tributaria y una liberalización en el trato al capital extranjero. En él se define la inversión como transferencia de capitales desde el exterior a Chile realizado por personas naturales o jurídicas extranjeras, o chilenos con residencia o domicilio en otros países. Sólo en este último se crea un organismo que será el único autorizado, en representación del Estado de Chile, para aceptar, controlar y suscribir los contratos de ingreso de capitales del exterior, así como las remesas de utilidades y capital.

La norma mencionada es desde entonces la legislación que regula la inversión extranjera en Chile. Durante la década de los 80, esta legislación prácticamente no ha sido modificada, salvo en algunos aspectos como los siguientes:

- Ley No. 18065 (publicada en el Diario Oficial de 10 de diciembre de 1981) que adscribe la Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones al Banco Central de Chile.
- Ley No. 18474 del 30 de noviembre de 1985, que introduce mejoras en el aspecto tributario.
- Ley No. 18682 del 31 de diciembre de 1987, que además de algunas modificaciones menores, introduce el Artículo No. 7 bis al texto del Decreto Ley No. 600, permitiendo optar por una tasa tributaria invariable de 40 % más un suplemento variable.
- Ley No. 18840 del 10 de octubre de 1989 que establece la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile.
- Ley No. 18904 del 25 de enero de 1990 que establece la estructura del Comité de Inversiones Extranjeras.
- Ley No. 19207 del 25 de marzo de 1993 que establece modificaciones en cuanto a las remesas de utilidades y aspectos tributarios.

3. Definición de inversión extranjera directa

El Decreto Ley No. 600 no entrega un concepto de inversión extranjera pero se desprende de su primer artículo, referido a los sujetos de inversión. Se entiende por inversión extranjera los capitales transferidos a Chile desde el exterior por personas naturales o jurídicas extranjeras o por chilenas residentes en el exterior, al amparo de un contrato de inversión extranjera celebrado con el Estado de Chile. Los capitales provenientes del exterior podrán valorizarse de las siguientes formas:

- a) Moneda extranjera de libre convertibilidad.
- b) Bienes físicos en todas sus formas o estados.
- c) Tecnología en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser capitalizada.
- d) Créditos que vengán asociados a una inversión extranjera.
- e) Capitalización de créditos y deudas externas.
- f) Capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior.

La legislación chilena contempla además otra forma de inversión extranjera que son los llamados Fondos de Inversión. Se entiende por Fondo de Inversión de Capital Extranjero, el

patrimonio formado con aportes realizados fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas o, en general, entidades colectivas, para su inversión en valores de oferta pública en Chile, cuya administración en el país corresponderá a una sociedad anónima chilena por cuenta y riesgo de los aportantes.

Por otro lado, el Capítulo XIX del Compendio de Normas de Cambios Internacionales del Banco Central de Chile de mayo de 1985 permite a cualquier persona residente en el exterior realizar inversiones en Chile, a través de la adquisición y uso de pagarés y títulos de la deuda externa. Las inversiones realizadas bajo esta modalidad no pueden remesarse su capital antes de transcurrido un plazo de 10 años contando desde la fecha en que se materializa la inversión. Las utilidades pueden remesarse a partir del quinto año, incluyendo aquéllas que se hubieran acumulado durante los primeros cuatro años, las que se remesarán en porcentajes anuales no superiores al 25% de su monto total.

Finalmente, el Artículo No. 14 de la Ley de Cambios Internacionales. Régimen administrado por el Banco Central de Chile, permite ingresar aportes de capital desde el exterior sólo en la forma de divisas. El capital puede remesarse a partir del tercer año contando desde su ingreso, en tanto las utilidades que éste genere pueden remesarse en cualquier momento.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

El Decreto Ley No. 600 en su Artículo No. 9 establece que la inversión extranjera y las empresas en que éstas participen estarán sujetas al régimen jurídico común aplicable a la inversión nacional, no pudiendo discriminarse respecto de ellas, salvo lo establecido en el Artículo No. 11 que se refiere al acceso al crédito interno.

Las disposiciones legales o reglamentarias relativas a determinada actividad productiva, se considerarán discriminatorias si llegaran a ser aplicables a la generalidad o a la mayor parte de dicha actividad productiva en el país, con exclusión de la inversión extranjera. De igual manera se considerará discriminatorias las disposiciones legales o reglamentarias que establezcan regímenes excepcionales de carácter sectorial o zonal, si la inversión extranjera no tuviera acceso a ellas.

El Artículo No. 10 considera que si se dictaran normas jurídicas que los titulares de inversiones extranjeras o las empresas en cuyo capital participe la inversión extranjera estimaran discriminatorias, éstos podrán solicitar que se elimine la discriminación, siempre que no haya transcurrido más de un año desde la promulgación de dicha norma. Para este fin, el Comité de Inversiones Extranjeras debe pronunciarse al respecto en un plazo que no deberá ser superior a los sesenta días contados desde la fecha de presentación de la solicitud. En este pronunciamiento se puede denegar la solicitud o adoptar las medidas administrativa que corresponda para eliminar la discriminación o requiriendo a la autoridad pertinente la adopción de éstas, si dichas medidas excedieran las facultades del Comité.

Si no se diese un pronunciamiento oportuno del Comité, de una resolución denegatoria o de la imposibilidad de eliminar la discriminación, los titulares de inversiones extranjeras podrán acudir

a la justicia ordinaria a fin de que esta aclare si existe o no discriminación, y en caso afirmativo, lo que corresponde aplicarle a la legislación general.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

Las personas naturales y jurídicas extranjeras y las chilenas con residencia y domicilio en el exterior que deseen invertir en Chile, según el Decreto Ley No. 600, deberán presentar una solicitud a la Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras. No existiendo reparos fundamentalmente de orden jurídico, se dará su aprobación por parte del Comité o por parte del Secretario Ejecutivo según sea el caso.

Las autorizaciones de inversión extranjera constarán en un contrato celebrado por escritura pública y que será suscrito por el Presidente o por el Secretario Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras en representación del Estado de Chile según sea el caso y las personas que aporten capitales extranjeros. El hecho de que el firmante del contrato sea el Secretario Ejecutivo o el Presidente lo determina el monto y las características de la inversión a realizarse. Así, en su Artículo No. 16, el Decreto Ley No. 600 establece que en el caso de inversiones superiores a cinco millones de dólares, aquéllas que se refieran a sectores donde normalmente ha operado el Estado y servicios públicos, las que se efectúen en medios de comunicación social y las que se realicen por un Estado extranjero o empresa pública extranjera requerirán del acuerdo del Comité de Inversiones Extranjeras. En los casos restantes serán autorizadas por el Secretario Ejecutivo del mismo Comité.

Los contratos representan una garantía para el inversionista ya que el Estado chileno no puede, ni siquiera dictando una Ley, modificar su contenido de manera unilateral.

En los contratos se fijarán los plazos dentro de los cuales el inversionista deberá efectuar la internación de los capitales, el que no podrá exceder de 8 años en el caso de las inversiones mineras y de 3 años en las restantes. En casos especiales, cuando las inversiones mineras requieran exploraciones previas que hagan meritoria una prórroga, el CIE con el voto unánime de sus miembros podrá extender el plazo del contrato hasta 12 años. En el caso de proyectos industriales o mineros no extractivos, si su monto no es inferior a 50 millones de dólares, se podrá extender el plazo hasta 8 años. Una vez que se suscribe el contrato, el inversionista puede operar plenamente en Chile, sujetándose la inversión a la legislación y procedimientos propios de la actividad.

En cuanto al registro, cada vez que un inversionista extranjero realice liquidaciones parciales de divisas, internación de bienes físicos o internación de créditos asociados, capitalización de créditos y utilidades con derecho a remesa, deben enviar a la Secretaría Ejecutiva del CIE los comprobantes correspondientes, para la puesta en marcha y seguimiento de cada una de las inversiones autorizadas. Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva solicita, una vez al año, al inversionista o empresa receptora el detalle de los aportes internados correspondientes al año anterior, en sus diferentes modalidades.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

En su Artículo No. 4, el Decreto Ley No. 600 establece que los inversionistas extranjeros podrán transferir al exterior sus capitales y las utilidades líquidas que ellos originen. Sin embargo, la Ley No. 19207 señala las siguientes restricciones:

- En el caso de los capitales existe una restricción que impide que éstos sean remesados antes de transcurrir 1 año de su ingreso.
- Los aumentos de capital enterados con utilidades susceptibles de ser remesadas al exterior, podrán remesarse sin sujeción a plazo alguno, una vez cumplidas las obligaciones tributarias.
- Las remesas de utilidades no estarán sujetas a plazo alguno.

En cuanto al régimen cambiario se establece en el mismo artículo del Decreto Ley No. 600 que el tipo de cambio aplicable para la transferencia al exterior del capital y de las utilidades líquidas, será el más favorable que los inversionistas extranjeros puedan obtener en cualquier entidad autorizada para operar en el Mercado Cambiario Formal. No obstante, el acceso al Mercado Cambiario Formal, para la remisión de capital o utilidades al exterior, requerirá de un certificado previo del Presidente Ejecutivo del Comité de Inversiones Extranjeras en cuanto al monto por remesar.

En el Artículo No. 5 se establece que las divisas necesarias para cumplir con la remesa de capital o parte de él, sólo podrán ser adquiridas con el producto de la enajenación de las acciones o derechos representativos de la inversión extranjera, o de la enajenación o liquidación de las empresas adquiridas o construidas con dicha inversión.

Los recursos netos obtenidos de la enajenación y liquidación de los aportes están exentos de toda contribución, impuestos o gravámenes hasta por el monto de la inversión materializada y debidamente materializada por el inversionista. Todo excedente sobre dicho monto está sujeto a las reglas generales de la legislación tributaria (Artículo No. 6 y sus modificaciones mediante el Artículo Primero de la Ley No. 19207).

7. Sectores con restricciones al capital extranjero

El Decreto Ley No. 600 no establece ninguna restricción pero existen otras normas de nivel constitucional y legal que limitan o impiden la inversión extranjera en ciertos sectores. Entre estos tenemos:

- a) Sustancias minerales: La Constitución Política de 1980 establece el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible del Estado respecto de todas las minas,

comprendiéndose las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. Ello a pesar de la propiedad de personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieran situadas. Estos predios están sujetos a las obligaciones y limitaciones que la Ley establezca para facilitar la exploración, explotación y beneficio de dichas minas. La reserva para el Estado del dominio de todas las minas es sin perjuicio de las concesiones que pueda otorgar.

- b) **Materiales Atómicos Naturales:** Actualmente no se encuentra ningún material atómico reservado al Estado, salvo el litio que tiene un tratamiento especial. El uranio es de libre concesión pero el Estado tiene la primera opción de compra.
- c) **Hidrocarburos:** El Estado según la Constitución Política de 1980 tiene el dominio absoluto de los depósitos de hidrocarburos, sustancias que no podrán ser objeto de concesiones de exploración o explotación. Sin embargo, los contratos de operación respecto de hidrocarburos se encuentran autorizados por el Decreto Ley No. 1089 de 1975.
- d) **Cabotaje:** El Decreto Ley No. 3059 de 1979 establece que el cabotaje, es decir, el transporte marítimo, fluvial y lacustre de carga y pasajeros dentro del territorio nacional y entre puntos de éste y artefactos navales ubicados en el mar o en la zona económica exclusiva, está reservado a naves chilenas. Sin embargo, las naves extranjeras podrán participar en el cabotaje, cuando se trate de transporte de carga de más de 900 toneladas métricas, cuyos embarques parciales no sean inferiores a ese tonelaje, previa licitación pública convocada por el usuario. De manera excepcional, cuando no hayan naves chilenas disponibles, las naves extranjeras pueden ser autorizadas para transportar carga inferior a 900 toneladas.
- e) **Bienes raíces en fronteras y playas:** En este sentido se consideran tres restricciones (Leyes No. 18255, 18524 y Decreto Ley No. 1939):
 - i) Las tierras fiscales situadas hasta una distancia de 10 kilómetros, medidos desde la frontera y las tierras fiscales situadas hasta 5 kilómetros de la costa, medidos de la línea de marea más alta, sólo podrán ser obtenidas en propiedad, arrendamiento o cualquier otro título, por personas naturales o jurídicas chilenas.
 - ii) Se prohíbe adquirir el dominio y otros derechos reales de bienes raíces ubicados total o parcialmente en zonas de frontera, a los nacionales de países limítrofes en donde se contemplen restricciones similares para chilenos.
 - iii) La prohibición anterior abarca a las sociedades o personas jurídicas con sede principal en el país limítrofe, o cuyo capital pertenezca en un 20% o más a nacionales de esos países.

- f) **Radio y televisión:** En este caso, la legislación permite a los inversionistas extranjeros suscribir el 100% del capital de empresas concesionarias de radio y televisión. Sin embargo, para obtener una concesión de radiodifusión televisiva, las personas naturales deberán acreditar ser chilenas y las personas jurídicas deberán tener presidente, director responsable y gerentes de nacionalidad chilena (Ley No. 18838). En el caso de concesiones para servicios de radiodifusión sonora de libre recepción se otorgarán licencias a personas naturales chilenas y a personas jurídicas constituidas en conformidad a la Ley chilena y con domicilio en Chile. Tratándose de sociedades de personas, sus socios deberán ser chilenos; en las sociedades anónimas y otras formas societarias, igual calidad deberán tener su presidente, directores y gerentes y administradores.
- g) En el caso de los Fondos de Inversión de Capital Extranjero (Ley No. 18657), se ponen ciertas condiciones para que sean consideradas como inversión extranjera. Una de ellas es que las cuotas de participación que se emitan por el Fondo no sean rescatables. Este fondo y la sociedad que lo administra, quedarán sometidos a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros en lo relativo a sus operaciones y a la inversión de sus recursos en el país. A su vez, existen ciertas restricciones sobre el tipo de activos financieros en que deben invertir y en la diversificación de las inversiones. Entre las restricciones tenemos que las inversiones no podrán exceder del 5% del capital social con derecho a voto de un mismo emisor, al final del primer año de funcionamiento el fondo deberá tener, un 20% de sus activos invertido en acciones de sociedades anónimas abiertas.

8. Tributación

El Decreto Ley No. 600, en su Artículo No. 6, establece que los recursos netos obtenidos por las enajenaciones o liquidaciones con el fin de remesar el total del capital o parte de él, estarán exentos de toda contribución, impuesto o gravamen hasta por el monto de la inversión autorizada por el Comité de Inversiones Extranjeras (CIE). Todo excedente sobre dicho monto estará sujeto a las reglas generales de la legislación tributaria.

Los titulares de inversiones extranjeras dentro del marco del Decreto Ley No. 600 tendrán derecho a que en sus respectivos contratos se establezca que se les mantendrá invariable, por un plazo de diez años, una tasa de 42% o, en su defecto, 40% más un suplemento variable (Artículo No. 7 bis y sus modificaciones mediante el Artículo Primero de la Ley No. 19207) como carga efectiva total a la renta a que estarán sujetos, considerando los impuestos de la Ley de la Renta que corresponde aplicar conforme a las normas legales vigentes a la fecha de celebración del contrato. En el caso de inversiones que superen los 50 millones de dólares se podrán hacer las siguientes concesiones:

- a) El plazo del contrato de estabilidad podrá prorrogarse hasta 20 años como máximo si el proyecto así lo requiere.

- b) Se podrá incluir en los contratos la invariabilidad de las normas legales y de las resoluciones y circulares que haya emitido el Servicio de Impuestos Internos a la fecha de suscripción del contrato en temas como la depreciación de activos, arrastre de pérdidas a ejercicios posteriores y gastos de organización y puesta en marcha. Asimismo, se podrá incluir, una resolución del Servicio de Impuestos Internos que permita a la empresa llevar su contabilidad en moneda extranjera.
- c) En el caso de proyectos que contemplen la posibilidad de exportar todo o parte de los bienes producidos, se podrá otorgar la mantención sin variaciones de las normas legales y reglamentarias vigentes, sobre el derecho a exportar libremente. También se podrá autorizar regímenes especiales de retorno y liquidación de partes o el total del valor de las exportaciones e indemnizaciones por concepto de seguro u otras causas. Para esto, el CIE deberá contar con un informe previos del Banco Central de Chile.

Aun cuando el inversionista extranjero haya optado por la invariabilidad, tendrá derecho, por una sola vez, a renunciar a ella e integrarse al régimen impositivo común, por lo cual quedará sometido a las mismas normas que rigen para el inversionista nacional. Al acogerse a este régimen, el inversionista perderá de manera definitiva la estabilidad convenida.

En su Artículo No. 9 se establece que a la inversión extranjera y a las empresas en que ésta participe se les aplicará el régimen tributario indirecto y el régimen arancelario común aplicables a la inversión nacional. Sin embargo, a pesar de lo anterior, los inversionistas extranjeros tendrán derecho a que en sus contratos se incluya cláusulas que establezcan que se les mantendrá invariable, el régimen tributario del impuesto sobre las ventas y servicios y el régimen arancelario, aplicables a la importación de ciertas maquinarias y equipos que no se produzcan en el país.

En cuanto a las tasas vigentes en el régimen común, las empresas están sujetas a un 15% de Impuesto de Primera Categoría aplicado sobre el ingreso imponible. Asimismo, las utilidades de una compañía, agencia o sucursal extranjera están afectas a una tasa de 15%. Se aplica una retención del 35% a los pagos de dividendos y remesas de utilidades a la casa matriz, con un crédito por la tasa de 10%.

Adicionalmente, existe un impuesto deducido en la fuente de 40% sobre los siguientes pagos a empresas o individuos no residentes:

- Pagos por el uso de marcas, patentes, fórmulas, asistencia técnica y otros servicios similares.
- Intereses sobre préstamos, excepto cuando son pagados a bancos o instituciones financieras extranjeras o internacionales. En tal caso, la tasa es de 4%.
- Pagos por servicios realizados en el exterior, con la excepción de fletes, gastos de embarque, carga, muestreo y análisis de productos, etc.
- En el caso de pagos hechos a compañías de seguros no establecidas en Chile por asegurar equipos y otros bienes localizados en Chile, o seguros de vida de individuos

residentes en Chile, la tasa de impuesto es de 22%. En los mismos casos, los reaseguros son gravados con una tasa de 2%.

- Las remuneraciones pagadas a empresas o individuos no residentes por transporte marítimo desde y hacia puertos chilenos; comisiones y participaciones, así como ingresos derivados de servicios a embarcaciones y fletes en puertos chilenos o extranjeros, estarán sujetos a un impuesto de 5%.
- Pagos por fletes o arrendamiento o algún otro contrato que provea el uso de canales extranjeros para el comercio costero están sujetos a un impuesto de 20%.
- Pagos por el arrendamiento de bienes de capital importados incluidos en el sistema arancelario de bienes de capital, son gravados con un impuesto de 2%.

Existen además incentivos especiales en materia tributaria:

- a) Una reducción del Impuesto de Primera Categoría es concedida a las actividades diferentes de las operaciones de inversión y financieras, llevadas a cabo en las regiones del extremo norte y sur de Chile.
- b) Los sectores industrial, minero, turístico, pesquero y de transporte cuyas actividades se realicen en el sur del Estrecho de Magallanes están exceptuados del Impuesto al Ingreso de primera Categoría, aranceles e Impuesto al Valor Agregado (IVA).
- c) Las Zonas Francas están exceptuadas del Impuesto al Valor Agregado y los ingresos generados están exonerados del pago del Impuesto de Primera Categoría.
- d) Las plantaciones forestales pueden recibir un subsidio del 75% de los costos de plantación. Además, los ingresos derivados de la explotación de bosques son favorecidos con una reducción de 50% en los impuestos personales progresivos.

Por otro lado, todo pago por este concepto de royalties tributará una tasa de retención de 40%. En el caso de asistencia técnica, la retención será del 20%. Cabe mencionar que estas retenciones son deducibles del impuesto a la renta. Asimismo, el impuesto a los intereses es de 40% y un 4% adicional sobre los préstamos de bancos extranjeros.

Por último, Chile tiene un convenio con Argentina con el fin de evitar la doble tributación.

9. Royalties o Regalías

En la legislación pertinente no se encuentra ninguna restricción a la contratación de tecnología extranjera. Solamente se limita a establecer que los pagos por intereses, asistencia técnica y royalties son deducibles como gastos para la empresa.

V. COLOMBIA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Colombia, tanto la inversión extranjera directa como la inversión colombiana en el exterior deben ser autorizadas por el <u>Departamento Nacional de Planeación</u> , y luego registradas en la <u>Oficina de Cambios del Banco de la República</u> .
Definición de inversión extranjera directa	<p>La inversión extranjera directa en Colombia, al igual que en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena, se define, a través de la Decisión 291, como los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa. Dichos aportes pueden ser en: a) moneda libremente convertible; b) bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.</p> <p>Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.</p> <p>Por otra parte, la Resolución No. 51 del 22 de octubre de 1991, del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Departamento Nacional de Planeación establece que también se considera como inversión extranjera directa, la adquisición de participaciones, acciones o cuotas en el mercado de valores. En todo caso las inversiones que se realicen en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores deberán adquirirse con ánimo de permanencia y estarán sujetas a todas las normas que rigen el mercado de valores.</p> <p>Además esta misma Resolución establece que son inversiones extranjeras, la inversión directa, la inversión indirecta y la inversión de portafolio. Estas dos últimas modalidades son definidas como:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Inversiones indirectas: todos los actos o contratos por medio de los cuales el inversionista realiza un aporte tangible o intangible a una empresa sin llegar a tener participación accionaria en todo o en parte de ella, siempre y cuando las rentas que la inversión genere para su propietario dependan de las utilidades generadas por la empresa. b) Inversión de portafolio: las inversiones en acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores negociables en Bolsas de Valores.
Participación mínima del capital extranjero	<p>En Colombia, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera.</p> <p>Sin embargo, de acuerdo a los criterios establecidos en la Decisión 291 de Acuerdo de Cartagena, dependiendo de la participación extranjera en el capital con derecho a voto, la empresa receptora es calificada como: a) empresa nacional (menos del 20%); b) empresa mixta (entre 20 y 50%), asimismo, se consideran empresas mixtas aquellas en que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado en un porcentaje no inferior al 30% del capital social y siempre que, a juicio del Departamento Nacional de Planeación, el Estado tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa; y c) empresa extranjera (más del 50%).</p>
Flujo de inversión extranjera directa	<p>Se define como la variación neta en el capital de una empresa, originado por los nuevos aportes provenientes del exterior, la capitalización de reinversiones y reservas, la capitalización de los créditos con el exterior, menos la venta de acciones de extranjeros a nacionales y la conversión de inversionistas extranjeros en nacionales.</p> <p>Para fines de esta publicación, los flujos de inversión extranjera en Colombia fueron calculados como la diferencia entre los stock de capital extranjero invertido en el país, para dos años consecutivos.</p>
Reinversión de utilidades	Se define como la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en la que se hayan generado.
Deuda intrafirma	La deuda intrafirma equivale al capital en forma de divisas o bienes que pertenezca a la cuenta corriente de la casa matriz de la empresa radicada en Colombia. Estos pasivos pueden ser, opcionalmente, registrados por la empresa como préstamos.
Criterios para el registro	En relación al registro efectuado por el Banco de la República de la inversión extranjera directa materializada y todos sus componentes, esta se efectúa en moneda de libre convertibilidad (dólares americanos), tomando en cuenta el tipo de cambio vigente en la fecha en que se realiza el aporte, en el caso de las utilidades se considera el tipo de cambio promedio anual del año en que se generaron dichas utilidades. Las estadísticas sobre origen de la inversión, reflejan sólo los datos consignados en la solicitud como "domicilio del inversionista".
Stock de inversión extranjera directa	<p>En Colombia, el stock de inversión extranjera directa es calculado como el valor acumulado neto en moneda extranjera (dólares americanos) de las inversiones efectuadas en el país. El stock al 31 de diciembre de cada año es definido de manera general por los siguientes factores: a) capital inicial ingresado al país; b) aumentos posteriores de capital; c) más (o menos) el superávit (o déficit) al año en que se ganaron las utilidades (o pérdidas); d) deuda intrafirma; e) menos reembolsos de capital.</p> <p>Para el caso de personas naturales extranjeras, que efectúan inversiones en Colombia, el stock de éstas al 31 de diciembre de cada año, se calcula con base en la declaración de la renta y patrimonio y los documentos adicionales que la Oficina de Cambios considere necesarios para verificar el aporte extranjero efectivo al patrimonio.</p>

**Inversión nacional
directa en el exterior**

Se entiende como inversión de capital colombiano en el exterior la vinculación a empresas en el extranjero de activos generados por actividades productivas en Colombia, que no tengan derecho a ser remitidas; la inversión indirecta y la reinversión o capitalización en el exterior de las sumas con obligación de reintegro, provenientes de utilidades, intereses, regalías y otros pagos de servicios técnicos y reembolsos de capital.

**Stock de inversión
nacional en el
exterior**

Representa el monto total acumulado al 31 de diciembre de cada año, registrado en la Oficina de Cambios del Banco de la República, del capital invertido por colombianos en el exterior, más la reinversión de utilidades autorizadas y menos las liquidaciones, ventas y reducciones de capital registradas en el mismo período. El flujo de inversión colombiana en el exterior fue calculado, para esta publicación, como la diferencia de los stocks para dos años consecutivos.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento de Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena; Lima-Perú, marzo de 1991.
- Ley No. 09* del 17 de enero de 1991. Establece normas generales para regular los cambios internacionales. Esta Ley deroga parcialmente el Decreto Ley No. 444 del 22 de marzo de 1967, que establecía el antiguo Régimen de Cambios y Comercio Exterior.
Fecha de entrada en vigor: 17 de enero de 1991.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), enero 1991.
- Resolución No. 51* del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), del 22 de octubre de 1991. Establece el Estatuto de Inversiones Internacionales de Colombia y ratifica la Decisión 291. Esta resolución es modificada por la Resolución No. 52 CONPES del 23 de diciembre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 22 de octubre de 1991.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), octubre de 1991.
- Leyes sectoriales** *Decreto Legislativo No. 2310* del 28 de octubre de 1974. Reserva la exploración y explotación de hidrocarburos a la Empresa Colombiana de Petróleos.
Fecha de entrada en vigor: 28 de octubre de 1974.
Fuente: BID-INTAL. Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI. VII.Grupo Andino, Volumen 2. Colombia - Ecuador, Buenos Aires 1985.
- Decisión 91* de agosto de 1975. Establece el Programa Sectorial de la Industria Petroquímica. Esta Decisión fue modificada por las Decisiones 130 y 170 y ratificada por la legislación colombiana mediante los Decretos No. 2465, No. 2696 y la Resolución No. 60 del Instituto Colombiano de Comercio Exterior (INCOMEX), de 1976.
Fecha de entrada en vigor: agosto de 1975.
Fuente: BID-INTAL. Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI. VII.Grupo Andino, Volumen 1. Régimen Común - Bolivia; Buenos Aires 1985.
- Decisión 300* del 16 de mayo de 1991. Establece el Programa de Integración Industrial Metalmecánico. Sustituye a la Decisión 146 de julio de 1979 que establecía el Programa de la Industria Metalmecánica.
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año VIII, No. 82, Lima 12 de junio de 1991.
- Leyes de transferencia de tecnología** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento de Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena; Lima-Perú, marzo de 1991.
- Resolución No. 51 CONPES* del 22 de octubre de 1991. Establece el Estatuto de Inversiones Internacionales de Colombia y ratifica la Decisión 291. Esta resolución es modificada por la Resolución No. 52 CONPES del 23 de diciembre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 22 de octubre de 1991.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), octubre de 1991.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Decisión 85* de 1978. Establece el reglamento para la aplicación de las normas sobre Propiedad Industrial.
Fecha de entrada en vigor: 1978.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Régimen Legal de la Inversión Extranjera. Bogotá, 1988.
- Decreto No. 1190* del 26 de junio de 1978. Incorpora a la legislación colombiana la Decisión 85.
Fecha de entrada en vigor: 26 de junio de 1978.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP). Régimen Legal de la Inversión Extranjera. Bogotá, 1988.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Ley No. 47* del 8 de agosto de 1981. Establece el Estatuto Orgánico de las Zonas Francas Industriales y Comerciales.
Fecha de entrada en vigor: 8 de agosto de 1981.
Fuente: BID-INTAL. Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI. VII.Grupo Andino, Volumen 2. Colombia - Ecuador; Buenos Aires 1985.
- Decreto No. 2131* de 1991. Reglamenta la inversión extranjera en zonas francas.
Fecha de entrada en vigor: 17 de diciembre de 1983.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), octubre de 1991.

- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones (continuación)**
- Resolución No. 51 CONPES* del 22 de octubre de 1991. Establece el Estatuto de Inversiones Internacionales de Colombia y ratifica la Decisión 291. Esta resolución es modificada por la resolución No. 52 CONPES del 23 de diciembre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 22 de octubre de 1991.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación (DNP), octubre de 1991.
- Ley No. 7* de 1991. Establece la Ley Marco de Comercio Exterior dentro de la cual se reglamenta el régimen para el funcionamiento privado de Zonas Francas industriales de bienes y servicios.
Fecha de entrada en vigor: 1991.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Leyes sobre privatizaciones**
- Decreto No. 1900* del 19 de agosto de 1990. Reglamenta la participación de empresas privadas en el sector de telecomunicaciones.
Fecha de entrada en vigor: 19 de agosto de 1990.
Fuente: "Privatization in Latin America", Suplemento del Latin Finance, mayo 1991.
- Decreto No. 2915* del 5 de diciembre de 1990. Reglamenta la privatización de instituciones financieras.
Fecha de entrada en vigor: 22 de octubre de 1990.
Fuente: Banco de la República, Revista del Banco de la República, Volumen LXIII, No. 758. Bogotá, diciembre de 1990.
- Ley No. 45* del 18 de diciembre de 1990. Se establece el régimen sobre instituciones financieras y la actividad aseguradora.
Fecha de entrada en vigor: 18 de diciembre de 1990.
Fuente: Banco de la República, Revista del Banco de la República, Volumen LXIII, No. 758. Bogotá, diciembre de 1990.
- Ley No. 01* del 15 de enero de 1991. Ordena la liquidación de Puertos de Colombia y la transferencia de todos sus activos a compañías portuarias regionales.
Fecha de entrada en vigor: 15 de enero de 1991.
Fuente: "Privatization in Latin America", Suplemento del Latin Finance, mayo 1991.
- Acuerdos internacionales**
- Convenio sobre garantías de las inversiones de la Corporación Privada de Inversiones en el Extranjero (OPIC)*, suscrito en 1985.
Fecha de entrada en vigor: 1985.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Convención de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA)*, suscrito en 1986.
Fecha de entrada en vigor: 1986.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Ley No. 124* de 1961. Aprueba el Convenio de Exención de Impuesto a la Renta con respecto a las ganancias obtenidas en la operación de buques y aviones en la actividad de transporte de personas, artículos y correo, por sociedades organizadas en los Estados Unidos.
Fecha de entrada en vigor: 1961.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Ley No. 04* del 5 de enero de 1988. Aprueba el Acuerdo para la exoneración recíproca de impuestos sobre los ingresos brutos derivados de la operación de barcos y aeronaves, por parte de ciudadanos de los Estados Unidos (no residentes en Colombia) y por empresas organizadas en Estados Unidos.
Fecha de entrada en vigor: 5 de enero de 1988.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Ley No. 15* del 15 de diciembre de 1970. Se aprueba el Convenio de eliminación de doble tributación de las empresas marítimas y aéreas de la República Argentina.
Fecha de entrada en vigor: 15 de diciembre de 1970.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.
- Ley No. 16* del 15 de diciembre de 1970. Aprueba el Acuerdo con Alemania para evitar la doble tributación de las empresas aéreas y marítimas.
Fecha de entrada en vigor: 15 de diciembre de 1970.
Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.

Acuerdos
internacionales
(continuación)

Ley No. 21 del 30 de diciembre de 1972. Aprueba el Convenio con la República de Chile para evitar la doble tributación de las empresas de navegación aérea y marítima respecto del impuesto sobre la renta y el capital.

Fecha de entrada en vigor: 30 de diciembre de 1972.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.

Ley No. 14 del 19 de enero de 1981. Aprueba el Convenio celebrado con el Gobierno Italiano para evitar la doble tributación sobre las rentas y sobre el patrimonio derivados del ejercicio de la navegación marítima y aérea.

Fecha de entrada en vigor: 19 de enero de 1981.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.

Ley No. 16 del 3 de febrero de 1976. Aprueba el Acuerdo con Venezuela para regular la tributación de la inversión estatal y de las empresas de transporte internacional.

Fecha de entrada en vigor: 3 de febrero de 1976.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.

Ley No. 6 del 14 de enero de 1988. Aprueba el Acuerdo de transportes aéreos con Francia, mediante el cual las empresas aéreas pagarán exclusivamente al Gobierno de su propio país todo impuesto que grave su renta o que sea complementario o adicional de impuestos que graven la renta.

Fecha de entrada en vigor: 14 de enero de 1988.

Fuente: Departamento Nacional de Planeación, Guía de Negocios en Colombia, Departamento Nacional de Planeación de Colombia (División de Inversión Extranjera) y KPMG Peat Marwick, marzo de 1992.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Colombia la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Resolución No. 51 del 22 de octubre de 1991, administrada por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) del Departamento Nacional de Planeación (DNP). A través de esta Resolución se establece el Estatuto de Inversiones Internacionales, medida complementaria a la Ley No. 09 (Estatuto Cambiario) del 17 de enero de 1991, que regula en materia de cambios internacionales. No obstante, al igual que en los demás países del Pacto Andino, la inversión extranjera en Colombia se rige por la Decisión 291 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de marzo de 1991.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Las primeras regulaciones de la inversión extranjera tienen en Colombia un origen cambiario. En 1951 se implantó un estricto control de cambios como consecuencia del cual las inversiones extranjeras debían registrarse en la Oficina de Registro de Cambios del Banco de la República. Esta Oficina registraba además los movimientos de capital correspondiente, autorizaba los giros al exterior en concepto de utilidades y reembolso de capital, y ejercía el control sobre dichas inversiones.

Colombia durante el período 1957 - 1966 mantuvo un régimen de cambios libre bajo cuya vigilancia sólo debían registrarse las empresas receptoras dedicadas a la industria del petróleo. La Oficina de Registro de Cambios fue trasladada a la Superintendencia de Comercio Exterior.

El 22 de marzo de 1967, se dicta el Decreto Ley No. 444, vigente hasta el año 1991, mediante el cual se establece, junto con un régimen de control de cambios, el procedimiento de autorización de la inversión extranjera por parte del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Adicionalmente, la Oficina de Registro de Cambios, nuevamente dependiente del Banco de la República, debía registrar los aportes de capital, sus reinversiones y las remesas al exterior que se generaran. Además, se establecía que la evaluación y autorización hecha por el DNP debía adecuarse a los criterios establecidos por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES). El Decreto Ley No. 444 fue modificado parcialmente por el Decreto Ley No. 688 de abril del mismo año.

El 19 de julio de 1972, se dicta la Resolución No. 17 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), mediante la cual se reglamenta el Decreto Ley No. 444. En esta Resolución se establecen las definiciones de inversión extranjera y otros conceptos afines; los procedimientos de autorización y registro de la inversión; los criterios mediante los cuales el DNP debe evaluar los proyectos de inversión extranjera y las formas de valoración del capital invertido.

La evolución posterior del tratamiento de la inversión extranjera en Colombia está estrechamente ligada a los cambios producidos en las Decisiones del Grupo Andino que han regulado en estas materias y, de manera especial, a la Decisión 24 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en junio de 1971.

De esta manera, mediante el Decreto No. 1900 del 15 de septiembre de 1973, la Decisión 24 adquirió valor normativo interno en Colombia. La nueva norma supra regional fue dictada con la finalidad de limitar la influencia financiera exterior y asegurar una mayor contribución del sector privado local al desarrollo nacional. Asimismo, contemplaba la reducción progresiva a una posición minoritaria de las participaciones extranjeras en las empresas locales, la eliminación del capital extranjero en los sectores claves, la limitación del derecho a remitir utilidades al exterior, entre otras disposiciones de carácter restrictivo.

En 1978 y 1983, el CONPES dictó las Resoluciones Nos. 29 y 36, respectivamente, mediante las cuales se señalaban algunos lineamientos específicos en cuanto al tratamiento de los excedentes de utilidades y la transferencia de las mismas al exterior.

Después de dieciséis años de haber entrado en vigor y haber sufrido algunas modificaciones, el 18 de mayo de 1987 la Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220. Por medio de esta norma se flexibilizó el tratamiento de la inversión extranjera eliminando algunos requisitos de registro y autorización de las inversiones y remesas de utilidades al exterior, suprimiendo los sectores reservados y otorgando la posibilidad de que cada país miembro pudiera legislar en forma individual en materia de inversión extranjera.

La Decisión 220 fue reglamentada internamente por el Decreto No. 1265 del 10 de julio de 1987. En este Decreto se establecieron los procedimientos de solicitud, autorización y registro de la inversión extranjera, coincidentes con la Decisión 220, así como con el Decreto Ley No. 444 y la Resolución No. 17 del CONPES. Algunas medidas en torno a la remisión de utilidades fueron dispuestas posteriormente, mediante la Resolución No. 44 del CONPES del 27 de julio de 1987.

El 28 de enero de 1991 se dictó la Resolución No. 49 del CONPES mediante la cual se estableció el Estatuto de Inversiones Internacionales a la luz de la Decisión 220 y del recientemente modificado Estatuto Cambiario (Ley No. 09 del 17 de enero de 1991), la cual otorgaba al CONPES funciones de regulación en materia de inversiones extranjeras.

Sin embargo, en marzo del mismo año, se presentó la necesidad de revisar la legislación existente para los países miembros del Acuerdo de Cartagena, dado que éstos buscaban una mayor eficiencia y competitividad en sus economías, mediante la liberalización del comercio y la inversión extranjera. Por este motivo, con el fin de estimular y promover mayores flujos de capitales y tecnologías extranjeras hacia las economías andinas se volvió a modificar el Régimen Común, sustituyendo la Decisión 220 por la Decisión 291.

Finalmente, el 22 de octubre de 1991, se emitió la Resolución No. 51 del CONPES que establece algunos ajustes al Estatuto de Inversiones Internacionales, derogando la Resolución No. 49 del CONPES. Esta nueva norma legal, es la que actualmente regula al capital extranjero en Colombia, como asimismo las inversiones colombianas en el exterior.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena define como inversión extranjera directa los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

La Resolución No. 51 del CONPES ratifica la definición entregada por la Decisión 291, adoptándola como definición nacional. Precisando además que se consideraba también como inversión extranjera directa, la adquisición de participaciones, acciones o cuotas en el mercado de valores. En todo caso las inversiones que se realicen en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores deberán adquirirse con ánimo de permanencia y estarán sujetas a todas las normas que rigen el mercado de valores.

Además esta misma Resolución establece que son inversiones extranjeras, la inversión directa, la inversión indirecta y la inversión de portafolio. Estas dos últimas modalidades son definidas como:

a) Inversiones indirectas: todos los actos o contratos por medio de los cuales el inversionista realiza un aporte tangible o intangible a una empresa sin llegar a tener participación accionaria en todo o en parte de ella, siempre y cuando las rentas que la inversión genere para su propietario dependan de las utilidades generadas por la empresa.

b) Inversión de portafolio: las inversiones en acciones y bonos obligatoriamente convertibles en acciones y otros valores negociables en Bolsas de Valores.

En resumen, de acuerdo a la Resolución No. 51 del CONPES, la inversión extranjera en Colombia puede revestir las siguientes modalidades:

a) Importación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, aportados al capital de una empresa como importaciones no reembolsables.

b) Importación de divisas libremente convertibles para inversiones en moneda nacional como aporte directo al capital de una empresa o adquisición de derechos, acciones u otros valores.

c) Aportes en especies al capital de una empresa consistentes en intangibles, tales como, contribuciones tecnológicas, marcas y patentes.

d) Recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al exterior, tales como, principal e intereses de créditos externos, sumas adeudadas por concepto de importaciones reembolsables,

utilidades con derecho a giro y regalías derivadas de contratos debidamente aprobados y registrados que se destinen a inversiones directas, indirectas o de portafolio.

- e) Retención en el patrimonio de utilidades no distribuidas con derecho a giro.
- f) Las modalidades señaladas en los literales a), b) y c) cuando no se computen como aportes de capital a la empresa.
- g) Importación de divisas libremente convertibles para realizar inversiones en moneda nacional tendientes a efectuar inversiones de portafolio.
- h) Inversiones suplementarias al capital asignado de las sucursales de empresas extranjeras en los términos de la Resolución No. 17 del CONPES de 1972 y, las inversiones a un proyecto minero de carbón conforme a las Resoluciones Nos. 23, 24 y 45 del CONPES, de 1976 y 1989 respectivamente.
- i) Importación de divisas libremente convertibles para efectuar inversiones en moneda nacional destinadas a la compra de inmuebles para residencia propia o para fines turísticos de personas naturales no residentes, y viviendas de funcionarios u oficinas de personas jurídicas extranjeras.

4. Tratamiento jurídico del inversionista extranjero

La Decisión 291, en su Artículo No. 2, señala que los inversionistas extranjeros tendrán los mismos derechos y obligaciones a los que se sustentan los inversionistas nacionales, salvo lo dispuesto en las legislaciones de cada país miembro.

A este respecto, la Resolución No. 51 del CONPES establece en base al Artículo No. 100 de la Constitución Política de Colombia, al Artículo No. 15 de la Ley No. 09 de 1991, y con excepción de aquellos asuntos referentes a la transferencia de recursos al exterior, que la inversión extranjera en Colombia, será tratada para todos los efectos, de igual forma que la inversión de nacionales residentes.

En consecuencia, y sin perjuicio de lo establecido en regímenes especiales, no se pueden conceder condiciones ni otorgar tratamientos discriminatorios a los inversionistas extranjeros frente a los inversionistas privados residentes nacionales, ni tampoco conceder a los inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que el que se otorga a los inversionistas privados residentes nacionales.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena señala en su Artículo No. 3 que la inversión extranjera directa, las reinversiones y la venta de acciones, participaciones y derechos de los inversionistas extranjeros podrán ser registradas ante el organismo nacional competente, de acuerdo con lo que dispone la legislación de cada país miembro.

En este sentido, la Resolución No. 51 del CONPES señala en sus Artículos Nos. 9 y 12 que todas las inversiones extranjeras que se proyecten hacer en el país en aquellos sectores que no estén sujetos a regímenes especiales y a las limitaciones impuestas en el Artículo No.8 quedan autorizadas. En todo caso las siguientes inversiones requieren de la autorización del DNP:

a) Las que se proyecte efectuar para la realización de actividades de prestación de servicios públicos tales como energía eléctrica, aseo, acueducto y alcantarillado, servicios postales, correos, salud pública, comunicaciones, incluidas las telecomunicaciones, radioemisoras, estaciones de televisión y periódicos y revistas que no tengan el carácter de científicas, técnicas o culturales. Para su autorización se tendrá en cuenta el efecto positivo sobre los costos y la eficiencia en la prestación del servicios y el fomento al bienestar público.

b) Las que se proyecte realizar en el procesamiento, disposición y desecho de basuras. Para su autorización se tendrá en cuenta el origen de las basuras, su naturaleza y la naturaleza del proceso de transformación para determinar si uno u otro es tóxico, radioactivo o peligroso.

c) Las que se proyecte realizar al amparo de los convenios internacionales vigentes ratificados por Colombia.

En la autorización de una inversión extranjera, el DNP determina las condiciones generales de la inversión, los plazos dentro de los cuales debe realizarse y, el plazo dentro del cual debe solicitarse su registro ante el Banco de la República.

La autorización perderá sus efectos cuando el DNP establezca que el inversionista extranjero ha modificado los términos de su inversión, sin previa autorización, o el inversionista no cumpla cualquiera de las condiciones establecidas en el acto de autorización.

El DNP debe pronunciarse sobre las solicitudes de autorización de inversiones extranjeras dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha de su presentación, siempre que no se haya exigido documentación complementaria dentro de los primeros 15 días. Si pasados estos plazos el DNP no se pronuncia la inversión se considera autorizada por **silencio administrativo positivo**.

Corresponde al Ministerio de Minas y Energía autorizar en forma global los proyectos de inversión extranjera para la exploración y explotación de petróleo y gas natural, una vez negociado el contrato respectivo entre ECOPETROL y el inversionista extranjero. De esta misma manera corresponde al Ministerio de Minas y Energía autorizar las inversiones extranjeras para los proyectos de refinación, transporte y distribución de hidrocarburos.

Los proyectos de inversión extranjera para la exploración, beneficio y transformación de minerales, deben ser aprobados igualmente por el Ministerio de Minas y Energía, previa inscripción en el Registro Minero. Para aquellas inversiones extranjeras que supere los US\$ 100 millones o su equivalente en otras monedas, se requiere la autorización del Departamento Nacional de Planeación, previo concepto favorable del Ministerio de Minas y Energía.

La constitución u organización de cualquier institución financiera con capital extranjero, así como toda transacción de inversionistas extranjeros que tenga por objeto la adquisición del 10% o más de las acciones suscritas de cualquier entidad financiera debe contar con la aprobación de la Superintendencia Bancaria, en los términos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley No. 45 del 18 de diciembre de 1990.

En cuanto al registro, el Artículo No. 15 señala que todas las inversiones extranjeras, incluido el movimiento de las inversiones adicionales, capitalizaciones, reinversiones de utilidades con derecho a giro, remesas de utilidades y reembolso de capitales, deberán registrarse en el Banco de la República. Dicha institución informará mensualmente al DNP sobre las inversiones que registre, identificando el inversionista, la empresa receptora, el monto y la modalidad de la inversión.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en los Artículos Nos. 4 y 5 establece el derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas que provengan de la inversión extranjera directa y, a remesar el producto de la venta de acciones, participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes. En el caso de la venta de acciones, participaciones o derechos, dicha transacción no será considerada como reexportación de capital.

En el caso de la legislación nacional, la Resolución No. 51 del CONPES establece los siguientes derechos al titular de una inversión extranjera:

a) Remitir al extranjero en moneda libremente convertible las utilidades netas comprobadas. Para efectos de la compra de divisas y el ejercicio de tal derecho, el inversionista deberá presentar un certificado del Revisor Fiscal en el cual consten el monto de la inversión, las utilidades netas generadas por la inversión y de ser necesario todos los datos adicionales indispensables para comprobar dichas utilidades netas. La Superintendencia de Cambios ejercerá un control posterior para verificar la existencia de utilidades netas, sobre todo cuando éstas superen el 25% del capital registrado el año inmediatamente anterior.

b) Reinvertir utilidades, o retener en el superávit las utilidades no distribuidas con derecho a giro.

c) Capitalizar las sumas con derecho a giro, producto de obligaciones derivadas de la inversión.

d) Remitir al exterior, en moneda libremente convertible, las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión dentro del país, o de la liquidación de la empresa o de la reducción de su capital.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero.

Entre las disposiciones legales que señalan restricciones para la inversión extranjera en algunos sectores reservados al capital nacional se encuentran:

a) La Resolución No. 51 del 22 de octubre de 1991 del CONPES, establece en su Artículo No. 8 que pueden realizarse inversiones extranjeras en cualquier proporción en todos los sectores de la economía. No obstante lo anterior, queda prohibido todo tipo de inversión extranjera en las actividades de defensa y seguridad nacional y en el procesamiento, disposición y desechos de basuras tóxicas, peligrosas o radioactivas no producidas en el país. En todo caso, el CONPES puede reservar sectores de la actividad económica y determinar si admite en ellos la participación de inversión extranjera.

b) La Constitución Política de Colombia, establece en su Artículo No. 332 que todos los recursos naturales no renovables del suelo y del subsuelo pertenecen al Estado en forma inalienable. En ejercicio de ese derecho, el Estado puede explorarlos y explotarlos directamente, a través de organismos descentralizados, o conferir a los particulares el derecho de hacerlo, o reservarlos temporalmente.

c) El Decreto Legislativo No. 2310 de 1974 y demás normas pertinentes, con excepción de los contratos de concesión vigentes, establece que la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad nacional estará a cargo de la Empresa Colombiana de Petróleos (ECOPETROL), la cual podrá llevar a cabo dichas actividades directamente o por medio de contratos de asociación, operación, de servicios o de cualquier otra naturaleza, distintos de los de concesión celebrados con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras.

d) Colombia, como país miembro del Acuerdo de Cartagena, no puede autorizar la inversión extranjera directa en su territorio ni la celebración de contratos de importación de tecnología para la elaboración de productos pertenecientes a la industria petroquímica que no les hubiere sido asignados, incluidos en los anexos de la Decisión 91 de agosto de 1975 y en las posteriores modificaciones incluidas en las Decisiones 130 y 170. No obstante, pueden producirse algunas excepciones, siempre y cuando no estén sujetas a las cláusulas y restricciones establecidas en la Decisión 91 y sus modificaciones.

8. Tributación

Colombia ha firmado convenios sobre doble tributación, especialmente para las actividades de transporte aéreo y marítimo, con Estados Unidos, Argentina, Alemania, Chile, Italia, Venezuela y Francia.

El Estatuto de Inversiones Internacionales, Resolución No. 51 del CONPES, no contiene normas sobre aspectos tributarios, salvo la que señala que los asuntos tributarios referentes a la transferencia de recursos al exterior se rigen por el Estatuto Tributario y demás normas especiales sobre la materia. En este sentido, las disposiciones en materia tributaria son las siguientes:

a) Se fija en 30% la tasa única sobre la renta gravable y las ganancias ocasionales de las sociedades de diferentes tipos, incluyendo las sociedades extranjeras de cualquier naturaleza. Entre 1993 y 1997, ese impuesto llevará una sobrecarga del 25%, lo que significa una tasa efectiva de 37.5%.

b) La tasa aplicable a la renta correspondiente a dividendos percibidos tanto por sociedades como por personas naturales extranjeras sin residencia en Colombia es de 15%, las que irán disminuyendo a partir de 1995 llegando a un 12% a partir de 1996 en adelante. Esta tasa puede reducirse al 0% cuando los dividendos sean capitalizados en la sociedad que los generó.

c) Para las sociedades que obtengan utilidades en Colombia mediante sucursales, la tasa de impuesto será del 30% más un 12% sobre las utilidades remitidas. No obstante, este último impuesto irá disminuyendo hasta llegar a 7% a partir de 1996 en adelante.

d) Se aplica una tasa del 12% (sobre el 30%) en los casos de pagos por concepto de intereses, comisiones, regalías, explotación de propiedad industrial o del "know how", así como la prestación de servicios técnicos. Esta sobretasa irá disminuyendo hasta alcanzar el 10% en 1994, el 8% en 1995 y el 9% en 1996.

e) En Colombia el impuesto general al consumo es de 14%, llegando a tasas de 20% a 45% para artículos de lujo.

f) Colombia ofrece incentivos de tipo tributario para algunas áreas prioritarias, como es el caso de la agroindustria, la minería, la industria petrolera y las exportaciones de manufacturas. Además existen exoneraciones para aquellas empresas que operen en las Zonas Francas Industriales.

10. Royalties o regalías

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en su Artículo No. 14 (inciso g) establece que para los efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o patentes, se debe tener en cuenta que dichos contratos no contengan, entre otras cosas, cláusulas que obliguen a pagar regalías por patentes o marcas no utilizadas o vencidas.

Asimismo, el Artículo No. 15 señala que las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida que no constituyen aportes de capital, darán derecho al pago de regalías. Además, las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, previo pago de los impuestos correspondientes. Finalmente, cuando esas contribuciones tecnológicas sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en los casos previamente calificados por el organismo nacional competente de Colombia.

C. TRATAMIENTO DE LA INVERSIÓN NACIONAL EN EL EXTERIOR

1. Definición de la inversión nacional en el exterior

Según lo señala la Resolución No. 51 del CONPES, se entiende por inversión de capital colombiano en el exterior la vinculación a empresas en el extranjero de activos generados por actividades productivas en Colombia, que no tengan derecho de giro; la inversión indirecta y la reinversión o capitalización en el exterior de las sumas con obligación de reintegro provenientes de utilidades, intereses, comisiones, amortización de préstamos, regalías y otros pagos de servicios técnicos y reembolsos de capital, cuando se haya autorizado dicha reinversión o capitalización.

Las inversiones de capital colombiano en el exterior en empresas constituidas o establecidas o que se proyecten constituir en el exterior, pueden adoptar las siguientes modalidades:

- a) Exportación de maquinaria, equipos u otros bienes físicos o tangibles, aportados al capital de una empresa, cuyo valor en moneda extranjera no se reintegra al país.
- b) Exportación de divisas libremente convertibles como aporte directo al capital de una empresa.
- c) Aportes mediante exportación de servicios, asistencia técnica, contribuciones tecnológicas o activos intangibles aportados al capital de una empresa, cuyo valor en moneda extranjera no se reintegra al país.
- d) Reinversión o capitalización en el exterior de las sumas con obligación de reintegro, provenientes de utilidades, intereses, regalías y otros pagos de servicios técnicos y reembolsos de capital.
- e) Aportes de divisas provenientes de créditos externos.

2. Autorización y registro de la inversión nacional en el exterior

Toda inversión de capital colombiano en el exterior debe ser autorizada previamente por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) excepto en los siguientes casos:

- a) El DNP podrá emitir una autorización provisional para las inversiones que impliquen procesos de negociación, concesión o adjudicación. Dentro de los 15 días siguientes, el inversionista deberá solicitar la autorización definitiva.
- b) Queda autorizada toda inversión de capital colombiano en el exterior que realiza una persona natural o jurídica cuando no supere un monto acumulado de US\$ 500000.

c) Queda autorizada toda inversión de capital proveniente o destinada a cualquier país miembro del Pacto Andino en una Empresa Multinacional Andina.

La inversiones en el exterior y su movimiento deben registrarse en el Banco de la República.

3. Regímenes especiales

De acuerdo con la Resolución No. 46 CONPES de 1989, sólo están facultados para realizar inversiones de capital colombiano en bancos, corporaciones u otras entidades de crédito exterior, los establecimientos bancarios y las corporaciones financieras. Igualmente, las compañías de seguros y reaseguros están facultadas para participar en el capital o en negocios de compañías similares en el exterior.

Toda inversión de este tipo deberá ser autorizada por el DNP, previa aprobación de la Superintendencia Bancaria. Cuando se trate del establecimiento de sucursales se requerirá, además, la autorización del CONPES. El registro se llevará a cabo en el Banco de la República.

Finalmente, el inversionista que dirija sus capitales hacia las instituciones financieras del exterior debe cumplir las siguientes obligaciones:

- a) No realizar transacciones con las acciones o participaciones que adquiera con la inversión.
- b) Reintegrar al país las utilidades que produzcan las inversiones, salvo que su capitalización o reinversión sea autorizada por el DNP.
- c) Destinar recursos de la empresa receptora a la financiación del comercio exterior colombiano.
- d) Impedir que la empresa receptora constituya otras sociedades de cualquier naturaleza o participe en ellas, sin la autorización de la Superintendencia Bancaria.

VI. ECUADOR

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Ecuador, la institución responsable de la autorización de la inversión extranjera directa es el <u>Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca</u> (MICIP); del registro de las inversiones extranjeras directas, subregionales y neutras, el <u>Banco Central de Ecuador</u> , mientras que el registro de los contratos de licencias, marcas de fábrica, patentes y transferencia de tecnología está a cargo del MICIP. Los contratos de gastos administrativos y generales serán autorizados por el MICIP y registrados por el Banco Central.
Definición nacional de inversión extranjera directa	La inversión extranjera directa en Ecuador, al igual que en los demás países miembros del Pacto Andino, se define, a través de la Decisión 291 (Régimen Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), como los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios. Igualmente, se consideran como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad a la Decisión 291. A este respecto, el Decreto Ejecutivo No. 415, la norma nacional en materia de inversión extranjera, considera como reinversiones a las capitalizaciones de cuentas patrimoniales efectuadas de acuerdo con la Ley. Además es importante destacar, que el Decreto Ejecutivo No. 415, considera como inversión nacional a la realizada en una empresa constituida o por constituirse en el Ecuador por las personas jurídicas ecuatorianas calificadas como empresas extranjeras en los términos de la Decisión 291.
Participación mínima del capital extranjero	En Ecuador, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera. Sin embargo, de acuerdo a los criterios establecidos en la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, dependiendo de la participación extranjera en el capital con derecho a voto, la empresa receptora es calificada como: a) empresa nacional (menos del 20%); b) empresa mixta (entre 20 y 50%), así mismo, se consideran empresas mixtas aquellas en que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado en un porcentaje no inferior al 30% del capital social y siempre que, a juicio del MICIP, el Estado tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa; y c) empresa extranjera (más del 50%).
Flujo de inversión extranjera directa	Para los fines de esta publicación, la información sobre los flujos de inversión extranjera directa en el país, corresponde a las autorizaciones entregadas por el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP), en conformidad a la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, y al reglamento nacional que implementa esta normativa subregional en el Ecuador, el Decreto Ejecutivo No. 415. Estas autorizaciones son valores destinados a la constitución de compañías, establecimiento de sucursales de compañías extranjeras, nuevos aportes de capital o capitalización de compensación de créditos en los aumentos de capital de empresas ya constituidas. Para una mayor comprensión de los datos históricos, de acuerdo a disposiciones legales actualmente derogadas, las reinversiones de utilidades, las reservas y capitalización de superávit por revaloración de activos de las empresas calificadas como nacionales o mixtas, así como las empresas extranjeras que hubiesen suscrito el convenio de transformación en los términos del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros, no requerían autorización previa. Por lo tanto, el monto total de la inversión extranjera directa autorizada por el MICIP, no correspondía al monto real de dicha inversión en el país.
Reinversión de utilidades	En Ecuador, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 415 del 8 de enero de 1993, se consideran reinversiones a las capitalizaciones de cuentas patrimoniales efectuadas de acuerdo con la Ley.
Deuda intrafirma	El Banco Central del Ecuador la define como las sumas adeudadas a la casa matriz por parte de un inversionista extranjero con actividades permanentes en el país.
Criterios para el registro	El Banco Central de Ecuador es el organismo nacional competente para el registro de las inversiones extranjeras directas en el país, sin el requisito previo de autorización. Además se registran aquellos valores correspondientes a la reinversión de utilidades como inversión extranjera directa. En consecuencia los montos de inversión extranjera directa registrados por el Banco Central no coinciden con los montos autorizados por el MICIP. La Gerencia de Inversiones Extranjeras del Banco Central de Ecuador tiene a su cargo el registro de la inversión extranjera directa, sin embargo, la información estadística es elaborada por la Gerencia de Estudios Monetarios en unos casos y por la Subgerencia de Balanza de Pagos y Política Cambiaria en otros, ellas recurren además a fuentes tales como el Ministerio de Finanzas, la Superintendencia de Compañías e inclusive al contacto directo con las empresas. Con el transcurso de los años el Banco Central ha perfeccionado su sistema de recopilación de datos. En 1975 se envió un primer cuestionario a todas las empresas y luego un segundo a las empresas de capital extranjero. Los datos que faltaban se completaron con entrevistas, con datos enviados al Ministerio de Finanzas con fines impositivos, datos disponibles en la Superintendencia de Compañías e información del Registro Oficial del MICIP. El Banco Central del Ecuador registra la inversión extranjera directa y las correspondientes reinversiones, en moneda libremente convertible, a la cotización vigente en el mercado libre de cambios a la fecha del registro. Las estadísticas sobre origen de la inversión reflejan sólo los antecedentes sobre el domicilio del inversionista extranjero.

**Criterios para el registro
(continuación)**

En Ecuador además de las fuentes de información antes mencionadas también es importante destacar:

- a) La Superintendencia de Bancos que publica anualmente un documento referente a la inversión extranjera en el Ecuador, cuya fuente es el Registro Oficial, el mismo que publica las autorizaciones emitidas por el MICIP. Sin embargo, el desfase que se produce entre la autorización y la publicación en el Registro Oficial, hace que los valores de la inversión autorizada por el MICIP no sean iguales a los de la publicación de la Superintendencia.
- b) La Superintendencia de Compañías, elabora estadísticas de inversión extranjera directa a partir de las Resoluciones que emite el MICIP para la constitución de compañías, operación de sucursales de compañías extranjeras y los aumentos de capital de estas compañías. La información procesada se refiere al valor agregado de constituciones, aumentos de capital, forma de pago y actividad económica, estableciendo una distinción entre compañías constituidas en el país y las sucursales de empresas extranjeras. Las estadísticas de inversión extranjera directa que podría obtenerse de la Superintendencia de Compañías no toma en cuenta las reinversiones que realizan las empresas por parte de los inversionistas extranjeros, para las cuales no se requiere autorización del MICIP. En cuanto al procesamiento de la información sobre inversión extranjera se deja de lado lo referente a inversión de extranjeros residentes, subregional y neutra; y no existe una información permanente respecto a la inversión extranjera directa por país de origen.

Stock de inversión extranjera directa

La información que publica el Banco Central de Ecuador, es la inversión extranjera acumulada y, para los fines de esta publicación es lo que hemos considerado como el stock de capital extranjero en el país.

La definición de inversión extranjera directa utilizada por el Banco Central incluye los siguientes elementos: 1) capital social del exterior; 2) participación extranjera en las reservas; 3) utilidades anuales no distribuidas a los accionistas extranjeros; 4) créditos externos a largo plazo; 5) sumas adeudadas a la casa matriz; $(1 + 2 + 3 + 4 + 5 = \text{total pasivos en el exterior})$; 6) activos en el exterior; 7) sumas adeudadas a la empresa por la casa matriz; $(6 + 7 = \text{total de activos en el exterior})$. El total de inversiones extranjeras netas acumuladas al fin de cada año es la diferencia entre el pasivo en el exterior y el activo en el exterior.

Esta información incluye inversión directa y de cartera, representando éstas últimas, no más del 2% del monto total de la inversión extranjera acumulada. En las inversiones directas las decisiones sobre la gestación de la empresa receptora en Ecuador las hace la casa matriz extranjera, en las de cartera, el inversionista extranjero no desempeña un papel importante en la dirección de la empresa. En general, en los casos siguientes se trata de inversiones directas: a) subsidiarias de empresas extranjeras; b) empresas en las cuales la mayoría de las acciones pertenecen a personas no residentes en el Ecuador; y c) empresas en las cuales la participación de capitales pertenecientes a residentes es del 25% o menos.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento al Capital Extranjero y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 13 de mayo de 1991.
Fuente: Registro Oficial No. 682, del 13 de mayo de 1991.
- Decreto Ejecutivo No. 415* del 8 de enero de 1993. Establece normas reglamentarias sobre inversión extranjera y sobre contratos de transferencia de tecnología, marcas, patentes, licencias y regalías.
Fecha de entrada en vigor: 13 de enero de 1993.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca (MICIP), tomado del Registro Oficial No. 106 del 13 de enero de 1993.
- Leyes sectoriales** *Ley de Fomento Industrial.* Reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 427 de enero de 1985. Establece una serie de incentivos tributarios a empresas industriales.
Fecha de entrada en vigor: enero de 1985.
Fuente: Registro Oficial No. 107, del 7 de enero de 1985.
- Decreto Supremo No. 1247: Ley de Fomento a la Pequeña Industria.* Establece una serie de incentivos tributarios a las empresas denominadas "pequeñas".
Fecha de entrada en vigor: noviembre de 1973.
Fuente: Registro Oficial No. 341 del 13 de noviembre de 1973.
- Decreto Supremo No. 178: Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero,* del 12 de febrero de 1974. Establece una serie de beneficios tributarios a empresas que ejercen la actividad pesquera.
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1974.
Fuente: Registro Oficial No. 497 del 19 de febrero de 1974.
- Ley de Minería*
Fecha de entrada en vigor: Sin información.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
- Ley de Fomento Turístico*
Fecha de entrada en vigor: 7 de noviembre 1989.
Fuente: Registro Oficial No. 230, del 7 de noviembre de 1989.
- Decreto No. 2967: Ley de Hidrocarburos* del 6 de noviembre de 1978. Esta Ley fue reformada por la Ley No. 101 del 6 de agosto de 1982, publicada en el Registro Oficial No. 306 del 13 de agosto de 1982. Sin embargo, la base de esta legislación está contenida en la Resolución No. 628 de la Junta Monetaria del 2 de agosto de 1972, publicada en el Registro Oficial el 24 de octubre de 1972, la cual reglamenta la inversión extranjera en el sector de hidrocarburos.
Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1978.
Fuente: Registro Oficial No. 711 del 15 de noviembre de 1978.
- Decreto No. 3791* del 7 de agosto de 1979. Aprueba la exclusión de algunos productos reservados por la Decisión 28 para ser producidos por Bolivia y Ecuador, a través de la Decisión 137 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 7 de agosto de 1979.
Fuente: Registro Oficial del 23 de agosto de 1979.
- Decreto No. 2204* del 31 de enero de 1978. Pone en vigencia el Programa Sectorial de Desarrollo del Sector Petroquímico, a través de la Decisión 91 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Esta Decisión fue modificada por las Decisiones 130 y 170.
Fecha de entrada en vigor: 31 de enero de 1978.
Fuente: Registro Oficial del 13 de febrero de 1978.
- Decisión 300* del 16 de mayo de 1991. Establece el Programa de Integración Industrial Metalmecánico. Sustituye a la Decisión 146 de julio de 1979 que establecía el Programa de la Industria Metalmecánica.
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año VIII, No. 82, Lima, 12 de junio de 1991.
- Leyes de transferencia de tecnología** *Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento al Capital Extranjero y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 13 de mayo de 1991.
Fuente: Registro Oficial No. 682, del 13 de mayo de 1991.

- Leyes de transferencia de tecnología (continuación)** *Decreto Ejecutivo No. 415* del 8 de enero de 1993. Establece normas reglamentarias sobre inversión extranjera y sobre contratos de transferencia de tecnología, marcas, patentes, licencias y regalías.
Fecha de entrada en vigor: 13 de enero de 1993.
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca (MICIP), tomado del Registro Oficial No. 106 del 13 de enero de 1993.
- Leyes sobre conversión de deuda** *Resolución No. 408*, del 9 de febrero de 1987, de la Junta Monetaria. Dispone sobre la conversión de la deuda externa a capital mediante participación y aporte nacional y extranjero. Por decisión de la Junta Monetaria, este programa de conversión esta actualmente suspendido.
Fecha de entrada en vigor: 9 de febrero de 1987.
Fuente: Registro Oficial, 23 de febrero de 1987.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto No. 1267* del 31 de octubre de 1985. Establece el Régimen de Zona Franca a la Provincia de Esmeraldas. Posteriormente, se promulgó el Decreto No. 3540 publicado en el Registro Oficial No. 835 del 18 de diciembre de 1987 donde se crea la Compañía de Economía Mixta ZOFREE.
Fecha de entrada en vigor: 31 de octubre de 1985.
Fuente: Registro Oficial No. 310 del 8 de noviembre de 1985.
- Ley de Parques Industriales.* Esta Ley otorga beneficios de tipo tributario a la empresa o grupo de empresas que se acojan a ella.
Fecha de entrada en vigor:
Fuente: Centro de Desarrollo del Ecuador, Ecuador: Información para el Inversionista, Quito, diciembre de 1990.
- Ley de Régimen de Maquila.* Bajo este Régimen se permite a una persona del exterior realizar una operación de maquila, es decir, un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, perfeccionamiento, transformación o reparación de bienes de procedencia extranjera, importados bajo el Régimen de Admisión Temporal Especial de Maquila, para su reexportación posterior, con la incorporación de componentes nacionales en ciertos casos.
Fecha de entrada en vigor: 3 de agosto 1990.
Fuente: Registro Oficial No. 493, del 3 de agosto de 1990.
- Acuerdos internacionales** *Acuerdo Bilateral sobre la Garantía de las Inversiones*, entre Ecuador y Estados Unidos, suscrito en Quito el 28 de noviembre de 1984.
Fecha de entrada en vigor: 10 de diciembre de 1984.
Fuente: Registro Oficial No. 82 del 10 de diciembre de 1984.
- Tratado Multilateral relativo a la Inversión Extranjera Directa y las Empresas Transnacionales* suscrito en Washington el 18 de marzo de 1968.
Fecha de entrada en vigor: 3 de marzo de 1986.
Fuente: Registro Oficial No. 386 del 3 de marzo de 1986.
- Acuerdo Multilateral relativo a la Inversión Extranjera Directa y las Empresas Transnacionales* suscrito en Washington, entre los Países en Desarrollo, el 11 de octubre de 1985.
Fecha de entrada en vigor: 3 de marzo de 1986.
Fuente: Registro Oficial No. 386 del 3 de marzo de 1986.
- Tratado Bilateral para la Protección de la Inversión Extranjera Directa*, suscrito entre Estados Unidos y Ecuador, en Quito, el 4 de octubre de 1963.
Fecha de entrada en vigor: 14 de noviembre de 1963.
Fuente: Registro Oficial No. 55 del 14 de noviembre de 1963.
- Tratado Bilateral para la Protección de la Inversión Extranjera Directa*, suscrito entre Suiza y Ecuador, en Berna, el 2 de mayo de 1968.
Fecha de entrada en vigor: 20 de agosto de 1969.
Fuente: Registro Oficial No. 247 del 20 de agosto de 1969.
- Tratado Bilateral en Materia Tributaria*, suscrito en Quito, entre Francia y Ecuador, el 6 de marzo de 1969.
Fecha de entrada en vigor: 1969.
Fuente: Registro Oficial del Ecuador.
- Tratado Bilateral en Materia Tributaria*, suscrito en Manila, entre Filipinas y Ecuador, el 24 de marzo de 1948.
Fecha de entrada en vigor: 1948.
Fuente: Registro Oficial del Ecuador.
- Tratado Bilateral en Materia Tributaria*, suscrito en Quito, entre Italia y Ecuador, el 24 de mayo de 1984.
Fecha de entrada en vigor: 1987.
Fuente: Registro Oficial No. 849 de 1987.
- Tratado Bilateral sobre Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual*, suscrito con Alemania en Quito, el 1 de agosto de 1953.
Fecha de entrada en vigor: 21 de octubre de 1955.
Fuente: Registro Oficial No. 952 del 21 de octubre de 1955.

**Acuerdos
internacionales
(continuación)**

Tratado Bilateral sobre Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual, suscrito con Brasil en Quito, el 15 de enero de 1954.
Fecha de entrada en vigor: 1954.

Fuente: Registro Oficial del Ecuador.

Tratado Bilateral sobre Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual, suscrito con Gran Bretaña en Quito, el 16 de agosto de 1892.

Fecha de entrada en vigor: 1892.

Fuente: Tratado Noboa, Tomo 2, pag. 139.

Tratado Bilateral sobre Protección de la Propiedad Industrial e Intelectual, suscrito con Francia en Quito, el 17 de marzo de 1900.

Fecha de entrada en vigor: 1900.

Fuente: Tratado Noboa, Tomo 2, pag. 139.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Alemania en Quito, el 28 de marzo de 1963.

Fecha de entrada en vigor: 21 de julio de 1973.

Fuente: Registro Oficial No. 332 del 21 de julio de 1973.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Alemania en Quito, el 3 de septiembre de 1975.

Fecha de entrada en vigor: 2 de diciembre de 1975.

Fuente: Registro Oficial No. 943 del 2 de diciembre de 1975.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Alemania en Quito, el 17 de noviembre de 1988.

Fecha de entrada en vigor: 1988.

Fuente: Registro Oficial del Ecuador.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Austria en Quito, el 28 de marzo de 1969.

Fecha de entrada en vigor: 23 de marzo de 1971.

Fuente: Registro Oficial No. 187 del 23 de marzo de 1971.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Argentina en Buenos Aires, el 14 de enero de 1971.

Fecha de entrada en vigor: 10 de marzo de 1971.

Fuente: Registro Oficial No. 178 del 10 de marzo de 1971.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Argentina en Quito, el 16 de marzo de 1972.

Fecha de entrada en vigor: 13 de abril de 1978.

Fuente: Registro Oficial No. 565 del 13 de abril de 1978.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Argentina en Buenos Aires, el 5 de octubre de 1978.

Fecha de entrada en vigor: 13 de noviembre de 1978.

Fuente: Registro Oficial No. 709 del 13 de noviembre de 1978.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Bélgica en Quito, el 10 de marzo de 1980.

Fecha de entrada en vigor: 29 de abril de 1982.

Fuente: Registro Oficial No. 232 del 29 de abril de 1982.

Acuerdo Bilateral en Comercio, Inversión y Cooperación Técnica, suscrito con Bélgica en Quito, el 15 de septiembre de 1987.

Fecha de entrada en vigor: 1987.

Fuente: Registro Oficial del Ecuador.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Ecuador la norma básica, actualmente vigente, que regula la actuación del capital extranjero es la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena sobre el Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Dicha Decisión subregional está reglamentada internamente por el Decreto Ejecutivo No. 415 del 8 de enero de 1993.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a la ratificación interna de la Decisión 24 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena por parte del Ecuador, a través del Decreto Supremo No. 974 del 30 de junio de 1971, las inversiones extranjeras se regían solamente por algunas disposiciones de tipo cambiarias.

Las normas del Decreto No. 239 de 1970 y la Resolución No. 555 de la Junta Monetaria del mismo año, eran las principales regulaciones en la materia. De acuerdo a las mismas, a los efectos de la colocación de capitales en el país por personas naturales o jurídicas no domiciliadas en el Ecuador, se requería presentar una solicitud a la Junta Monetaria detallando la inversión proyectada y documentando la existencia de la empresa receptora. El Departamento de Cambios del Banco Central realizaba la evaluación, y la Gerencia General emitía la autorización. El registro de la inversión también se hacía en el Banco Central. Además de estas normas, eran de aplicación las derivadas de las Leyes de Compañías y de Bancos, con relación a aspectos específicos de la vigencia y control de las sociedades y bancos extranjeros o con participación de origen foráneo. De acuerdo a esta normativa, se aceptaban inversiones en divisas que debían ser vendidas al Banco Central, y en maquinaria y equipos cuya internación como importación no reembolsable debía probarse mediante documentación aduanera. Las inversiones podían destinarse tanto a empresas nuevas como a la ampliación de otras existentes. El derecho a repatriar el capital y remesar utilidades no tenía limitaciones de monto. Sin embargo, existía una limitación temporal para la reexportación del capital, ya que no podía efectuarse antes de los 5 años contados desde la fecha de registro de la inversión.

Después de la incorporación a la legislación nacional de la Decisión 24 a través del Decreto No. 974/71, se dictó el Decreto No. 1029 del 13 de julio de 1971, derogado en 1976 por el Decreto No. 900-B del 11 de noviembre de ese año, que designó como organismo nacional competente para conceder autorizaciones de inversión extranjera al Consejo Superior de Comercio Exterior e Integración y encargó al Banco Central del Ecuador la aplicación de las disposiciones sobre créditos externos contenidas en la Decisión 24.

En enero de 1973, la Resolución No. 651, de la Junta Monetaria estableció que, una vez acordadas las autorizaciones de inversión extranjera por el Instituto de Comercio Exterior e Integración, las inversiones debían registrarse en el Banco Central. El Decreto No. 887 del 5 de

septiembre de 1974 definió más claramente la atribución de competencias, disponiendo que: i) la concesión de la autorización corresponde al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración (MICEI) en representación del Consejo Superior de Comercio Exterior, organismo ante el cual se tramitan las solicitudes; ii) el Banco Central registra las inversiones y autoriza las transferencias al exterior; iii) los convenios de transformación de empresas extranjeras en mixtas o nacionales los firma el Subsecretario de Comercio e Integración; iv) las Superintendencias de Compañías o de Bancos, según el caso, controlan el cumplimiento de los convenios de transformación. El Decreto No. 887/74, fue derogado por el Decreto No. 789 del 11 de septiembre de 1975, transfiriendo las atribuciones del Consejo Superior de Comercio Exterior al Ministerio de Industrias, Comercio e Integración. Simultáneamente, mediante el Decreto No. 788 del 11 de septiembre de 1975, se creó el Consejo de Inversiones Extranjeras, integrado por representantes del MICEI, la Junta Monetaria y la Corporación Financiera Nacional, que tenía por función resolver las apelaciones de las resoluciones emitidas en esta materia.

En la legislación ecuatoriana de los años siguientes se fueron incorporando fielmente las resoluciones adoptadas a nivel subregional, sin tomar decisiones importantes en forma autónoma. Sin embargo, destaca el Decreto No. 2342 del 9 de enero de 1984, que dispone sobre la remesa y reinversión de utilidades, en esta norma complementaria se va más lejos que lo establecido por la Decisión 24, la cual otorgaba el derecho a remitir utilidades netas, en principio, en un monto que no excediera el 20% anual del capital registrado. En cambio, el Decreto No. 2342 autorizaba remitir al exterior hasta el 30% de las utilidades netas comprobadas que provinieran de una inversión extranjera directa, y hasta el 40% cuando se trataba de empresas exportadoras, de por lo menos, el 40% anual de su producción.

En 1986, hay una reestructuración ministerial en el Ecuador, por lo que se designa como el organismo nacional competente al Ministerio de Industria, Comercio, Integración y Pesca (MICIP).

Luego de las importantes modificaciones introducidas a la Decisión 24 durante sus dieciséis años de su aplicación, finalmente esta norma es reemplazada por la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, suscrita en Quito el 13 de mayo de 1987, puesta en vigencia en el Ecuador mediante el Decreto No. 3049 del 6 de julio de 1987 (publicado en el Registro Oficial No. 723 del 7 de julio de 1987), y reglamentado por el Decreto No. 3095, del 28 de julio de 1987. Esta norma establecía en lo sustancial:

a) En los referente a la autorización, se establecía que toda inversión extranjera directa en Ecuador requiere de la autorización previa del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca (MICIP). No requería de autorización, cuando la inversión en la suscripción del capital social o en la compra de acciones o participaciones, no representaba más del 10% del capital social de las compañías constituidas en el país receptoras de dichas inversiones. Las inversiones extranjeras, las reinversiones y los aumentos de capital, autorizados por el MICIP eran registrados por el Banco Central del Ecuador. Esta última institución era la que autorizaba los giros al exterior y la contratación de créditos externos que realizaba una empresa. Las Superintendencias de Compañías y de Bancos, en las áreas de su respectiva competencia, controlan el cumplimiento de los convenios que hayan suscrito las empresas extranjeras con el MICIP.

b) El Decreto No. 3095 establecía que las empresas extranjeras no tenían acceso a actividades de radioemisoras comerciales, estaciones de televisión comerciales ni en actividades referentes a la publicación de periódicos y revistas y otros medios de comunicación social, así como en servicios públicos (agua potable, alcantarillado, energía eléctrica y alumbrado, aseo y servicios sanitarios, teléfono, correos y telecomunicaciones), transporte interno y publicidad. En el caso de las instituciones financieras extranjeras, estas podían adquirir solamente hasta el 49% del capital social de entidades financieras locales. Las inversiones para la exploración y explotación de hidrocarburos, estaban restringidas a las actividades de prestación de servicios, reguladas por la Ley de Hidrocarburos. Las inversiones en el sector pesquero y minero se encontraban sujetas a lo dispuesto en la Ley de Pesca y Minería respectivamente.

c) Los inversionistas extranjeros tenían derecho a transferir al exterior, en moneda libremente convertible, las utilidades netas comprobadas que provinieran de su inversión extranjera directa, hasta un 40% anual de la misma, cuando se trataba de empresas exportadoras, por lo menos, del 40% de su producción anual; y en los demás casos hasta el 30% anual de dicha inversión. Los inversionistas extranjeros cuya producción estaba destinada en un 80% o más a exportaciones a mercados de países fuera del Pacto Andino y los del sector turismo, no están sujetos a la limitación de transferencias al exterior de sus utilidades y derechos adicionales.

d) De acuerdo a las regulaciones establecidas por la Decisión 220, para lograr un acceso preferencial al mercado formado por los países miembros del Acuerdo de Cartagena, las empresas extranjeras debían poner en venta a inversionistas nacionales o subregionales, en forma gradual y progresiva, un porcentaje de 51% de sus acciones, participaciones o derechos, en un plazo que no debe exceder de 37 años.

e) El Decreto No. 3095, introducía las normas básicas para efectuar conversión de deuda externa en capital. Este establecía que el MICIP debía autorizar la inversión extranjera en empresas nacionales, mixtas o extranjeras que se acogieran a este mecanismo, de acuerdo a lo establecido por la Junta Monetaria (Resolución No. 408). Esta inversión podía ser autorizada en los sectores de seguros, reaseguros, banca comercial y en compañías financieras, cuando se trataba de aumentos de capital; y en los sectores agrícola, pecuario, agroindustrial, manufacturero, minero, forestal, pesquero y de cultivo y cría de especies bioacuáticas y turístico, de acuerdo a lo establecido por este Decreto. Para la reexportación del capital invertido en la empresa receptora, debía acogerse a los plazos, establecidos caso a caso, por el Banco Central; y en el caso de las utilidades, estas podían ser transferidas una vez transcurridos 4 años contados a partir de la fecha de registro de la inversión en el Banco Central.

Durante el período de vigencia de la Decisión 220, la reglamentación interna de los países miembros varió de manera sustancial, siendo progresivamente más receptivas hacia el capital extranjero, introduciendo simplificaciones administrativas y convirtiéndose en normas de carácter más promocional. De esta manera, como resultado del LV Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se emite la Decisión 291, en marzo de 1991. Esta nueva norma subregional introduce importantes modificaciones, tendientes a remover los obstáculos a la inversión extranjera y promover el flujo de capital y tecnologías foráneas hacia las economías andinas. Se suprime, de esta manera, toda referencia a las autorizaciones previas, dejando únicamente el requisito de registro ante el organismo nacional competente. También consagra a nivel normativo el principio

de la "igualdad de trato", el reconocimiento a la remesa de utilidades y reexportación de capitales, sin establecer toques máximos y, el acceso con goce de todas las ventajas arancelarias vigentes en la subregión. En el Ecuador esta norma es incorporada a la legislación interna mediante su publicación en el Registro Oficial No. 682 del 13 de mayo de 1991, posteriormente reglamentado para su aplicación interna a través del Decreto No. 2456 del 28 de mayo de 1991, el cual fue nuevamente modificado por el Decreto No. 2501 del 13 de junio de 1991.

El 8 de enero de 1993, se dictó el Decreto Ejecutivo No. 415 que sustituyó en su totalidad al Decreto No. 2501. Con esta nueva norma, Ecuador eliminó las restricciones que limitaban la inversión extranjera directa, dando un tratamiento igualitario a los inversionistas nacionales y extranjeros en todos los sectores económicos. Asimismo, se permite una libre repatriación de utilidades sin previa autorización de los organismos nacionales competentes.

3. Definición de inversión extranjera directa

En Ecuador, al igual que en los demás países andinos (Decisión 291), se considera inversión extranjera directa a los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se consideran como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad a la Decisión 291. A este respecto, el Decreto Ejecutivo No. 415, la norma nacional en materia de inversión extranjera, considera como reinversiones a las capitalizaciones de cuentas patrimoniales efectuadas de acuerdo con la Ley.

Además es importante destacar, que el Decreto Ejecutivo No. 415, considera como inversión nacional a la realizada en una empresa constituida o por constituirse en el Ecuador por las personas jurídicas ecuatorianas calificadas como empresas extranjeras en los términos de la Decisión 291.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

En base a lo dispuesto en el Artículo No. 14 de la Constitución Política de la República y en el Artículo No. 2 de la Decisión 291 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, el Decreto Ejecutivo No. 415 establece que las inversiones extranjeras directas, subregionales o neutras, podrán efectuarse en todos los sectores económicos, sin autorización previa del MICIP, en las mismas condiciones en que pueden hacerse las inversiones de personas naturales y jurídicas ecuatorianas.

Las empresas extranjeras en el Ecuador tienen acceso a todos los mecanismos de promoción y fomento de las exportaciones, en las mismas condiciones previstas para las empresas nacionales o mixtas.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

En el Ecuador, las inversiones extranjeras pueden efectuarse todos los sectores económicos, sin autorización previa del MICIP, en las mismas condiciones en que pueden hacerse las inversiones de personas naturales y jurídicas ecuatorianas. El MICIP autorizará en el acto mismo de presentación, toda solicitud para transferir acciones o participaciones, sin necesidad de requisito alguno.

El registro de la inversión extranjera directa se efectúa en el Banco Central del Ecuador. También son consideradas como inversión extranjera directa las reinversiones (capitalizaciones de cuentas patrimoniales) y por lo tanto registradas en el Banco Central a la cotización vigente en el mercado libre de cambios a la fecha de registro.

El registro de la inversión extranjera directa podrá ser solicitado por el inversionista extranjero o por el representante legal de la empresa en que se haya efectuado la inversión.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

En Ecuador los propietarios de una inversión extranjera directa tienen derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas que provengan de su inversión registrada.

En Ecuador, tal como en los demás países del Pacto Andino, el inversionista extranjero tiene derecho a reexportar las sumas que obtengan cuando venda, dentro del país, sus acciones, participaciones o derechos; o cuando se produzca la reducción del capital o la liquidación de la empresa, previo pago de los impuestos correspondiente.

7. Sectores prohibidos al capital extranjero

En Ecuador, de acuerdo con el Decreto Ejecutivo No. 415, en su Artículo No. 5, las inversiones extranjeras directas, subregionales o neutras, pueden efectuarse en todos los sectores económicos, sin autorización previa del MICIP, en las mismas condiciones en que pueden hacerse las inversiones de personas naturales y jurídicas ecuatorianas. Sin embargo existen algunas limitaciones:

a) La Constitución Política de la República del Ecuador, en el Artículo No. 18, establece que las personas naturales o jurídicas extranjeras ni directa ni indirectamente pueden adquirir o conservar el dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles, ni arrendarlos, obtener el uso de aguas, establecer industrias, explotaciones agrícolas, domicilio civil o residencia, ni celebrar contratos sobre recursos naturales no renovables y en general sobre productos del subsuelo y todos los minerales o substancias cuya naturaleza sea distinta de los del suelo, en una faja de 50 kilómetros medida hacia

el interior de la línea de frontera o de las playas de mar, ni en el territorio insular, salvo que en cualquiera de estos casos se obtuviera la autorización correspondiente que prevé la Ley.

b) La Ley de Minería, establece que las minas, cualquiera que sea su ubicación, son de propiedad del Estado, el cual puede realizar las actividades mineras directamente o mediante la suscripción de contratos.

c) La Ley de Hidrocarburos, establece que los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan pertenecen al patrimonio del Estado, el cual podrá explotar los yacimientos en forma directa a través de la Empresa Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR) o celebrando contratos de asociación, de operaciones hidrocarburíferas, de prestación de servicios o construyendo compañías mixtas, con empresas nacionales o extranjeras.

8. Tributación

Ecuador tiene convenios con dos países para evitar la doble tributación: Alemania y Brasil.

Además Ecuador ha firmado tratados o acuerdos bilaterales en materia tributaria con tres países: Francia (en Quito el 6 de marzo de 1989), Filipinas (en Manila el 24 de marzo de 1948) e Italia (en Quito el 23 de mayo de 1984).

En Ecuador, la Constitución de 1978 garantiza los principios de no retroactividad de las leyes fiscales y de legalidad, igualdad y proporcionalidad de los tributos. De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, se establece lo siguiente:

a) El pago de un Impuesto a la Renta Global de 25% que se aplica a las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales.

La base imponible está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos.

b) Las subsidiarias de empresas extranjeras con actividades en el Ecuador deben pagar un impuesto de 36% sobre sus utilidades remitidas, y un 25% sobre las utilidades reinvertidas en el país.

Las filiales, subsidiarias, sucursales o agencias en el Ecuador, de sociedades extranjeras, tienen derecho a deducir de sus ingresos, sin retención alguna, los pagos efectuados a sus casas matrices por concepto de gastos administrativos y generales establecidos en los contratos autorizados.

c) Los beneficiarios de los ingresos, utilidades, dividendos y regalías que se acrediten al exterior pagarán la tarifa única del 36% sobre el ingreso gravable. En el caso de pago de dividendos que esté asociados a créditos con la casa matriz, la tasa imponible será de 25%.

d) El Impuesto a la Renta Petrolera, establece que las utilidades que obtengan los contratistas de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos están sujetas al pago del Impuesto a la Renta del 44.4%; en caso de reinversión de utilidades en el país esta tarifa se reducirá al 25% sobre los montos reinvertidos.

Los contratistas de prestación de servicios para la exploración y explotación de hidrocarburos por más de treinta mil barriles por día, o su equivalente en gas, pagarán un gravamen básico del 3%, más el 1% por cada diez mil barriles adicionales hasta el gravamen máximo del 30%. PETROECUADOR actuará como agente de retención del gravamen a la actividad petrolera, la participación laboral, el impuesto a la renta y el 1% de la tasa neta por servicios destinados a la investigación tecnológica.

e) En el caso de la minería, existe una exoneración de todo impuesto, incluso al de timbres, construcción, y domicilio de compañías, aumentos de capital, contratos de prospección, exploración, explotación, purificación, beneficio, fundición y exportación de todos los productos minerales.

Las regalías se calculan dividiendo la utilidad bruta por la inversión actualizada, el resultado constituye el porcentaje a cobrar de las utilidades brutas establecidas, el que no puede exceder del 16%. Las regalías por los minerales no metálicos, son del 4% sobre el valor de la producción de la explotación mineral.

f) En el caso de actividades turísticas, existe la posibilidad de acogerse a los siguientes beneficios tributarios: i) exoneración total de los impuestos, derechos y timbres que gravan los actos constitutivos y conexos de las compañías; ii) exoneración de hasta el 100% de los derechos arancelarios y adicionales en la importación, siempre que no exista producción nacional de materiales de construcción, maquinaria, equipos e implementos necesarios para su funcionamiento y operación, y vehículos para transporte colectivo especiales para el turismo; y iii) deducción para la determinación del ingreso gravable con el impuesto a la renta, de la inversión inicial, las nuevas inversiones o reinversiones que se destinen a construcción, instalación, ampliación, o mejoramiento de inmuebles destinados a actividades turísticas.

g) El Impuesto al Valor Agregado (IVA) es del 10%, que grava el valor de la transferencia de domicilio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas las etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados.

h) El Impuesto de Aduanas, Importación y Exportación, establece que salvo excepciones, prescritas en la misma Ley, todas las importaciones causan derecho ad-valorem sobre la base del valor CIF.

9. Royalties o regalías

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en su Artículo No. 14 (inciso g) establece que para los efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o patentes, Ecuador junto con los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena debe tener en cuenta que

dichos contratos no contengan, entre otras cosas, cláusulas que obliguen a pagar regalías por patentes o marcas no utilizadas o vencidas.

Por otra parte, el Artículo No. 15 señala que las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida que no constituyen aportes de capital, darán derecho al pago de regalías. Además, las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, previo pago de los impuestos correspondientes. Finalmente, cuando esas contribuciones tecnológicas sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en los casos previamente calificados por el organismo nacional competente de Ecuador.

El Decreto Ejecutivo No. 415, en su Artículo No. 14, establece que los contratos de transferencia de tecnología y de uso y explotación de marcas y patentes se registran en el MICIP.

10. Incentivos a la inversión

Ecuador opera con los programas del OPIC (Overseas Private Investment Corporation) y está acogido al MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency).

En Ecuador el gobierno ha creado mecanismos de promoción y desarrollo del sector privado, a través de una serie de incentivos que alienta la inversión nacional y extranjera, tales como exoneración de impuestos y aranceles y beneficios por localización zonal de los proyectos. Las principales leyes de fomento son:

a) **Ley de Fomento Industrial:** Pueden acogerse a este régimen las empresas nuevas o existentes que se establezcan en el territorio nacional, que se dediquen a actividades industriales de transformación, cuyos fines convengan al desarrollo económico del país.

Para hacer uso de los beneficios, las empresas industriales son clasificadas en las categorías "Especial", "A" y "B", y gozan de los siguientes beneficios:

- **Beneficios generales:** Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que graban los actos constitutivos de las compañías, incluyendo los derechos de registro e inscripción y los derechos sobre la matrícula de comercio; reforma de los actos constitutivos o estatutos de compañías; exportación de productos industrializados; introducción de materias primas importadas que no se produzcan en el país, del 24.75% al 55% y, exoneración del 55% de la totalidad de los derechos arancelarios a la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos.
- **Beneficios especiales:** Las empresas industriales clasificadas en la categoría "Especial" gozan de una exoneración, durante los cinco primeros años, de todos los impuestos y derechos fiscales, municipales, adicionales y timbres, con excepción del Impuesto a la Renta y de los impuestos arancelarios a la importación de materias primas, que gozan de la exoneración del 44%; y, la

exoneración del 55% de la totalidad de los derechos arancelarios que gravan la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos y, hasta el 44% para la importación de materias primas que no se produzcan en el país.

Las industrias clasificadas en la categoría "A" gozan de la exoneración del 55% de la totalidad de los derechos arancelarios que gravan la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos, y hasta el 35% para la importación de materias primas que no se produzcan en el país.

Las industrias clasificadas en la categoría "B" gozan de la exoneración del 55% de la totalidad de los derechos arancelarios que gravan la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos, durante los tres primeros años.

Las empresas localizadas en las zonas de promoción industrial regional (todas las provincias excepto Galápagos, Guayas y Pichincha), gozan de: i) exoneración de todos los impuestos y derechos fiscales, provinciales municipales adicionales y de timbres, con excepción del Impuesto a la Renta, los de la categoría "Especial" por los diez primeros años, las de "A" por cinco años y los "B" por tres años; ii) exoneración de los impuestos arancelarios a la importación de materias primas que no se produzcan en el país, aumentada en un 10% para las empresas industriales de la Zona 1 y un 20% para las de la Zona 2, sobre los porcentajes que para cada categoría contempla la Ley; iii) exoneración de los impuestos arancelarios a la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos, aumentada en un 20% para las empresas industriales de la Zona 1 y en un 40% para las de la Zona 2, sobre los porcentajes que para cada categoría dispone la Ley; iv) cuando se trate de empresas calificadas en la categoría "B", exoneración de los impuestos fiscales, provinciales, municipales, timbres y adicionales, y hasta en un 75% a la transferencia de dominio de inmuebles necesarios para la propia actividad de la industria.

La Lista de Inversión Dirigida (LID) incluye las actividades industriales que se establecen en zonas determinadas, cuyo desenvolvimiento el Estado desea promover aceleradamente, ya sea porque sus actividades son calificadas como estratégicas para el desarrollo económico del país, porque la magnitud de sus efectos derivados crean nuevos centros de desarrollo, o porque las plantas se instalen con dimensión adecuada y bajo condiciones tecnológicas modernas.

b) Ley de Fomento de la Pequeña Industria y Ley de Fomento Artesanal: Se considera artesanía a la labor, fundamentalmente manual, realizada con o sin auxilio de máquinas, destinada a la producción y pequeña industria a la que con predominio de la operación de la maquinaria sobre la manual, se dedica a actividades de transformación, inclusive de forma, de materia prima o de productos semielaborados, en artículos finales o intermedios, y siempre que su activo fijo, excluyendo terreno y edificios, no sea mayor a 100 millones de sucres, y gozan de los siguientes beneficios:

- **Beneficios generales:** Exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que gravan los actos constitutivos de las compañías, así como de uniones de artesanos, incluyendo los derechos de registro e inscripción y los impuestos sobre matrícula; reforma de los actos constitutivos o de los estatutos respectivos a la emisión, canje, fraccionamiento o conversión de títulos,

certificados o acciones de aportación, capitales en giro; exportación de productos de la pequeña industria y artesanía; el 55% de los que graben la introducción de materias primas importadas que no se produzcan en el país y que sean empleadas en la elaboración de productos que se exporten; el 55% de los que graben a la importación de maquinarias, herramientas, equipos y repuestos que no se produzcan en el país.

- **Beneficios especiales:** Exoneración de derechos e impuestos fiscales, provinciales y municipales a la transferencia de dominio de inmuebles de producción de la pequeña industria y artesanía; aprovechamiento del régimen de depreciación acelerada de maquinarias y equipos; exoneración del 40% de los impuestos arancelarios a la importación de materias primas; exoneración del 65% de los impuestos a la importación de envases, materiales de embalaje y similares cuando las necesidades de la empresa lo justifiquen, siempre que no se produzcan en el país y créditos privilegiados de la banca nacional.

c) **Ley de Pesca y Desarrollo Pesquero:** El Estado fomenta el desarrollo pesquero y clasifica a las empresas en las categorías A, B y C.

Todas las empresas pesqueras clasificadas gozan de los siguientes beneficios generales: exoneración total de los derechos, timbres e impuestos que gravan a los actos constitutivos de las sociedades o empresas, incluyendo los derechos de registro e inscripción; exoneración total de los impuestos a la reforma de actos constitutivos o de estatutos de sociedades o empresas; exoneración total de impuestos y derechos relativos a la emisión, canje, fraccionamiento o inversión de los títulos o acciones; exoneración total de los impuestos a los capitales de giro; exoneración de los impuestos y derechos que graban la exportación de productos pesqueros; exoneración del 55% de los derechos, timbres e impuestos que graban la introducción de materiales y materias primas importadas que no se producen en el país; exoneración del pago de todos los derechos e impuestos fiscales, provinciales, municipales; exoneración del pago de impuestos a las transferencias de dominio de predios y buques.

También gozan de los siguientes beneficios especiales: exoneración durante los cinco primeros años de todos los impuestos y derechos fiscales, municipales, provinciales adicionales y de timbres; a partir del sexto año, exoneración del 55% de la totalidad de los derechos arancelarios que graban la importación de maquinaria nueva, equipos auxiliares nuevos y repuestos nuevos.

d) **Ley de Fomento y Desarrollo Agropecuario:** Esta Ley tiene por objetivos estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la creación de condiciones para incrementar las inversiones en el sector, utilizar eficientemente los recursos productivos y generar ingresos que faciliten la reinversión, incrementar la producción y la productividad, promover la organización de los productores en formas asociadas, obtener el mejor aprovechamiento de la tierra y ampliar las oportunidades de promoción y participación de los grupos humanos.

Tienen derecho a acogerse a los beneficios de esta Ley quienes se dediquen a la producción agropecuaria o a la prestación de servicios de apoyo. Los beneficiarios gozan de la exoneración del 55% de los derechos arancelarios y los recargos a las importaciones de mercaderías de uso agropecuario.

Las exportaciones de productos no tradicionales de origen agropecuario gozarán de exoneración total de impuestos a la exportación. El gobierno establecerá subsidios a las exportaciones de dichos productos cuando las condiciones del mercado internacional así lo requieran, mediante mecanismos tales como Certificados de Abono Tributario o Compensación Directa a los productores.

e) **Ley de Minería:** Las minas, cualquiera sea su ubicación, son propiedad del Estado, el cual puede realizar actividades mineras directamente o mediante la suscripción de contratos con terceros.

Un primer tipo de contrato, es el de asociación, en el cual una persona se compromete a realizar con el Estado la exploración, beneficio de minerales, fundición y refinación. El asociado aporta trabajo, capital y tecnología y el Estado aporta una o más minas y otros bienes.

Otro tipo de contrato es el de prestación de servicios, en el cual una persona se compromete a efectuar por encargo del Estado una labor determinada, aportando capital, trabajo y tecnología.

Existe una exoneración de todo impuesto, incluso al de timbres, a la constitución y domiciliación de compañías, a sus aumentos de capital, a los contratos de prospección, exploración, explotación, purificación, beneficio, fundición y a la exportación de todos los productos minerales.

f) **Ley de Fomento Turístico:** De acuerdo a esta Ley, las empresas que se dediquen a las actividades turísticas están en capacidad de acogerse a una exoneración total de impuestos, derechos y timbres que graban los actos constitutivos y conexos de las empresas, incluyendo los derechos de registro de inscripción y los impuestos sobre Matrícula de Comercio; en la transformación y reforma de actos constitutivos y estatutos de la empresa relativos a la emisión, canje y fraccionamiento y conversión de los títulos o acciones; en las transferencias de dominio de los inmuebles que se destinen a obras declaradas de interés turístico y al Capital de Giro.

Además de una exoneración de hasta el 100% de los derechos arancelarios y adicionales en la importación, siempre que no exista producción nacional de materiales de construcción, maquinaria, equipos e implementos necesarios para su funcionamiento y operación; en la importación de vehículos para el transporte colectivo especiales para turismo, destinados exclusivamente al turismo receptivo e interno.

g) **Ley de Hidrocarburos:** Los yacimientos de hidrocarburos y sustancias que los acompañan pertenecen al patrimonio del Estado. Este último, puede explorar los yacimientos en forma directa a través de la Empresa Petróleos del Ecuador (PETROECUADOR), la que puede hacerlo por sí misma o celebrando contratos de asociación, de operaciones hidrocarburíferas o constituyendo compañías de economía mixta, con empresas nacionales o extranjeras.

En los contratos de asociación, PETROECUADOR contribuye con los derechos sobre áreas, yacimientos hidrocarburíferos u otros derechos de su patrimonio, y la empresa asociada contrae el compromiso de efectuar las inversiones que se acuerden y recibe una participación en los resultados de la producción.

En los contratos de operaciones hidrocarburíferas las personas jurídicas, nacionales o extranjeras, se obligan a realizar con sus propios recursos económicos, técnicos y otros necesarios,

actividades de explotación de hidrocarburos, recibiendo en pago de sus operaciones, un volumen de hidrocarburos que permita recuperar sus inversiones en plazos adecuados y con márgenes razonables de utilidad.

En los contratos de prestación de servicios, los nacionales o extranjeros, se comprometen a efectuar obras o servicios específicos aportando tecnología, capitales, equipos o maquinarias necesarios.

Sólo el Estado o PETROECUADOR pueden, por sí mismos o mediante alguna de las formas contractuales establecidas, construir, operar o administrar oleoductos, gasoductos y otros medios similares de transporte de hidrocarburos.

Están exonerados de todo impuesto la constitución de compañías para la exploración, explotación e industrialización de hidrocarburos y sus aumentos de capital. No se aplica el impuesto al capital de giro a los capitales que se invierten y se empleen en la operación de la industria petrolera. Están liberados de los impuestos aduaneros la importación de equipos, maquinarias, implementos y otros materiales necesarios para la exploración y explotación de hidrocarburos, siempre que dichos artículos no se produzcan en el país. De igual liberalización gozan las industrias de hidrocarburos, petroquímicas y conexas durante el período de construcción y hasta cinco años después de la puesta en marcha. La introducción temporal al país de maquinarias o equipos petroleros se puede realizar hasta por un plazo de cinco años.

VII. MEXICO

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	<p>En México, la institución responsable de la autorización y el registro de la inversión extranjera, con la creación del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, es la <u>Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras</u>, organismo dependiente de la <u>Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI)</u>.</p> <p>Sin embargo, también el <u>Banco de México</u> mantiene un registro de la inversión extranjera directa materializada.</p>
Definición nacional de inversión extranjera directa	<p>La inversión extranjera directa en México se define como el valor de la inversión que realizan extranjeros, mediante aportes de recursos propios, reinversión de utilidades y capitalización de pasivos.</p> <p>Por otro lado, de acuerdo con la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera (marzo de 1973) y su Reglamento (mayo 1989) se considera inversión extranjera la que es realizada por: i) personas morales extranjeras; ii) personas físicas extranjeras; iii) unidades económicas extranjeras; y iv) empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente capital extranjero o en las que los extranjeros tengan por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.</p> <p>La Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera y su Reglamento no establecen explícitamente las modalidades que puede adoptar la inversión extranjera en el país. Sin embargo, del articulado de la Ley se desprende que estamos en presencia de una inversión extranjera cuando uno de los sujetos descritos en el párrafo anterior destina sus bienes, propiedades o derechos a: i) el capital de las empresas mexicanas en el acto de su constitución (Artículo No. 5); ii) la adquisición del capital o de los activos fijos de una empresa (Artículo No. 8); iii) la adquisición de la administración de una empresa o la facultad de determinar su manejo (Artículo No. 8); iv) la instalación de un nuevo establecimiento (Artículo No. 12-III); v) nuevos campos de actividad económica (Artículo No. 12-IV); y vi) nuevas líneas de productos (Artículo No. 12-IV).</p>
Participación mínima del capital extranjero	<p>Las empresas residentes en México con inversión extranjera se califican según el tipo de inversionista extranjero que realiza el aporte de capital en tres clases; los dos primeros tipos corresponden, en general, a filiales de una empresa transnacional:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Subsidiarias: son empresas constituidas de acuerdo a las leyes mexicanas, controladas total o parcialmente por una o más empresas residentes en el extranjero y que además llevan contabilidad independiente y tienen capital propio; b) Sucursales: se refiere a aquellas empresas que no tienen capital propio y están controladas totalmente por una o más empresas que operan en el exterior; c) Acreedoras: son empresas en las que parte o el total de capital social es propiedad de una persona, o grupo de éstas, residentes en el exterior, sin existir dependencia con empresas que operan en el exterior. <p>Por otro lado en México, se considera como empresas extranjeras aquellas en las cuales el porcentaje de participación extranjera en el capital accionario es mayor del cinco por ciento (5%). Se ha adoptado este criterio, considerando que si bien la participación efectiva en la gestión de una empresa es difícilmente mensurable, una aproximación consiste en tomar la propiedad del capital accionario, ya que incluso con pequeños aportes, por ejemplo de empresas transnacionales, estas pueden influir en el accionar de una empresa receptora.</p>
Flujo de inversión extranjera directa	<p>En México, el flujo de inversión extranjera directa comprende los siguientes elementos:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Nuevas inversiones, es decir, los flujos de capital extranjero que se originan por la constitución de nuevas empresas, y los incrementos en el capital social, en las reservas de capital, etc. financiadas por inversionistas extranjeros y que no proviene de la reinversión de utilidades o de otras prácticas contables, tales como la revaluación de activos, de las empresas ya constituidas; b) Reinversión de utilidades; c) Cuentas con la matriz, que se definen como las variaciones netas en las cuentas a corto plazo con la empresa matriz, en general se trata de cuentas corrientes por importación de materias primas, apoyo al capital de trabajo, pagos intermitentes de regalías, etc. Para esta publicación, los flujos fueron calculados de la diferencia de stock para dos años consecutivos.
Reinversión de utilidades	<p>Se entiende como reinversión de utilidades, aquellos flujos financieros que provienen de los resultados de operación del año anterior, y sirven para que la empresa se autofinancie;</p>
Criterios para el registro	<p>En relación al registro efectuado por SECOFI y el Banco de México de la inversión extranjera directa y sus componentes, ésta se efectúa en pesos mexicanos corrientes y, para evitar distorsiones por el tipo de cambio, en dólares estadounidenses, utilizando la tasa promedio mensual que publica el Banco de México. Las estadísticas sobre el origen de la inversión, se determinan en base al criterio de residencia del principal inversionista.</p>

**Stock de inversión
extranjera directa**

En México, dependiendo de la fuente de información el valor del stock tiene definiciones diferentes. Para el Banco de México, el stock corresponde al capital accionario y al capital en préstamo que los inversionistas extranjeros tienen en unidades económicas que operan en el país. Puesto que los activos de una empresa no son susceptibles de dividirse en términos de propiedad del capital, la definición recae en el valor contable de las acciones de propiedad de extranjeros, incluyendo las deudas con la matriz.

Para la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) el stock corresponde al valor acumulado de las autorizaciones de inversión extranjera emitidas por esa oficina. Además, tanto el Banco de México y SECOFI, realizan encuestas que permiten mejorar las estimaciones del stock. La encuesta realizada por el Banco de México es sobre las 200 empresas más importantes con capital extranjero (Informe Contable Mensual Cuestionario CE-019 y Resumen Contable Anual Cuestionario CE-018). Por otro lado, SECOFI realiza una encuesta anual (Cuestionario 19-BIS) que se envía a las 3500 empresas más importantes con capital extranjero, con cuyos resultados se hacen algunas extrapolaciones correctivas, ya que la muestra representa un 70% del total de empresas con capital extranjero en México.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley de Inversión Extranjera.* El objetivo de esta Ley es la determinación de reglas para canalizar la inversión extranjera hacia el país y propiciar que ésta contribuya al desarrollo nacional.
Fecha de entrada en vigor: 15 de diciembre de 1993.
Fuente: Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 1993.
- Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera.*
Fecha de entrada en vigor: 15 de mayo de 1989.
fuentes: Diario Oficial de la Federación, 16 de mayo de 1989.
- Leyes sectoriales** *Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz.* Mediante este Decreto se abroga el Decreto para la Racionalización de la Industria Automotriz, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 1983 y, se derogan todas las demás disposiciones en materia automotriz que se opongan a este nuevo Decreto.
Fecha de entrada en vigor: 11 de diciembre de 1989.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 11 de diciembre de 1989.
- Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito.* Esta Ley prohíbe la inversión extranjera en organizaciones auxiliares del crédito, es decir, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras y, uniones de crédito. Esta Ley deroga la Ley General de Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 31 de mayo de 1945, en lo conducente a organizaciones auxiliares de crédito y a la actividad de personas o sociedades dedicadas a las operaciones de cambio de divisas extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 20 de diciembre de 1984.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985.
- Ley de Sociedades de Inversión.* Esta Ley prohíbe la inversión extranjera en sociedades de inversión.
Fecha de entrada en vigor: 20 de diciembre de 1984.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 14 de enero de 1985.
- Disposiciones para las Sociedades de Inversión de Capital de Riesgo.* Estas disposiciones limitan la participación de capital extranjero en sociedades de inversión de capital de riesgo.
Fecha de entrada en vigor: 7 de enero de 1986.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 7 de enero de 1986.
- Leyes de transferencia de tecnología** *Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.* El objetivo de esta Ley es el control y orientación de la transferencia de tecnología, así como el fomento de fuentes propias de tecnología.
Fecha de entrada en vigor: 8 de enero de 1990.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1990.
- Reglamento de la Ley sobre el Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas.*
Fecha de entrada en vigor: 8 de enero de 1990.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 9 de enero de 1990.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Ley de Promoción y Protección de la Propiedad Industrial.*
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.
Fuente: Business Latin America, 9 de septiembre de 1991.
- Ley de Derechos de Autor*, aprobada por el Congreso en julio de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 16 de agosto de 1991.
Fuente: Business Latin America, 9 de septiembre de 1991.
- Leyes sobre conversión de deuda externa** *Manual Operativo para la Capitalización de Pasivos y Sustitución de Deuda Pública por Inversión.* El programa de conversión que operaba de acuerdo a las normas establecidas por este Manual dejó de autorizar operaciones en noviembre de 1987.
Fecha de entrada en vigor: marzo de 1986.
Fuente: Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, 1986.
- Normas Aplicables a las Subastas de Adjudicación de Derechos de Conversión.*
Fecha de entrada en vigor: 30 de marzo de 1990.
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto para el Fomento y Operación de la Industria Maquiladora de Exportación.* Este Decreto tiene por objetivo promover el establecimiento y regular la operación de empresas que se dediquen total o parcialmente a realizar actividades de maquila de exportación, mediante la aplicación de un mecanismo ágil y descentralizado que otorgue facilidades para la operación eficiente de dichas empresas.
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1989.
Fuente: Diario Oficial de la Federación del 22 de diciembre de 1989.

Leyes sobre
privatizaciones

Resolución para Proceder a la Disolución, Liquidación, Extinción y Fusión de las Entidades Paraestatales.

Fecha de entrada en vigor: 22 de mayo de 1987.

Fuente: Diario Oficial de la Federación No. 14 del 22 de mayo de 1987.

B. CARACTERÍSTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSIÓN EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En México la norma básica, actualmente vigente, es la Ley de Inversión Extranjera del 27 de diciembre de 1993. En tanto se expiden los Reglamentos de esta Ley, el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1989, seguirá vigente en todo lo que no se oponga a la misma.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a la promulgación de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera de 1973, en México solo existía una serie de normas dispersas tanto en la Constitución de 1917 y otras disposiciones conexas, como en otros ordenamientos legales, que regulaban la participación del capital extranjero en ciertas actividades. En cuanto a las normas constitucionales, cabe destacar la Ley Orgánica de la Fracción I del Artículo No. 27 de la Constitución, incorpora la llamada "Cláusula Calvo" por la cual para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de minas o de aguas, todo extranjero debía comprometerse ante el Ministerio de Relaciones Exteriores que no solicitaría la protección de su gobierno y que se consideraría como nacional, respecto de dichos bienes.

El Artículo No. 27 de la Constitución fue reglamentado a través de un Decreto el 29 de junio de 1944, donde se estableció la necesidad de obtener autorización previa de la Secretaría de Relaciones Exteriores para adquirir empresas o el control de ellas por parte de extranjeros, así como para la constitución de sociedades mexicanas que tuvieran o pudieran tener socios extranjeros. También exigió la previa autorización para la compra por extranjeros de bienes inmuebles rústicos o urbanos con fines de explotación. Este Decreto impuso, además, el requisito de un mínimo de 51% de participación de capital mexicano para la realización de proyectos en las actividades de radiodifusión, cinematografía, transportes aéreos, transportes urbanos e interurbanos, piscicultura y pesca (Acuerdo del 17 de abril de 1945 de la Secretaría de Relaciones Exteriores).

Este Decreto fue dictado en ejercicio de facultades extraordinarias otorgadas al Poder Ejecutivo durante la Segunda Guerra Mundial. En septiembre de 1945 se dejaron sin efecto las disposiciones expedidas por el Ejecutivo en uso de sus facultades, la vigencia del Decreto fue cuestionada, aun cuando fueron ratificadas las normas dictadas durante ese período que estuvieran relacionadas con la vida económica del país. Algunas resoluciones confirmadas por ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia se manifestaron en contra de la vigencia del Decreto, pero no se llegó al número requerido para considerarlo inaplicable.

Con el objeto de unificar criterios para la aplicación de las diversas normas relativas a la inversión extranjera, por Acuerdo del 23 de junio de 1947 se creó una Comisión Mixta Interministerial, integrada por los titulares de los siete Secretarías de Estado. Esta Comisión dictó 12 normas generales, de las cuales destacan las siguientes:

a) Norma dictada el 3 de septiembre de 1947, donde se reconoció a los inmigrantes con calidad de visitantes un "residencia suficiente", la cual les otorgaba la posibilidad de adquirir bienes inmuebles indispensables para su comercio, industria o destinados a su casa habitación.

b) Norma dictada el 20 de octubre de 1947, donde se establecía que las acciones de las sociedades en las que participaban extranjeros debían ser nominativas.

c) Norma dictada el 26 de enero de 1948, en la cual se autorizaba a los inversionistas mexicanos a enajenar sus acciones sin permiso previo de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

d) Norma dictada el 30 de agosto de 1948, donde se estableció la obligación para la Secretaría de Relaciones Exteriores de consultar a la Secretaría de Industria y Comercio y a Petróleos Mexicanos antes de autorizar la constitución o modificación de sociedades que se dediquen a la industria o al comercio de derivados del petróleo.

e) Norma dictada el 6 de febrero de 1951, donde se establecieron los requisitos que debían cumplir las acciones nominativas.

Complementaron a las resoluciones dictadas por la Comisión Mixta Interministerial, una serie de disposiciones legales de carácter sectorial, es el caso de:

a) Ley de Vías Generales de Comunicación, del 19 de febrero de 1940, que reservaba para los nacionales el derecho a obtener concesiones por parte del Estado para la construcción o explotación de esas vías.

b) Ley Reglamentaria del Artículo No. 27 de la Constitución en la Rama del Petróleo, del 29 de noviembre de 1958, que reservaba de manera exclusiva para el Estado el dominio directo de todos los hidrocarburos que se encuentren en territorio nacional.

c) Reglamento de la Distribución de Gas, del 29 de marzo de 1960, que reservaba a los mexicanos o a las sociedades constituidas exclusivamente por mexicanos la distribución de gas.

d) Decreto del 30 de diciembre de 1965, modificaba las leyes relativas a instituciones de seguros, de crédito y sociedades de inversión, prohibiendo la participación del capital extranjero en las sociedades que se dediquen a estas actividades.

e) Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo No.27 de la Constitución en la Rama del Petróleo, en materia de petroquímica, del 9 de febrero de 1971, que reservaba para el Estado o para las sociedades integradas exclusivamente por mexicanos la elaboración de productos en la industria petroquímica secundaria.

Posteriormente, se dictaron una serie de Decretos Presidenciales. El primero de ellos, del 2 de julio de 1970, establecía el porcentaje máximo de 49% de inversión extranjera en el capital de las sociedades que se dedicaban a la siderurgia, cemento, vidrio, fertilizantes, celulosa y aluminio. El segundo, del 30 de abril de 1971, autorizaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder permisos a las instituciones nacionales de crédito, para que adquirieran como fiduciarias el dominio de bienes inmuebles destinados a actividades industriales o turísticas dentro de las zonas prohibidas. El tercer Decreto, del 24 de octubre de 1972, establecía que el capital mexicano en sociedades que tuvieran por objeto la fabricación de componentes automotrices no podía ser inferior al 60%.

En marzo de 1973, se dicta la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, la cual agrupa y sistematiza este conjunto de disposiciones de carácter restrictivo, además de incorporar nuevos elementos dentro de este mismo contexto. Es así como esta Ley contempla la autorización previa y el registro de las inversiones que signifiquen la adquisición de más del 25% del capital o más del 49% de los activos fijos de una empresa. Además esta Ley establece una serie de restricciones al capital extranjero:

a) Están reservados al Estado las actividades de petróleo y otros hidrocarburos, petroquímica básica, explotación de minerales radioactivos y generación de energía nuclear, electricidad, ferrocarriles, comunicaciones telegráficas y radiotelegráficas y demás que fijen otras leyes específicas.

b) Están reservados exclusivamente a mexicanos o a sociedades mexicanas las actividades de radio y televisión, transporte automotor urbano, interurbano y en carreteras federales, transporte aéreo y marítimo nacional, extracción forestal, distribución de gas e intermediación financiera.

c) Autoriza, en proporciones máximas de capital, la inversión extranjera en las actividades de explotación y aprovechamiento de sustancias minerales (concesiones ordinarias 49% y concesiones especiales 34%), productos secundarios de la industria petroquímica (40%), fabricación de componentes de vehículos automotores (40%), y otras para las cuales existan leyes específicas.

d) En los casos en que las disposiciones legales o reglamentarias no exijan un porcentaje determinado, la inversión extranjera podrá participar en una proporción que no exceda del 49% del capital de las empresas, siempre y cuando no exista la posibilidad de influir en la gestión de la misma. Sin embargo, la participación mayoritaria de la inversión extranjera se permitía cuando, debido a las características de un proyecto en particular, se considere que es conveniente para la economía del país.

Entre 1973 y 1989 se adoptaron un número importante de Resoluciones Generales de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) que tuvieron por objeto aclarar o precisar el alcance de la Ley e incluso modificar muchos de los criterios y principios establecidos en ella. Sin embargo, los criterios de autorización de los proyectos seguían siendo muy discrecionales.

Este trabajo normativo que tuvo la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras se tradujo en un importante aporte a la interpretación de la Ley y adecuó las normas vigentes a la actitud cada vez más liberal del gobierno mexicano frente a este tema. El interés por promover mayores flujos de inversión extranjera mediante el establecimiento de reglas claras y de aplicación automática llevó

finalmente a las autoridades a emitir el Reglamento de la Ley para Promover la Inversión Mexicana y Regular la Inversión Extranjera en mayo de 1989.

Finalmente, a contar del 27 de diciembre de 1993, se puso en vigencia la nueva Ley de Inversión Extranjera, que eliminó el carácter de la legislación anterior adecuándola a los compromisos adquiridos con el Tratado de Libre Comercio (TLC), que en su quinta parte, Capítulo XI muestra que las reglas ahí contenidas son totalmente incompatibles con esa legislación.

Por los motivos anteriores sumados a las medidas tendientes a alcanzar la modernización del país sustentadas en la promoción de la inversión privada, nacional y extranjera, se da este nuevo marco legal en materia de Inversión Extranjera.

3. Definición de inversión extranjera directa

En México, de acuerdo a la Ley de Inversión Extranjera de diciembre de 1993 se considera inversión extranjera a: i) la participación de inversionistas extranjeros, en cualquier proporción, en el capital social de sociedades mexicanas; ii) la realizada por sociedades mexicanas con mayoría de capital extranjero; y iii) la participación de inversionistas extranjeros en las actividades y actos contemplados por la Ley de Inversión Extranjera.

De acuerdo a la Ley se entiende por inversionista extranjero a la persona física o moral de nacionalidad distinta a la mexicana y a las entidades extranjeras sin personalidad jurídica.

Para los efectos de esta Ley, se equipara a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros, en el país con calidad de inmigrados.

Se crean, asimismo, nuevos instrumentos de captación, como son los fideicomisos de inversión temporal y de inversión neutra. A través de los primeros, la inversión extranjera puede canalizarse, por un período de hasta 50 años, a actividades restringidas cuando las empresas se encuentran en una situación financiera precaria, o se requiera de capital para aumentar su producción o modernizarse tecnológicamente. Los fideicomisos de inversión neutra, en cambio, permiten la adquisición por parte de extranjeros de certificados de participación ordinaria en empresas que coticen en la Bolsa de Valores.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

La nueva Ley de Inversión Extranjera tiene por objetivo establecer un nuevo marco normativo que, con apego a la Constitución Mexicana, promueva la competitividad del país, brinde certidumbre jurídica al inversionista extranjero en México y señale, además reglas claras para atraer capital internacional a las actividades productivas del país.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

En México las autorizaciones para la inversión extranjera constan en una resolución emitida por la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras, dependiente de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI). La Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras es un organismo interministerial integrado por los titulares de las Secretarías de Gobernación; de Relaciones Exteriores; de Hacienda y Crédito Público; de Desarrollo Social; de Energía, Minas e Industria Paraestatal; de Comunicaciones y Transporte; de Trabajo y Previsión Social; y de Turismo.

La Comisión deberá resolver las solicitudes sometidas a su consideración dentro de un plazo de 45 días hábiles contados a partir de la fecha de la presentación de la solicitud respectiva. En el caso que la Comisión no resuelva en el plazo señalado, la solicitud se considera aprobada en los términos presentados, y la Secretaría deberá expedir la autorización correspondiente.

Para evaluar las solicitudes que se someten a su consideración, la Comisión utiliza los siguientes criterios:

- i) El impacto sobre el empleo y la capacitación de los trabajadores.
- ii) La contribución tecnológica.
- iii) El cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental contenidas en los ordenamientos ecológicos que rigen la materia.
- iv) En general, la aportación para incrementar la competitividad de la planta productiva del país.

Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% en las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación:

- i) Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje.
- ii) Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente de tráfico de altura.
- iii) Administración de terminales aéreas.
- iv) Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinados.
- v) Servicios legales.

- vi) Sociedades de información crediticia.
- vii) Instituciones calificadoras de valores.
- viii) Agentes de seguros.
- ix) Telefonía celular.
- x) Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados.
- xi) Perforación de pozos petroleros y de gas.

Además se requiere resolución favorable de la Comisión para que las sociedades mexicanas donde la inversión extranjera pretenda participar, directa o indirectamente, en una proporción mayor al 49% de su capital social, únicamente cuando el valor total de activos de las sociedades de que se trate, al momento de someter la solicitud de adquisición, rebase el monto que determina anualmente la propia Comisión de Inversiones Extranjeras.

Existe un Registro Nacional de Inversiones Extranjeras que depende de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) y está bajo la dirección del Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Este registro no es público y sólo puede ser consultado por las partes interesadas o por quienes tengan interés jurídico en las correspondientes inscripciones, cancelaciones y anotaciones.

Deben inscribirse en el Registro:

- i) Las sociedades mexicanas en que las que participe la inversión extranjera.
- ii) Las personas físicas o morales extranjeras que realicen habitualmente actos de comercio en la República mexicana, y sucursales de inversionistas extranjeros establecidos en el país.
- iii) Los fideicomisos de acciones o partes sociales de bienes inmuebles y de inversión neutra, por virtud de los cuales se deriven derechos en favor de la inversión extranjera.

La inscripción debe realizarse dentro de los 40 días hábiles contados a partir de la fecha de constitución de la sociedad o de participación de la inversión extranjera; de formalización o protocolización de los documentos relativos de la sociedad extranjera; o de constitución del fideicomiso respectivo u otorgamiento de derechos de fideicomisario en favor de la inversión extranjera.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Para la reexportación de capital y la remisión de utilidades, la legislación vigente no especifica restricciones, sin embargo, los inversionistas extranjeros deben previamente acreditar el cumplimiento de los compromisos contraídos con la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras.

7. Sectores prohibidos al capital extranjero

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en la Fracción I del Artículo No. 27 (Cláusula Calvo): "Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización, y las sociedades mexicanas, tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en invocar por lo mismo la protección por lo que se refiere a aquéllos, bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder, en beneficio de la Nación, los bienes que hubiesen adquirido en virtud del mismo. En una faja de cien kilómetros a lo largo de las fronteras, y de cincuenta en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y agua". En esta última parte del Artículo citado se establece la "Zona Prohibida", en virtud de la cual existe absoluta prohibición para que los extranjeros adquieran el dominio directo sobre los bienes indicados. Es preciso señalar que Ley de Inversión Extranjera modifica esta situación y, denomina "Zona Restringida" a la antes mencionada "Zona Prohibida", permitiendo invertir, con fines industriales, turísticos o residenciales, por la vía del fideicomiso.

Las sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros o que hayan celebrado el convenio denominado Cláusula Calvo, pueden adquirir el dominio de bienes inmuebles en territorio mexicano.

Las sociedades mexicanas que hayan celebrado el convenio denominado Cláusula Calvo pueden adquirir el dominio de inmuebles ubicados en la "Zona Restringida" destinados a la realización de actividades industriales, comerciales, u hoteleras, debiendo registrar dicha adquisición ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. También pueden adquirir derechos sobre bienes inmuebles en "Zona Restringida" que sean destinados a fines residenciales a través de fideicomiso.

Se requiere permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que instituciones de crédito adquieran como fiduciarias, derechos sobre bienes inmuebles ubicados dentro de la "Zona Restringida", cuando el objeto del fideicomiso sea permitir la utilización y el aprovechamiento de tales bienes sin constituir derechos reales sobre ellos, y los fideicomisarios sean: a) Sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros; y b) Personas físicas o morales extranjeras. La duración de los fideicomisos son por un período máximo de cincuenta años.

La inversión extranjera puede participar en cualquier proporción en el capital social de sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividad económica o fabricar nuevas líneas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o relocalizar los ya existentes, salvo por lo dispuesto específicamente más abajo.

La Ley de Inversión Extranjera de diciembre de 1993 establece, en materia de participación del capital extranjero, seis segmentos que van desde la reserva total para el Estado hasta prohibiciones parciales al capital extranjero.

Regulación para la inversión extranjera	Actividades Económicas
Actividades reservadas en forma exclusiva al Estado	Extracción y refinación de petróleo, petroquímica básica y explotación de gas natural.
	Extracción y beneficio de uranio y minerales radioactivos y aplicaciones de combustibles nucleares.
	Generación de energía nuclear.
	Acuñación de monedas y emisión de billetes.
	Comunicación vía satélite.
	Generación, transmisión y suministro de energía eléctrica.
	Transporte ferroviario.
	Telégrafos, correos, radiotelegrafía.
Actividades reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros	Control, supervisión y vigilancia de puertos, aeropuertos y helipuertos.
	Transporte terrestre nacional de pasajeros, turismo y carga, sin incluir los servicios de mensajería y paquetería.
	Comercio al por menor de gasolina y distribución de gas licuado de petróleo.
	Servicios de radiodifusión y otros de radio y televisión, distintos de televisión por cable.
	Uniones de crédito.
Actividades económicas y sociedades donde la inversión extranjera puede participar hasta en el 10%	Instituciones de banca de desarrollo.
	La prestación de los servicios profesionales y técnicos.
Actividades económicas y sociedades donde la inversión extranjera puede participar hasta en el 25%	Sociedades cooperativas de producción.
	Transporte aéreo nacional.
	Transporte en aerotaxi.
Actividades económicas y sociedades donde la inversión extranjera puede participar hasta en el 30%	Transporte aéreo especializado.
	Sociedades controladoras de agrupaciones financieras.
	Instituciones de crédito de banca múltiple.
	Casas de bolsa.
Actividades económicas y sociedades donde la inversión extranjera puede participar hasta en el 49% a/	Especialistas bursátiles.
	Instituciones de seguros.
	Instituciones de fianzas.
	Casas de cambio.
	Almacenes generales de depósito.
	Arrendadoras financieras.
	Empresas de factoraje financiero.

Regulación para la inversión extranjera	Actividades Económicas
	<p>Sociedades financieras de objeto limitado a las que se refiere el artículo 103 fracción IV, de la Ley de Instituciones de Crédito.</p> <p>Sociedades a las que se refiere el artículo 12 bis de la Ley de Mercado de Valores.</p> <p>Acciones representativas del capital fijo de sociedades de inversión y sociedades operadoras de sociedades de inversión.</p> <p>Fabricación y comercialización de explosivos, armas de fuego, cartuchos, municiones y fuegos artificiales, sin incluir la adquisición y utilización de explosivos para actividades industriales y extractivas, ni la elaboración de mezclas explosivas para el consumo de dichas actividades.</p> <p>Impresión y publicación de periódicos para circulación exclusiva en territorio nacional.</p> <p>Acciones serie "T" de sociedades que tengan en propiedad tierras agrícolas, ganaderas y forestales.</p> <p>Televisión por cable.</p> <p>Servicios de telefonía básica</p> <p>Pesca en agua dulce, costera y en la zona económica exclusiva, sin incluir acuicultura.</p> <p>Administración portuaria integral.</p> <p>Servicios portuarios de pilotaje a las embarcaciones para realizar operaciones de navegación interior.</p> <p>Sociedades navieras dedicadas a la explotación comercial de embarcaciones para la navegación interior y de cabotaje, con excepción de cruceros turísticos y la explotación de dragas y artefactos navales para la construcción, conservación y operación portuaria.</p> <p>Servicios conexos al sector de ferrocarriles, que consisten en servicios a pasajeros, mantenimiento y rehabilitación de vías, libramientos, talleres de reparación de equipo tractivo y de arrastre, organización y comercialización de trenes unitarios, operación de terminales interiores de carga y telecomunicaciones ferroviarias.</p> <p>Suministro de combustible y lubricantes para embarcaciones, aeronaves y equipo ferroviario.</p>
<p>Actividades que requieren una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49%</p>	<p>Servicios portuarios a las embarcaciones para realizar sus operaciones de navegación interior, tales como el remolque, amarre de cabos y lanchaje.</p> <p>Sociedades navieras dedicadas a la explotación de embarcaciones exclusivamente en tráfico de altura.</p> <p>Administración de terminales aéreas.</p> <p>Servicios privados de educación preescolar, primaria, secundaria, media superior, superior y combinación.</p> <p>Servicios legales.</p> <p>Sociedades de información crediticia.</p> <p>Instituciones calificadoras de valores.</p> <p>Agentes de seguros.</p> <p>Telefonía celular.</p> <p>Construcción de ductos para la transportación de petróleo y sus derivados.</p> <p>Perforación de pozos petroleros y de gas.</p>

Fuente: Ley de Inversión Extranjera, diciembre de 1993.

a/ Los límites para la participación de inversión extranjera señalados en este punto no podrán ser rebasados directamente ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, esquemas de pirimidación o cualquier otro mecanismo que otorgue control o una participación mayor a la que se establece.

Adicionalmente existen una serie de Artículos transitorios que introducen algunas restricciones adicionales:

- i) Están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros las actividades de transporte terrestre internacional de pasajeros, turismo y de carga entre puntos del territorio de México y el servicio de administración de centrales camioneras de pasajeros y servicios auxiliares. Sin embargo, en las actividades mencionadas la inversión extranjera podrá participar de conformidad con las disposiciones siguientes:
 - A partir del 18 de diciembre de 1995, hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas.
 - A partir del 1 de enero de 2001, hasta el 51% del capital social de sociedades mexicanas.
 - A partir del 1 de enero de 2004, hasta el 100% del capital social de sociedades mexicanas sin necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión.
- ii) La inversión extranjera puede participar hasta el 49% del capital social de sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de fabricación y ensamble de partes, equipos y accesorios para la industria automotriz, sin perjuicio de lo dispuesto por el Decreto para el Fomento y Modernización de la Industria Automotriz. A partir del 1 de enero de 1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas, sin necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión.
- iii) La inversión extranjera puede participar hasta el 49% del capital social de las sociedades mexicanas dedicadas a las actividades de prestación de servicios de videotexto y conmutación en paquete. A partir del 1 de julio de 1995 la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en las sociedades dedicadas a los servicios mencionados, sin la necesidad de obtener la resolución favorable de la Comisión.
- iv) Se requiere resolución favorable de la Comisión para que la inversión extranjera participe en un porcentaje mayor al 49% del capital social de sociedades que realicen las actividades de edificación, construcción e instalación de obras. A partir del 1 de enero de 1999, la inversión extranjera podrá participar hasta el 100% en el capital social de sociedades mexicanas dedicadas a las mismas, sin necesidad de recabar la resolución favorable de la Comisión.

8. Tributación

México tiene un convenio para evitar la doble tributación con Canadá.

Las empresas extranjeras o nacionales con participación de capital extranjero, como toda empresa o persona jurídica en México debe pagar un impuesto a las utilidades del 34%. Sin embargo, las empresas extranjeras deben pagar un 51.5% si tiene previamente impuestos por ganancias excesivas. Además, en México no se aplica ningún impuesto sobre los dividendos que están fuera de las ganancias gravadas previamente; en caso contrario, el impuesto es de 51.5%.

En cuanto a los intereses, existe una tasa de 4.9% sobre activos financieros registrados en el exterior, sobre bonos publicamente ofrecidos y otros valores financieros; 10% para proveedores extranjeros de bienes de capital, pagados por bancos mexicanos; y 35% para otros préstamos. Asimismo, los impuestos por concepto de regalías se dividen en dos tipos: a) 15% por know-how y asistencia técnica; y b) 35% por patentes, marcas y licencias. No obstante, cabe señalar que tanto el impuesto sobre los intereses como sobre las regalías variarán una vez que sea aprobado el tratado tributario entre Estados Unidos y México.

9. Royalties o regalías

Las nuevas Leyes de Propiedad Industrial y Derechos de Autor aprobadas en mayo y agosto de 1991, respectivamente, han mejorado el tratamiento entre nacionales y extranjeros para la utilización de licencias, marcas y patentes, proporcionando una gran cobertura de patentes y otras protecciones que no existían bajo la anterior legislación.

De acuerdo a la Ley sobre Control y Registro de la Transferencia de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes y Marcas, deben ser inscritos en el Registro Nacional de Transferencia de Tecnología todos los convenios y contratos relativos a: a) la concesión del uso o autorización de explotación de marcas, patentes de invención o de mejoras, de certificados de invención y, de modelos y dibujos industriales; b) la cesión de marcas y patentes; c) la concesión o autorización de uso de nombres comerciales; d) la transmisión de conocimientos técnicos mediante planos, diagramas, modelos, instructivos, formulaciones, especificaciones, formación y capacitación de personal y otras modalidades; e) la asistencia técnica, provisión de ingeniería básica, servicios de operación o administración de empresas, servicios de consultoría, asesoría y supervisión; f) la concesión de derechos de autor que impliquen explotación industrial; y g) los programas de computación.

Por otro lado, la Ley establece que los siguientes contratos o convenios no deben ser inscritos en el Registro: a) la internación de técnicos extranjeros para la instalación de fábricas, máquinas o para efectuar reparaciones; b) el suministro de diseños, catálogos o asesorías en general que se adquieran con la maquinaria o equipos y sean necesarios para su instalación; c) la asistencia en reparaciones o emergencias siempre que se deriven de algún acto, convenio o contrato que haya sido registrado con anterioridad; d) la instrucción o capacitación técnica que se proporcione por instituciones docentes, por centros de capacitación de personal o por las empresas a sus trabajadores; e) la explotación industrial de derechos de autor referidos a las ramas editorial, cinematográfica, fonográfica, de radio y televisión; y f) los convenios de cooperación técnica internacional celebrados entre Gobiernos.

VIII. PARAGUAY

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	<p>En Paraguay, el Ministerio de Industria y Comercio es la instancia oficial encargada de la administración del Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital Nacional y Extranjero, Ley No. 60.</p> <p>Además, esta Ley establece la creación del Consejo de Inversiones, organismo asesor del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda, el cual está encargado de la autorización y registro de las inversiones nacionales y extranjeras acogidas a este Régimen.</p>
Definición nacional de inversión extranjera directa	<p>La legislación paraguaya no presenta una definición específica de inversión extranjera. No obstante, se señala que las inversiones extranjeras y nacionales pueden realizarse bajo las siguientes formas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) En dinero, financiamiento, crédito de proveedores u otros instrumentos financieros. b) En bienes de capital, materias primas y otros insumos destinados a la industria local, para la fabricación de bienes de capital. c) En marcas, dibujos, modelos y procesos industriales y demás formas de transferencia de tecnología. d) En servicios de asistencia técnica especializados. e) En arrendamientos de bienes de capital.
Participación mínima del capital extranjero	<p>En Paraguay existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa para que ésta sea considerada extranjera. Este porcentaje es del 30% del capital accionario con derecho a voto.</p>
Flujo de inversión extranjera directa	<p>Este concepto se define como el flujo de divisas del exterior para nuevas inversiones, incluidas las utilidades reinvertidas en la empresa que corresponden a inversionistas extranjeros no residentes en el país. Asimismo, se incluyen los aumentos de capital con nuevos aportes de inversionistas directos extranjeros no residentes, sea en efectivo o valores financieros, maquinarias, equipos, asistencia técnica, marcas patentes, etc.</p> <p>Por otro lado, a partir de 1990, el Banco Central del Paraguay ha introducido cambios metodológicos para la presentación de la Balanza de Pagos y en particular en lo referente al registro de la información sobre inversión extranjera directa en el país. En ese año se adoptó la metodología del 4to. Manual de Balanza de Pagos del Fondo Monetario Internacional, reemplazando, así, las especificaciones impuestas por el 3er. Manual. De esta manera, a partir de 1990, la información sobre inversión extranjera se obtuvo a partir de una encuesta a las empresas con participación extranjera en el Paraguay.</p>
Criterios para el registro	<p>En Paraguay no existe un registro sistemático de la inversión extranjera directa materializada en el país. Por lo tanto, y teniendo presente las limitaciones de la información disponible, para esta publicación se recurrió a un análisis de los balances contables de las empresas, presentados ante la Dirección de Impuestos a la Renta para el año 1988, de acuerdo a la siguiente metodología.</p> <p>En primer lugar se preparó una lista de las empresas con participación de capital extranjero en el Paraguay. Esta lista fue elaborada en base a anteriores intentos de identificación de dicho capital extranjero, y actualizada de acuerdo a los registros de proyectos beneficiados por la Ley No. 550-75, del Ministerio de Industria y Comercio, así como del registro de inversiones extranjera directa de la Balanza de Pagos del Banco Central del Paraguay. Los nombres de las empresas receptoras en el país fueron obtenidos en la Dirección de Impuestos a la Renta. La lista actualizada definitiva incluyó 208 empresas con participación de capital extranjero operando en el año 1988 en Paraguay. La información recolectada fue obtenida de los balances fiscales al año 1988, y se estima que el grado de subvaluación de dichos balances fiscales es del orden del 50%.</p> <p>El país de origen se registra de acuerdo a la procedencia del capital. En el caso de que la inversión se realizó desde una filial de Buenos Aires, se considera el capital como argentino, aunque la casa matriz esté ubicada en España.</p> <p>La información sobre inversión extranjera directa al provenir de los balances fiscales representa las inversiones materializadas en el Paraguay. La información proporcionada por el Ministerio de Industria y Comercio son las autorizaciones para acogerse a los beneficios de la Ley de Incentivo a las Inversiones. Se estima que la tasa de materialización es, aproximadamente, 50% en el caso de Paraguay.</p>
Stock de capital extranjero directo	<p>No existe una definición del stock de capital extranjero directo. La información con que se cuenta para 1984 corresponde al capital y reservas declarados por 205 empresas identificadas como extranjeras por la Secretaría Técnica de Planificación.</p> <p>La información correspondiente a 1988 fue preparada por la Unidad Conjunta CEPAL/CET sobre Empresas Transnacionales en base a una muestra de 208 empresas identificadas como extranjeras. La información fue obtenida directamente de los balances contables de estas empresas, presentados ante la Dirección de Impuestos a la Renta.</p>

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica
sobre inversión
extranjera directa

Ley No. 60 del 20 de diciembre de 1990, Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión de Capital Nacional y Extranjero. Esta Ley aprueba con modificaciones el Decreto Ley No. 27 del 31 de marzo de 1990, por el cual se modifica y amplía el Decreto No. 19 del 28 de abril de 1989.

Fecha de entrada en vigor: 26 de marzo de 1991.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Decreto No. 6361 del 10 de julio de 1990, el cual reglamenta el Decreto Ley No. 27 del 31 de marzo de 1990.

Fecha de entrada en vigor: 10 de julio de 1990.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Ley No. 117 del 6 de diciembre de 1991. Ofrece al inversionista extranjero las mismas garantías, derechos y obligaciones que a los inversionistas nacionales.

Fecha de entrada en vigor: 7 de enero de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Leyes sectoriales

Ley No. 113 del 6 de noviembre de 1951. Esta Ley establece que la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL) tiene el control de la producción y la venta exclusiva de alcohol.

Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1951.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 675 del 9 de septiembre de 1960. Esta Ley fija las condiciones para la concesión de hidrocarburos a extranjeros.

Fecha de entrada en vigor: 9 de septiembre de 1960.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 1296 del 26 de octubre de 1967, Ley Orgánica para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO). Esta Ley establece que la prestación del servicio público de telecomunicaciones dentro del territorio del Paraguay y con el exterior, por signos, escritos, imágenes o sonidos de cualquier naturaleza, por medio del telégrafo, radiotelefonía, facsimile, televisión u otro sistema cualquiera de telecomunicación, está a cargo de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), en forma exclusiva.

Fecha de entrada en vigor: 26 de octubre de 1967.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 295 del 17 de noviembre de 1971. Esta Ley reserva el tráfico de cabotaje a las embarcaciones de bandera nacional. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto No. 27371 del 19 de agosto de 1981.

Fecha de entrada en vigor: 17 de noviembre de 1971.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 417 del 6 de noviembre de 1973, Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras. Fija las condiciones para el funcionamiento de las entidades financieras, tanto nacionales como extranjeras, en el país. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 771 del 14 de noviembre de 1979.

Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1973.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 1045 del 23 de diciembre de 1983. Establece el Régimen de Obras Públicas.

Fecha de entrada en vigor: 23 de diciembre de 1983.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, V. Paraguay, Buenos Aires, 1985.

Ley No. 125 de 1991. Establece el Nuevo Régimen Tributario en Paraguay.

Fecha de entrada en vigor: 1991.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

- Leyes sobre propiedad industrial**
- Ley No. 751* del 12 de julio de 1979. Regula el establecimiento de marcas comerciales en Paraguay. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 1258 del 1 de octubre de 1987.
Fecha de entrada en vigor: 20 de octubre de 1979.
Fuente: Estudio Mersan, Abogados, Industrial Property. Laws and Regulations, Asunción, Paraguay, 1990.
- Decreto No. 10732* del 23 de octubre de 1979. Establece la Clasificación de Bienes y Servicios para el Registro de Marcas y establece el Comité de Clasificación.
Fecha de entrada en vigor: 23 de octubre de 1979.
Fuente: Estudio Mersan, Abogados, Industrial Property. Laws and Regulations, Asunción, Paraguay, 1990.
- Ley No. 773* del 31 de agosto de 1925. Regula lo concerniente a la obtención de patentes y crea una Oficina de Patentes. Esta Ley fue regulada por el Decreto No. 32611 del 8 de febrero de 1929.
Fecha de entrada en vigor: 3 de septiembre de 1925.
Fuente: Estudio Mersan, Abogados, Industrial Property. Laws and Regulations, Asunción, Paraguay, 1990.
- Ley No. 868* del 22 de octubre de 1981. Regula el establecimiento de modelos industriales y diseños.
Fecha de entrada en vigor: 2 de noviembre de 1981.
Fuente: Estudio Mersan, Abogados, Industrial Property. Laws and Regulations, Asunción, Paraguay, 1990.
- Decreto No. 30007* del 5 de enero de 1982. Establece la Clasificación para Modelos Industriales y Diseños, según lo señalado por la Ley No. 868.
Fecha de entrada en vigor: 5 de enero de 1982.
Fuente: Estudio Mersan, Abogados, Industrial Property. Laws and Regulations, Asunción, Paraguay, 1990.
- Leyes sobre promoción de exportaciones**
- Ley No. 90* del 26 de octubre de 1990. Establece un régimen de promoción de exportaciones de productos no tradicionales y de productos manufacturados.
Fecha de entrada en vigor: 3 de diciembre de 1990.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.
- Decreto No. 5667* del 22 de agosto de 1984. Reglamenta el régimen de admisión temporaria en Paraguay.
Fecha de entrada en vigor: 22 de agosto de 1984.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio, Centro de Promoción de Exportaciones (CEPEX).
- Leyes sobre privatizaciones**
- Ley No. 126* del 27 de diciembre de 1991, Ley General de Privatizaciones. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto No. 13461 del 8 de mayo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 27 de diciembre de 1991.
Fuente: Latin Finance, No. 35, marzo de 1992 y Ministerio de Industria y Comercio.
- Acuerdos internacionales**
- Convenio entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República Federativa del Brasil sobre Cooperación en Materia de Propiedad Industrial.*
Fecha de entrada en vigor: sin información.
Fuente: Mersan, Carlos, Legislación Fiscal del Paraguay, sexta edición, Asunción, 1986.
- Convenio entre la República del Paraguay y la República Federal Alemana sobre el Otorgamiento del Tratamiento de Nación más Favorecida y sobre la Protección Legal de los Derechos de la Propiedad Industrial.*
Fecha de entrada en vigor: 30 de julio de 1955.
Fuente: Mersan, Carlos, Legislación Fiscal del Paraguay, sexta edición, Asunción, 1986.
- Convenio de Propiedad Literaria, Artística y Científica* entre Paraguay y España.
Fecha de entrada en vigor: 8 de julio de 1925.
Fuente: Mersan, Carlos, Legislación Fiscal del Paraguay, sexta edición, Asunción, 1986.
- Convenio sobre Incentivos para las Inversiones* entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos, el 24 de septiembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 24 de septiembre de 1992.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.
- Convenio de Cooperación Económica y de Inversiones* entre la República del Paraguay y la República de Sudáfrica, de 1974.
Fecha de entrada en vigor: 1974.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.
- Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y la Unión Económica Belga-Luxemburguesa para la Promoción y la Protección Recíproca de las Inversiones*, firmado en 1992.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido aún ratificado por el Congreso Nacional.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.
- Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones* entre la República del Paraguay y el Reino de los Países Bajos, firmado en La Haya el 29 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: No ha sido aún ratificado por el Congreso Nacional.
Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Acuerdos internacionales (continuación)

Acuerdo sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones entre la República del Paraguay y la Confederación Suiza, firmado en Berna el 31 de enero de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 31 de enero de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Convenio entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de China sobre Mutua Garantía de Inversiones, firmado en 1992.

Fecha de entrada en vigor: 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de Corea para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en Asunción el 22 de diciembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Acuerdo entre el Gobierno de la República de Paraguay y el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y Protección de Inversiones, firmado en Londres el 4 de junio de 1981.

Fecha de entrada en vigor: 4 de junio de 1981.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Convenio entre la República del Paraguay y la República de Chile para Evitar la Doble Tributación en Relación al Transporte Internacional Aéreo y Terrestre, firmado en Santiago el 20 de octubre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 20 de octubre de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Convenio para Evitar Doble Tributación en Materia de Ingresos Procedentes de la Explotación de Líneas Aéreas Internacionales, firmado entre Paraguay y Bélgica el 3 de julio de 1986.

Fecha de entrada en vigor: 3 de julio de 1986.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Ley No. 1087 del 27 de enero de 1983. Regula el Convenio de Doble Tributación entre Paraguay y Alemania.

Fecha de entrada en vigor: 27 de enero de 1983.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Convenio sobre Incentivos y Garantías para las Inversiones en el Marco de la OPIC, firmado entre Paraguay y Estados Unidos en septiembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: septiembre de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

Ley No. 124 del 11 de diciembre de 1991. Aprueba y ratifica el Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversión (MIGA) adoptado en Seúl, Corea, el 1 de octubre de 1985 y suscrito por Paraguay en Washington el 13 de septiembre de 1991.

Fecha de entrada en vigor: 6 de febrero de 1992.

Fuente: Ministerio de Industria y Comercio.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

La norma básica que regula la actuación del capital extranjero en Paraguay está contenida en la Ley No. 60 del 20 de diciembre de 1990 que aprueba, con modificaciones, el Decreto Ley No. 27 del 31 de marzo de 1990, por el cual se modifica y amplía el Decreto No. 19 del 28 de abril de 1989 que establece el Régimen de Incentivos Fiscales para la Inversión de Origen Nacional y Extranjero.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Las primeras regulaciones de la inversión extranjera tienen en Paraguay un origen cambiario. En 1945, en el marco de un Régimen de Control de Cambios, se creó en el Banco Central del Paraguay un registro de carácter optativo para capitales extranjeros, con el fin de facilitar la obtención de divisas para remesar al exterior.

En 1953 se dicta la Ley No. 202, referida a industrias nuevas y existentes, y en 1955 la Ley No. 246 sobre inversiones, que contenía normas relativas al registro de capitales de origen externo. En 1957 se estableció en Paraguay el mercado libre de cambios lo que significó eliminar todo incentivo para el registro de las inversiones extranjeras en el país.

El 9 de noviembre de 1970, se dictó la Ley No. 216 sobre Inversiones para el Desarrollo Económico y Social, primer antecedente de la legislación actual. La Ley No. 216 estableció un régimen de fomento de inversiones tanto nacionales como extranjeras, pero con normas específicas aplicadas a la inversión extranjera. Es el caso de la obligación de inscripción de dichas inversiones en el Registro de Capitales Incorporados, en el Banco Central del Paraguay, a fin de garantizar el derecho a remesar capital y utilidades al exterior. Las remesas de capital solo podían realizarse luego del tercer año del inicio de la producción o explotación y en cuotas anuales no superiores al 20% del capital inscrito.

El 12 de diciembre de 1975 la Ley No. 216 fue reemplazada por la Ley No. 550, Ley de Fomento de las Inversiones para el Desarrollo Económico y Social. En rigor, la Ley No. 550 no constituye una legislación específica para el capital extranjero, pues en ella se consagra un sistema de fomento de las inversiones, tanto nacionales como extranjeras. Sin embargo, en su normativa contemplaba la necesidad de inscribir el capital extranjero en un Registro de Capitales Incorporados, en el Banco Central del Paraguay, a fin de garantizar el derecho a remesar sumas al exterior por concepto de utilidades o reembolsos de capital. En materia de remisión de utilidades no se imponen limitaciones, sin embargo en relación a la repatriación de capital, se establece que sólo puede realizarse después del tercer año del inicio de la producción y hasta un 20% anual.

El 28 de abril de 1989, se dicta la Ley No. 19, mediante la cual se establece el Régimen de Incentivos para el Desarrollo Económico. Esta Ley tampoco era una norma específica al capital

extranjero, e introducía una serie de incentivos de carácter fiscal y aduanero, tanto a inversionistas nacionales como extranjeros. Esta Ley no estableció ninguna limitación a la repatriación de utilidades y capitales, pertenecientes a inversionistas extranjeros.

El 31 de marzo de 1990 se dictó el Decreto Ley No. 27, con el propósito de aclarar y facilitar la aplicación de los incentivos a las inversiones de capital establecidos por la Ley No. 19. Posteriormente, el 10 de julio de 1990 se dictó el Decreto No. 6361 que reglamentó el Decreto Ley No. 27.

Finalmente, el 26 de marzo de 1991 se dicta la Ley No. 60 que aprueba, con algunas modificaciones, el Decreto Ley No. 27. Esta Ley contempla básicamente, una serie de incentivos fiscales para la inversión tanto nacional como extranjera. Asimismo, establece la creación del Consejo de Inversiones, encargado de la autorización y registro de los proyectos de inversión que se acojan a este régimen de incentivos. Posteriormente, la Ley No. 117 del 6 de diciembre de 1991 establecerá ciertas garantías para el tratamiento de la inversión extranjera.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Ley No. 60 no presenta una definición específica de inversión extranjera. No obstante, en el Artículo No. 2 se señala que las inversiones extranjeras y nacionales pueden realizarse bajo las siguientes modalidades:

- a) En dinero, financiamiento, crédito de proveedores u otros instrumentos financieros.
- b) En bienes de capital, materias primas y otros insumos destinados a la industria local para la fabricación de bienes de capital.
- c) En marcas, dibujos, modelos y procesos industriales y demás formas de transferencia de tecnología susceptibles de licencias.
- d) En servicios de asistencia técnica especializados.
- e) En arrendamientos de bienes de capital.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

La Ley No. 117 del 6 de diciembre de 1991 establece en sus Artículos Nos. 1 y 2 que la inversión nacional y extranjera serán garantizadas en un marco de total igualdad para promover el desarrollo económico y social del Paraguay. Asimismo, el inversionista extranjero y las empresas o sociedades en que éste participe, tendrá las mismas garantías, derechos y obligaciones que las Leyes y Reglamentos otorgan a los inversionistas nacionales.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera

Para invertir en Paraguay y gozar de los beneficios otorgados por la Ley No. 60, se requiere solicitar la autorización del Consejo de Inversiones, organismo asesor del Ministerio de Industria y Comercio y del Ministerio de Hacienda. En la Resolución de Autorización se incluye un cronograma que debe ser respetado por el inversionista. En caso de no hacerlo perderá los beneficios acordados.

El dictamen del Consejo de Inversiones debe expedirse en el plazo máximo de 60 días a partir de la fecha de presentación de la solicitud. La Resolución Ministerial pertinente debe dictarse en sentido afirmativo o negativo en el plazo de 15 días a partir de la fecha del dictamen.

Por otro lado, la legislación vigente no establece propiamente el registro de la inversión extranjera. Sin embargo, dentro de las funciones del Consejo de Inversiones, está la de habilitar un registro de solicitudes y de los antecedentes de las autorizaciones otorgadas, el cual permita efectuar el control de su uso y destino.

6. Remisión de capital y utilidades

La normativa vigente no establece restricciones para las remesas al exterior, siempre que los capitales están debidamente registrados.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Los siguientes sectores presentan ciertas restricciones a la inversión extranjera, según las disposiciones legales vigentes:

a) La Ley No. 113 del 6 de noviembre de 1951, en su Artículo No. 5, establece que la Administración Paraguaya de Alcoholes (APAL), tiene el control de la producción y la venta exclusiva de alcoholes. Además, tiene la exclusividad en la adquisición del total de producción nacional de caña y alcoholes potables desnaturalizados y los destinados para combustibles de motores. En la actualidad esta empresa esta sometida a privatización, lo que indicaría la derogación de las restricciones impuestas por esta Ley.

b) La Ley No. 675 del 9 de septiembre de 1960, fija condiciones para concesión de hidrocarburos a extranjeros. Esta Ley establece que la explotación de yacimientos petrolíferos sólo puede hacerse, ya sea directamente por el Estado o a través de concesiones otorgadas a personas o entidades particulares. Las empresas extranjeras que soliciten concesiones de exploración o explotación de hidrocarburos, deben estar inscritas en los Registros Públicos Nacionales, fijar su domicilio en la capital del país y tener un representante de nacionalidad paraguaya. Sin embargo, no pueden solicitar, adquirir, ni poseer concesiones que estén situadas dentro de los 50 kms. de la frontera. Finalmente, las empresas con capital extranjero que se organicen en Paraguay deben ofrecer a capitales nacionales el 30% de sus acciones.

c) La Ley No. 1296 del 26 de octubre de 1967, Ley Orgánica para la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO). Esta Ley establece que la prestación del servicio público de telecomunicaciones dentro del territorio del Paraguay y con el exterior, por signos, escritos, imágenes o sonidos de cualquier naturaleza, por medio del telégrafo, radiotelefonía facsímile, televisión u otro sistema cualquiera de telecomunicación, está a cargo de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTELCO), en forma exclusiva.

d) La Ley No. 295 del 17 de noviembre de 1971, la cual es reglamentada por el Decreto No. 27371 del 19 de agosto de 1981. Este Reglamento reservaba a buques de bandera nacional el total del transporte marítimo y fluvial de carga de importación y exportación entre el Paraguay y los países atendidos por empresas nacionales de navegación. Si las cargas proceden o van dirigidas a los países de la ALADI, se mantiene esta exigencia en la siguiente proporción:

- Tramo marítimo, hasta el 50% del transporte.
- Tramo fluvial, de por lo menos el 50% del transporte.

Sin embargo, las restricciones impuestas por esta Ley serían levantadas, una vez iniciado el proceso de privatización de la Flota Mercante del Estado (FLOMERES).

e) La Ley No. 417 del 6 de noviembre de 1973, Ley de Bancos y Otras Entidades Financieras, modificada a través de la Ley No. 771 del 14 de noviembre de 1979, establece que las entidades financieras autorizadas a operar, sean nacionales o extranjeras, podrán distribuir sus utilidades previa aprobación de sus balances por parte de la Superintendencia de Bancos. La reinversión de utilidades y las condiciones de su remesa al exterior son reglamentadas por el Banco Central del Paraguay.

f) La Ley No. 1045 del 23 de diciembre de 1983 señala que toda obra pública sea ejecutada obligatoriamente por profesionales o empresas paraguayas. Si se trata de obras que requieren la contratación de empresas extranjeras, ellas deben actuar en asociación con empresas nacionales, cuya participación será hasta el límite de la capacidad de contratación-producción, que no será inferior:

- 40%, para las obras de ingeniería civil y arquitectónicas.
- 20%, para las obras de ingeniería industrial.
- 30%, para las prestaciones de servicios de consultoría.

8. Tributación

Paraguay tiene convenios vigentes con la República Federal de Alemania y con el Reino de Bélgica, para evitar doble tributación en materia de ingresos procedentes de la explotación de líneas aéreas internacionales.

Paraguay ha reformado de manera importante su sistema tributario y los cambios comenzaron a partir de julio de 1992. En este nuevo código se garantiza la estabilidad tributaria y otorga igualdad

de derechos a los inversionistas extranjeros y locales. La información incluida en esta sección corresponde a esta reforma.

Las empresas, tanto nacionales como extranjeras, con actividades en Paraguay deben pagar un impuesto a la renta del 30% sobre las utilidades.

El pago de dividendos a personas naturales o jurídicas en el exterior tiene una retención del 5%. Por otro lado, en Paraguay debe cancelarse un impuesto sobre las regalías del 17.5%. Finalmente, para el pago de intereses pagados al exterior se cancela un impuesto del 17.5% sobre un porcentaje variable del total del crédito.

En Paraguay, el impuesto a las ventas es de 4% para los bienes producidos localmente y entre 8 y 14% para aquéllos importados.

9. Royalties o regalías

En Paraguay no existen restricciones legales a la transferencia de tecnología, como así tampoco procedimientos institucionales de evaluación para la realización de este tipo de contratos.

En Paraguay, el pago de regalías está sujeto a la cancelación de un impuesto del 30%.

10. Incentivos a la inversión

El gobierno de Estados Unidos, como resultado de los cambios políticos y económicos en Paraguay, se ha comprometido en reincorporarlo a los sistemas de garantía que operan por medio de OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

Además, Paraguay ratificó a través de la Ley No. 944 del 22 de octubre de 1982, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados. Bajo este convenio los inversionistas pueden recurrir a los tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que administra el Banco Mundial.

Las inversiones, tanto nacionales como extranjeras, amparadas en la Ley No. 60 gozan de los siguientes beneficios fiscales y municipales:

- a) Exoneración total de los tributos fiscales y municipales que gravan la constitución, inscripción y registros de sociedades y empresas.
- b) Exoneración total de los tributos de cualquier naturaleza que gravan: la emisión, suscripción y transferencia de acciones o cuotas sociales; de los que gravan los aumentos de capital de sociedades o empresas y la transferencia de cualquier bien o derecho susceptible de valuación pecuniaria que los socios o accionistas aporten a la

sociedad como integración de capital, y los que gravan la emisión, compra y venta de bonos, deventures y otros títulos de obligaciones de las sociedades y empresas, que se encuentren previstos en el proyecto de inversión.

- c) Exoneración total de los gravámenes aduaneros y otros efectos equivalentes, incluyendo los impuestos internos de aplicación específica, sobre la importación de bienes de capital, materias primas e insumos destinados a la industria local.
- d) Liberación de la exigencia de cualquier tipo de encaje bancario o depósitos especiales para la importación de bienes de capital.
- e) Exoneración total de los tributos y demás gravámenes de cualquier naturaleza, que los prestatarios están legalmente obligados a pagar. Se exceptúan aquellos gravámenes que tomen a su cargo contractualmente, sobre los préstamos, adelantos, anticipos, créditos de proveedores y financiaciones nacionales o extranjeras.
- f) Cuando el monto de la financiación proveniente del extranjero y la actividad beneficiada con la inversión así lo justifique, se otorgarán los beneficios del párrafo anterior y la exoneración de los impuestos a las remesas y pagos al exterior por concepto de intereses, comisiones y capital, hasta la puesta en marcha del proyecto de inversión.
- g) Exoneración del 95% del Impuesto a la Renta proporcional a las ventas brutas generadas por la inversión efectuada por un período de 5 años, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto.
- h) Exoneración total de los impuestos que inciden sobre los dividendos y utilidades provenientes de los proyectos de inversión aprobados, por el término de 5 años, contados a partir de la puesta en marcha del proyecto.
- i) Exoneración total de los impuestos sobre el pago de alquileres, locación, utilidades, regalías, derechos de uso de marcas, de patentes de invención y otras formas de transferencia de tecnología, por un período de 5 años, a partir del año siguiente de la fecha de la Resolución por la cual se aprueba el proyecto de inversión.
- j) Exoneración total del impuesto al papel sellado y estampillas, establecido por la Ley No. 1003-64, y el impuesto a los servicios para el beneficiario, sobre los actos, contratos, pagos, recibos y pagarés que documentan las inversiones, establecido por la Ley No. 1035-83.

Estas exoneraciones pueden extenderse por el plazo de 10 años cuando las inversiones que se realicen provengan de recursos de repatriaciones de capital, o cuando ellas se radiquen en áreas de preferente desarrollo determinadas por los planes y programas elaborados por la Secretaría Técnica de Planificación. El plazo puede extenderse a 7 años si las inversiones provienen de incorporación de bienes de capital de origen nacional.

Las personas naturales o jurídicas que inviertan las utilidades netas de sus negocios, tienen derecho a una reducción de 50% del Impuesto a la Renta. Para tener derecho a este incentivo, la inversión deberá reflejarse en un aumento de 30% de su capital integrado como mínimo.

IX. PERU

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente En Perú el organismo encargado de la supervisión, registro y promoción de la inversión extranjera es la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), institución dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.

Definición nacional de inversión extranjera directa La Inversión extranjera directa en Perú, al igual que en los demás países miembros del Pacto Andino, se define, a través de la Decisión 291 (Régimen Común de Tratamiento de los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), como los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, máquinas nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

Además es importante destacar, que el Decreto No. 662, en su Artículo No. 1, define la inversión extranjera directa como las inversiones provenientes del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta bajo cualquiera de las siguientes modalidades:

- a) Aportes de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, al capital de una empresa nueva o existente, o en cualquiera de las formas societarias señaladas en la Ley General de Sociedades, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, máquinas nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.
- b) Las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior.
- c) La conversión de obligaciones privadas con el exterior en acciones.
- d) Las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Legislación vigente.
- e) Las inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio del Perú.
- f) Las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica, y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

Finalmente, el Decreto Legislativo No. 662, considera como inversión extranjera, las siguientes formas de inversiones de indirectas y de portafolio:

- a) Las inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos y papeles financieros cotizados en bolsas de valores o certificados de depósito bancario en moneda nacional o extranjera.
- b) Los recursos destinados a contratos de asociación en participación o similares que otorgan al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de una empresa, sin que ello suponga aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa receptora.

Participación mínima del capital extranjero En Perú, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera.

Sin embargo, de acuerdo a los criterios establecidos en la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena, dependiendo de la participación extranjera en el capital con derecho a voto, la empresa receptora es calificada como: a) empresa nacional (menos del 20%); b) empresa mixta (entre 20 y 50%), asimismo, se consideran empresas mixtas aquellas en que participe el Estado, entes paraestatales o empresas del Estado en un porcentaje no inferior al 30% del capital social y siempre que, a juicio del CONITE, el Estado tenga capacidad determinante en las decisiones de la empresa; y c) empresa extranjera (más de 50%).

Flujo de inversión extranjera directa En Perú, el flujo de inversión extranjera directa, se define como la variación neta en el capital de una empresa, originado por los nuevos aportes provenientes del exterior, la capitalización de reinversiones y reservas, la capitalización de créditos con el exterior, menos la venta de acciones de extranjeros a nacionales y la conversión de inversionistas extranjeros en nacionales. Los préstamos de ninguna especie son considerados en la definición de inversión extranjera directa.

Reinversión de utilidades Se entiende como reinversión a la inversión de las utilidades no distribuidas y otros recursos patrimoniales, provenientes de una inversión extranjera, en la misma empresa en que se hayan generado.

Criterios para el Registro En relación al registro efectuado por CONITE de la inversión extranjera directa materializada y todos sus componentes, ésta se efectúa en moneda de libre convertibilidad, tomando en cuenta el tipo de cambio vigente en la fecha en que se realiza el aporte. Las estadísticas sobre origen de la inversión, reflejan sólo los datos consignados en la solicitud como "domicilio del inversionista".

Cabe señalar que si bien las normas vigentes establecen la obligación de efectuar el registro de la inversión extranjera, no existe plazo para el cumplimiento de dicha obligación, ni sanción en caso de incumplimiento. Esto implica que los datos estadísticos sean siempre de carácter preliminar, ya que las cifras de cada uno de los años puede variar si una empresa regulariza sus registros.

- Stock de Inversión extranjera directa** Se entiende como stock de capital extranjero, al monto total, expresado en moneda libremente convertible, de los aportes de propiedad de inversionistas extranjeros, al capital de las empresas.
- En 1977, CONITE realizó una encuesta a las empresas con capital extranjero, dicho formulario tuvo carácter de declaración jurada y recogía información a nivel de inversionista sobre el monto de inversión al cierre del ejercicio de 1971, así como las variaciones posteriores hasta 1977. A partir de esta información, se comenzó a calcular el stock de capital extranjero como la acumulación de los flujos de inversión materializada y registrada en CONITE.
- Inversiones nacionales directas en el exterior** En Perú, el flujo de inversión nacional en el exterior representa el monto total de autorizaciones para invertir fuera del país que se otorgan en un año, menos las liquidaciones, ventas y reducciones de capital registradas en el mismo período. El stock es calculado como la acumulación de los flujos.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decreto Legislativo No. 662*, del 2 de septiembre de 1991. Este Decreto otorga un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías.
Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2 de septiembre de 1991.
- Decisión 291*, del 21 de marzo de 1991. Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, marzo de 1991.
- Decreto Legislativo No. 663* del 2 de setiembre de 1991. Aprueba el "Programa de Migración-Inversión" por el cual se otorgan todas las facilidades para que los inversionistas extranjeros se instalen en el Perú. Este Decreto fue modificado por la Ley No. 25555 publicada en el Diario Oficial El Peruano del 19 de junio de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 3 de septiembre de 1991 .
Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2 de septiembre de 1991.
- Decreto Legislativo No. 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada*, del 8 de noviembre de 1991. Esta Ley garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 162-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 12 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 11 de noviembre de 1991.
- Leyes sectoriales** *Constitución Política del Perú de 1979*, Artículo No. 126. Prohíbe la propiedad por parte de extranjeros de bosques, minas, tierras, fuentes de energía, etc, dentro de los 50 kms. de la frontera. Se requiere de una Ley específica para una autorización.
Fecha de entrada en vigor: 28 de julio de 1980.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII Grupo Andino, Volumen 2 Perú - Venezuela, Buenos Aires, 1986 y actualizaciones.
- Decisión 300* del 16 de mayo de 1991. Establece el Programa de Integración Industrial Metalmeccánico. Sustituye a la Decisión 146 de julio de 1979 que establecía el Programa de la Industria Metalmeccánica.
Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Año VIII, No. 82, Lima, 12 de junio de 1991.
- Decreto Legislativo No. 708*, del 5 de noviembre de 1991. Modifica la Ley General de Minería. Es modificado el régimen tributario y sus franquicias, además se otorga estabilidad cambiaria a la inversión garantizada por un contrato con el Estado, bajo los regímenes especiales para la inversión. Además, aquellas áreas que eran de uso exclusivo de MINERO PERU, las llamadas "áreas reservadas", ahora están abiertas a concesiones privadas. Este Decreto fue modificado por Decreto Ley No.25998 y Decreto Ley No.26121, publicados en el Diario Oficial El Peruano del 26 y 30 de diciembre de 1992, respectivamente.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 8 de noviembre de 1991.
- Decreto Legislativo No. 637, Ley General de Instituciones Bancarias*, del 24 de abril de 1991. Esta Ley garantiza un tratamiento sin discriminaciones entre inversionistas nacionales y extranjeras permitiendo la libre competencia. Además, las autorizaciones y condiciones para el otorgamiento de créditos bancarios fueron liberalizadas, y las tasas de interés fueron también desregularizadas, siempre que no excedan las máximas permitidas por el Banco Central de Reserva del Perú.
Fecha de entrada en vigor: 24 de abril de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 24 de abril de 1991.
- Decreto Supremo No. 014-92-EM*. Aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley General de Minería.
Fecha de entrada en vigor: 3 de junio de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 3 de junio de 1992.
- Decreto Ley No. 25977*. Aprueba la Ley de Pesca.
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 22 de diciembre de 1992.

- Leyes de transferencia de tecnología** *Decisión 291*, del 21 de marzo de 1991. Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías, que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, marzo de 1991.
- Decreto Legislativo No. 662*, del 2 de septiembre de 1991. Este Decreto otorga un régimen de estabilidad jurídica a las inversiones extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 162-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 12 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 1 de enero de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano, 2 de septiembre de 1991.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto Legislativo No. 668*, del 11 de septiembre de 1991. Establece medidas destinadas a garantizar la libertad de comercio exterior e interior como condición fundamental para el desarrollo del país. Este Decreto fue modificado por el Decreto Ley No. 25764, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 15 de octubre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 11 de septiembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 11 de septiembre de 1991.
- Decreto Legislativo No. 704*, del 5 de noviembre de 1991. Declara de interés nacional la creación en el país de Zonas Francas Industriales y Turísticas, Zonas de Tratamiento Espacial Comercial y Zonas Especiales de Desarrollo con la finalidad de promover la inversión, el empleo y la exportación, así como crear las condiciones sociales y económicas que propicien la pacificación.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 8 de noviembre de 1991.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Decreto Ley No. 26917*. Establece la Ley de Propiedad Industrial.
Fecha de entrada en vigor: 28 de diciembre de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 28 de diciembre de 1992.
- Decreto Ley No. 26122*. Establece la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal.
Fecha de entrada en vigor: 30 de diciembre de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 30 de diciembre de 1992.
- Leyes sobre promoción de exportaciones** *Decreto Ley No. 25764*. Se establece la creación de mecanismos *drawbacks* para la promoción de exportaciones.
Fecha de entrada en vigor: 15 de octubre de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 15 de octubre de 1992.
- Leyes sobre conversión de deuda** *Decreto Supremo No. 198-88-EF* del 22 de octubre de 1988. Se aprobó el Sistema de Conversión de Deuda Pública Externa en Inversión (CDI). Este Decreto adquirió rango de Ley mediante la Ley No. 25159.
Fecha de entrada en vigor: 23 de octubre de 1988.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 23 de octubre de 1988.
- Resolución Ministerial No. 305-88-EF/75* del 2 de diciembre de 1988. Aprueban el Reglamento del Sistema de Conversión de Deuda Externa en Inversión.
Fecha de entrada en vigor: 23 de noviembre de 1988.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 3 de diciembre de 1988.
- Leyes sobre privatizaciones** *Decreto Supremo No. 041-91-EF*, Proceso de Redimensionamiento del Estado, del 12 de marzo de 1991. Establece los lineamientos generales para la venta de 22 empresas públicas.
Fecha de entrada en vigor: 12 de marzo de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 12 de marzo de 1991.
- Decreto Legislativo No. 648*, del 12 de julio de 1991. Autoriza a ELECTROPERU, empresa estatal de generación de energía eléctrica, a transferir sus participaciones en siete empresas regionales de electricidad.
Fecha de entrada en vigor: 12 de julio de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 12 de julio de 1991.
- Decreto Legislativo No. 655*, del 7 de agosto de 1991. Elimina el monopolio de PETROPERU, empresa estatal de producción de derivados del petróleo y petroquímica, y sus subsidiarias en el desarrollo, exploración y servicio de hidrocarburos y actividades de petroquímica básica, permitiendo la libre competencia entre empresas nacionales y extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 7 de agosto de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 7 de agosto de 1991.
- Decreto Legislativo No. 670*, del 16 de septiembre de 1991. Se eliminan las restricciones, trámites y procedimientos que limitaban la participación del capital privado, nacional y extranjero, en los Servicios de Transporte Aéreo.
Fecha de entrada en vigor: 16 de septiembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 16 de septiembre de 1991.
- Decreto Supremo No. 149-91-PCM*, del 18 de septiembre de 1991. Se aprueba el procedimiento especial de subasta pública para la transferencia de activos de empresas públicas declaradas en emergencia. Se crea el Comité Especial que se encargará de aprobar los activos por transferirse, y el Comité de Ventas para realizar la transferencia mediante subasta pública.
Fecha de entrada en vigor: 18 de septiembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 18 de septiembre de 1991.

Leyes sobre
privatizaciones
(continuación)

Decreto Legislativo No. 674, Ley de Promoción de Inversión Privada en las Empresas del Estado, del 27 de septiembre de 1991. Esta Ley presenta un esquema de organización y procedimiento para la privatización de las empresas del Estado. Estas transferencias de propiedad pueden hacerse bajo: la transferencia de acciones o activos y aportes de capital de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 070-92-PCM, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 17 de julio de 1992. Asimismo, fue aclarado por el Decreto Ley No. 25618 y modificado por el Decreto Ley No. 26120, publicados en el Diario Oficial El Peruano del 20 de julio y 30 de diciembre de 1992, respectivamente.
Fecha de entrada en vigor: 27 de septiembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 27 de septiembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 676, del 5 de octubre de 1991. Se declara de interés nacional la rehabilitación y el mantenimiento de la infraestructura vial del país. Se autoriza al Ministerio de Transporte y Comunicaciones a otorgar concesiones al sector privado de tramos de la red vial nacional. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 189-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 17 de noviembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 5 de octubre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano 5 de octubre de 1991.

Decreto Legislativo No. 683, del 5 de octubre de 1991. Liberaliza el tráfico y carga marítima.
Fecha de entrada en vigor: 5 de octubre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano 5 de octubre de 1991.

Decreto Legislativo No. 685, del 5 de noviembre de 1991. Prohíbe toda forma de monopolio, acaparamiento, prácticas de acuerdos restrictivos en el servicio postal. El Estado garantiza la libertad de tránsito postal en el país.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 5 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 690, del 5 de noviembre de 1991. Declara de preferente interés nacional la inversión privada en la actividad ferroviaria.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 7 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 696, del 5 de noviembre de 1991. Declara de necesidad, utilidad pública e interés social, a la inversión privada en acciones de renovación urbana a nivel nacional. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 189-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 17 de noviembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 7 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 697, del 5 de noviembre de 1991. Declara de interés nacional la promoción de la inversión privada en el campo del saneamiento, específicamente en las actividades de explotación de los servicios de agua potable, alcantarillado, disposición de excretas, reutilización de aguas servidas y limpieza pública. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 189-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 17 de noviembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 7 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 701, del 5 de noviembre de 1991. Elimina las prácticas monopólicas, controlistas, restrictivas a la libre competencia en la producción y comercialización de bienes y prestación de servicios, posibilitando que la iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de usuarios y consumidores. Este Decreto fue modificado por el Decreto Ley No. 26004, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 27 de diciembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 7 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 702, del 5 de noviembre de 1991. Dispone de utilidad y necesidad públicas el desarrollo de las telecomunicaciones como instrumento de pacificación y de afianzamiento de la conciencia nacional para lo cual requiere captar inversiones privadas tanto nacionales como extranjeras. Este Decreto fue modificado por el Decreto Ley No. 766, Decreto Ley No. 26095 y Decreto Ley No. 26096, publicados en Diario Oficial El Peruano del 15 y 29 de diciembre, respectivamente.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 8 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 709, del 5 de noviembre de 1991. Dispone normas orientadas a crear condiciones para el desarrollo de la inversión privada en predios de arrendamiento. Este Decreto fue modificado por el Decreto Ley No. 25924, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 7 de diciembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 8 de noviembre de 1991.

Decreto Ley No. 25897. Crea el Sistema Privado de Administradoras de Fondos de Pensiones. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo 206-92-EF, publicado el 7 de diciembre de 1992. Asimismo, el Decreto Supremo 220-92-EF, publicado el 1 de enero de 1993, aprueba el Estatuto de la Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones.
Fecha de entrada en vigor: 6 de diciembre de 1992.
Fuente: Diario Oficial El Peruano del 6 de diciembre de 1992.

Leyes sobre
privatizaciones
(conclusión)

Decreto Legislativo No. 718, del 5 de noviembre de 1991. Dispone la creación del Sistema Privado de Salud, que tendrá carácter complementario al sistema administrado por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS). Las organizaciones de Servicios de Salud (OSS), administran el sistema privado de salud conforme esta Ley y su reglamento.

Fecha de entrada en vigor: 5 de noviembre de 1991.

Fuente: Diario Oficial El Peruano del 10 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 727, del 8 de noviembre de 1991. Establece las normas orientadas a crear condiciones necesarias para el desarrollo de la inversión privada en la actividad de la construcción.

Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.

Fuente: Diario Oficial El Peruano del 11 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, del 8 de noviembre de 1991. Esta Ley garantiza la libre iniciativa y las inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 162-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 12 de octubre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.

Fuente: Diario Oficial El Peruano del 11 de noviembre de 1991.

Decreto Legislativo No. 758, del 8 de noviembre de 1991. Promueve la inversión privada en obras de infraestructura y servicios públicos, y regula su explotación, para cuyo efecto el Gobierno Central, Gobiernos Regionales y Gobiernos Municipales, según corresponda, podrán otorgar concesiones a personas jurídicas, nacionales o extranjeras, para la construcción, reparación, conservación y explotación de obras de servicios públicos. La concesión de la obra implica la explotación del servicio. Este Decreto fue reglamentado por el Decreto Supremo No. 189-92-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano del 17 de noviembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.

Fuente: Diario Oficial El Peruano del 11 de noviembre de 1991.

Resolución Suprema No. 071-92-EF/10, de junio de 1992. Autoriza el uso de deuda externa (sólo capital de trabajo y créditos de la banca comercial de corto plazo) para fines de privatización.

Fecha de entrada en vigor: junio de 1992.

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

Acuerdos
internacionales

Decreto Ley No. 25883 del 26 de noviembre de 1992. Autoriza al Ministro de Economía y Finanzas a negociar y suscribir Convenios Bilaterales par evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Tributaria.

Fecha de entrada en vigor: 26 de noviembre de 1992.

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

Convenio Constitutivo de la Agencia Multilateral de Garantía a las Inversiones (MIGA) del 19 de diciembre de 1991. Este Convenio fue ratificado por la Resolución Legislativa No. 25312 del 4 de abril de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 4 de abril de 1992.

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI), del 4 de septiembre de 1991. Está pendiente su ratificación.

Fecha de entrada en vigor: 4 de septiembre de 1991.

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

Convenio sobre Incentivos para las Inversiones del Overseas Private Investment Corporation (OPIC), suscrito con el Gobierno de los Estados Unidos el 16 de diciembre de 1992.

Fecha de entrada en vigor: 16 de diciembre de 1992.

Fuente: Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

Dentro del marco de reformas estructurales que se vienen aplicando en el Perú, durante 1991 se promulgó el Decreto Legislativo No. 662, que otorga un Régimen de Estabilidad Jurídica a las Inversiones Extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías, publicado el 2 de septiembre de 1991 y que entró en vigor a partir del 1 de enero de 1992.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa.

Con anterioridad a la década del sesenta, en el Perú, no existieron normas que limitaran la inversión extranjera. Sin embargo, desde 1968, año en que se iniciaron las nacionalizaciones de empresas extranjeras, se dictaron una serie de medidas aisladas que tenían por finalidad controlar la entrada del capital extranjero.

El 27 de julio de 1970, se dictaron las primeras disposiciones generales para regular la inversión extranjera, mediante la Ley No. 18350, Ley General de Industrial, y en su Reglamento a través del Decreto Supremo No. 001-71-IC/DS del 25 de enero de 1971. Esta Ley establecía que las empresas industriales que se constituían con capital totalmente extranjero debían firmar un contrato con el Estado, en el cual se fijaba un plazo al cabo del cual y dentro de las condiciones que se estipulaban, el porcentaje de inversión extranjera de la empresa no podía ser superior a un tercio del capital social.

El 18 de mayo de 1971, a través del Decreto Ley No. 18858, se impusieron restricciones al acceso al crédito interno a las empresas que tuvieran más del 20% de su capital suscrito por inversionistas extranjeros.

El 30 de junio de 1971, se dictó el Decreto Ley No. 18900 mediante el cual se incorporaba al ordenamiento interno del país las normas del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros del Grupo Andino, la llamada Decisión 24. Esta normativa incorporaba una serie de restricciones y condiciones para que se llevaran a cabo las inversiones extranjeras en la subregión andina. Entre éstas tenemos la limitación del derecho de remisión de utilidades, obligación de registro de la inversión, prohibición de acceder al crédito interno de largo plazo y el compromiso de las empresas extranjeras o mixtas de convertirse en nacionales en un plazo determinado de años.

El 19 de octubre de 1971, mediante el Decreto Ley No. 18999, fue reglamentado el Decreto Ley No. 18900 y se determinaron los organismos nacionales competentes encargados de controlar y regular las inversiones extranjeras en el Perú. De esta manera se estableció que el Ministerio del sector productivo específico en que se fuera a realizar la inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina Nacional de Integración, el Ministerio de Industria y Comercio, y el Banco

Central de Reserva del Perú eran designados como los organismos nacionales competentes dependiendo de la materia de que se tratara.

El 24 de abril de 1981, mediante el Decreto Legislativo No. 71, se crea la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnología Extranjeras (CONITE). Esta institución se convirtió a partir de entonces en el único organismo nacional competente, su reglamento fue establecido por el Decreto Supremo No. 005-82-EFC del 10 de enero de 1982. En este reglamento se estableció que las funciones de CONITE serían las de proponer y ejecutar la política nacional de tratamiento a la inversión, tecnologías y marcas extranjeras, como así también, la de evaluar el aporte de las inversiones y tecnologías de origen foráneo.

Desde la promulgación del Decreto Ley No. 18900, no hubo cambios importantes en la legislación sobre tratamiento a la inversión extranjera en el Perú. Sin embargo se reguló haciendo uso de normas de menor jerarquía como normas cambiarias y otras resoluciones para controlar los flujos de inversión extranjera. Así por ejemplo, mediante Decreto Supremo No. 260-86-EF del 8 de agosto de 1986, se prohibieron las remesas de utilidades por un período de 24 meses.

En 1987, con la promulgación de la Decisión 220 de la Junta del Acuerdo de Cartagena (JUNAC) y su ratificación por parte del gobierno peruano, Resolución del Directorio de CONITE No. 005-89-EF/35 del 29 de septiembre de 1989, se liberalizó en cierta medida el tratamiento a la inversión extranjera aunque se mantuvieron muchos criterios proteccionistas. Entre los principales cambios de la Decisión 220 con relación a la Decisión 24 destacan:

- a) La eliminación de la obligación de presentar solicitud al organismo nacional competente.
- b) La eliminación de la prohibición de los países miembros de autorizar inversión extranjera directa destinada a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales o subregionales.
- c) Fue ampliado el derecho a la reexportación del capital.
- d) Fue suprimida la restricción que impedía a las empresas extranjeras acceder a crédito interno de largo plazo.
- e) Se eliminaron los sectores reservados a nivel común y se dio mas libertad a los países para que legislaran sobre esta materia.

El 13 de marzo de 1991, mediante la Resolución del Directorio de CONITE No. 003-91-EF/35, se estableció el Reglamento de Inversiones Extranjeras y Contratación de Tecnologías, Patentes, Marcas y Licencias de Origen Extranjero. Esta nueva legislación tiene como lineamiento más importante el hecho de conceder plena libertad al inversionista extranjero para repatriar parcial o totalmente su capital y utilidades, derecho que mantenía restricciones desde 1986.

El 21 de marzo de 1991, se promulgó la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que liberaliza y desregula la inversión extranjera en la subregión andina. El Perú a través

de la Resolución del Directorio de CONITE No. 004-91-EF/35 le dio validez nacional a dicha norma subregional ratificando además lo establecido por la Resolución No. 003-91-EF/35. La Decisión 291 significó un cambio importante en el tratamiento a la inversión extranjera, destacándose:

- a) Se reconocen como aportes de capital las contribuciones tecnológicas, modelos industriales, asistencia técnica, etc., que pueda presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos o instrucciones.
- b) Se eliminaron las prohibiciones de autorizar inversiones extranjeras en actividades adecuadamente atendidas por empresas existentes.
- c) Se elevó de 20% a 100% el porcentaje de las utilidades que pueden ser remesadas al exterior.
- d) Se consagró el principio de no discriminación y se cambió el requisito de autorización por el de registro para todas las operaciones.
- e) Se flexibilizaron los criterios en cuanto a los contratos de transferencia de tecnología.
- f) Se establece que no habrá discriminación entre empresas extranjeras, mixtas y nacionales.

Estas normas fueron posteriormente derogadas y reagrupadas en otras leyes que regulan la inversión nacional y extranjera en el Perú.

Finalmente, el 2 de septiembre de 1991, se promulgó el Decreto Legislativo No. 662 que otorga un Régimen de Estabilidad Jurídica a las Inversiones Extranjeras mediante el reconocimiento de ciertas garantías. Estas dos últimas normas complementadas por algunas leyes específicas como el Decreto Legislativo No. 663, que entrega el Reglamento de Migración para Inversionistas, constituyen el actual marco legal de la inversión extranjera en el Perú.

El Decreto Legislativo No. 662, añade nuevos conceptos que lo hace muy novedoso con respecto al marco normativo vigente en los últimos veinte años, los que se pueden sintetizar en lo siguiente:

- a) Permite la inversión extranjera en cualquier actividad económica, sin restricciones.
- b) Amplía el concepto de lo que se debe considerar como inversión extranjera a:
 - Las inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio de la República.
 - Las inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos, papeles financieros cotizados en la Bolsa de Valores.
 - Los recursos que otorgan al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de una empresa, sin que ello suponga aporte de

capital, sino, de aprovisionamiento de bienes y servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en el volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa.

- c) Se garantiza el derecho a transferir divisas al exterior, provenientes del capital o utilidades, sin autorización del Gobierno Central u otro organismo público descentralizado.
- d) Los inversionistas extranjeros pueden adquirir acciones, participaciones o derechos de propiedad en cualquier caso, quedando derogadas todas las Leyes que limitan o restringen esta libertad.
- e) Los inversionistas extranjeros y las empresas en las que éstos participan, tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más excepción que las que establecen la Constitución Política del Perú.
- f) El Estado se compromete a mantener vigentes los convenios de estabilidad celebrados hasta su culminación, y no pueden ser modificados unilateralmente por Decreto Supremo.
- g) Como condición para la aplicación de la estabilidad jurídica, se fijan niveles mínimos de inversión: US\$ 2 millones o US\$ 500000 siempre que generen US\$ 2 millones en divisas al cabo de tres años después de firmado el convenio, o un mínimo de 20 puestos de trabajo permanentes.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena define como inversión extranjera directa los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, máquinas nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente, se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

El Decreto No. 662, en su Artículo No. 1, define la inversión extranjera directa como las inversiones provenientes del exterior que se realicen en actividades económicas generadoras de renta bajo cualquiera de las siguientes modalidades:

- a) Aportes de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, canalizados a través del Sistema Financiero Nacional, de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras, al capital de una empresa nueva o existente, o en cualquiera de las formas

societarias señaladas en la Ley General de Sociedades, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, máquinas nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

- b) Las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior.
- c) La conversión de obligaciones privadas con el exterior en acciones.
- d) Las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Legislación vigente.
- e) Las inversiones en bienes ubicados físicamente en el territorio del Perú.
- f) Las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica, y conocimientos técnicos patentados o no patentados que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

Además, el Decreto Legislativo No. 662, considera como inversión extranjera, las siguientes formas de inversiones de indirectas y de portafolio:

- a) Las inversiones destinadas a la adquisición de títulos, documentos y papeles financieros cotizados en bolsas de valores o certificados de depósito bancario en moneda nacional o extranjera.
- b) Los recursos destinados a contratos de asociación en participación o similares que otorgan al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción de una empresa, sin que ello suponga aporte de capital y que corresponde a operaciones comerciales de carácter contractual a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes o servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o en las utilidades netas de la referida empresa receptora.

4. Tratamiento jurídico de la inversión extranjera directa

El Decreto Legislativo No. 662, en su Artículo No. 1 establece que el Estado promueve y garantiza las inversiones extranjeras efectuadas y por efectuarse en el país, en todos los sectores de la actividad económica y en cualquiera de las formas empresariales o contractuales permitidas por la legislación nacional.

En el Artículo No. 2, se establece que los inversionistas extranjeros y las empresas en las que éstos participan tienen los mismos derechos y obligaciones que los inversionistas y empresas nacionales, sin más excepciones que las establecidas en la Constitución Política del Perú. Además,

se enfatiza que en ningún caso el ordenamiento jurídico nacional discriminará entre inversionistas ni entre empresas en función a la participación nacional o extranjera en las inversiones.

El Artículo No. 4, establece además que el derecho de propiedad de los inversionistas extranjeros no tiene más limitaciones que las que establece la Constitución Política del Perú. Además, el Artículo No. 5, garantiza los derechos de propiedad intelectual e industrial en las mismas condiciones que se aplican a los inversionistas nacionales. Por último, el Artículo No. 6, asegura un respeto a la libertad de comercio e industria dentro del país así como la libertad de exportación e importación.

El Decreto Legislativo No. 662 contempla en sus Artículos Nos. 10, 11 y 12 el tema de la Estabilidad Jurídica a la Inversión Extranjera. Esta Ley establece que la Comisión Nacional de Inversión y Tecnología Extranjera (CONITE) en representación del Estado puede celebrar con los inversionistas extranjeros, con anterioridad a la realización de la inversión y al registro correspondiente, convenios para garantizar los siguientes derechos:

- a) Estabilidad del régimen tributario vigente al momento de celebrarse el convenio.
- b) Estabilidad del régimen de libre disponibilidad de divisas.
- c) Estabilidad del derecho a la no discriminación.

Además, se establece que las empresas que se constituyan o las ya establecidas en el Perú con nuevos aportes de capitales extranjeros pueden gozar de los siguientes derechos:

- a) Estabilidad de los regímenes de contratación de trabajadores en cualquiera de sus formas.
- b) Estabilidad de los regímenes especiales orientados exclusivamente a la exportación como Admisión Temporal, Zonas Francas Industriales, Comerciales y Turísticas, Zonas de Tratamiento Especial, y otros que se creen en el futuro.

Para obtener estos beneficios el inversionista extranjero debe comprometerse a invertir US\$ 2 millones en un plazo de dos años o, en su defecto, US\$ 500000 con la condición de que se generen veinte puestos de trabajo en forma directa o se generen exportaciones por US\$ 2 millones en los tres años siguientes a la suscripción del contrato. De no cumplirse con estas condiciones en los plazos estipulados, se procederá a anular el contrato y el inversionista tendrá que pagar todos los tributos y obligaciones que hubiera dejado de pagar por la estabilidad tributaria de la cual gozó.

Los contratos que se suscriban tienen una duración de diez años, el Estado Peruano los garantiza y se somete para cualquier diferencia a tribunales arbitrales, por lo que últimamente se ha ratificado el Convenio Constitutivo de la Agencia Multinacional de Garantía a las Inversiones Extranjeras (MIGA), a través de la Resolución Legislativa No. 25312, del 2 de abril de 1991.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

El Decreto Legislativo No. 662, en su Artículo No. 3, establece que las inversiones extranjeras que se efectúen en el país quedan autorizadas automáticamente.

Sin embargo, la inversión extranjera una vez efectuada, debe registrarse ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE). Se le considera automáticamente registrada si transcurridos 15 días útiles de presentada la solicitud, CONITE no se pronuncia en sentido contrario.

6. Remisión de utilidades y capital al exterior

La legislación actualmente vigente en el Perú garantiza el derecho de los inversionistas extranjeros a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, sin autorización previa de ninguna autoridad del Gobierno Central u organismos públicos descentralizados, Gobiernos Regionales o Gobiernos Municipales, previo pago de los impuestos correspondientes lo siguiente:

- a) El 100% de sus capitales provenientes de las inversiones registradas ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE).
- b) El 100% de los dividendos o las utilidades netas comprobadas provenientes de su inversión, así como las contraprestaciones por el uso o disfrute de bienes ubicados físicamente en el país, registrada ante CONITE, y las regalías y contraprestaciones por el uso y transferencia de tecnología, incluido cualquier otro elemento constitutivo de propiedad industrial que autorice CONITE.

De acuerdo al Artículo No. 9 del Decreto Legislativo No. 662, para cualquier operación cambiaria, ya sea venta o compra de divisas, los inversionistas extranjeros tienen el derecho a utilizar el tipo de cambio que les sea más favorable.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero.

En Perú el Estado promueve y garantiza las inversiones extranjeras en todos los sectores de la economía. Esta política se ve respaldada por la privatización de empresas estatales y eliminación de los monopolios y las practicas restrictivas al comercio aplicadas con anterioridad por el Estado, en la comercialización de alimentos, seguridad social, telecomunicaciones, radiodifusión, publicidad, seguros, reaseguros, correo, comercialización de productos pesqueros y mineros y otras áreas. Quizás la única limitación actualmente existente en el Perú al capital extranjero es la siguiente:

- a) La Constitución Política de la República, en su Artículo No. 126, garantiza la igualdad en cuanto a la propiedad, pero establece que dentro de los cincuenta kilómetros de las fronteras, los

extranjeros no pueden adquirir ni poseer, por ningún título, minas, tierras, bosques, aguas, combustibles ni fuentes de energía, directa ni indirectamente, individualmente o en sociedad bajo pena de perder en beneficio del Estado, el derecho adquirido. Se exceptúa el de caso de necesidad nacional declarada por Ley expresa. Últimamente se está estudiando la posibilidad de hacer uso de esta última atribución para fomentar la Inversión en sectores como la industria, la agricultura y la minería.

8. Tributación

Perú aprobó un convenio con los países del Pacto Andino (Bolivia, Ecuador, Colombia y Venezuela) con el fin de evitar la doble tributación. Tiene firmado un protocolo con Argentina para evitar la doble tributación de la renta procedente del transporte marítimo y aéreo entre ambos países. Con Suecia suscribió un acuerdo para evitar doble tributación con respecto a impuestos a la renta y al capital.

Se encuentra en negociaciones con Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido para suscribir acuerdos que eviten la doble tributación.

En virtud de la Estabilidad del Régimen Tributario que se garantiza a través del Decreto Legislativo No. 662, el inversionista extranjero respecto al Impuesto a la Renta correspondiente a la empresa receptora de la inversión y al que afecte a las utilidades que se le atribuyan y a los dividendos que se distribuyan en su favor, no se verá afectado con una tasa mayor que aquella considerada en el convenio correspondiente. De esta manera, si el Impuesto a la Renta correspondiente a la empresa aumentara, se reducirá la tasa que afecte al inversionista extranjero en la proporción necesaria para permitir que la utilidad de la empresa que finalmente queda a libre disposición de él, sea por lo menos igual a la garantizada.

Las empresas con actividades en el Perú deben pagar un Impuesto a la Renta del 37% sobre las utilidades. En el caso de subsidiarias de empresas extranjeras éstas deben pagar un 30% más 10%. En Perú no existen impuestos aplicables a las utilidades extraordinarias.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros tiene una retención del 10%. Los intereses pagados al exterior debe cancelar un impuesto de 37%, el cual puede ser reducido por el Banco Central de Reserva a 1% si es calificado como un crédito promocional.

Las ganancias producidas por la utilización de regalías son gravadas con un impuesto del 28%, el cual en ciertas condiciones puede reducirse en 5%.

El Impuesto General sobre las Ventas alcanza en el Perú al 14%, más un 2% de impuestos locales.

9. Royalties o regalías

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en su Artículo No. 14 (inciso g) establece que para los efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o patentes se debe tener en cuenta que dichos contratos no contengan, entre otras cosas, cláusulas que obliguen a pagar regalías por patentes o marcas no utilizadas o vendidas.

Asimismo, el Artículo No. 15 señala que las contribuciones tecnológicas intangibles, en la medida que no contribuyen aportes de capital, darán derecho al pago de regalías. Además, las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, previo pago de los impuestos correspondientes. Finalmente, cuando estas contribuciones tecnológicas sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en los casos previamente calificados por el organismo nacional competente de Perú.

Por otra parte, ratificando lo anterior, el Decreto Legislativo No. 662, en su Artículo No. 21, establece que los contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de propiedad industrial de origen extranjero, así como de asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia que estipulen el pago de regalías calculadas sobre porcentajes de las ventas netas de un producto determinado u otro sistema de cálculo, se entienden automáticamente registrados con su sola presentación ante la Comisión Nacional de Inversiones y Tecnologías Extranjeras (CONITE), sin limitación de cantidad o porcentaje alguno y siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el Artículo No. 13 y en los dos últimos párrafos del Artículo No. 14 de la Decisión 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Las empresas locales consideradas como filiales de empresas extranjeras pueden celebrar con su casa matriz u otras empresas filiales de la misma casa matriz, los contratos que estipulen el pago de regalías, correspondiendo la deducción de tal pago como gastos para efectos del Impuesto a la Renta.

Los pagos de regalías aquí señalados se efectúan previo pago del 28% de impuestos contemplado en el Régimen Tributario del Perú.

X. URUGUAY

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	El <u>Ministerio de Economía y Finanzas</u> es el organismo nacional competente ante el cual los inversionistas extranjeros deben gestionar la autorización de radicación de la inversión extranjera. Dicha autorización está precedida por el dictamen proveniente de una <u>Comisión para el Desarrollo de la Inversión</u> dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas.
Definición nacional de inversión extranjera directa	La legislación uruguaya establece que se entenderá por inversión extranjera todo capital proveniente del exterior, con derecho a transferencia de su valor así como de sus utilidades. Asimismo, las modalidades que podrá adoptar el capital extranjero serán las de divisas, maquinarias, patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica y otras formas que se consideren de interés a juicio de las autoridades.
Participación mínima del capital extranjero	En Uruguay, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera. No obstante, se considera como empresa de capital extranjero, a aquélla cuyo capital proveniente del exterior represente más del 50% del capital, con poder jurídico de decisión.
Flujo de inversión extranjera directa	El flujo de inversión extranjera directa está calculado como la diferencia entre los stocks de capital extranjero invertido en el país, para dos años consecutivos.
Remisión de utilidades	Se entiende por capital con derecho a ser transferido al exterior, el correspondiente a la inversión inicialmente autorizada e ingresada, más la utilidades netas capitalizadas, menos el capital ya transferido y menos las pérdidas netas. El Banco Central no podrá limitar el derecho de los inversionistas de remesar utilidades o capital, debiendo asegurar en todo caso su convertibilidad y transferencia.
Criterios para el registro	En el Uruguay no existe un régimen cambiario que controle bajo registros, las transacciones de divisas realizadas desde y hacia el exterior. Frente a esta carencia de información sobre la inversión extranjera directa presente en el Uruguay, el Banco Central preparó una encuesta que comprende el período 1986-1989. Esta iniciativa presentó múltiples inconvenientes, donde el más importante, fue la identificación de las inversiones extranjeras en un régimen, donde no existe obligación legal para que estas empresas registren sus operaciones. Para tal efecto se consideró la lista de empresas encuestadas por el Banco Central del Uruguay y el BID-INTAL en el año 1979, para la preparación del documento <u>Empresa Manufacturera Extranjera en el Uruguay. Aspectos Cuantitativos</u> , el cual sirvió de punto de referencia para los resultados obtenidos. Por otro lado, se recopiló información en la Unidad Asesora de Promoción Industrial del Ministerio de Industria y Energía, oficina a través de la cual se cursan, evalúan y aprueban los proyectos de inversión que se amparan en el régimen de la denominada Ley de Promoción Industrial. Otras fuentes utilizadas fueron los balances publicados en el Diario Oficial, aprovechando la norma legal que obliga a las sociedades anónimas a publicar anualmente sus estados contables bajo un formato y metodología uniforme. La encuesta realizada por el Banco Central del Uruguay estuvo dirigida especialmente a empresas del sector secundario y terciario, el último en forma parcial. En el caso de la información correspondiente al sector primario ésta es nula a nivel oficial: ningún organismo vinculado al área agropecuaria tiene estimaciones oficiales sobre la tenencia de tierras por parte de extranjeros, lo cual es muy común, especialmente, en las regiones fronterizas del país. Por otro lado, esta muestra permite identificar y encuestar a más del 90% de las empresas correspondientes al sector secundario. En el caso del sector terciario, la cobertura es menor y difiere según el tipo de servicio. Por ejemplo, en el sector financiero la cobertura es de 100%; en los astilleros navales, de 100%; en transporte, de 100%, mientras que para la construcción y el comercio no fue posible identificar las empresas con participación extranjera.
Stock de capital extranjero directo	El stock de capital extranjero es calculado en base a los resultados de la encuesta realizada por el Banco Central del Uruguay, y definido como el patrimonio neto total de las empresas, según sus estados contables. Sus componentes son: <ul style="list-style-type: none"> a) Capital social. b) Resultados acumulados, es decir utilidades reinvertidas o no distribuidas. c) Ajustes patrimoniales, es decir pasivos con la casa matriz (créditos inter-compañía).

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley No. 14179* del 28 de marzo de 1974. Establece el régimen normativo en materia de inversión extranjera. Esta norma fue modificada por la *Ley No. 14244* del 26 de julio de 1974 y reglamentada por el Decreto No. 808/974 del 10 de octubre de 1974. Están en estudio algunas modificaciones a estas normas.
Fecha de entrada en vigor: 5 de abril de 1974.
Fuente: Presidencia de la República, El Uruguay Promueve el Ingreso de Capitales, Montevideo, 1975.
- Decreto No. 863* del 23 de diciembre de 1986. Crea la Comisión para el Desarrollo de la Inversión, encargada de coordinar y promover las inversiones nacionales y extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 23 de diciembre de 1986.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 15322* del 14 de septiembre de 1982. Aprueba el Sistema de Intermediación Financiera. Esta Ley ha sido modificada por la *Ley No. 1632* del 12 de noviembre de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 23 de septiembre de 1982
Fuente: Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Documentos, No. 21322, Tomo 308, Año LXXVII, del 23 de septiembre de 1982, y Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Ley No. 14178* del 28 de marzo de 1974. Establece la Ley de Promoción Industrial para la instalación de industrias que contribuyan al desarrollo nacional. Esta Ley fue reglamentada por Decreto No. 703/974 del 5 de septiembre de 1974 y modificada por el Artículo No. 13 del Decreto No. 733 del 30 de diciembre de 1991, por el Artículo No. 617 de la Ley No. 15903 del 18 de noviembre de 1987 y por los Decretos No. 140/91, 388/91 y un Decreto del 31 de marzo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 18 de abril de 1974
Fuente: Presidencia de la República, El Uruguay Promueve el Ingreso de Capitales, Montevideo, 1975, y Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Decreto No. 68/91* del 21 de enero de 1990. Se declara de interés nacional la actividad de inversión en la categoría de "Complejos Turísticos". Este Decreto fue complementado por los Decretos No. 271/92, 273/92 y 647/92.
Fecha de entrada en vigor: 21 de enero de 1990.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de La Inversión.
- Ley No. 15657* de octubre de 1984. Establece un régimen especial para astilleros, varaderos y diques.
Fecha de entrada en vigor: octubre de 1984.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de La Inversión.
- Ley No. 15939* del 28 de julio de 1987. Se declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, la economía forestal. Esta Ley fue modificada por el Artículo 13 del Decreto No. 733 del 30 de diciembre de 1991; por el Decreto No. 452 del 6 de julio de 1988 y por el decreto No. 931 del 10 de diciembre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 28 de julio de 1987.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de La Inversión.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Ley No. 9956* del 1 de octubre de 1940. Establece disposiciones para el registro de marcas de fábrica, se determinan penalidades a los infractores y se instituye la Dirección de Propiedad Industrial. Esta Ley fue reglamentada por un Decreto del 29 de noviembre de 1940.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1940.
Fuente: Registro Nacional de Leyes, Decretos, etc., octubre de 1940.
- Ley No. 10089* del 12 de diciembre de 1941. Protege el derecho moral de los descubridores e inventores a que se les reconozca como autores de sus descubrimientos e inventos. Esta Ley fue reglamentada por un Decreto del 4 de septiembre de 1942.
Fecha de entrada en vigor: 12 de diciembre de 1941
Fuente: Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Documentos, diciembre de 1941.
- Ley No. 13497* del 22 de septiembre de 1966. Mediante esta Ley, Uruguay se adhiere al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial del 20 de marzo de 1883 y revisado en Estocolmo el 14 de julio de 1967.
Fecha de entrada en vigor: septiembre de 1966.
Fuente: Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Documentos, diciembre de 1966.
- Ley No. 14549* del 27 de julio de 1976. Se legisla sobre los modelos de utilidad y se establecen los derechos que tendrán sus autores y sucesores.
Fecha de entrada en vigor: 27 de julio de 1976
Fuente: Ministerio de Industria y Energía, Dirección de Propiedad Industrial, Montevideo, 1976.

- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Ley No. 15291* del 17 de diciembre de 1987. Se establecen incentivos y se determinan qué actividades podrán desarrollarse en las Zonas Francas.
Fecha de entrada en vigor: 26 de enero de 1988.
Fuente: Diario Oficial de la República Oriental del Uruguay, Documentos, No. 22532, Tomo 330, Año LXXXII del 26 de enero de 1988.
- Leyes sobre conversión de deuda externa** *Decreto del Poder Ejecutivo* del 27 de febrero de 1991. Se faculta al Banco Central del Uruguay para que pueda emitir Bonos del Tesoro a cambio de documentos de deuda externa. Esta Ley fue reglamentada por el Banco Central del Uruguay.
Fecha de entrada en vigor: 27 de febrero de 1991
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas y Banco Central del Uruguay, *Sistema de Canje de Deuda Externa Uruguaya*, 1991.
- Leyes sobre privatizaciones** *Ley No. 16211* de octubre de 1991. Establece los lineamientos para la privatización de empresas públicas. Esta Ley fue sometida a un referendium el 13 de diciembre de 1992 y fueron derogados cinco de sus artículos, en particular los que se refieren a la formación de empresas mixtas en el sector de las telecomunicaciones.
Fecha de entrada en vigor: Octubre de 1991
Fuente: "Privatization Update", *Latin Finance*, No. 33, 1992.
- Acuerdos internacionales** *Convenio para la Protección de Inversiones en el Marco de la OPIC*, suscrito en diciembre de 1982 y aprobado por la Ley No.15427 del 19 de julio de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 19 de julio de 1983.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Convenio de Garantías de Inversiones en el Marco del MIGA* suscrito el 8 de abril de 1986.
Fecha de entrada en vigor: Pendiente de aprobación en el Poder Legislativo.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Convenio sobre el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros Estados (CIADI)*, suscrito el 28 de mayo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: Pendiente de aprobación en el Poder Legislativo.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo de Protección y Promoción de Inversiones* suscrito con la República Federal Alemana el 4 de mayo de 1987 y aprobado por la Ley No. 16110 del 17 de abril de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 17 de abril de 1990.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Tratado para Evitar Doble Imposición* suscrito con la República Federal Alemana el 5 de mayo de 1987 y aprobado por la Ley No. 16110 del 17 de abril de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 17 de abril de 1990.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo para la Protección y Promoción de Inversiones* suscrito con Hungría el 25 de agosto de 1989 y aprobado por la Ley No. 16184 del 15 de mayo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 15 de mayo de 1991.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo sobre el Fomento y la Protección Recíproca de Inversiones* suscrito con Suiza el 7 de octubre de 1988 y aprobado por la Ley No. 16176 del 19 de marzo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 19 de marzo de 1991.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo sobre el Fomento y la Protección Recíproca de Inversiones* suscrito con los Países Bajos el 22 de septiembre de 1988 y aprobado por la Ley No. 16183 del 21 de mayo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 21 de mayo de 1991.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo para la Protección y Promoción de Inversiones* suscrito con Italia el 21 de febrero de 1990.
Fecha de entrada en vigor: Pendiente de aprobación en el Poder Legislativo.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo sobre la Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones* suscrito con Rumania el 23 de noviembre de 1990.
Fecha de entrada en vigor: Pendiente de aprobación en el Poder Legislativo.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.
- Acuerdo sobre el Promoción y la Protección Recíproca de Inversiones* suscrito con Canadá el 17 de mayo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: Pendiente de aprobación en el Poder Legislativo.
Fuente: Comisión para el Desarrollo de la Inversión.

B. CARACTERISITICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Uruguay la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley No. 14179 del 28 de marzo de 1974, la cual fue modificada por las Leyes No. 14244 del 26 de julio de 1974 y No. 14371 del 8 de mayo de 1975, y reglamentada por el Decreto No. 808/74 del 10 de octubre de 1974.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Previo a la aprobación del régimen legal para el tratamiento de la inversión extranjera, vigente en la actualidad, Uruguay no había sancionado normas específicas que regularan la inversión extranjera. Solamente existían normas restrictivas para estas inversiones, a través de disposiciones dictadas por parte del Banco Central, complementarias a las Leyes o Decretos, que se dictaron para algunos sectores específicos. Entre estas normas tenemos:

- a) La Ley No. 7995/926 que declaró el monopolio estatal sobre los contratos de seguros de riesgo total.
- b) Decreto del 12 de abril de 1962. Este Decreto limitó la posibilidad de conceder la explotación de estaciones de radiodifusión de frecuencia modulada a las personas naturales o jurídicas extranjeras.
- c) Decreto No. 30/66 que estableció que las concesiones de estaciones de televisión fueran otorgadas solamente a las personas naturales o jurídicas uruguayas.
- d) Durante 1973, a través de circulares del Banco Central se dispuso que las empresas cuyo capital se hubiera integrado mediante aportes del exterior, deberían aportar determinados requisitos sobre su razón social, naturaleza jurídica y capital integrado. Se deberían distinguir los aportes recibidos del exterior, los bienes importados sin operación cambiaria, los aportes en moneda extranjera negociados en el sistema bancario y aplicados a otros destinos, como también otras formas de integración de capital.

La información especificada en (d) era necesaria para poder comprar las divisas con destino a la transferencia de utilidades al exterior, operación que debía ser autorizada previamente por la autoridad monetaria. Asimismo, se limitaban las remesas de utilidades hasta un máximo del 10% anual del monto del capital invertido. En el caso de las repatriaciones de capital se dispuso la necesidad de una autorización previa del Banco Central.

Uruguay ha reservado, además, otras áreas de su aparato productivo a nacionales. Entre estas actividades tenemos la navegación de cabotaje, la explotación de vías aéreas en territorio nacional

y la pesca dentro de la zona de 12 millas. Mediante otros dispositivos se ha reservado para el Estado el desarrollo de ciertas actividades como los ferrocarriles, generación eléctrica, agua potable, telecomunicaciones, teléfonos y puertos. Del mismo modo, a través de la Ley No. 14181/74, la propiedad y explotación de hidrocarburos queda reservada a la Administración Nacional de Combustible, Alcohol y Portland (ANCAP), sin perjuicio que en las fases de la operación petrolera, éstas puedan ser ejecutadas por medio de contratos con terceros.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Ley No. 14179 del 28 de marzo de 1974 establece en su Artículo No. 1 que se entenderá por inversión extranjera todo capital proveniente del exterior, con derecho a transferencia de su valor así como de sus utilidades. Asimismo, las modalidades que podrá adoptar el capital extranjero serán las de divisas, maquinarias, patentes, procesos técnicos, marcas de fábrica y otras formas que se consideren de interés a juicio de las autoridades.

Sólo las personas naturales o jurídicas domiciliadas en el extranjero podrán ser titulares de los derechos y obligaciones que establece la Ley de Inversiones Extranjeras.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

Si bien la Ley de Inversiones Extranjeras no establece ningún incentivo especial se propende a agilizar las operaciones de remesas de utilidades. La única diferencia de tratamiento es respecto al acceso al crédito interno de mediano y largo plazo. Por último debe mencionarse que la Ley de Promoción Industrial de 1974 que crea incentivos para la instalación de industrias, establece que se harán acreedores a dichos beneficios tanto las empresas nacionales como extranjeras. De hecho la mayoría de las inversiones extranjeras se han radicado en el país al amparo de esta Ley en vista de los beneficios que otorga.

En 1983, Uruguay firmó el acuerdo correspondiente mediante el cual se ponen en funcionamiento los programas del OPIC. Asimismo, Uruguay está acogido al MIGA y ha firmado el convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados (ICSID o CIADI).

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

Las personas físicas o jurídicas domiciliadas en el extranjero que tengan interés en invertir en Uruguay deberán gestionar la autorización de radicación de la inversión extranjera ante el Ministerio de Economía y Finanzas. El poder ejecutivo es el encargado de autorizar todas las inversiones extranjeras en todas las áreas vinculadas al desarrollo económico y social, siempre que su aplicación sea compatible con el interés nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas podrá autorizar directamente las inversiones en áreas ya declaradas de interés nacional y que no superen

los cien mil dólares o cuando se trate de inversiones complementarias no previstas en el contrato original.

Los contratos se suscribirán entre los inversionistas y el Estado. Para ello se cuenta con la Comisión para el Desarrollo de la Inversión la cual es el organismo encargado de aconsejar al Poder Ejecutivo las autorizaciones de inversión extranjera que se ajusten a la legislación vigente y para ello está facultada para negociar con los inversionistas las condiciones del contrato, la valoración del capital y aportes, así como la forma y plazo de repatriación. De esta manera, el Poder Ejecutivo mediante resolución expresa, o en su caso, el Ministerio de Economía y Finanzas en ejercicio de atribuciones delegadas autorizará o no la solicitud de inversión y fijará las condiciones del contrato y el plazo dentro del cual puede ser suscrito. En representación del Estado actuará el Ministro de Economía y Finanzas o quien éste designe.

La Ley No. 14179 establece que se autorizarán todas las inversiones extranjeras en todas las áreas vinculadas al desarrollo económico y social, siempre que sus operaciones sean compatibles con el interés nacional. Ciertas actividades requerirán de autorización expresa del Poder Ejecutivo a través del Consejo de Ministros. Estas son: electricidad, hidrocarburos, petroquímica básica, energía atómica, explotación de minerales estratégicos, actividades agropecuarias, industria frigorífica, intermediación financiera, ferrocarriles, telecomunicaciones, radio, prensa, televisión y aquellas reservadas por Ley a empresas públicas.

Debe mencionarse que no se contempla ningún tipo de autorización automática, de modo que todas las personas naturales o jurídicas que deseen invertir en el país deben gestionar la autorización de radicación de la inversión extranjera ante el Ministerio de Economía y Finanzas.

Una vez suscrito el contrato de radicación y previa acreditación ante el Banco Central del hecho de haber cumplido con los aportes de capital provenientes del exterior, el Banco Central del Uruguay inscribe la inversión extranjera autorizada en un registro especial. Igualmente, deben registrarse los resultados de las inversiones y las remesas efectuadas.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Mediante la autorización de la inversión extranjera el Estado garantiza la remesa de utilidades en las proporciones y condiciones pactadas contractualmente. En el Artículo No. 7 de la Ley de Inversiones Extranjeras se establece que el Banco Central proveerá las divisas correspondientes al tipo de cambio vigente al cierre del ejercicio que devengó las utilidades siempre que se soliciten con un plazo de sesenta días. Vencido este plazo, el tipo de cambio será el del día en que se haga la solicitud de remesa. Las conversiones se harán al tipo de cambio vendedor en el mercado financiero.

Las reexportaciones de capital también se encuentran garantizadas por el contrato, pero éstas no podrán realizarse antes de finalizar el tercer año a partir de la fecha del contrato de radicación y, en su caso, hasta transcurrido un año de la última capitalización de las utilidades. Se entiende por capital con derecho a transferencia al exterior, el inicialmente autorizado e ingresado, más las utilidades netas capitalizadas, menos el capital ya transferido y menos las pérdidas netas; todo ello expresado en la moneda de origen.

7. Sectores con prohibidos para el capital extranjero

La legislación uruguaya no contempla ninguna restricción a la inversión extranjera en cuanto al libre acceso. Sin embargo, para la inversión en ciertos sectores se requiere autorización expresa del Poder Ejecutivo vía Consejo de Ministros. Estos son: electricidad, hidrocarburos, petroquímica básica, energía atómica, explotación de minerales estratégicos, actividades agropecuarias, industria frigorífica, intermediación financiera, ferrocarriles, telecomunicaciones, radio, prensa, televisión y aquellas reservadas por ley a empresas públicas.

8. Tributación

Uruguay tiene un convenio sobre doble tributación firmado con Alemania.

Uruguay goza de un atractivo régimen tributario en lo que se refiere a la actividad personal, que ha eliminado, desde 1974 la imposición a la renta de las personas físicas. Tampoco existe impuesto a las herencias ni a las transmisiones patrimoniales.

En cuanto a las empresa, existe el Impuesto a las Rentas de la Industria y Comercio (IRIC) que reúne dos tributos diferenciados. El primero de ellos es un impuesto anual que grava las rentas de fuente uruguaya derivadas de la utilización conjunta de trabajo y capital, aplicados a actividades (industriales, comerciales y similares) lucrativas regulares, realizadas por personas físicas y jurídicas. El segundo tributo es el impuesto instantáneo que grava por vía de retención a:

- a) Las rentas brutas, de las que sean beneficiarias las personas físicas y jurídicas del exterior, derivadas del uso de marcas, patentes, modelos industriales y asistencia técnica. En el caso de asistencia técnica las rentas se hallan exentas cuando están gravadas en el país de domicilio del titular y que éste no tenga crédito fiscal.
- b) Dividendos o utilidades acreditadas o pagadas por los sujetos pasivos de este impuesto a personas físicas o jurídicas domiciliadas en el exterior. Esta imposición rige solamente cuando los dividendos o utilidades se hallen gravados en el país de domicilio del titular y exista crédito fiscal.

Las rentas (intereses o diferencias de cambio) derivadas de depósitos de no residentes constituyen rentas no alcanzadas por el impuesto dado que se derivan de la utilización exclusiva del factor capital. Al no existir impuesto a la renta de las personas físicas, los intereses y las diferencias de cambio derivados de depósitos de no residentes se encuentran excluidos de toda imposición a la renta.

La tasa del Impuesto a las Rentas de la Industria y el Comercio (IRIC) es del 30%. Además, las utilidades remesadas, sin importar el ejercicio en el cual fueron generadas, que superen el 20%

del capital con derecho a transferencia al comienzo del mismo ejercicio, están gravadas con un impuesto del 40% sobre el excedente a dicho 20%. Asimismo, los dividendos y las ganancias están gravadas con un impuesto de 30% para los residentes que no sean uruguayos. Finalmente, existe una tasa anual de impuesto de 2% sobre el capital, excepto en el caso de las cuentas bancarias y otros valores de ahorro que están gravados con una tasa de 3.5% y los bancos e instituciones financieras con un 2.8%.

9. Royalties o regalías

No existe ninguna limitación para la suscripción de contratos de transferencia tecnológica. Los gastos por royalties, intereses y pagos por servicios son deducibles como gastos. Existe una tasa de retención al momento del pago de royalties y asistencia técnica de 30%. En el caso de asistencia técnica, las rentas se hallan exentas cuando están gravadas en el país de domicilio del titular y que no cuente con crédito fiscal.

XI. VENEZUELA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	<p>La <u>Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX)</u>, dependiente del <u>Ministerio de Hacienda</u>, es el organismo nacional competente en materia de tratamiento de la inversión extranjera en Venezuela. Este organismo se encarga de registrar las inversiones extranjeras directas y las inversiones subregionales, así como de registrar los contratos sobre importación de tecnología y sobre marcas, patentes, licencias y regalías.</p> <p>Por otro lado, la <u>Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Seguros</u> son los organismos nacionales competentes con respecto al tratamiento de la inversión extranjera en dichos sectores, de acuerdo con lo previsto por la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena. Asimismo, el <u>Ministerio de Energía y Minas</u> ejerce las funciones de organismo nacional competente con respecto a las empresas que realicen inversiones extranjeras en el sector petroquímico, carbonífero y minero, así como en el de hidrocarburos y sectores conexos como los de servicio de apoyo técnico a las actividades de exploración, explotación de yacimientos, extracción, manufactura o refinación, transporte por vías especiales, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.</p>
Definición nacional de inversión extranjera directa	<p>La inversión extranjera directa en Venezuela, al igual que en los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena, se define como los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.</p> <p>Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena.</p> <p>Adicionalmente, la legislación venezolana incluye como parte de la inversión extranjera directa a aquella proveniente de la conversión de deuda externa en inversión, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras. Asimismo, se consideran también las inversiones provenientes de las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados, que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.</p>
Participación mínima del capital extranjero	<p>En Venezuela, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera en el capital de una empresa instalada en el país para que la inversión directa sea calificada o definida como extranjera. No obstante, la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a través de la Decisión 291, define como empresas extranjera a aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al 51% o, cuando siendo superior, sea normado por el organismo nacional competente. Asimismo, se considera como empresa mixta a aquella cuyo capital pertenezca a inversionistas nacional en una proporción que fluctúe entre 51% y 80%, siempre a juicio del organismo nacional competente.</p>
Flujo de inversión extranjera directa	<p>Se define como la variación en el capital de una empresa, originado por los nuevos aportes provenientes del exterior, la capitalización de las reinversiones y reservas, y la capitalización de créditos externos.</p>
Remisión de utilidades	<p>Son las ganancias obtenidas por la empresa al cierre de cada ejercicio contable, correspondientes a las acciones cuotas, participaciones o derechos de los inversionistas extranjeros.</p>
Reinversión de utilidades	<p>Se considera reinversión a la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en la que se hayan generado.</p> <p>La legislación venezolana señala, además, que sólo se considerarán como reinversión, las utilidades netas generadas por aquellas empresas receptoras de inversión extranjera que hubiesen sido registradas por el organismo nacional competente.</p>
Criterios para el registro	<p>El registro de la inversión extranjera directa incluye dinero fresco o divisas, reinversión de utilidades, capitalización de acreencias y conversión de deuda pública externa en inversión.</p> <p>Las estadísticas preparadas por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX) no incluyen la inversión extranjera en los sectores bancario y de seguros, petroquímico, carbonífero y minero, ni la información sobre institutos autónomos, sociedades, asociaciones y fundaciones del Estado, debido a que la Ley contempla que la misma es competencia de la Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Seguros, del Ministerio de Energía y Minas y de la Dirección General Sectorial de Finanzas Públicas del Ministerio de Hacienda, respectivamente.</p>
Stock de capital extranjero directo	<p>Es el monto total de los aportes en todas sus formas, ya sea dinero en efectivo (divisas o moneda nacional), bienes físicos, reinversión de utilidades y capitalización de créditos, de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de empresas receptoras en el país. La Superintendencia de Inversiones Extranjera (SIEX) calcula el stock de capital extranjero a través de la acumulación de flujos.</p>
Capital neutro	<p>Se consideran como capital neutro las inversiones de las entidades financieras internacionales públicas de las que forman parte todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena. Dichas inversiones no se comportarán ni como nacionales ni como extranjeras en la empresa en que participen.</p>
Regalías	<p>Pagos periódicos por utilización de propiedad industrial. La forma o periodicidad se establecen al momento de firmar el convenio o acuerdo de licencia.</p>

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa**
- Decisión 291* del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, abril de 1991.
- Decreto No. 2095* del 13 de febrero de 1992. Establece el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías aprobado por las Decisiones Nros. 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Fecha de entrada en vigor: 13 de febrero de 1992.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 34930, del 25 de marzo de 1992.
- Leyes sectoriales**
- Decisión 91* del 29 de agosto de 1975. Establece el Programa Sectorial de la Industria Petroquímica. Esta Decisión fue modificada por las Decisiones 130 y 170 y ratificada por la legislación venezolana mediante el Decreto No. 1348 del 12 de noviembre de 1986, publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela el 26 de diciembre de 1986.
Fecha de entrada en vigor: 29 de agosto de 1975.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Ley de Aviación Civil* del 12 de abril de 1955. Reserva a las aeronaves venezolanas el servicio de transporte comercial interno.
Fecha de entrada en vigor: 9 de junio de 1955.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Ley de la Industria de Gas Natural* del 12 de agosto de 1971. Reserva al Estado la industria de gas natural.
Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1971.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional* del 18 de julio de 1973. Reserva la navegación de cabotaje a embarcaciones de matrícula nacional.
Fecha de entrada en vigor: 25 de julio de 1973.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y Comercio de los Hidrocarburos* del 21 de agosto de 1975.
Fecha de entrada en vigor: 21 de agosto de 1975.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Decreto No. 580* del 26 de noviembre de 1974. Reserva al Estado la industria del mineral de hierro.
Fecha de entrada en vigor: 26 de noviembre de 1974.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Decreto No. 870* del 22 de abril de 1975. Establece algunas restricciones para la formación de empresas de seguros y reaseguros.
Fecha de entrada en vigor: 22 de abril de 1975.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Decreto No. 1336* del 16 de diciembre de 1975. Reserva a empresas nacionales o mixtas la deshidratación de leche.
Fecha de entrada en vigor: 16 de diciembre de 1975.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.
- Decreto No. 1732* del 17 de agosto de 1976. Reglamenta la apertura de sucursales de bancos e institutos de crédito latinoamericanos.
Fecha de entrada en vigor: 17 de agosto de 1976.
Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.

Leyes sectoriales
(continuación)

Decreto No. 1611 del 4 de septiembre de 1982. Dicta normas sobre el arrendamiento financiero de bienes.

Fecha de entrada en vigor: 4 de septiembre de 1982.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.

Decreto No. 194 del 11 de julio de 1984. Dicta la Ley General de Bancos y Otros Institutos de Crédito.

Fecha de entrada en vigor: 11 de julio de 1984.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de las Inversiones Extranjeras en los Países de la ALADI, VII. Grupo Andino, Volumen 3, Perú - Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1985.

Decisión No. 300 del 16 de mayo de 1991. Establece la reestructuración del Programa de la Industria Metalmeccánica.

Fecha de entrada en vigor: 16 de mayo de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, No.82, Año VIII, del 12 de junio de 1991.

Leyes de transferencia
de tecnología

Decisión 291 del 21 de marzo de 1991. Establece el nuevo Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías que rige para todos los países miembros del Acuerdo de Cartagena.

Fecha de entrada en vigor: 21 de marzo de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, Lima, Perú, abril de 1991.

Decreto No. 2095 del 13 de febrero de 1992. Establece el Reglamento del Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías aprobado por las Decisiones Nos. 291 y 292 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Fecha de entrada en vigor: 13 de febrero de 1992.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 34930, del 25 de marzo de 1992.

Decreto No. 2631 del 4 de abril de 1978. Pone en vigencia la Decisión 84, la cual establece las bases para la política tecnológica subregional.

Fecha de entrada en vigor: 4 de abril de 1978.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de la Transferencia de Tecnología en los Países de la ALADI, II. Grupo Andino, Régimen Común, Bolivia-Colombia-Ecuador-Perú-Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1986.

Decisión 154 de mayo-junio de 1974. Establece el Sistema Andino de Información Tecnológica (SAIT).

Fecha de entrada en vigor: mayo-junio de 1974.

Fuente: BID-INTAL, Régimen Jurídico de la Transferencia de Tecnología en los Países de la ALADI, II. Grupo Andino, Régimen Común, Bolivia-Colombia-Ecuador-Perú-Venezuela, Buenos Aires, Argentina, 1986. *Leyes sobre propiedad industrial* Decisión 311 del 8 de noviembre de 1991. Establece en nuevo Régimen Común de Propiedad Industrial.

Fecha de entrada en vigor: 8 de noviembre de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena, No. 96, Año VIII, del 12 de diciembre de 1991.

Leyes de conversión de
deuda

Decreto No. 86 del 15 de marzo de 1989. Establece el Régimen de Conversión de Deuda Externa en Inversión. Este Decreto ha sido modificado mediante el Decreto No. 1259 del 15 de noviembre de 1990 y el Decreto No. 1551 del 10 de abril de 1991.

Fecha de entrada en vigor: 25 de abril de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 34701, Mes VII, Año CXVIII, del 25 de abril de 1991.

Decreto No. 1418 del 27 de diciembre de 1990. Establece el Programa Especial de Conversión de Deuda Pública Externa para Mega Proyectos de Inversión. Este Decreto fue modificado por el Decreto No. 1552 del 10 de abril de 1991.

Fecha de entrada en vigor: 10 de abril de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 34701, Mes VII, Año CXVIII, del 25 de abril de 1991.

Resolución No. 179 del 25 de abril de 1991. Establece las normas para la Conversión de Deuda Pública Externa en Inversión.

Fecha de entrada en vigor: 25 de abril de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, Año CXVIII, Mes VII, No. 34702; publicada el 26 de abril de 1991.

Resolución No. 730 del 25 de abril de 1991. Establece las normas para las operaciones de Conversión de Deuda Pública Externa para Mega Proyectos de Inversión.

Fecha de entrada en vigor: 27 de abril de 1991.

Fuente: Gaceta Oficial de la República de Venezuela, No. 34702, Mes VII, Año CXVIII, del 26 de abril de 1991.

Convenio Cambiario No.1 del 13 de marzo de 1989. Regula las operaciones de conversión de divisas en el país.

Fecha de entrada en vigor: 14 de marzo de 1989.

Fuente: SIEEX, Régimen Legal de las Inversiones Extranjeras, Superintendencia de Inversiones Extranjeras, Ministerio de Hacienda, Caracas, Venezuela, 1991.

Leyes de conversión de *Resolución No. 89-08-04 del Banco Central de Venezuela* del 31 de agosto de 1989. Regula el tratamiento de las subastas para las operaciones de conversión de deuda externa.

Fecha de entrada en vigor: 31 de agosto de 1989.

Fuente: SIEX, Régimen Legal de las Inversiones Extranjeras, Superintendencia de Inversiones Extranjeras, Ministerio de Hacienda, Caracas, Venezuela, 1991.

Resolución No. 89-11-01 del 3 de noviembre de 1989. Regula el tratamiento de los contratos de fideicomiso para las operaciones de conversión de deuda externa.

Fecha de entrada en vigor: 3 de noviembre de 1989.

Fuente: SIEX, Régimen Legal de las Inversiones Extranjeras, Superintendencia de Inversiones Extranjeras, Ministerio de Hacienda, Caracas, Venezuela, 1991.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Venezuela la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en el Decreto No. 2095 del 13 de febrero de 1992. No obstante, al igual que los demás países miembros del Acuerdo de Cartagena, la inversión extranjera en Venezuela se rige por la Decisión 291 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena el 21 de marzo de 1991, ratificada por el Decreto No. 2095.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Antes del establecimiento del Régimen Común de tratamiento de la inversión extranjera para los países miembros del Acuerdo de Cartagena, Venezuela no contaba con una legislación interna sobre la materia.

La evolución posterior del tratamiento a la inversión extranjera en Venezuela está estrechamente ligada a los cambios producidos en las Decisiones del Grupo Andino que han regulado esta materia y, de manera especial, a la Decisión 24 emitida por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en junio de 1971.

En efecto, mediante la Ley Aprobatoria del Acuerdo de Cartagena del Consenso de Lima y de las Declaraciones Nos. 24, 37, 37-A, 40, 46, 50, 56 y 70 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena de fecha 26 de septiembre de 1973, la Decisión 24 adquirió valor normativo interno. La nueva norma suprarregional fue dictada con la finalidad de limitar la influencia financiera externa y asegurar una mayor contribución del sector privado local al desarrollo nacional. Asimismo, contemplaba la reducción progresiva a una posición minoritaria de las participaciones extranjeras en las empresas locales, la eliminación del capital extranjero en los sectores claves, la limitación del derecho a remitir utilidades al exterior y muchas otras disposiciones de carácter restrictivo.

Posteriormente, se dicta el Decreto No. 62 del 28 de abril de 1974, mediante el cual se establece un reglamento especial para instrumentar el Capítulo II de la Decisión 24 del Acuerdo de Cartagena. En mayo del mismo año, el Decreto No. 63 crea la Superintendencia de Inversiones Extranjeras como organismo nacional competente para la aplicación de la Decisión 24 y sus modificaciones. Los Decretos Nos. 62 y 63 serán derogados por los Decretos No. 2031 del 8 de febrero de 1977 y No. 2442 del 8 de noviembre de 1977, pasando este último a ser la legislación básica vigente en Venezuela para el tratamiento del capital extranjero.

En junio de 1985, se dicta el Decreto No. 656 que reemplaza al Decreto No. 2442. En esta nueva norma se eliminan ciertos trámites administrativos y se aclara el tratamiento de la remisión de utilidades y reexportación de capital principalmente. El Decreto No. 656 es derogado por el Decreto No. 1200 del 16 de julio de 1986. A partir de la vigencia de esta norma, varió radicalmente en Venezuela el tratamiento de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología. Mediante este

nuevo Decreto, todas las inversiones quedaron autorizadas; la remisión de dividendos se fija en 20% más la tasa libro; se establecen sectores prioritarios para la inversiones extranjeras, en las cuales se permite la remisión de todas sus utilidades sin ninguna limitación, además de permitir la remisión total de la liquidación de los activos de estas empresas en cualquier momento.

Después de dieciséis años de haber entrado en vigor y haber sufrido modificaciones, el 18 de mayo de 1987 la Decisión 24 fue sustituida por la Decisión 220. Por medio de esta norma se flexibiliza el tratamiento de la inversión extranjera eliminando algunos requisitos de registro y autorización de las inversiones y remesas de utilidades al exterior, suprimiendo los sectores reservados y otorgando la posibilidad de que cada país miembro pudiera legislar en forma individual en materia de inversión extranjera.

El Decreto No. 727 del 28 de enero de 1990 ratifica la Decisión 220, incorporando las medidas de liberalización y desregulación de las inversiones extranjeras a la legislación venezolana.

En 1991, se presentó la necesidad de revisar la legislación existente para los países miembros del Acuerdo de Cartagena, dado que éstos buscaban una mayor eficiencia y competitividad de sus economías, mediante la liberalización del comercio y la inversión internacional. Por este motivo, con el fin de estimular y promover mayores flujos de capitales y tecnologías extranjeras hacia las economías andinas se volvió a modificar la legislación común, sustituyendo la Decisión 220 por la Decisión 291.

Finalmente, mediante el Decreto No. 2095 del 18 de febrero de 1992, se deroga el Decreto No. 727 y se ratifican las Decisiones 291 y 292. Con respecto a la legislación hasta entonces vigentes, esta nueva normativa introduce algunos cambios importantes, tales como:

- a) La consideración de las contribuciones tecnológicas intangibles dentro de la definición de inversión extranjera directa.
- b) Eliminación de la autorización a los contratos de transferencia de tecnología entre empresas extranjeras y sus casas matrices, filiales o subsidiarias.
- c) Eliminación de la autorización y el registro de los contratos de crédito externo celebrados por las empresas residentes en Venezuela.
- d) Se suspende la obligación de transformación de empresas extranjeras en mixtas o nacionales.
- e) Se elimina la reserva a empresas nacionales del sector de vigilancia y seguridad de bienes y personas. Asimismo, se elimina la norma que establecía las facultades presidenciales para reservar los sectores de industrias básicas a empresas mixtas y reservar otros sectores a empresas nacionales o mixtas.
- f) Las empresas extranjeras pueden acogerse a los beneficios provenientes del Programa de Liberación del Acuerdo de Cartagena.

- g) La inversión nacional y subregional reciben el mismo tratamiento jurídico.

3. Definición de inversión extranjera directa

La Decisión 291 señala que se entenderá por inversión extranjera directa los aportes provenientes del exterior de propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras al capital de una empresa, en moneda libremente convertible o en bienes físicos o tangibles, tales como plantas industriales, maquinarias nuevas y reacondicionadas, equipos nuevos y reacondicionados, repuestos, partes y piezas, materias primas y productos intermedios.

Igualmente se considera como inversión extranjera directa las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con derecho a ser remitidos al exterior y las reinversiones que se efectúen de conformidad con la Decisión 291.

Adicionalmente, la legislación venezolana incluye como parte de la inversión extranjera directa a aquélla proveniente de la conversión de deuda externa en inversión, propiedad de personas naturales o jurídicas extranjeras. Asimismo, se consideran también las inversiones provenientes de las contribuciones tecnológicas intangibles, tales como marcas, modelos industriales, asistencia técnica y conocimientos técnicos patentados o no patentados, que puedan presentarse bajo la forma de bienes físicos, documentos técnicos e instrucciones.

4. Tratamiento jurídico del inversionista extranjero

La Decisión 291 reconoce al inversionista extranjero y a la empresa o sociedad en que éste participe, los mismos, derechos, deberes y garantías que las leyes y los reglamentos otorguen a los inversionistas nacionales, sin otras limitaciones que las establecidas por la ley. Esto es ratificado por la legislación venezolana en el Decreto No. 2095, Artículo No. 13.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La Decisión 291 señala en su Artículo No. 3 que la inversión extranjera directa, las reinversiones y la venta de acciones, participaciones y derechos de los inversionistas extranjeros podrán ser registradas ante el organismo nacional competente, de acuerdo con lo que disponga la legislación de cada país miembro.

En este sentido la legislación venezolana señala a la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), dependiente del Ministerio de Hacienda, como el organismo nacional competente encargado, entre otras, de las siguientes funciones:

- a) Registrar las inversiones extranjeras directas y las inversiones subregionales.

- b) Registrar los contratos sobre importación de tecnología y marcas, patentes, licencias y regalías.
- c) Registrar las inversiones que efectúen empresas extranjeras constituidas con sucursales en el país.

La inversión extranjera directa es autorizada automáticamente siempre que no contravenga las disposiciones de la legislación nacional. No obstante, las inversiones deberán ser registradas ante la Superintendencia de Inversiones Extranjeras dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se inscriban en el Registro Mercantil. Sólo cuando se efectúe el mencionado registro, las empresas inversionistas podrán acogerse a los derechos establecidos por las Decisiones 291 y 292.

El valor de la inversión extranjera directa, las reinversiones y los aumentos de capital, se evidenciarán por medio del Registro de Inversión Extranjera Directa. Dicho registro expresará el valor de la inversión en divisas libremente convertibles a la tasa de cambio vigente al momento en que se hubiera efectuado o que se efectúe la operación cambiaria correspondiente, en el caso de aportes en moneda, o para la fecha de nacionalización de la mercancía, cuando se trate de aportes de bienes físicos o del aporte de contribuciones tecnológicas intangibles. En el caso de reinversión de utilidades, el tipo de cambio corresponderá al vigente en la fecha de cierre del ejercicio económico respectivo.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

El derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilidades netas que provengan de la inversión extranjera directa y a remesar el producto de la venta de acciones, participaciones o derechos, previo pago de los impuestos correspondientes, es contemplado en los Artículos Nos. 4 y 5 de la Decisión 291. En el caso de la venta de acciones, participaciones o derechos, dicha transacción no se considerará como reexportación de capital.

En cuanto a la legislación venezolana, en el Parágrafo Unico del Artículo No. 35 del Decreto No. 2095 se señala, además, que en los casos de conversión de deuda pública externa en inversión extranjera el derecho a remitir al exterior el producto de la venta de acciones participaciones o derechos del inversionista extranjero, quedará sujeto a la normativa aplicable a la materia.

En cuanto a la reexportación de capital, los inversionistas extranjeros deben demostrar que las inversiones respectivas fueron debidamente registradas

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Entre los dispositivos legales que señalan las restricciones para la inversión extranjera en algunos sectores reservados al capital nacional se encuentran:

- a) El Decreto No. 2095 del 13 de febrero de 1992, en su Artículo No. 26 establece la reserva a empresas nacionales de los siguientes sectores de actividad económica: televisión y radiodifusión, periódicos en idioma castellano y los servicios profesionales cuyo ejercicio esté reglamentado por leyes nacionales.
- b) Venezuela, como miembro del Acuerdo de Cartagena, no puede autorizar la inversión extranjera directa en su territorio ni la celebración de contratos de importación de tecnología para la elaboración de productos pertenecientes a la industria petroquímica que no les hubiese sido asignados, incluidos en los anexos de la Decisión 91 de agosto de 1975 y en las posteriores modificaciones incluidas en las decisiones 130 y 170. No obstante, pueden producirse algunas excepciones, siempre y cuando están sujetas a las cláusulas y restricciones establecidas en la Decisión 91 y sus modificaciones.
- c) La Ley de Aviación Civil de 1955 reserva a las aeronaves venezolanas el servicio de transporte comercial interno.
- d) La Ley de la Industria de Gas Natural del 12 de agosto de 1971, reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, la industria del gas proveniente de yacimientos de hidrocarburos, la cual será explotada por la Corporación Venezolana del Petróleo.
- e) La Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional de 1973, en su Artículo No. 3 establece que la navegación de cabotaje queda reservada para las embarcaciones de matrícula nacional. Cuando el buque estuviera en comunidad o copropiedad, más del 80% de su valor debe pertenecer a venezolanos domiciliados en el país.
- f) La Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos del 21 de agosto de 1975 reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sustancias explotadas y refinadas. Quedan, así, extinguidas todas las concesiones otorgadas.
- g) El Decreto No. 580 del 26 de noviembre de 1974, en su Artículo No. 1, establece que el Estado se reserva la industria de la explotación del mineral de hierro, por lo que quedan extinguidas todas las concesiones de explotación.
- h) El Decreto No. 870 del 22 de abril de 1975, en su Artículo No. 1, establece que las empresas constituidas y por constituirse en el país para realizar operaciones de seguros y reaseguros deben poseer un capital pagado que no pertenezca en más de 20% a personas extranjeras. Lo mismo debe cumplirse para las sociedades de corretaje de seguros y reaseguros.
- i) El Decreto No. 1336 del 16 de diciembre de 1975, en su Artículo No. 1, establece que la actividad económica de deshidratación de leche queda reservada a las empresas

nacionales aunque, bajo ciertas condiciones, puede admitirse la participación de empresas mixtas.

- j) El Decreto No. 1611 del 4 de septiembre de 1982, en su Artículo No. 14, establece que la participación extranjera en las personas jurídicas de arrendamiento financiero existentes sólo podrá alcanzar hasta el 20% del capital de dichas empresas

8. Tributación

Venezuela ha firmado un convenio de doble tributación con Holanda.

Las empresas con actividad en Venezuela deben pagar un Impuesto a la Renta del 20% o 30% (por encima de los 2 millones de bolívares) de sus utilidades. Sin embargo, si se trata de empresas petroleras, el Impuesto a la Renta corresponde a 67.7%, excepto cuando la empresa está asociada con la empresa petrolera estatal, en cuyo caso el impuesto se reduce al 30%. La mismas tasas de 20% o 30% (por encima de los 2 millones de bolívares) son aplicables en el caso de una sucursal de una empresa extranjera.

En Venezuela, no existen impuestos a las utilidades extraordinarias. Asimismo, el pago de dividendos a accionistas extranjeros no posee ninguna retención.

Las ganancias producidas por la utilización de regalías (royalties) son gravadas con un impuesto de 20% o 30% aplicado sobre el 90% del ingreso por marcas, sobre el 50% del ingreso por patentes y sobre el 30% del ingreso por asistencia técnica.

El pago de intereses es también gravado con una tasa de 5% para los no residentes. Sin embargo, los intereses pagados a instituciones financieras extranjeras sobre préstamos de más de un año en el sector industrial, agrícola, construcción y pesca están exceptuados de dicho impuesto.

Un impuesto de 3% es aplicado sobre la transferencia de vehículos.

Finalmente, la reforma tributaria de 1991 eliminó las exoneraciones tributarias existentes hasta entonces, pero introdujo un impuesto de 10% sobre el crédito para nuevas inversiones en ocho áreas prioritarias, mientras que la tasa se reduce al 8% para inversiones en exploración, refinamientos, transporte y otras actividades en el sector de minerales e hidrocarburos

9. Royalties o regalías

La Decisión 291 del Acuerdo de Cartagena en su Artículo No. 14 (inciso g) establece que, para los efectos del registro de contratos sobre transferencia de tecnología externa, marcas o patentes, Venezuela junto con los demás países miembros debe tener en cuenta que dichos contratos no contengan, entre otras cosas, cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de las patentes

o de las marcas, por patentes o marcas no utilizadas o vencidas.

Asimismo, el Artículo No. 15 señala que las contribuciones tecnológicas intangibles, en las medida que no constituyan aportes de capital, darán derecho a pago de regalías. Además, las regalías devengadas podrán ser capitalizadas, previo pago de los impuestos correspondientes. Finalmente, cuando esas contribuciones tecnológicas sean suministradas a una empresa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma casa matriz, se podrá autorizar el pago de regalías en los casos previamente calificados por el organismo nacional competente en Venezuela.

Por otro lado, la legislación venezolana establece en el Decreto No. 2095, Artículo No. 51, que no se permitirán pagos por concepto de regalías ni otros cánones provenientes del uso de marcas, procedimientos, patentes o modelos industriales, por un periodo mayor al de la vigencia de los Derechos de Propiedad Industrial que otorga la ley respectiva.

PAISES DE CENTROAMERICA

XII. COSTA RICA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	El <u>Banco Central de Costa Rica</u> es el organismo que efectúa el registro del capital extranjero, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales.
Definición nacional de inversión extranjera directa	<p>No existe una definición específica de inversión extranjera directa. Sin embargo, el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales define un proyecto de inversión como la actividad que se desea llevar a cabo o se ha llevado a cabo con los recursos correspondientes al capital que se solicita registrar. Estos recursos se denominan "propios", es decir, aquellos fondos provenientes del exterior consistentes en aportes personales de los socios o de los asociados.</p> <p>En virtud de la estructura cambiaria vigente en Costa Rica y las posibilidades de transar con divisas existentes en el mercado local, las estadísticas cambiarias oficiales presentan serias limitaciones para recoger, adecuadamente, el volumen de las transacciones internacionales del sector privado. Por este motivo, la Sección de Balanza de Pagos y Análisis Cambiario del Banco Central de Costa Rica, realiza encuestas de amplia cobertura destinadas a obtener apropiadas mediciones de las transacciones internacionales de servicios y de capital del sector privado. Para este fin se utilizan las definiciones del Manual de Balanza de Pagos, Cuarta Edición, del Fondo Monetario Internacional.</p>
Participación mínima del capital extranjero	<p>El Banco Central de Costa Rica realiza la cuantificación de la inversión extranjera directa en el país de acuerdo a los criterios establecidos en el Manual de Balanza de Pagos, Cuarta Edición, del Fondo Monetario Internacional.</p> <p>Para este fin el Banco Central realiza una encuesta a las empresas con actividades en Costa Rica, agrupándolas en dos clases: a) aquellas que tienen participación extranjera en su capital, cuyas operaciones con la casa matriz dan origen, en especial, a los montos de la inversión directa proveniente del exterior y, b) las unidades económicas con la características de que su capital es propiedad de residentes costarricenses.</p>
Flujo de inversión extranjera directa	El flujo de inversión extranjera directa está basado en la información proporcionada por la encuesta realizada por el Banco Central de Costa Rica, Sección Balanza de Pagos y Análisis Cambiario, a las empresas extranjeras con actividades en el país. Esta información es la que se incluye en la Cuenta de Capitales de la Balanza de Pagos de Costa Rica.
Reinversión de utilidades	Se define como la inversión de todo o parte de las utilidades no distribuidas y de otros recursos patrimoniales provenientes de una inversión extranjera directa, en la misma empresa en la que se hayan generado. A este valor se le descuentan las pérdidas sufridas por las compañías extranjeras en Costa Rica.
Deuda intrafirma	Incluye el movimiento de importaciones, en su mayoría de bienes de capital e insumos, suministrados por las casas matrices a sus subsidiarias en el país. Además del cambio en las reservas monetarias internacionales de tales empresas.
Criterios para el registro	<p>Hacia los últimos años, las transacciones internacionales del sector privado costarricense representan alrededor de un 90% de las incluidas en la Balanza de Pagos. Buena parte de ellas se detectan mediante el comercio exterior de mercancías. Sin embargo, en cuanto a los servicios y financiamientos comerciales, las inversiones y los préstamos transados en el extranjero, las fuentes de información, dentro de las que destaca la balanza cambiaria, son muy deficientes. Para suplir esa limitación, el Banco Central de Costa Rica realiza una encuesta de amplia cobertura en las instituciones del sector privado, la cual abarca una 1350 unidades económicas, incluyendo 350 identificadas como de capital extranjero o de inversión extranjera directa. Mediante dicha encuesta se obtiene información directa, suministrada voluntariamente, de casi tres cuartas partes de las unidades estudiadas, la cual se complementa con datos cambiarios, para obtener estimaciones adecuadas sobre estas transacciones en cuestión.</p> <p>Para la investigación, las empresas se agrupan en dos clases: a) aquellas que tienen participación extranjera en su capital, cuyas operaciones con la casa matriz dan origen, en especial, a los montos de la inversión directa proveniente del exterior y, b) las unidades económicas con la características de que su capital es propiedad de residentes. En este caso, sus intercambios con el resto del mundo se refieren, en especial, a préstamos y a algunas transacciones de servicios.</p> <p>En virtud de los continuos esfuerzos por mejorar la investigación en su cobertura y calidad de información, es prudente advertir que las comparaciones de los datos con años anteriores, pueden estar afectados no solo por el crecimiento vegetativo de las transacciones, sino también, por todo lo atribuible a los esfuerzos antes mencionados.</p>
Stock de inversión extranjera directa	Para los fines de esta publicación el stock de capital extranjero fue calculado como el valor acumulado de los flujos anuales a partir del año 1960.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica
sobre inversión
extranjera directa

Artículo No. 15 de la Sesión No. 3795-85 de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica del 2 de diciembre de 1982.

Aprueba el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales. Este Reglamento fue modificado por:

- Artículo No. 8 de la Sesión No. 3864-83 del 11 de agosto de 1983.
- Artículo No. 6 de la Sesión No. 3899-84 del 3 de enero de 1984.
- Artículo No. 10 de la Sesión No. 3965-84 del 21 de agosto de 1984.
- Artículo No. 3 de la Sesión No. 4105-86 del 22 de enero de 1986.
- Artículo No. 6 de la Sesión No. 4149-86 del 16 de julio de 1986.
- Artículo No. 4 de la Sesión No. 4154-86 del 6 de agosto de 1986.
- Artículo No. 13 de la Sesión No. 4168-86 del 8 de octubre de 1986.
- Artículo No. 2 de la Sesión No. 4191-87 del 14 de enero de 1987.
- Artículo No. 3 de la Sesión No. 4493-91 del 12 de junio de 1991.

Fecha de entrada en vigor: 2 de diciembre de 1982.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Reglamento para la Aplicación del Régimen Cambiario, el cual se origina y es conforme con lo dispuesto en la Ley No. 6789 del 3 de agosto de 1982, en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Fecha de entrada en vigor: 3 de agosto de 1982.

Fuente: Banco Central de Costa Rica.

Leyes sectoriales

Ley No. 2706 del 2 de diciembre de 1960. Establece exoneraciones del pago de aranceles para la inversión en la industria turística.

Fecha de entrada en vigor: 2 de diciembre de 1960.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 6990 del 15 de julio de 1985. Establece algunos incentivos para el desarrollo del turismo en Costa Rica. Esta Ley fue reformada por la Ley No. 7056 del 9 de diciembre de 1986.

Fecha de entrada en vigor: 15 de julio de 1985.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 5410 del 14 de noviembre de 1977. La Ley de Caza y Pesca establece una serie de beneficios para la industria pesquera.

Fecha de entrada en vigor: 14 de noviembre de 1977.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 4465 del 25 de noviembre de 1969. Esta Ley establece los incentivos recibidos al amparo del Régimen Forestal. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 6442 del 22 de mayo de 1980 y por la Ley No. 7032 del 2 de mayo de 1986.

Fecha de entrada en vigor: 25 de noviembre de 1969.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 6184 del 29 de noviembre de 1977. Se dicta la Ley de Reforestación Nacional.

Fecha de entrada en vigor: 29 de noviembre de 1977.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 1644: Ley Orgánica del Sistema Financiero de 1953. Prohíbe la operación de sucursales de bancos extranjeros en Costa Rica.

Fecha de entrada en vigor: 1953.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

Ley No. 5044: Ley de Sociedades Financieras de Inversión y Crédito Especial no Bancario de 1972. Regula las actividades de las sociedades financieras en Costa Rica.

Fecha de entrada en vigor: 1972.

Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.

- Leyes sectoriales (continuación)**
- Ley No. 3503* de 1965. Establece que el transporte remunerado de personas es considerado un servicio público cuya prestación es facultad del Estado.
Fecha de entrada en vigor: 1965.
Fuente: BID-INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Ley No. 6797:* Código de Minería de 1982. Establece la posibilidad de otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 1982.
Fuente: AMCHAM, Investors' Guide to Costa Rica, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Ley No. 1754* de 1954 y sus modificaciones. Establece que la explotación comercial de servicios inalámbricos de radio y televisión sólo puede permitirse a ciudadanos costarricenses o a empresas en las que por lo menos el 65% del capital pertenezca a costarricenses.
Fecha de entrada en vigor: 1954.
Fuente: BID-INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Ley No. 6588* de 1981. Establece que la refinación, transporte, distribución y venta de petróleo y derivados, salvo aceites y grasas lubricantes, es monopolio estatal ejercido por la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE).
Fecha de entrada en vigor: 1954.
Fuente: BID-INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Leyes de propiedad industrial**
- Ley No. 4543* del 18 de marzo de 1980. Establece el Tratado Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.
Fecha de entrada en vigor: 18 de marzo de 1980.
Fuente: AMCHAM, Investors' Guide to Costa Rica, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Ley No. 6867* del 13 de junio de 1983. Se dicta la Ley de Patentes de Inveniones, Diseños y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad.
Fecha de entrada en vigor: 13 de junio de 1983.
Fuente: AMCHAM, Investors' Guide to Costa Rica, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Leyes de Zonas de Procesamiento de Exportaciones**
- Ley No. 7210* del 23 de noviembre de 1990. Esta Ley establece el Régimen de Zonas Francas.
Fecha de entrada en vigor: 14 de diciembre de 1990.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, Año CXII, No. 38, San José, 14 de diciembre de 1990.
- Decreto No. 20355-H-COMEX* del 2 de abril de 1991. Establece el Reglamento de la Ley de Régimen de Zonas Francas.
Fecha de entrada en vigor: 24 de abril de 1991.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 77, San José, 24 de abril de 1991.
- Ley No. 6955* del 2 de marzo de 1984. Esta Ley de Emergencia Económica crea el Contrato de Exportación y consolida la legislación sobre promoción de exportaciones e industria maquiladora.
Fecha de entrada en vigor: 2 de marzo de 1984.
Fuente: AMCHAM, Investors' Guide to Costa Rica, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Decreto No. 19921-H* del 13 de septiembre de 1990. Establece el Reglamento del Régimen de Admisión Temporal (Industria Maquiladora).
Fecha de entrada en vigor: 17 de septiembre de 1990.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 182, San José, 26 de septiembre de 1990.
- Decreto No. 20134-H* del 30 de noviembre de 1990. Establece incentivos fiscales para las empresas que se acojan al Régimen de Admisión Temporal.
Fecha de entrada en vigor: 30 de noviembre de 1990.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, San José, 1990.
- Leyes sobre promoción de exportaciones**
- Ley No. 5162* del 22 de diciembre de 1972. Establece algunos incentivos para el sector exportador.
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1972.
Fuente: AMCHAM, Investors' Guide to Costa Rica, Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Ley No. 7092:* Ley del Impuesto sobre la Renta del 24 de marzo de 1988. Establece, en el Artículo No. 60 los incentivos para diversas actividades para la exportación.
Fecha de entrada en vigor: 19 de mayo de 1988.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, Año CX, No. 96, San José, 19 de mayo de 1988.

- Leyes sobre promoción de exportaciones** *Ley No. 6986* del 3 de mayo de 1985. Establece una nueva nomenclatura arancelaria y crea el Consejo Arancelario de Centroamérica.
(continuación) Fecha de entrada en vigor: 3 de mayo de 1985.
Fuente: AMCHAM, *Investors' Guide to Costa Rica*. Costa Rican-American Chamber of Commerce, Tercera Edición Revisada, San José, noviembre de 1989.
- Leyes sobre representación de casas extranjeras** *Ley No. 3284*, Título III, Capítulo VII del Código de Comercio. Establece los requisitos para la representación de casas extranjeras. Esta *Ley* fue modificada por la *Ley No. 25* del 24 de mayo de 1969, la *Ley No. 4625* del 30 de julio de 1970 y la *Ley No. 5457* del 20 de diciembre de 1978.
Fecha de entrada en vigor: 1969.
Fuente: CRECEX, *Guía Oficial de asociados 1991*, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, San José, 1991.
- Decreto Ejecutivo No. 2937-H-MEIC* del 10 de abril de 1973. Establece el Reglamento de Representantes de Casas Extranjeras, según lo señalado por el Código de Comercio. Esta norma fue modificada por el Decreto Ejecutivo No. 14271 MEC del 1 de marzo de 1983, el Decreto Ejecutivo No. 15340-MEC del 3 de abril de 1984 y el Decreto Ejecutivo No. 19907-MEIC del 5 de julio de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 10 de abril de 1973.
Fuente: CRECEX, *Guía Oficial de asociados 1991*, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, San José, 1991.
- Ley No. 6209* del 24 de febrero de 1978. Establece la *Ley de Protección al Representante y Distribuidor de Casas Extranjeras*. Esta *Ley* fue modificada por la *Ley No. 6333* del 7 de junio de 1979.
Fecha de entrada en vigor: 9 de marzo de 1978.
Fuente: CRECEX, *Guía Oficial de asociados 1991*, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, San José, 1991.
- Decreto Ejecutivo No. 8599-MEIC* del 5 de mayo de 1978. Reglamenta la *Ley No. 6209* de Protección al Representante y Distribuidor de Casas Extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 5 de mayo de 1978.
Fuente: CRECEX, *Guía Oficial de asociados 1991*, Cámara de Representantes de Casas Extranjeras, San José, 1991.
- Leyes sobre conversión de deuda externa** *Artículo No. 15 de la Sesión No. 3795-85* de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica del 2 de diciembre de 1982. Aprueba el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales. Este Reglamento fue modificado por:
 - Artículo No. 8 de la Sesión No. 3864-83 del 11 de agosto de 1983.
 - Artículo No. 6 de la Sesión No. 3899-84 del 3 de enero de 1984.
 - Artículo No. 10 de la Sesión No. 3965-84 del 21 de agosto de 1984.
 - Artículo No. 3 de la Sesión No. 4105-86 del 22 de enero de 1986.
 - Artículo No. 6 de la Sesión No. 4149-86 del 16 de julio de 1986.
 - Artículo No. 4 de la Sesión No. 4154-86 del 6 de agosto de 1986.
 - Artículo No. 13 de la Sesión No. 4168-86 del 8 de octubre de 1986.
 - Artículo No. 2 de la Sesión No. 4191-87 del 14 de enero de 1987.
 - Artículo No. 3 de la Sesión No. 4493-91 del 12 de junio de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 2 de diciembre de 1982.
Fuente: Banco Central de Costa Rica.
- Ley No. 7143 del 2 de mayo de 1990*. Establece la *Ley sobre la Deuda Externa Comercial del Sector Público de Costa Rica*, en donde se incluye el Acuerdo Financiero de 1989.
Fecha de entrada en vigor: 2 de mayo de 1990.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 82, San José, 2 de mayo de 1990.
- Artículo No. 6 de la Sesión No. 4423-90* de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica del 18 de julio de 1990. Dicta normas para la realización de un programa de conversión de deuda externa dirigido al sector exportador y al turístico. Estas normas fueron modificadas por el Artículo No. 8 de la Sesión No. 4449-90 de la Junta Directiva del BCCR, celebrada el 5 de diciembre de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 18 de julio de 1990.
Fuente: Banco Central de Costa Rica, Departamento de Deuda Externa, diciembre de 1990.
- Acuerdos internacionales** *Acuerdo Relacionado con las Garantías de Inversión*, suscrito entre los Gobiernos de Estados Unidos y Costa Rica el 22 de noviembre de 1968.
Fecha de entrada en vigor: 25 de octubre de 1969.
Fuente: La Gaceta No. 243 del 25 de octubre de 1969.
- Acuerdo Relativo a la Protección y Fomento de Inversiones*, suscrito entre Suiza y Costa Rica el 1 de septiembre de 1965.
Fecha de entrada en vigor: 1966.
Fuente: La Gaceta, segundo semestre de 1966.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Costa Rica no existe una legislación específica en materia de inversión extranjera, sin embargo existen normas que regulan y limitan este tipo de operaciones en el país.

La principal norma que influye sobre el capital extranjero es el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales, aprobado por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica en la Sesión No. 3795-85, Artículo No. 15, celebrada el 2 de diciembre de 1982 y sus posteriores modificaciones.

Además existen regulaciones de carácter cambiario que están contenidas en el Reglamento para la Aplicación del Régimen Cambiario, el cual se origina y es conforme con lo dispuesto en la Ley No. 6789 del 3 de agosto de 1982, en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Costa Rica no tiene una legislación específica en materia de inversión extranjera, sin embargo, dentro de las normas vigentes existen una serie de regulaciones e incentivos para este tipo de inversiones.

La política de inversión extranjera en Costa Rica no tiene ningún antecedente hasta 1982. A mediados de ese año, se inicia todo un proceso de promoción e incentivo para la inversión extranjera en el país, que culmina con la aprobación del Reglamento para el Registro de Capitales, por parte de la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.

Dentro de esta nueva actitud, el Gobierno buscó desarrollar las condiciones políticas y materiales adecuadas para la instalación de empresas con capital extranjero en el país. En primer lugar fortaleció el Centro de Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (CEMPRO), institución gubernamental, fundada en 1968. Para luego, contribuir a la formación de la Coalición de Iniciativas para el Desarrollo (CINDE), entidad privada sin fines de lucro creada en 1982. Ambas instituciones están dedicadas a proporcionar información esencial, guías o reglas y otros detalles administrativos, que contribuyan a la toma de decisiones en materia de producción, exportaciones e inversión, tanto a inversionistas nacionales como extranjeros.

Como parte de esta estrategia de promoción de exportaciones e inversiones se crean las Zonas Procesadoras de Exportación, conocidas como Zonas Francas. Estos parques industriales son áreas en donde productos e insumos relacionados pueden ser importados para operaciones de fabricación, embalaje o empaque y luego ser exportados bajo un régimen de excepción arancelario y fiscal para mercados fuera del Mercado Común Centroamericano. Costa Rica fue el primer país de América Central en ofrecer esta alternativa, y actualmente existen más de 100 empresas extranjeras acogidas a esta modalidad de trabajo.

3. Definición de inversión extranjera directa

En Costa Rica, no existe una definición específica para el concepto de inversión extranjera directa. Sin embargo, el Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales define un proyecto de inversión como la actividad que se desea llevar a cabo o se ha llevado a cabo con los recursos correspondientes al capital que se solicita registrar, ya que este Reglamento se aplica tanto a inversiones como a préstamos externos que solicitan el registro, para diferenciarlos, se define el concepto de "recursos propios" como los fondos provenientes del exterior consistentes en aportes de los socios o asociados.

4. Tratamiento jurídico de la inversión extranjera directa

En Costa Rica, los extranjeros tienen los mismos derechos y obligaciones individuales y sociales que los nacionales, como lo establece el Artículo No. 12 de la Constitución.

Sin embargo, los extranjeros no pueden intervenir en asuntos de política interna del país, votar en elecciones ni apoyar candidaturas, como tampoco asumir posiciones o aceptar trabajos en los cuales se les otorgue autoridad civil o política.

Además, los extranjeros están obligados a contribuir al gasto público, de acuerdo a lo establecido por la Ley, como asimismo obedecer y respetar las Leyes, autoridades e instituciones del país.

Finalmente, cualquier cláusula contenida en tratados internacionales puede prevalecer sobre provisiones legales concernientes a ciudadanía, estado legal de los extranjeros, naturalización, o derechos y obligaciones de los mismos.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa en Costa Rica no requiere de autorización previa.

De acuerdo al Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales, en su Artículo No. 3, el Banco Central de Costa Rica efectúa el registro de aquellos capitales propios, o procedentes de préstamos, que se utilicen para desarrollar proyectos en el país. Para tales efectos, los inversionistas extranjeros deben precisar las características generales del proyecto al que se destinan los fondos del capital a registrar.

De acuerdo al Artículo No. 5 de este Reglamento, el trámite de registro de capitales no se efectúa para montos inferiores a los US\$ 5000, o su equivalente en otra moneda extranjera.

Los beneficios que en materia cambiaria concede este Reglamento pueden ser eliminados en el caso que se determine que el capital registrado no se utilizó en la forma declarada al solicitar el

registro, o cuando los resultados esperados y detallados en la solicitud no se han logrado sin que medien razones aceptables para el Banco Central.

Los inversionistas extranjeros pueden presentar solicitudes de modificación tanto de la información suministrada al momento de efectuar el registro como de las características del proyecto. Esta solicitud es estudiada y resuelta por el Banco Central. El inversionista podrá además conservar sus derechos originales en el caso de que la solicitud de modificación sea formalmente aceptada.

El inversionista extranjero al efectuar el registro debe optar, para la venta de sus divisas al Banco Central, por una de las siguientes alternativas:

a) Registrarlas y venderlas al tipo de cambio interbancario vigente al momento de efectuar el registro. De esta manera el Banco Central garantiza que venderá las divisas necesarias para el servicio del capital al tipo de cambio interbancario vigente al momento de efectuar esta operación.

b) Registrarlas y venderlas al tipo de cambio libre vigente al momento de efectuar el registro. De esta manera el Banco Central garantiza que venderá las divisas requeridas para el servicio del capital al tipo de cambio libre vigente al momento de efectuar esta operación.

Una vez efectuado el registro, utilizando el formulario que para tal fin proporciona la Sección de Registro de Capitales del Banco Central y de conformidad con la decisión del interesado, no es posible modificar la opción escogida.

Cuando el capital que se solicita registrar proviene de un préstamo, el registro está sujeto a los siguientes requisitos:

a) Presentar documentos que contengan las condiciones financieras del crédito.

b) El registro se efectúa cuando el crédito obtenido por el interesado tenga las siguientes características:

- Un plazo mínimo de 5 años.
- Una tasa de interés no superior a la tasa LIBOR a seis meses, más un diferencial señalado por el Banco Central; si se trata de tasas fijas de interés, éstas no pueden ser superiores a las que esté aceptando el Banco Central para el registro de capitales.
- Comisiones no superiores a las que rijan para el respectivo tipo de crédito en el mercado internacional.

Cuando se trata de recursos propios, el inversionista tendrá algunas restricciones para la repatriación de su capital y la remesa de dividendos, las cuales serán explicadas en la sección siguiente.

Finalmente, cuando el capital que se solicite registrar provenga de la conversión a colones de títulos de la deuda externa expresados en divisas y emitidos por el Banco Central de Costa Rica, el

registro y el servicio de estos recursos financieros, estarán sujetos únicamente a lo siguiente:

- a) Las inversiones se deben efectuar en los sectores que señale la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
- b) El inversionista debe presentar ante el Banco Central los documentos que comprueben la inversión de los recursos en el país y los términos en que se hizo efectiva.
- c) El registro se puede realizar en divisas o en colones, según lo solicite el inversionista, teniendo algunas limitaciones para la repatriación de capitales y remesas de dividendos.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

De acuerdo con el Artículo No. 41 del Reglamento para la Aplicación del Régimen Cambiario, Capítulo IV, el Banco Central puede autorizar todas las solicitudes de divisas debidamente justificadas y correspondientes a los siguientes conceptos:

- a) Servicios de deuda privada externa.
- b) Reintegro y dividendos por inversiones de capital.
- c) Derechos de patente, regalías o "royalties" y pagos por servicios profesionales.

De acuerdo al Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales, según el Artículo No. 8, para garantizar la venta de divisas que estén destinadas exclusivamente para cubrir los pagos en el exterior que demande la utilización del capital registrado, se crea un fondo de divisas para atender esas necesidades. Este depósito se oficializa en el Banco Central con la cantidad que el inversionista estima que necesitará para hacer frente a los gastos en el exterior, según le haya sido aprobado al presentar el registro.

El Artículo No. 14 del Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales establece algunas normas para la repatriación de capitales en el caso de que ellos provengan de recursos propios:

- a) El inversionista extranjero puede repatriar su capital después de haber transcurrido dos años a partir de la fecha en que se haya efectuado el registro. Para llevar a cabo tal repatriación, el inversionista extranjero, con un año de anticipación a la fecha en que se desea iniciarla o efectuarla, debe presentar al Banco Central un plan de remisión el cual será autorizado para que empiece a regir un año después de su presentación.
- b) El inversionista extranjero que haya registrado su capital, puede solicitar al Banco Central autorización para efectuar la repatriación de éste en forma distinta a lo señalado en el párrafo anterior, cuando medien situaciones que lo justifiquen. Estas solicitudes son resueltas por la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
- c) El inversionista extranjero puede hacer remesas al exterior de los dividendos que obtenga

como resultado de la inversión efectuada con el capital registrado. Sin embargo, en ningún caso tales remesas pueden ser superiores a los dividendos que muestren los estados financieros, certificados por un contador público autorizado y especificados en la Declaración del Impuesto sobre la Renta.

d) En el caso de los capitales provenientes de recursos propios, el inversionista extranjero puede repatriar el capital después de haber transcurrido 2 años a partir de la fecha de registro y a razón de un 25% durante cada uno de los 4 años siguientes. Las remesas de dividendos al exterior quedan autorizadas, después de los 2 primeros años, por un monto máximo equivalente al promedio diario de la tasa "U.S. PRIME" para el año en que se generen las utilidades, aplicada al saldo del registro de capital.

El Artículo No. 14 BIS del Reglamento para el Registro Selectivo de Capitales establece algunas normas para la repatriación de capitales en el caso de que ellos provengan de conversión a colones de títulos de deuda externa expresados en divisas y emitidos por el Banco Central de Costa Rica:

a) Cuando el registro se realice en divisas, la remisión anual de dividendos al exterior no debe exceder el costo de los recursos en el mercado internacional, el cual es medido por el promedio diario de las tasas LIBOR o U.S. PRIME, según los términos de la solicitud de conversión de deuda. Dichas tasas se aplican al saldo del principal registrado inicialmente.

b) Cuando el registro se realice en colones, la remisión al exterior de los dividendos, no debe exceder las cifras que muestren los estados financieros de la empresa o entidad.

c) En ambos casos, la autorización de divisas para remesar los dividendos al exterior, se limita a lo que muestren los estados financieros de la empresa o entidad, los cuales deben ser certificados por un contador público autorizado y especificados en la Declaración del Impuesto sobre la Renta. En el caso de entidades financieras, esta documentación debe ser además, verificada por la Auditoría General de Bancos.

d) Tanto la repatriación del capital como de las rentas que generen las inversiones, deben ajustarse a los términos en que la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica aprobó el respectivo proyecto de conversión de deuda.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

En algunos sectores económicos, por disposiciones legales, existen limitaciones para el capital extranjero, destacándose:

a) El sector bancario en Costa Rica tiene características que derivan del Decreto de Nacionalización Bancaria (Decreto Ley No. 71) de 1948 que dispuso que "sólo el Estado podrá movilizar, a través de instituciones bancarias propias, los depósitos del público". En consecuencia, sólo los bancos del Estado pueden recibir depósitos en efectivo.

La Ley No. 1644: Ley Orgánica del Sistema Financiero de 1953 y sus reformas, establece que

los bancos privados deben necesariamente constituirse como sociedades anónimas y sus acciones deben ser siempre nominativas. No se admiten sucursales de bancos extranjeros. Los bancos comerciales privados, de capital nacional o extranjero, se financian parcialmente con la colocación de certificados de inversión; pueden aceptar y avalar letras de cambio y otros documentos de crédito; expedir cartas de crédito; garantizar obligaciones por cuenta de terceros; efectuar comisiones de confianza como la custodia de valores y cobros por cuenta ajena.

A través de la Ley No. 5044: Ley de Sociedades Financieras de Inversión y Crédito Especial no Bancario de 1972, se regulan las actividades de las financieras. A ellas también les está prohibido abrir y operar cuentas de depósito en cuentas corrientes, de ahorro y a plazo, y realizar operaciones que la Ley reserva exclusivamente para el Estado.

Actualmente el sistema bancario está formado por el Banco Central de Costa Rica, 4 bancos comerciales estatales, 2 bancos de servicios creados por Ley, 16 bancos privados, 2 bancos cooperativos, y 48 sociedades financieras. La Auditoría General de Bancos, dependiente del Banco Central, monitorea a todas estas instituciones financieras.

b) La Ley No. 3503 de 1965, establece que el transporte remunerado de personas es considerado un servicio público cuya prestación es facultad del Estado, sin embargo éste puede ser ejecutado mediante permisos y concesiones por particulares. Las concesiones se otorgan por medio de licitaciones y, en igualdad de condiciones, la Ley establece que se debe preferir a costarricenses antes que a extranjeros, sea que se trate de personas físicas o jurídicas.

c) La Ley No. 6797: Código de Minería, de 1982 establece la posibilidad de otorgar permisos de exploración y concesiones de explotación a personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras. Expresamente se dispone que los titulares de los derechos mineros quedan sometidos a las Leyes y Tribunales de la República, y si se trata de extranjeros no pueden recurrir a la vía diplomática.

Además esta Ley establece el derecho del Estado a participar como socio, a través de empresa estatal Minera Nacional S.A. (MINASA), en toda concesión de explotación con por lo menos el 33% del capital de la empresa. La participación del Estado puede ser con aportes de capital o mediante obras de infraestructura u otros beneficios que se establezcan al otorgarse la concesión.

d) La Ley No. 1754 de 1954 y sus modificaciones establece que la explotación comercial de servicios inalámbricos de radio y televisión sólo puede permitirse a ciudadanos costarricenses o a empresas en las que por lo menos el 65% del capital pertenezca a costarricenses. Además las estaciones de radioaficionados sólo se autorizan a extranjeros si en sus países de origen se concede reciprocidad a costarricenses.

e) Los servicios públicos de electricidad y teléfonos son estatales y son prestados por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). De igual manera el servicio de agua potable es proporcionado por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado.

f) El servicio de ferrocarriles es un monopolio estatal.

g) La Ley No. 6588 de 1981 establece que la refinación, transporte, distribución y venta de petróleo y derivados, salvo aceites y grasas lubricantes, es monopolio estatal ejercido por la Refinería

Costarricense de Petróleo (RECOPE).

h) El contrato de seguro sobre riesgos de cualquier género está reservado al Estado, que lo presta por medio del Instituto Nacional de Seguros.

8. Tributación

Todas las empresas que invierten en Costa Rica están sujetas a los siguientes impuestos:

a) **Impuesto a la Renta:** Este impuesto, establecido mediante la Ley No. 7092 del 1 de mayo de 1988, se aplica a todo el ingreso ganado en Costa Rica, sin considerar la nacionalidad, domicilio o residencia de quien obtenga las ganancias. El impuesto se aplica sobre los recursos propios; los activos, bienes o derechos invertidos o usados en el país; las actividades agrícolas, industriales y comerciales y sobre las remesas de origen costarricense como pago de servicios. La renta imponible está constituida por el ingreso bruto (ganancias, utilidades y rentas, sea en dinero o en especies) menos las deducciones legales. Tanto los nacionales como los extranjeros están sujetos a este impuesto. Sin embargo, los ciudadanos extranjeros son gravados si su estadía en el país excede 6 meses continuos de un año fiscal.

Las tasas de impuesto a la renta sobre las empresas son proporcionales al ingreso bruto anual, pero son aplicables sobre la renta neta de la siguiente manera:

- Ingreso bruto hasta ₡ 3 millones 10%
- Ingreso bruto hasta ₡ 6 millones 20%
- Ingreso bruto superior a ₡ 6 millones 30%

b) **Impuesto sobre las remesas al exterior:** La Ley No. 7092 señala en el Título IV, Capítulo XXIII, que las ganancias de fuente costarricense de personas naturales o jurídicas no residentes están sujetas a los siguientes impuestos:

- 8.5% para transporte y comunicaciones.
- 10% para sueldos, salarios, pensiones, etc., en relaciones de dependencia.
- 15% para honorarios comisiones y dietas sin relación de dependencia.
- 5.5% para pagos relacionados con seguros.
- 50% para radionovelas y telenovelas.
- 15% sobre los dividendos y distribución de ganancias similares.
- 5% sobre las acciones compradas a través de la Bolsa de Valores.

- 30% sobre intereses y otros pagos financieros, excepto cuando el receptor es una institución financiera reconocida por el Banco Central de Costa Rica.
- 25% sobre royalties, uso de marcas, franquicias, uso de patentes y suministros de fórmulas.
- 30% para cualquier otra remesa no contemplada anteriormente.

c) **Impuesto a las Ventas:** Mediante la Ley No. 6826 del 8 de noviembre de 1982, se establece un impuesto a las ventas de 10% a las personas naturales o jurídicas que importen bienes o servicios, con algunas excepciones.

d) **Impuesto sobre el capital:** Este impuesto incluye un pago de ₡ 750 por el registro de las empresas y pagos anuales que oscilan entre ₡ 750 y ₡ 9000 dependiendo del capital neto de la empresa.

Existen algunos regímenes tributarios especiales para algunos sectores de la economía. En el caso del sector exportador, mediante la Ley No. 6955 de 1984 se establecieron los siguientes incentivos tributarios:

- Una deducción del 100%, hasta el 30 de septiembre de 1996, del impuesto a la renta sobre la porción de las ganancias netas obtenidas a través de exportaciones no tradicionales a terceros mercados.
- Una deducción de 50% en la cantidad pagada a través de la Bolsa de Valores, por la compra de acciones nominativas en empresas que exportan el 100% de su producción. Las deducciones son limitadas al 25% del ingreso neto percibido durante el período fiscal.
- Exoneraciones del pago de aranceles sobre materias primas y otros materiales no producidos en el país, que son parte de los productos no tradicionales exportados a terceros mercados.

Por otro lado, están libres de todo impuesto los bienes producidos bajo el Régimen de Admisión Temporal. Este régimen permite internar en el país ciertas mercancías que serán sometidas a un proceso de transformación para su posterior exportación.

También obtienen algunos beneficios tributarios especiales las empresas ubicadas en zonas de procesamiento de exportaciones o zonas francas, según lo establece la Ley No. 7210 de 1990 de la siguiente manera:

a) Exoneración del pago de todo tributo y derecho consular sobre la importación de materia prima, productos elaborados o semielaborados, componentes y partes, materiales de empaque y envase, así como otras mercaderías y bienes requeridos para su operación. No obstante, el uso de materias primas nacionales debe tener prioridad.

b) Exoneración de todo tributo y derecho consular que afecte la importación de maquinaria y equipo, lo mismo que sus accesorios y repuestos, así como la importación de vehículos automotores necesarios para su operación, producción, administración y transporte.

c) Exoneración de todo tributo y derecho consular sobre la importación de lubricantes requeridos para su operación. Esta exoneración sólo se otorgará cuando éstos no sean producidos en el país.

d) Exoneración de todo tributo asociado con la exportación o reexportación de productos y maquinarias.

e) Exoneración de impuesto sobre las ventas y consumo sobre las compras de bienes y servicios.

f) Exoneración de todo tributo sobre las remesas al exterior.

g) Durante los primeros 6 años de operación las empresas están totalmente eximidas del pago del impuesto a la renta, lo que decrecerá al 50% durante los siguientes cuatro años de operación.

En el caso de la actividad turística, existe una exoneración de aranceles sobre la importación de materiales de construcción y bienes no manufacturados en el país, cuando el monto de inversión supera los ₡ 150000 por un máximo de 5 años. Asimismo, esta exoneración será para aquellas empresas que posean al menos 60% de capital costarricense.

Para la actividad pesquera, existen exoneraciones de impuestos sobre la importación de maquinaria, equipo y lubricantes. Por su parte, la actividad forestal está exceptuada del pago de impuestos territoriales sobre la tierra, impuestos sobre la tierra no cultivable, impuesto a la renta sobre las ganancias generadas de las ventas de productos de plantación e impuestos sobre la importación de vehículos, maquinaria y otras materias primas necesarias para los proyectos forestales.

Costa Rica no ha firmado convenios para evitar doble tributación.

9. Royalties o regalías

En Costa Rica no existe un régimen de autorización previa ni registro de contratos que suscriban las empresas locales, nacionales o extranjeras, para la importación de tecnologías.

Sin embargo, la Ley del Impuesto sobre la Renta establece que por el asesoramiento técnico-financiero o de otra índole, así como por los pagos relativos al uso de patentes, suministros de fórmulas, marcas de fábrica, privilegios, franquicias y regalías, se debe pagar un impuesto del 25%.

Por otro lado, la Ley de Patentes de Invención, Ley No. 6867 del 13 de junio de 1983, establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial de toda transferencia o licencia de patentes.

10. Incentivos a la inversión

Costa Rica garantiza a inversionistas extranjeros bajo el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados. Bajo este convenio, Costa Rica y los inversionistas pueden recurrir a los tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que administra el Banco Mundial.

Además de las garantías de convertibilidad de la moneda de que gozan los capitales debidamente registrados, los inversionistas de los Estados Unidos pueden recurrir al seguro de convertibilidad de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC), así como a los seguros por riesgo político y catástrofes naturales.

Costa Rica esta además favorecida por la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe, la cual fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el 28 de junio y decretada como Ley el 5 de agosto de 1983. Esta Ley proporciona medidas de carácter comercial y tributario con el fin de promover la revitalización económica y expansión de oportunidades en el sector privado en la región de la Cuenca del Caribe, otorgando libre acceso al mercado de los Estados Unidos para un amplio rango de productos. La exención de derechos arancelarios extendida a los países beneficiarios permanecerá en vigencia durante 12 años hasta el 30 de septiembre de 1995.

El gobierno de Costa Rica ha establecido ciertas medidas para promover la inversión en actividades orientadas a la exportación. La Ley de Promoción de Exportaciones (Ley No. 5162 de 1972); la creación del Contrato de Exportación que permite al exportador acogerse a una serie de incentivos tributarios, asumiendo algunas obligaciones con el Consejo Nacional de Inversión; el Régimen de Admisión Temporal (Industria Maquiladora) y la Ley de Promoción a las Zonas Francas, son algunas de las medidas tendientes a desarrollar mayor inversión en el sector exportador. Una comparación de los incentivos establecidos bajo cada uno de estos sistemas se muestra en el cuadro que aparece a continuación:

INCENTIVOS PARA LA EXPORTACION POR SISTEMA

INCENTIVO	ZONA FRANCA	CONTRATO DE EXPORTACION	REGIMEN DE ADMISION TEMPORAL
Derechos de importación de materia prima, componentes, maquinaria y equipo.	Internamiento sin generación de obligación tributaria.	Exoneración proporcional a las ventas de exportación.	Suspensión de derechos.
Impuestos de exportación.	Exoneración 100% sobre exportación a terceros mercados.	Exoneración 100% sobre ventas exportación a terceros mercados.	Exoneración 100%.
Impuesto indirectos: venta y consumo.	No existe obligación de pagar.	Exoneración proporcional a las ventas de exportación.	No existe obligación de pagar.
Impuestos sobre las ganancias.	100% de exoneración.	Exoneración proporcional a las ventas de exportación.	Exoneración 100%.
Impuestos sobre repatriación de ganancias.	Exoneración 100%.	15% de impuesto.	15% de impuesto.
Capital de repatriación.	Puede repatriar el 100% del capital original después de dos años de operación.	Puede repatriar el 100% del capital después de dos años de operación.	Puede repatriar el capital después de dos años de operación.
Administración de moneda extranjera.	Libre.	A través del Banco Central.	A través del Banco Central.
Servicio de Aduana.	Expedido en el lugar.	Procedimiento normal.	Procedimiento normal.
Certificado de Abono Tributario (CAT).	No aplicable.	% del valor FOB en relación con el valor agregado del producto.	No aplicable.
Ventas al mercado local.	Hasta el 40% de las ventas totales.	Se permiten.	Permitida previa autorización del Consejo.
Limitación de tiempo.	Indefinido.	Los contratos vencen en 1996.	Cinco años de permiso prorrogables automáticamente.
Mercado	Local, Centroamericano y Externo.	Local, Centroamericano y terceros mercados.	Solamente terceros mercados.
Exoneración de derechos de importación sobre compras de vehículos.	Exoneración 100%: - Chasis con cabina de 1 ó 2 toneladas de capacidad de carga. - Camiones o chasis para camiones. - Pick up de 1 ó 2 toneladas de capacidad de carga. - Vehículos con capacidad mínima de quince pasajeros.	Proporcional a las ventas de exportación, sólo camiones de carga de más de dos toneladas métricas.	No aplicable.
Deducción de renta imponible por compra de acciones de empresas 100% exportadoras.	No aplicable.	Exoneración del 50% del monto pagado pero no más de 25% de renta neta.	No aplicable.
Bonificación sobre el valor de la planilla.	A empresas de zonas de menor desarrollo por cinco años.	No aplicable.	No aplicable.
Exoneración del impuesto al capital neto, activo territorial, traspaso de Inmuebles, patentes municipales.	100% por 10 años.	No aplicable.	No aplicable.
Zonas Francas Rurales.	Bonificación de 15% sobre planilla del año intermedio anterior.	No aplicable.	No aplicable.
BASE LEGAL.	Ley No. 7210 del 14/12/90.	Ley No. 7092 del 21/04/88.	Ley No. 7092 del 21/04/88.

Fuente: Centro para la Promoción de las Exportaciones y de las Inversiones (CENPRO).

XIII. EL SALVADOR

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	La <u>División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital del Ministerio de Economía</u> es el ente encargado de la autorización y registro de la inversión extranjera en todas sus modalidades.
Definición nacional de inversión extranjera directa	<p>Se entiende por inversión extranjera toda clase de transferencia de capital a El Salvador, proveniente de otros países, efectuada por personas naturales o jurídicas extranjeras, para la producción de bienes y servicios.</p> <p>La inversión extranjera en El Salvador puede ser realizada bajo las siguientes modalidades:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Recursos financieros en divisas de libre convertibilidad. b) Bienes tangibles, tales como maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y materias primas. c) Bienes intangibles, tales como licencias para el uso de patentes de invención, marcas de fábrica y otros distintivos comerciales, nombres comerciales y derechos de autor; contratos de arrendamiento de equipos, de prestación de servicios técnicos de mercadeo, de conocimientos administrativos, y en general, cualquier derecho que tenga un valor económico sin importar la relación que exista o pudiera existir entre la persona que proporciona el servicio y la que lo reciba. d) Reversión de las utilidades obtenidas en el país por inversionistas extranjeros, siempre que hayan sido originadas por la inversión extranjera registrada en el Ministerio de Comercio Exterior. e) Préstamos en divisas en favor de personas naturales y jurídicas domiciliadas en El Salvador; así como aquellas transferencias en divisas destinadas para la adquisición de obligaciones emitidas por personas jurídicas domiciliadas en el país. f) Acciones y participaciones adquiridas por inversionistas extranjeros, por capitalización en sociedades domiciliadas o aumento de capital en sucursales registradas en El Salvador, derivados de utilidades, reservas, revalorización de activos, o de créditos debidamente registrados que tengan contra la sociedad o sucursal sus acreedores.
Participación mínima del capital extranjero	No existen antecedentes en la legislación de El Salvador al respecto.
Flujo de inversión extranjera directa	La información sobre flujos de inversión extranjera directa en el país, corresponde a las inversiones registradas en la División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital del Ministerio de Economía.
Stock de inversión extranjera directa	Para fines de esta publicación, el stock de capital extranjero directo fue calculado como el valor acumulado de los flujos a partir del año 1961.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decreto No. 960* del 28 de abril de 1988, mediante el cual se dicta la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera. Esta norma fue modificada por el Decreto Legislativo No. 189 del 1 de marzo de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 49, Tomo 302 del 10 de marzo de 1989; y por el Decreto Legislativo No. 413 del 8 de diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo 305 del 13 de diciembre de 1989.
Fecha de entrada en vigor: 9 de mayo de 1988.
Fuente: Diario Oficial No. 85, Tomo 299 del 9 de mayo de 1988.
- Decreto No. 1*, Ministerio de Economía, del 9 de enero de 1990. Establece el Reglamento de la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera.
Fecha de entrada en vigor: 9 de enero de 1990.
Fuente: Ministerio de Economía, División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital, 1991.
- Leyes sectoriales** *Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio.* Establece que el comercio, la industria y la prestación de servicios minoristas son patrimonio exclusivo de los salvadoreños.
Fecha de entrada en vigor: 9 de mayo de 1988.
Fuente: Ministerio de Economía, División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital, 1991.
- Ley de Pesca y Caza Marítima.* Establece que los inversionistas extranjeros no tienen acceso a la pesca de baja profundidad, quedando esta actividad reservada a los salvadoreños.
Fecha de entrada en vigor: 9 de mayo de 1988.
Fuente: Ministerio de Economía, División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital, 1991.
- Código de Minería.* Establece el régimen de concesiones mineras para la explotación de minerales, sin derechos de posesión. Los extranjeros pueden acceder a estas concesiones si establecen residencia en el país, se someten a las Leyes de la República y no recurren a la protección de sus gobiernos salvo en el caso de haber agotado los recursos que las Leyes nacionales les otorgan.
Fecha de entrada en vigor: sin información.
Fuente: BID - INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Decreto No. 626* de 1981. Establece que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) puede realizar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos por sí misma o mediante contratos de operación y de servicios petroleros.
Fecha de entrada en vigor: 1981.
Fuente: BID - INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Decreto No. 158* de 1980 de Nacionalización de la Banca. Establece que los bancos comerciales, financieras privadas y, asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda pasan a manos del Estado.
Fecha de entrada en vigor: 1980.
Fuente: BID - INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto No. 461* del 15 de marzo de 1990. Establece el Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales. Esta norma fue modificada por el Decreto No. 753 del 19 de abril de 1991, y publicado en el Diario Oficial No. 96, Tomo 311, del 28 de mayo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 15 de marzo de 1990.
Fuente: Diario Oficial, No. 88, Tomo 307 del 18 de abril de 1990.
- Decreto No. 56* del 20 de septiembre de 1990. Reglamenta el Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales.
Fecha de entrada en vigor: 20 de septiembre de 1990.
Fuente: Diario Oficial, No. 241, Tomo 309, del 16 de octubre de 1990.
- Leyes sobre incentivos a las Exportaciones** *Decreto No. 460* del 15 de marzo de 1990. Se dicta la Ley de Reactivación de las Exportaciones. Esta Ley fue modificada por el Decreto No. 749 del 19 de abril de 1991, publicada en el Diario Oficial No. 95, Tomo 311, del 27 de mayo de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 15 de marzo de 1990.
Fuente: Diario Oficial, No. 88, Tomo 307, del 18 de abril de 1990.
- Decreto No. 68* del 27 de noviembre de 1990. Establece el Reglamento General de la Ley de Reactivación de las Exportaciones.
Fecha de entrada en vigor: 27 de noviembre de 1990.
Fuente: Diario Oficial, No. 269, Tomo 309, del 27 de noviembre de 1990.
- Leyes sobre Privatizaciones** *Decreto No. 768*, del 25 de abril de 1991. Esta Ley crea la Comisión Nacional de Privatización.
Fecha de entrada en vigor: 25 de abril de 1991.
Fuente: Inforpress Centroamericana, No. 943, del 18 de julio de 1991, Ciudad de Guatemala, Guatemala.

**Acuerdos
Internacionales**

Acuerdo Ejecutivo No. 349, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Aprueba el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados, sometido a los Gobiernos por los Directores Ejecutivos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, del 18 de marzo de 1965. Este Convenio es ratificado por el Gobierno de El Salvador el 14 de diciembre de 1982, mediante el Decreto No. 111.

Fecha de entrada en vigor: 14 de diciembre de 1982.

Fuente: Diario Oficial, No. 230, Tomo 277, del 14 de diciembre de 1982.

Decreto No. 737 del 11 de abril de 1991. Aprueba la suscripción del Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA).

Fecha c. entrada en vigor: 11 de abril de 1991.

Fuente: Diario Oficial, No. 67, Tomo 311, del 15 de abril de 1991.

Acuerdo entre los Gobiernos de los Estados Unidos de América y de la República de El Salvador para la Garantía de Inversiones Privadas. Este Convenio cubre los riesgos de la inconvertibilidad y expropiación. La garantía del Gobierno de los Estados Unidos opera a través de la OPIC (Overseas Private Investment Corporation) y sólo se otorga a las inversiones aprobadas expresamente por el Gobierno salvadoreño.

Fecha de entrada en vigor: 29 de enero de 1960.

Fuente: Ministerio de Economía, División de Promoción de Inversiones y Transferencia de Capital, 1991.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En El Salvador la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en el Decreto No. 960 del 28 de abril de 1988, mediante el cual se dicta la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera, publicada en el Diario Oficial No. 85 Tomo 299 del 9 de mayo de 1988. Esta norma fue modificada por el Decreto Legislativo No. 189 del 1 de marzo de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 49, Tomo 302 del 10 de marzo de 1989; y por el Decreto Legislativo No. 413 del 8 de diciembre de 1989, publicado en el Diario Oficial No. 231, Tomo 305 del 13 de diciembre de 1989. La Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera fue finalmente reglamentada por el Decreto No. 1 del 9 de enero de 1990.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a la dictación de la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera de 1988, en El Salvador no existía una legislación específica en esta materia.

Los primeros antecedentes conocidos en El Salvador, sobre la regulación de la inversión extranjera y las operaciones de cambios, con motivo del ingreso y egreso de capital, o por actividades comerciales de exportación e importación, estaban contenidas en la Ley de Control de Transferencias Internacionales y su Reglamento y modificaciones. Esta Ley y su Reglamento fueron promulgados a través de los Decretos Legislativos No. 146 y No. 147, publicados en el Diario Oficial No. 96, Tomo 191 del 30 de mayo de 1961. Esta Ley fue posteriormente modificada por los Decreto Legislativo No. 598 del 28 de mayo de 1964; Decreto No. 128 del 21 de febrero de 1980; Decreto Oficial No. 935 del 4 de enero de 1982 y Decreto Legislativo No. 269 del 17 de febrero de 1986.

De acuerdo al Artículo No. 1, esta Ley tenía por objeto regular las transferencias internacionales de fondos que se efectuaran del país hacia el exterior o del exterior hacia el país, con el objeto de controlar los movimientos internacionales de capital.

La aplicación y ejecución de esta Ley y de su Reglamento correspondía al Banco Central de Reserva a través del Departamento de Control de Cambios, tal como lo establecía el Artículo No. 6 de la Ley y el Artículo No. 2 del Reglamento. El Departamento de Control de Cambios autorizaba la venta de divisas para la remesa de intereses, utilidades y amortizaciones de capital proveniente del exterior, previa autorización del Ministerio de Economía. Asimismo establecía que las inversiones autorizadas a través de esta Ley debían ser inscritas en un Registro especial en el Ministerio de Economía, para poder gozar de los beneficios cambiarios de la misma.

La Ley de Control de Transferencias Internacionales y su Reglamento fue derogada por el Decreto Legislativo No. 746 del 12 de abril de 1991. Sin embargo en lo referente al control de la inversión extranjera, su vigencia llegó hasta 1988, año en que se promulga la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera, vigente en la actualidad. En dicha Ley se establecen nuevas

normas concernientes al registro, garantías y sanciones aplicables a la inversión extranjera.

Bajo la actual administración del Presidente Alfredo Cristiani, además de la dictación de la Ley de Fomento y Garantía de la Inversión Extranjera, se han diseñado una serie de medidas de carácter tributario y de promoción para las inversiones extranjeras. Es así como se han formalizado y fortalecido los programas de promoción de exportaciones y la creación de Zonas Francas Industriales.

3. Definición de inversión extranjera directa

Según el Artículo No. 2 del Decreto No. 960, se entiende por inversión extranjera toda clase de transferencia de capital a El Salvador, proveniente de otros países, efectuada por personas naturales o jurídicas extranjeras, para la producción de bienes y servicios.

La inversión extranjera en El Salvador puede ser realizada bajo las siguientes modalidades:

- a) Recursos financieros en divisas de libre convertibilidad.
- b) Bienes tangibles, tales como maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y materias primas.
- c) Bienes intangibles, tales como licencias para el uso de patentes de invención, marcas de fábrica y otros distintivos comerciales, nombres comerciales y derechos de autor; contratos de arrendamiento de equipos, de prestación de servicios técnicos de mercadeo, de conocimientos administrativos, y en general, cualquier derecho que tenga un valor económico sin importar la relación que exista o pudiera existir entre la persona que proporciona el servicio y la que lo reciba.
- d) Reinversión de las utilidades obtenidas en el país por inversionistas extranjeros, siempre que hayan sido originadas por la inversión extranjera registrada en el Ministerio de Comercio Exterior.
- e) Préstamos en divisas en favor de personas naturales y jurídicas domiciliadas en El Salvador; así como aquellas transferencias en divisas destinadas para la adquisición de obligaciones emitidas por personas jurídicas domiciliadas en el país.
- f) Acciones y participaciones adquiridas por inversionistas extranjeros, por capitalización en sociedades domiciliadas o aumento de capital en sucursales registradas en El Salvador, derivados de utilidades, reservas, revalorización de activos, o de créditos debidamente registrados que tengan contra la sociedad o sucursal sus acreedores.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

De acuerdo al Artículo No. 1 del Decreto No. 960, se establece que el objetivo de esta Ley es fomentar y garantizar la inversión extranjera y regular los derechos y obligaciones de los inversionistas extranjeros para que por sí sola o en combinación con la inversión privada nacional puede contribuir al desarrollo económico y social del país a efecto de incrementar la productividad, la generación de empleo, la exportación de bienes y servicios y aumentar y diversificar la producción.

De esta manera la inversión extranjera registrada tiene en El Salvador las siguientes garantías:

- a) Libre remisión de las utilidades netas generadas por dichas inversiones.
- b) Libre remisión de los fondos provenientes de la liquidación total o parcial de las empresas, en proporción que corresponda a la participación del capital extranjero.
- c) Derecho a que se le reconozca como crédito fiscal por el Impuesto sobre la Renta que corresponda al inversionista extranjero sobre las utilidades que perciba resultantes de su inversión extranjera, la parte proporcional del Impuesto sobre la Renta pagado por la sociedad en la cual ha efectuado la inversión.
- d) Libre negociación de su inversión extranjera en el país.
- e) Libre remisión de ganancias netas de capital que el inversionista extranjero obtenga de la transferencia de su inversión extranjera registrada en el país.

Además de acuerdo al Artículo No. 19 del Decreto No. 960, las personas naturales o jurídicas que hayan registrado inversiones, tienen acceso al financiamiento en el país y a la apertura de cuentas en divisas en el sistema financiero.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

En El Salvador la autorización de la inversión extranjera directa es automática, salvo que en el proceso de registro el Ministerio de Economía presente objeciones.

Todas las modalidades mediante las cuales se puede realizar una inversión extranjera en El Salvador, están sujetas al registro en el Ministerio de Economía.

En el caso de las ganancias obtenidas por la inversión extranjera en el país, para efectos de registro, se aplica el tipo de cambio vigente a la fecha del balance general del ejercicio económico en que fueron generadas.

El Ministerio de Economía debe registrar la inversión dentro de los treinta días hábiles

siguientes a la fecha de presentación de la solicitud. Para tal efecto, el Ministerio está obligado a autorizar con firma y sello toda solicitud de registro. En caso contrario, el Ministerio debe emitir una resolución denegando el registro o modificación. Transcurrido dicho plazo, si todavía no se hubiese hecho el registro, se presume que el Ministerio de Economía lo ha autorizado y tiene la obligación de efectuar dicho registro.

El Ministerio lleva un registro de la inversión extranjera directa, debidamente autorizada, en que se anota la naturaleza, valor, procedencia, destino y fecha de ingreso de la inversión, así como cualquier modificación durante su permanencia y egreso del país.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

La inversión extranjera registrada brinda al inversionista extranjero las siguientes garantías:

- a) La posibilidad de remitir libremente al exterior las utilidades netas generadas por su inversión. Sin embargo, en los casos de inversiones realizadas en actividades comerciales y de servicios, sólo se podrán remitir al exterior las utilidades netas obtenidas por un monto equivalente al 50% de la inversión registrada.
- b) La posibilidad de remitir libremente los fondos provenientes de la liquidación total o parcial de las empresas, en la proporción que corresponda a la participación del capital extranjero.

Cuando una sociedad o empresa en la que se haya efectuado una inversión extranjera, haya sufrido pérdidas, la repatriación será por el saldo neto resultante de restar a la inversión extranjera registrada, las pérdidas acumuladas que le correspondan de acuerdo con el balance debidamente auditado.

- c) La posibilidad de remitir libremente las ganancias netas de capital que el inversionista extranjero obtenga de la transferencia de su inversión extranjera registrada en el país.

De acuerdo al Artículo No. 17 del Decreto No. 960, las transferencias de divisas que se originan de inversiones extranjeras registradas, se efectúan en la moneda en que hayan sido inscritas. Tales transferencias se hacen al tipo de cambio vigente a la fecha en que son solicitadas al Banco Central de Reserva de El Salvador.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

De acuerdo al Artículo No. 4 del Decreto No. 960, las personas naturales o jurídicas extranjeras pueden transferir capital a El Salvador, para realizar inversiones en cualquier sector de la economía, celebrando contratos o adquiriendo, a cualquier título, de conformidad a las leyes aplicables, bienes muebles e inmuebles o cualquier otro derecho que tenga un valor económico.

Sin embargo, a pesar de lo expuesto en el Artículo No. 4, existen algunos sectores que por disposiciones legales, presentan lagunas restricciones para el capital extranjero, destacándose:

a) De acuerdo a la Ley Reguladora del Ejercicio del Comercio y al Artículo No. 5 del Decreto No. 960, el comercio, la industria y la prestación de servicios minoristas son patrimonio exclusivo de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales.

b) De acuerdo a la Ley de Pesca y Caza Marítima y al Artículo No. 5 del Decreto No. 960, los inversionistas extranjeros no tienen acceso a la pesca de baja profundidad, quedando esta actividad reservada a los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. La pesca de baja profundidad no comprende las actividades de acuicultura, cuando éstas se llevan a cabo en estuarios, bahías o dentro de las doce millas marinas contadas desde la línea de la más baja marea.

c) El Código de Minería mediante el Artículo No. 205 establece el régimen de concesiones mineras para la explotación de minerales, sin derechos de posesión. Los extranjeros pueden acceder a estas concesiones si establecen residencia en el país, se someten a las Leyes de la República y no recurren a la protección de sus gobiernos salvo en el caso de haber agotado los recursos que las Leyes nacionales les otorgan.

d) El Decreto No. 626 de 1981, establece que la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) puede realizar las operaciones de exploración y explotación de hidrocarburos por sí misma o mediante contratos de operación y de servicios petroleros. Este Decreto establece que en igualdad de condiciones se debe dar la preferencia a inversionistas nacionales. En la actualidad las funciones de CEL han variado. Un ejemplo es la transferencia al sector privado de la importación de combustibles, a través del dictamen de la Asamblea Legislativa del 27 de abril de 1990.

e) El Decreto No. 158 de 1980, de Nacionalización de la Banca, establece que los bancos comerciales, financieras privadas y asociaciones de ahorro y préstamo para la vivienda pasan a manos del Estado. El cual ofrece el 20% de capital de cada entidad a los empleados de ella, y un 29% puede ser propiedad de inversionistas privados, sean nacionales o extranjeros. En 1990, se dio inicio a un plan de saneamiento de las instituciones bancarias y financieras, todo ello en el marco de una estrategia orientada a reducir la participación del Estado en la economía.

8. Tributación

Las empresas con actividades en El Salvador deben pagar un Impuesto a la Renta de 25%. Además, existe un impuesto a las utilidades de 25%.

El pago de dividendos a personas naturales o jurídicas en el exterior no está sujeto a impuesto, mientras que en los casos de pagos por concepto de regalías, comisiones e intereses, la tasa es de 20%. Sin embargo, los pagos de intereses a las instituciones financieras, previamente aprobados por el Banco Central, están exentos de este impuesto.

Adicionalmente, de acuerdo con el Decreto No. 960, el inversionista extranjero tiene derecho a que se le reconozca como crédito fiscal la parte proporcional del Impuesto a la Renta que le corresponda sobre las utilidades en la sociedad en la cual ha efectuado la inversión.

También, de acuerdo a la Ley de Reactivación de las Exportaciones, Decreto No. 460 del 27 de marzo de 1990, se establece un régimen impositivo especial concedido al sector exportador con la excepción de las exportaciones de café, azúcar y algodón. Dicho régimen contempla lo siguiente:

a) Exoneración total del impuesto de timbres aplicables a la factura de venta sobre las exportaciones, excepto en el caso de que sea una exportación temporal de bienes o cuando éstos sean reexportados definitivamente.

b) Los titulares de las empresas que exporten, comercialicen, maquinen parcial o temporalmente bienes o servicios están exentos del pago del impuesto al patrimonio, en un porcentaje igual al valor exportado. Están exceptuados los casos señalados en el párrafo anterior.

c) Las empresas exportadoras que se acojan al Régimen de Admisión Temporal tienen derecho a una exoneración del impuesto al patrimonio en un porcentaje igual al valor agregado de origen nacional en sus exportaciones.

Finalmente, de acuerdo a la Ley del Régimen de Zonas Francas y Recintos Fiscales, Decreto No. 461 del 27 de marzo de 1990, se establece un régimen de exoneraciones tributarias para los titulares de las empresas que desarrollen, administren o usen las mismas. Entre tales incentivos se encuentran:

a) Exoneración total de los impuestos que graben la importación de maquinaria, equipos, herramientas, repuestos e implementos necesarios para su establecimiento y funcionamiento. Esta exoneración rige tanto para los que desarrollen la Zona Franca, como para sus usuarios.

b) Exoneración total del impuesto a la renta por un período de quince años, tanto para inversionistas nacionales o extranjeros que desarrollen Zonas Francas, como para quienes las administren. El período de exoneración es de diez años para las empresas usuarias de la Zona Franca.

c) Exoneración total de los impuestos fiscales sobre el activo o patrimonio de la empresa. Los beneficiarios son los mismos que los señalados en el párrafo anterior. El período de exoneración es de diez años para el caso de usuarios de Zonas Francas.

d) Exoneración del impuesto de timbre o cualquier indirecto sobre los cánones de arrendamiento en la Zona Franca, para quienes la administren.

e) Libre internación de materias primas, partes, piezas, componentes o elementos, productos semielaborados, productos intermedios, envases, etiquetas, empaques, muestras y patrones necesarios para la ejecución de la actividad de la empresa usuaria de la Zona Franca.

f) Exoneración por un período de diez años de los impuestos que graban la importación de lubricantes y combustibles necesarios para la actividad productiva de la empresa usuaria de la Zona Franca.

XIV. GUATEMALA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	Al no existir en Guatemala una legislación específica que regule al capital extranjero, no ha sido designada ninguna entidad gubernamental como la encargada de la autorización, registro o control de la inversión extranjera directa en el país. Sin embargo, en relación a todos los aspectos de tipo cambiario, el <u>Banco de Guatemala</u> es la autoridad competente.
Definición nacional de inversión extranjera directa	Dado que no existe discriminación entre los inversionistas nacionales y extranjeros, no se encuentra en la legislación guatemalteca una definición específica de inversión extranjera.
Participación mínima del capital extranjero	Para los fines de esta publicación solamente fueron consideradas aquellas empresas totalmente extranjeras (100% capital extranjero).
Flujo de inversión extranjera directa	La información sobre flujos de inversión extranjera directa es el resultado de una investigación realizada por el Banco de Guatemala. El levantamiento de dicha información se hizo identificando a las empresas totalmente extranjeras (100% capital extranjero) autorizadas a operar en Guatemala, registradas en las oficinas del Registro Mercantil de Guatemala. Las empresas con capital mixto no fueron consideradas en esta investigación.
Stock de Inversión extranjera directa	Para fines de esta publicación, el stock de capital extranjero directo fue calculado como el valor acumulado de los flujos a partir de 1971.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica
sobre inversión
extranjera directa

Guatemala no cuenta con una legislación específica que regule al capital extranjero. Sin embargo, algunas normas sectoriales crean ciertos incentivos y obligaciones a la inversión tanto nacional como extranjera.

Leyes sectoriales

Decreto Ley No. 69-85, Ley de Minería, sus reformas, Decreto Ley No. 125-85 y su Reglamento General, Acuerdo Gubernativo No. 1349-85 y sus modificaciones Acuerdo Gubernativo No. 1211-88. Esta Ley establece que son bienes de la Nación, todos los yacimientos que existan en el territorio de Guatemala. Sin embargo, toda persona individual o jurídica, nacional o extranjera, puede adquirir derechos para la explotación minera.

Fecha de entrada en vigor: 1985.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Decreto No. 315-46, Ley de Bancos. Esta Ley establece la normativa para que bancos extranjeros puedan operar en Guatemala mediante sucursales o agencias legalmente establecidas.

Fecha de entrada en vigor: 1946.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Decreto Ley No. 208-64, Ley de Sociedades Financieras Privadas, y sus reformas conforme al Decreto No. 51-72 del Congreso de la República y el Decreto Ley No.10-86. Esta Ley prohíbe el funcionamiento en el país de agencias o sucursales de empresas aseguradoras extranjeras.

Fecha de entrada en vigor: 1964.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Decreto No. 1781-36, Ley de Extranjería. Esta norma establece que las personas jurídicas pueden adquirir propiedades dentro de la faja de 15 kilómetros desde las fronteras si todos los miembros son guatemaltecos por nacimiento.

Fecha de entrada en vigor: 1936.

Fuente: BID-INTAL, Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe, Buenos Aires, 1984.

Decreto No. 109-83, Ley de Hidrocarburos, la cual fue reformada mediante los Decretos Leyes Nos. 161-83 y 143-85, y su Reglamento General, Acuerdo Gubernativo No. 1034-83. Esta Ley establece que en materia de exploración y explotación de petróleo las operaciones petroleras son ejecutadas por el Estado, por medio del Ministerio de Energía y Minas, o bien por medio de contratistas sobre la base de contratos de operaciones petroleras.

Fecha de entrada en vigor: 1983.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Decreto No.72-73 del Congreso de la República. Ley de Fomento de la Ganadería de Leche. Este Decreto intenta promover y desarrollar la crianza de ganado lechero, así como el procesamiento y comercialización de leche y sus derivados. Los principales beneficios que otorga son la exoneración del pago de aranceles para la importación de maquinaria y la exoneración por diez años del pago del Impuesto a la Renta. Posteriormente, el Artículo No. 3 del Decreto No. 59-90 (Ley de Supresión de Privilegios Fiscales) del 14 de febrero de 1991, derogó la exoneración del pago del impuesto sobre la renta.

Fecha de entrada en vigor: 5 de septiembre de 1973.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Decreto No. 59-90 del 14 de febrero de 1991. Establece la Ley de Supresión de Privilegios Fiscales.

Fecha de entrada en vigor: 14 de febrero de 1991

Fuente: Banco de Guatemala, Departamento de Investigaciones Económicas.

Decreto No. 25-74, Ley de Fomento Turístico Nacional. El objetivo de la Ley es controlar, promover y desarrollar la industria del turismo bajo la dirección del Instituto Guatemalteco de Turismo. Se establecen por un lapso de diez años para las empresas que realicen inversiones en este sector exoneraciones de impuestos y rebajas en otros casos.

Fecha de entrada en vigor: 1974

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

Leyes sobre
propiedad industrial

Decreto No. 26-73 del Congreso de la República, Convenio Centroamericano para la Protección Industrial para Registro de la Propiedad Industrial. Esta norma establece un régimen jurídico sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.

Fecha de entrada en vigor: 1973.

Fuente: Guía del Inversionista: Guatemala 1991, Banco de Guatemala.

**Leyes sobre
promoción industrial**

Decreto Ley No. 29-89 del Congreso de la República de Guatemala. *Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila*. Esta Ley tiene por objeto promover, incentivar y desarrollar en el territorio aduanero nacional, la producción de mercaderías con destino a países fuera del área centroamericana, así como regular el funcionamiento de la actividad exportadora o de maquila. Para los efectos de la aplicación de esta Ley, las mercaderías pueden ser objeto de los regímenes siguientes:

Régimen de Exportación de Componente Agregado Nacional Total: Es el aplicable a las empresas cuando dentro de su proceso productivo utiliza en su totalidad mercaderías nacionales o nacionalizadas, para la fabricación o ensamble de productos de exportación. Bajo este régimen se cuenta con una exoneración total de los derechos aduaneros e impuestos de importación, además del Impuesto al Valor Agregado (IVA), y los impuestos a la importación de maquinarias, equipos, partes, componentes y accesorios necesarios para el proceso productivo. Además se cuenta con la exoneración total del Impuesto a la Renta por un período de 10 años.

Régimen de Perfeccionamiento Activo: Régimen aduanero que permite introducir en el territorio aduanero nacional, mercaderías de terceros países para someterlas a operaciones de perfeccionamiento y destinarlas a su exportación fuera del área centroamericana en forma de productos terminados. Quedan comprendidos, dentro de este régimen los siguientes:

Régimen de Admisión Temporal: Es aquel que permite recibir dentro del territorio nacional, en suspensión de derechos arancelarios, impuestos a la importación e Impuesto al valor Agregado (IVA), mercaderías destinadas a ser exportadas o reexportadas en el período de un año después de haber sufrido una transformación o ensamble.

Régimen de Devolución de Derechos: Es aquel que permite una vez efectuada la exportación o reexportación, obtener el reembolso de los derechos arancelarios, impuestos a la importación e Impuesto al Valor Agregado (IVA), pagados en depósito, que hubiese gravado mercancías internadas, productos contenidos en ellas o consumidos durante su proceso.

Régimen de Reposición con Franquicia Arancelaria: Es aquel que permite importar con exoneración de derechos arancelarios e impuestos a la importación, el valor equivalente por los derechos arancelarios e impuestos a la importación pagados por el exportador indirecto. Esta franquicia será utilizada para la reposición de materias primas, productos semielaborados, productos intermedios, materiales, envases, empaques y etiquetas que estén directamente relacionados con su proceso de producción.

Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 1989

Fuente: Congreso de la República de Guatemala.

**Leyes sobre Zonas de
Procesamiento de
Exportaciones**

Decreto No. 65-89. Ley de Zonas Francas. Esta Ley tiene por objeto incentivar y regular el establecimiento en el país de Zonas Francas, que promuevan el desarrollo nacional a través de las actividades que en ellas se realicen particularmente en acciones tendientes al fortalecimiento del comercio exterior, la generación de empleo y la transferencia de tecnología. Según esta Ley, Zona Franca es el área de terreno físicamente delimitada, planificada y diseñada, sujeta a un Régimen Aduanero Especial, en la que personas individuales o jurídicas se dediquen indistintamente a la producción o comercialización de bienes para la exportación o reexportación, así como a la prestación de servicios vinculados con el comercio internacional. Las Zonas Francas pueden ser públicas o privadas y tendrán físicamente separadas el área donde se ubiquen los usuarios industriales y de servicios de aquellas donde se ubiquen los usuarios comerciales, y se pueden establecer en cualquier región del país. Los usuarios autorizados para operar en las Zonas Francas gozarán de la exoneración total de impuestos, derechos aduaneros y cargos aplicables a la importación de mercaderías que sean utilizadas en la producción de bienes y en la prestación de servicios. En Guatemala, actualmente existen tres Zonas Francas (Zona Libre de Santo Tomás de Castilla, Zona La Unión y Zona El Tejar). Posteriormente, el Artículo No. 3 del Decreto No. 59-90 (*Ley de Supresión de Privilegios Fiscales*) del 14 de febrero de 1991, derogó la exoneración del pago del impuesto sobre la renta.

Fecha de entrada en vigor: 14 de noviembre de 1989.

Fuente: Congreso de la República de Guatemala.

Decreto No. 22-73 del Congreso de la República. *Ley Orgánica de la Zona de Libre Industria y Comercio de Santo Tomás de Castilla*, modificado por el Decreto No. 15-79. Con esta norma se busca incentivar el establecimiento de empresas en el puerto de Santo Tomás de Castilla que se encuentra ubicado a 300 kilómetros de la capital. El principal incentivo es la exoneración del pago de derechos, impuestos y contribuciones por los materiales, insumos y maquinarias que se utilicen para operaciones dentro de la zona libre.

Fecha de entrada en vigor: 1973

Fuente: *Guía del Inversionista: Guatemala 1991*, Banco de Guatemala.

**Acuerdos
internacionales**

Decreto No. 1545 del Congreso de la República, *Convenio sobre Garantías de Inversión de Capitales Estadounidenses*. El objetivo de este convenio es garantizar proyectos de inversión de capitales estadounidenses que estén aprobados por el Gobierno de Guatemala. La garantía cubre pérdidas resultantes de inconvertibilidad o expropiación. Para acogerse a este convenio la inversión debe recibir la categoría de estadounidense de la OPIC en Estados Unidos de Norteamérica.

Fecha de entrada en vigor: 1955

Fuente: *Guía del Inversionista: Guatemala 1991*, Banco de Guatemala.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

Guatemala no cuenta con una legislación específica que regule al capital extranjero. Esto se debe a que en Guatemala no existe una distinción explícita entre los inversionistas nacionales y extranjeros, otorgándole los mismos beneficios y obligaciones.

Actualmente, Guatemala cuenta con un régimen cambiario libre que permite a los inversionistas acceder a divisas sin ningún inconveniente. Este hecho, unido a una baja inflación, un valor de la divisa estable en el tiempo y altas tasas domésticas de interés han significado un retorno importante del capital fugado durante la crisis de comienzo de los ochenta, y ha permitido una cierta libertad en el funcionamiento de la inversión privada extranjera.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

A pesar que el Gobierno guatemalteco ha sido receptivo a la inversión privada extranjera, nunca ha dictado una legislación específica en la materia. Quizás la única excepción sea el Convenio de Garantía de Inversión con el Gobierno de los Estados Unidos (Decreto No. 1545 del Congreso de la República), firmado en 1960, que cubre los riesgos de expropiación e inconvertibilidad para los inversionistas estadounidenses. En Guatemala, la inversión extranjera ha recibido el mismo tratamiento y ha gozado de las mismas garantías y obligaciones que la inversión nacional, sin embargo es importante destacar algunas normas que han regulado diferentes aspectos de este tipo de inversiones.

El régimen cambiario ha sido la principal herramienta que ha tenido el Gobierno de Guatemala para el control de la inversión extranjera. Es así como a través de normas cambiarias era obligatorio el registro de los capitales externos para tener derecho a efectuar transferencias al exterior por concepto de repatriación de capital, remesas de utilidades, pagos de regalías, comisiones e intereses.

Guatemala a pesar de haber mantenido una gran estabilidad monetaria, durante algunos períodos debió imponer controles cambiarios. A través de la Ley Monetaria, Decreto No. 203, publicada el 17 de diciembre de 1945 y sus modificaciones, base del régimen cambiario, se establecía un Régimen de Emergencia para las Transacciones Internacionales, el cual es aplicada en períodos de inestabilidad económica y era administrado por el Departamento de Cambios del Banco de Guatemala.

Este régimen se aplicó por primera vez durante el período comprendido entre el 13 de octubre de 1962 y el 15 enero de 1973. A esta emergencia siguió un lapso de libertad cambiaria durante el cual se aplicó un reglamento para el control estadístico de las transacciones que implicaban transferencias de divisas, e imponía la obligación de informar el ingreso de capitales y su retiro.

El 23 de abril de 1980, los controles fueron nuevamente impuestos con el propósito de controlar la expatriación de capitales de Guatemala. Estas medidas fueron formalizadas a través del Reglamento del Régimen de Emergencia para el Control de Transferencias Internacionales por Movimiento de Capitales, dictado por la Junta Monetaria y aprobado por Acuerdo Gubernativo No. 5-80 del Ministerio de Finanzas Públicas y del Ministerio de Economía.

El 16 de noviembre de 1984, mediante el Acuerdo Gubernativo No. 986-84 se dicta el Reglamento de Administración del Régimen de Emergencia en las Transferencias Internacionales, en concordancia con la segunda parte de la Ley Monetaria. Este Régimen de Emergencia era administrado por el Departamento de Cambios del Banco de Guatemala, e imponía el registro de los capitales o inversiones como requisito necesario para obtener divisas para efectuar pagos en el exterior.

El 6 de junio de 1986 cobró vigencia la Ley Transitoria de Régimen Cambiario, contenida en el Decreto No. 22-86 del Congreso de la República. Tal disposición fue adoptada con la finalidad de regular la convertibilidad externa de la moneda nacional. Para tal efecto, se crearon los mercados de divisas Oficial, Regulado y Bancario, en los cuales se llevaron a cabo las operaciones de compra y venta de divisas correspondientes.

El proceso de simplificación cambiaria se inició en 1986 y consistió en la reducción del sistema de tipos de cambio múltiples. Posteriormente, en 1988 se reforzó dicho proceso al emitirse una serie de disposiciones orientadas hacia la unificación cambiaria. En este sentido, el 16 de junio de 1988, entró en vigor el Decreto No. 26-88 del Congreso de la República, que reformó el Artículo No. 9 de la Ley Transitoria del Régimen Cambiario, en el sentido de reducir las operaciones atendibles en el Mercado Oficial, en el cual se dejaron únicamente los pagos derivados de la deuda externa del Banco de Guatemala, desembolsados antes de la vigencia de esta Ley Transitoria.

El 22 de junio de 1988 la Junta Monetaria emitió la Resolución JM-104-88 por medio de la cual aprobó que en el Mercado Regulado se atendieran todas las operaciones de compra de divisas generadas por actividades de toda clase efectuadas en el país y por la comercialización de bienes producidos y servicios prestados en el mismo. Asimismo, que se atendieran todas las operaciones de venta de divisas a países fuera del área centroamericana.

El 3 de noviembre de 1989, culminó el proceso de simplificación cambiaria, la Junta Monetaria emitió la Resolución JM-208-89 mediante la cual aprobó las disposiciones de política cambiaria siguientes: operaciones de compra y venta de divisas atendibles en el Mercado Bancario; fijó los mecanismos para establecer los tipos de cambio que se aplicarán en dicho mercado, los cuales se determinan de acuerdo al comportamiento de las ventas y de las compras de divisas que se realicen en el mismo; fijó la comisión bancaria para la venta de divisas y emitió las resoluciones para el tratamiento de las operaciones de Centroamérica. Adicionalmente, por medio de la Resolución JM-209-89 autorizó al Banco de Guatemala para que estableciera los Tipos de Cambio de Referencia del Mercado Bancario.

Como consecuencia de este marco normativo, únicamente se pueden realizar operaciones cambiarias en los Mercados Oficial y Bancario. Las compras de divisas que se generen por actividades de toda clase efectuadas en el país y por la comercialización de bienes producidos y servicios prestados en Guatemala, así como todas las ventas de divisas a países fuera del área centroamericana,

son atendidas por el Mercado Bancario, salvo las previstas en el Artículo No. 1 del Decreto No. 26-88 del Congreso de la República, que son atendidas en el Mercado Oficial.

A partir de 1989 Guatemala inicia un proceso de reforma de su economía. Dentro de este contexto, se promulgan dos importantes Leyes que son las de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila y la Ley de Zonas Francas (Decretos Ley Nos. 29-89 y 65-89.) que tiene por objetivo fomentan la inversión privada, nacional y extranjera, en el país. Paralelamente, el Gobierno dio inicio a un plan nacional de promoción, diversificación e incremento de las exportaciones, el turismo y las inversiones para lo cual creó el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX) y la Comisión Nacional de Coordinación de Exportaciones (CONACOEX). Estas instancias de coordinación de diferentes instituciones públicas y privadas tienen por objeto proponer al Gobierno políticas en estas materias; así como de velar por la instrumentalización y ejecución de las mismas.

El CONAPEX está integrado, por parte del sector público, por los Ministros de: Economía, quien lo preside; Finanzas Públicas; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Relaciones Exteriores; Comunicaciones, Transporte y Obras Públicas; y por el Presidente del Banco de Guatemala. Por parte del sector privado, por los Presidentes de la: Cámara Empresarial de Guatemala; Cámara de Industria de Guatemala; Cámara de Finanzas; Cámara de Turismo; Cámara de Comercio; Confederación Guatemalteca de Federaciones Cooperativas (CONFECOOP); Unión Nacional Agropecuaria (UNAGRO) y la Asociación de Azucareros de Guatemala (ASAZGUA).

Actualmente, existe gran interés de mejorar las instancias institucionales y administrativas que permita estimular el ingreso de la inversión extranjera directa en Guatemala. Es así como todas las organizaciones, tanto privadas como gubernamentales, vinculadas a este tema y miembros del Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones (CONAPEX), están empeñadas en agilizar los trámites que deben cumplir los inversionistas extranjeros, para lo cual se está trabajando en el proyecto para la creación de la "ventanilla única" de las inversiones.

3. Definición de inversión extranjera directa

Dado que no existe discriminación entre los inversionistas nacionales y extranjeros, no se encuentra en la legislación guatemalteca una definición específica de inversión extranjera.

4. Tratamiento jurídico al inversionista

En general, el inversionista extranjero puede invertir en cualquier sector de la economía guatemalteca, salvo en aquellas actividades que están reservadas a los nacionales o al Estado. Las Leyes otorgan igual trato para inversionistas nacionales y extranjeros y garantizan el derecho de propiedad de las inversiones nacionales y extranjeras, sin otra limitación que las establecidas en las mismas Leyes. En Guatemala, la inversión extranjera no está condicionada a ningún tipo de registro.

Los inversionistas extranjeros tienen derecho a transferir al exterior, en divisas libremente convertibles, sus capitales y las utilidades que estos generen, así como el producto de la venta de sus

acciones. Para estos fines, los inversionistas extranjeros pueden adquirir las divisas necesarias en el sistema bancario local, de acuerdo a la reglamentación cambiaria vigente.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera directa en Guatemala no requiere de autorización previa.

En Guatemala no existe un registro sistemático de la inversión extranjera directa, pues hay un libre acceso al mercado de divisas y no existe una reglamentación que obligue a realizar este trámite.

Sin embargo, de acuerdo al Código de Comercio, Decreto No. 2-70 del Congreso de la República, para el trámite de inscripción de una empresa extranjera o sus sucursales en el Registro Mercantil deben cumplir con los siguientes requisitos:

- a) Comprobar que están organizadas de acuerdo a las Leyes del país en que se hayan constituido originalmente.
- b) Presentar copia certificada de su escritura constitutiva y de sus estatutos, si los tuviese, y sus modificaciones.
- c) Demostrar que han constituido en Guatemala un mandatario con representación, con amplias facultades para realizar todos los actos y negocios jurídicos de su giro y para representar legalmente a la sociedad, en juicio y fuera de él, con todas las facultades especiales pertinentes que establece la Ley del Organismo Judicial.
- d) Probar que han asignado un capital para sus operaciones en Guatemala y adquirir el compromiso de responder no sólo con los bienes que posean en el país, sino también con los que tengan en el exterior, por todos los actos y negocios que celebren en el territorio nacional.
- e) Someterse a la jurisdicción de los tribunales y a las Leyes de Guatemala para todos los actos y negocios que celebren en el territorio nacional o que hayan de surtir sus efectos en él, y presentar declaración de que ni la sociedad ni sus representantes o empleados podrán invocar derechos de extranjería, pues únicamente gozan de los derechos y de los medios de ejercerlos que las Leyes del país de origen otorguen a los guatemaltecos.
- f) Declarar que antes de retirarse del país cumplirán con todos los requisitos legales.
- g) Presentar copia certificada de su último balance general y estado de pérdidas y ganancias.

Por último, dentro del régimen jurídico actualmente vigente en Guatemala, existe un convenio que garantiza la inversión de capitales provenientes de Estados Unidos. Mediante el Decreto No.1545 del Congreso de la República se dictó el Convenio sobre Garantías de Inversión de Capitales Estadounidenses, el cual cubre pérdidas provenientes de inconvertibilidad o expropiación. Las empresas que se acojan a este sistema deben presentar una solicitud al Ministerio de Economía. Es

susceptible de ser garantizado todo proyecto que tenga inversiones de capital proveniente de ciudadanos o de empresas de los Estados Unidos. Estas inversiones pueden consistir de aportes en efectivo o de bienes de capital. Se considera una inversión como proveniente de Estados Unidos si es calificada como tal por el Overseas Private Investment Corporation (OPIC) de ese mismo país.

6. Remisión de capitales y utilidades al exterior

Actualmente, Guatemala cuenta con un régimen cambiario libre que permite a los inversionistas acceder a divisas sin ningún inconveniente.

El régimen cambiario que actualmente existe en Guatemala establece la existencia de tres mercados cambiarios:

- a) **Mercado Oficial:** A través de este mercado se atienden únicamente los pagos por servicio de la deuda externa vencida del Banco de Guatemala, la cual incluye amortización de capital, pago de intereses y otros gastos relacionados con dicha deuda. El tipo de cambio en este mercado es menor que en el resto de mercados.
- b) **Mercado Regulado:** En este mercado, pueden autorizarse las operaciones de compra y venta de divisas que determine la Junta Monetaria.
- c) **Mercado Bancario:** En este mercado se efectúan las compras de divisas que se generen por actividades de toda clase realizadas en el país y por la comercialización de bienes producidos y servicios prestados en Guatemala, así como todas las ventas de divisas a países fuera del área centroamericana.

7. Sectores con restricciones para el capital extranjero

En Guatemala los inversionistas extranjeros pueden invertir en cualquier sector de la economía, salvo en algunas actividades que presentan algunas limitaciones o están reservadas a los nacionales o al Estado, tal es el caso de:

a) **Ley No. 69-85, Ley de Minería, sus reformas, Decreto Ley No. 125-85 y su Reglamento General, Acuerdo Gubernativo No. 1349-85 y sus modificaciones Acuerdo Gubernativo No. 1211-88.** Esta Ley establece que son bienes de la Nación, todos los yacimientos que existan en el territorio de Guatemala, su plataforma continental y su zona económica exclusiva en la forma establecida en sus Leyes o en los convenios internacionales ratificados por él. El dominio sobre los mismos es inalienable e imprescriptible, y gozan de las garantías y prerrogativas que corresponden a los bienes de la Nación. Toda persona, individual o jurídica, nacional o extranjera, puede adquirir derechos mineros, siempre que cumplan con las normas que la Ley y sus disposiciones reglamentarias determinen. Dentro de esta legislación se fijan áreas de reserva nacional minera, lo que limita el acceso a extranjeros a contratos de explotación.

b) Decreto No. 315-46, Ley de Bancos. Esta norma admite que los bancos extranjeros puedan operar en Guatemala mediante sucursales o agencias legalmente establecidas. Estas no necesitan ser administradas por un directorio, pero debe tener uno o más administradores domiciliados en el país, con autorización suficiente para ejecutar las operaciones que correspondan a la naturaleza de la sucursal o agencia. Corresponde al Ejecutivo aprobar su establecimiento, previa opinión favorable de la Junta Monetaria. El trámite se sustancia a través de la Superintendencia de Bancos. No se da trámite a solicitudes de agencias y bancos extranjeros que no hayan operado satisfactoriamente en su país de origen por un período mínimo de 10 años.

c) Decreto Ley No. 208-64, Ley de Sociedades Financieras Privadas, y sus reformas conforme al Decreto No. 51-72 del Congreso de la República y el Decreto Ley No. 10-86. Esta Ley establece que las empresas privadas de seguros, cualquiera sea el origen de su capital, sólo pueden constituirse como sociedades anónimas de acuerdo a las Leyes de Guatemala. Se prohíbe el funcionamiento en el país de agencias o sucursales de empresas aseguradoras extranjeras. Si las empresas aseguradoras que operan en el país no pueden asumir un riesgo necesitan autorización de la Superintendencia de Bancos para contratar el seguro en el exterior y para renovar las pólizas correspondientes. No hay norma expresa que prohíba la participación del capital extranjero en la constitución de empresas aseguradoras locales.

d) Decreto No. 1781-36, Ley de Extranjería. Esta norma establece que las personas jurídicas pueden adquirir propiedades dentro de la faja de 15 kilómetros desde las fronteras si todos los miembros son guatemaltecos por nacimiento.

e) Decreto No. 109-83, Ley de Hidrocarburos, la cual fue reformada mediante los Decretos Leyes Nos. 161-83 y 143-85, y su Reglamento General, Acuerdo Gubernativo No. 1034-83. Esta Ley establece que en materia de exploración y explotación de petróleo las operaciones petroleras son ejecutadas por el Estado, por medio del Ministerio de Energía y Minas, o bien por medio de contratistas sobre la base de contratos de operaciones petroleras. La Ley contempla 4 tipos de contratos: de operaciones petroleras, de participación en la producción, de servicios petroleros y subcontratación de servicios petroleros. En todos ellos pueden participar personas individuales o jurídicas, nacionales o extranjeras, debidamente autorizadas para operar en Guatemala. Los contratistas y subcontratistas quedan sujetos con exclusividad a las Leyes de Guatemala y, si son extranjeros, no pueden recurrir a ninguna forma de reclamación por la vía de protección diplomática. En los contratos de participación en la producción, la participación estatal en la producción de hidrocarburos compartibles debe ser, como mínimo de un 30% en cada área de explotación.

f) Decreto No. 65-89, Ley de Zonas Francas del Congreso de la República. Esta Ley establece que no puede producirse o comercializarse desde una Zona Franca, ni pueden realizarse dentro de ella las siguientes actividades: explotación de petróleo y gas natural; pesca y crianza de especies marítimas o de agua dulce; centros de recreación y hoteles; madera en troza, tabla y tablón; azúcar de caña, refinada o sin refinar y melaza; café en cereza, pergamino y oro; cerdamomo en cereza, pergamino y oro; algodón sin cardar; banano fresco; ajonjolí sin descortezar; caucho natural; reproducción, crianza y engorda de ganado bovino; minería en su fase de extracción; mercancías que causen contaminación; procesamiento y manejo de explosivos y materiales radioactivos; crianza, cultivo y procesamiento de especies de flora y fauna protegidas o prohibidas por convenios o Leyes especiales; empaque, envase o etiquetado de productos a los que Guatemala esté sujeto a cuota. Además, queda prohibido a los usuarios de las Zonas Francas, importar al amparo de esta Ley, los

siguientes artículos: armas de fuego, pólvora, municiones y pertrechos de guerra en general; joyas, relojes de pulsera, cámaras fotográficas no industriales; desperdicios industriales y otros residuos cuyo efecto contaminante ponga en peligro la salud y el medio ambiente; mercaderías de origen fuera del área centroamericana para uso o consumo personal de quienes trabajen o ingresen a las Zonas Francas.

8. Tributación

Hacia fines de 1991 el Gobierno planteó una reforma tributaria, que se puso en vigencia en la segunda mitad de 1992 (Decreto No. 26-92), la cual establece, entre otros aspectos, que el Impuesto a la Renta para las empresas será del 25% sobre las utilidades, más 12.5% sobre la remisión de las mismas al exterior.

El pago de dividendos a personas naturales o jurídicas en el exterior tiene un impuesto que alcanza al 12.5%. Por otro lado, en Guatemala debe cancelarse un impuesto sobre las regalías del 25%. Finalmente, el pago de intereses pagados al exterior tiene una retención del 12.5%, con la excepción de pagos realizados a bancos extranjeros. No existen impuestos sobre las utilidades extraordinarias.

En Guatemala el Impuesto al Valor Agregado (IVA) alcanza al 7%.

Además, las empresas extranjeras gozan de los mismos beneficios que las nacionales si orientan sus recursos en actividades de exportación, maquila y Zonas Francas. Los beneficios van desde la exoneración del Impuesto a la Renta por 10 años en el caso de las exportaciones y 15 años en el caso de las Zonas Francas, hasta la eliminación de los derechos e impuestos de importación sobre todos los insumos y maquinarias que se necesiten para operar en estas actividades. También en el caso de las exportaciones se puede tener acceso al Régimen de Admisión Temporal para la importación de insumos. Dado este marco legal y tributario, gran parte del capital extranjero que ingresa a Guatemala se ha concentrado en las Zonas Francas.

9. Royalties o regalías

Conforme al Decreto No. 26-73 del Congreso de la República se aprobó el Convenio Centroamericano para la Protección Industrial, mediante el cual se establece para los Estados del área un régimen jurídico uniforme sobre marcas, nombres comerciales y expresiones o señales de propaganda.

El objetivo de este Convenio fue dictar normas de carácter técnico que regulen todo lo relativo a marcas y demás aspectos de la propiedad industrial. Para esto, la propiedad de una marca se adquiere mediante el registro de la misma y se prueba con la certificación del registro, extendida por la autoridad competente. Los derechos concedidos por el registro de una marca durarán 10 años, los cuales podrán ser renovados indefinidamente por otros períodos iguales.

Cualquier persona natural o jurídica, guatemalteca o extranjera, puede obtener el registro de sus marcas, siempre que tenga el centro principal de sus negocios en el país. La inscripción de una marca, nombre comercial, expresión o señal de propaganda en el Registro, así como la inscripción o anotación de las operaciones posteriores, están sujetas al pago de derechos.

XV. HONDURAS

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente En la actualidad no existe un proceso de autorización y registro sistemático en Honduras, sin embargo, el Banco Central de Honduras cumple funciones fiscalizadoras en todo lo que tiene que ver con aspectos cambiarios.

De acuerdo a la Ley de Fomento a la Inversión Privada Nacional y Extranjera, legislación nunca aplicada y en actual proceso de revisión, se crea la Comisión de Inversiones, dependiente de la Secretaría de Economía y Comercio, la cual se designa como el organismo encargado de la aprobación de las solicitudes de registro y autorización de la inversión extranjera en Honduras.

El Registro Nacional de Inversión, por su parte, tiene como función llevar el registro no sólo de las inversiones extranjeras en todas sus modalidades, sino de las inversiones nacionales.

Definición nacional de inversión extranjera directa En la legislación actualmente vigente en Honduras no existen definiciones específicas del concepto de inversión extranjera directa.

Sin embargo, de acuerdo al Artículo No. 4, del Decreto No. 266/89 se define inversión de capital extranjero como todo aporte de capital perteneciente a inversionistas extranjeros, aplicado a actividades de índole económico realizadas en el país, y a la adquisición de participaciones en el capital de una empresa local existente, por parte de inversionistas extranjeros.

También el Decreto No. 266-89 define al inversionista extranjero como toda persona física o jurídica domiciliada fuera del territorio nacional, titular de una inversión de capital extranjero o sus representantes en el país, y de las empresas locales de capital extranjero. Estas últimas se definen como toda empresa domiciliada en el territorio de la República en la cual personas naturales o jurídicas domiciliadas fuera de él cuentan directa o indirectamente con la cantidad de votos necesarios, para prevalecer en las asambleas de accionistas o reuniones de socios.

La inversión extranjera, según lo señala el Artículo No. 6 de la legislación hondureña, puede efectuarse en:

- a) Moneda extranjera de libre convertibilidad, internada por medio del sistema bancario y debidamente registrada en el Banco Central de Honduras.
 - b) Bienes tangibles en todas sus formas o estados, que se internen conforme a las normas generales que rijan a las importaciones. Estos bienes serán valorados de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, y asimismo serán registrados.
 - c) Tecnología en sus diversas formas cuando sea susceptible de ser capitalizada, cuyo valor será determinado según su precio real en el mercado internacional, y de conformidad a la estimación jurada del aportante.
 - d) Créditos que estén asociados con una inversión extranjera.
 - e) Capitalización de créditos y deudas externas en moneda de libre convertibilidad.
 - f) Capitalización de utilidades con derecho a ser transferidas al exterior.
- No existen antecedentes en la legislación de Honduras al respecto.

Participación mínima del capital extranjero

Flujo de inversión extranjera directa

La estimación del flujo de inversión extranjera directa corresponde a la inversión de empresas extranjeras en nuevos activos (formación de capital fijo) más la variación de existencias. Este cálculo fue realizado por el Departamento de Estudios Económicos del Banco Central de Honduras. La información con la que se cuenta sólo incluye empresas bananeras, mineras, petroleras y otras no especificadas.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decreto No. 80-92 del 29 de mayo de 1992. Se dicta la Ley de Inversiones. Este Decreto fue reglamentado por el Acuerdo No. 345-92 del 10 de septiembre de 1992.*
Fecha de entrada en vigor: 20 de junio de 1992.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, Año CXVI, del 20 de junio y el 19 de septiembre de 1992.
- Leyes sectoriales** *La Constitución de la República de 1982, aprobada por Decreto No. 131 del 11 de enero de 1982, en su Artículo No. 107, establece que los terrenos en la zona limítrofe con los Estados vecinos y en el litoral de ambos mares, en una extensión de 40 kms. hacia el interior del país, sólo pueden ser adquiridos o poseídos a cualquier título por hondureños de nacimiento, por sociedades integradas en su totalidad por socios hondureños y por las instituciones del Estado. El Artículo No. 107 está regulado por el Decreto No. 90-90 del 14 de agosto de 1990, que establece la Ley para la adquisición de bienes urbanos en las áreas que delimita el Artículo No. 107 de la Constitución de la República.*
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1982.
Fuente: Constitución de la República.
- La Constitución de la República de 1982, en su Artículo No. 337, establece que la industria y el comercio en pequeña escala, constituyen patrimonio de los hondureños.*
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1982.
Fuente: Constitución de la República.
- La Constitución de la República de 1982, en su Artículo No. 73, establece que la dirección de los periódicos impresos, radiales o televisados y la orientación intelectual, política y administrativa de los mismos, debe ser ejercida exclusivamente por hondureños de nacimiento. Sin embargo, esto no significa que existan restricciones en la composición del capital de empresas que exploten estos servicios.*
Fecha de entrada en vigor: 11 de enero de 1982.
Fuente: Constitución de la República.
- Decreto Ley No. 31-92 del 5 de marzo de 1992. Establece la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola. Este Decreto Ley no ha sido aún reglamentado.*
Fecha de entrada en vigor: 5 de marzo de 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Decreto No. 57-91 del 22 de mayo de 1991. Establece la Ley de Incentivos a la Producción Bananera. Este Decreto fue reglamentado por el Acuerdo No. 472-91 del 25 de septiembre de 1991.*
Fecha de entrada en vigor: 22 de mayo de 1991.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Leyes sobre incentivos a las exportaciones** *Decreto No. 37-87, Régimen de Importación Temporal, del 20 de diciembre de 1984. Este Decreto establece un mecanismo de importación temporal con el fin de promover las exportaciones, consistente en la suspensión de pago de derechos aduaneros, derechos consulares y cualesquiera otros impuestos y recargos, incluyendo el impuesto general de venta, que cause la importación de materias primas, productos semielaborados, maquinarias, equipos, etc. Este Decreto fue reglamentado por el Acuerdo No. 174/85, Reglamento al Régimen de Importación Temporal, del 20 de febrero de 1985, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras No. 24559, del 2 de marzo de 1985. Este Decreto fue posteriormente modificado por el Decreto No. 190/86, del 31 de octubre de 1986, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, del 27 de noviembre de 1986; y reglamentado por el Acuerdo No. 545/87, del 20 de febrero de 1987, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, del 16 de mayo de 1987.*
Fecha de entrada en vigor: 27 de diciembre de 1984.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, del 27 de diciembre de 1984.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Decreto No. 37-87, Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP), del 7 de abril de 1987. Esta Ley establece que las ZIP, de propiedad y administración privada, son áreas geográficas del territorio nacional sometidas a la vigilancia del Estado y sin población residente, creadas con el propósito de fomentar mediante el uso de mano de obra local, la industria manufacturera y de servicios, orientada exclusivamente a la exportación. Los bienes y mercaderías que se importen y exporten al amparo de esta Ley, gozan de exoneración total de derechos arancelarios, consulares, cargos y recargos, impuestos internos de consumo, producción, venta y demás impuestos, gravámenes, tasas y sobretasas. De igual manera, las ventas y producción que se generen dentro de la ZIP y los establecimientos industriales y comerciales de la misma, están exentos del pago de impuestos estatales y municipales. Las utilidades que obtengan las empresas de la ZIP están exoneradas del pago del Impuesto sobre la Renta. Además, las divisas que generan las exportaciones de las empresas amparadas en esta Ley son de libre disponibilidad para la empresa que las genera, en otras palabras no están obligadas a repatriar las mismas.*
Fecha de entrada en vigor: mayo de 1987.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, mayo de 1987.

- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones (continuación)** *Decreto No. 356, Ley Constitutiva de la Zona Libre de Puerto Cortés, del 9 de junio de 1976.* Esta Ley crea la Zona Libre de Puerto Cortés, la cual es un área del territorio nacional bajo vigilancia fiscal y sin población residente en la que se pueden establecerse y funcionar empresas comerciales e industriales, básicamente de exportación y actividades conexas o complementarias, nacionales o extranjeras. Las empresas amparadas a la Zona Libre de Puerto Cortés y sus extensiones (Omoa, Choloma, Tela y La Ceiba), pueden introducir libre de todo impuesto las mercancías que requieran para su actividad productiva o comercial. De igual manera, las ventas y producción que se efectúen en la Zona, y los inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma, están exentos del pago de impuestos y contribuciones municipales. Las utilidades que se obtengan en sus operaciones están exoneradas del Impuesto sobre la Renta. Las divisas que generen las exportaciones de las empresas amparadas en la Zona Libre son de libre disponibilidad de la empresa que las genere.
Fecha de entrada en vigor: 9 junio de 1976.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, junio de 1976.
- Decreto No. 84-92.* Establece la Ley de Zonas Libres Turísticas (ZOLT) como una ampliación de la Ley Constitutiva de las Zonas Industriales para Procesamiento de Exportaciones (ZIP).
Fecha de entrada en vigor: 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Leyes sobre conversión de deuda** *Decreto No. 149-88, Ley de Conversión de Deuda Externa, del 12 de diciembre de 1988.* Este Decreto autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de conversión de deuda externa a documentos emitidos en lempiras, denominados "Bonos de Conversión de Deuda Externa", para ser invertidos en actividades de interés económico y social para el país, dando prioridad a las actividades generadoras de divisas. Este Decreto fue reglamentado por el Acuerdo No. 470: Reglamento de la Ley de Conversión de Deuda Externa de Honduras, del 20 de junio de 1989, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras No. 25870, del 29 de junio de 1989.
Fecha de entrada en vigor: 26 de diciembre de 1988.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, Año CXII, No. 25716, del 26 de diciembre de 1988.
- Leyes sobre privatizaciones** *Decreto No. 161-85, Ley de Privatizaciones del 26 de septiembre de 1985.* Reglamenta el traspaso de las empresas de la Corporación Nacional de Inversiones (CONADI) al sector privado. Posteriormente, fue parcialmente reformulado a través del Decreto No. 197-85 del 31 de octubre de 1985, y publicado en La Gaceta el 7 de diciembre de 1985. Estos Decretos fueron reglamentados, a través del Acuerdo No. 298-87, Reglamento de aplicación de las disposiciones contenidas en el Decreto Legislativo No 161/85 y su reforma, del 4 de febrero de 1987, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras No. 25195, del 6 de abril de 1987.
Fecha de entrada en vigor: 10 de octubre de 1985.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial de la República de Honduras, del 10 de octubre de 1985.
- Acuerdos Internacionales** *Convenio de Intercambio de Información Tributaria* suscrito entre los Gobiernos de Honduras y Estados Unidos el 27 de septiembre de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 10 de septiembre de 1991.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Acuerdo de Libre Comercio, Inversión e Integración Económica* suscrito por los Gobiernos de las Repúblicas de Honduras y Guatemala, el 28 de abril de 1992 en Guatemala.
Fecha de entrada en vigor: 28 de abril de 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Acuerdo de Libre Comercio, Inversión e Integración Económica* suscrito por los Gobiernos de las Repúblicas de Honduras y El Salvador, el 12 de mayo de 1992 en El Salvador.
Fecha de entrada en vigor: 12 de mayo de 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Acuerdo de Nueva Ocotepeque sobre Comercio e Inversión* suscrito por los Presidentes de las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras, el 12 de mayo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 12 de mayo de 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Convenio Constitutivo del Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA)* suscrito por Honduras el 1 de octubre de 1991.
Fecha de entrada en vigor: 11 de febrero de 1992.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.
- Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados*, suscrito por Honduras el 25 de julio de 1986.
Fecha de entrada en vigor: 22 de marzo de 1988.
Fuente: Secretaría de Economía y Comercio.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Honduras la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley de Inversiones, aprobada mediante el Decreto No. 80-92 del 29 de mayo de 1992. Este Decreto fue reglamentado por el Acuerdo No. 345-92 del 10 de septiembre de 1992.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

El primer intento para atraer la inversión extranjera lo hizo el gobierno reformista de Marco Aurelio Soto durante la Reforma Liberal de 1876, creando la infraestructura y la legislación necesarias. Desde esa época a la actual han pasado más de 100 años y aunque el proceso se ha interrumpido en varias ocasiones, Honduras ha mantenido una actitud de "puertas abiertas" hacia el capital extranjero.

La política nacional en relación al capital extranjero queda finalmente consolidada, el 11 de enero de 1982, con la dictación de la nueva Constitución de la República. Este nuevo marco legislativo ofrece garantías a la inversión extranjera y reconoce la función social de la propiedad, garantiza la iniciativa privada, el ahorro y la inversión, así como la libertad de comercio, de contratación y de empresa. Además, el capital privado extranjero obtiene el mismo tratamiento que el nacional y goza de los mismos derechos y privilegios, no existiendo restricción alguna que limite las remesas al exterior de dividendos, intereses, regalías y repatriación de capital.

Durante la década de los ochenta en Honduras se crearon una serie de incentivos adicionales que tenían por objetivo atraer al capital extranjero principalmente a actividades vinculadas al sector exportador. Es así como en noviembre de 1983 se dictó la Ley de Fomento a las Exportaciones, en diciembre de 1984 el Régimen de Importación Temporal, en septiembre de 1985 la Ley de Privatizaciones, en abril de 1987 la Ley Constitutiva de las Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP) y, en diciembre de 1988 la Ley de Conversión de la Deuda Externa. Paralelamente, en el año 1985, un grupo de empresarios privados hondureños que deseaba ampliar la oferta exportable del país, reducida a unos pocos productos agrícolas, creó la Fundación para la Inversión y Desarrollo de Exportaciones (FIDE). Esta entidad de carácter privado fue creada con el objetivo de promover la inversión, tanto nacional como extranjera, en Honduras; como asimismo, orientar a los inversionistas extranjeros y facilitarles el acceso a los múltiples incentivos que la legislación hondureña ofrece.

El 15 de diciembre de 1989, se dictó una legislación específica para el tratamiento del capital extranjero, aún cuando esta Ley nunca se aplicó, ni fue reglamentada, es interesante notar que en su formulación existían elementos contradictorios a la política que históricamente había seguido Honduras en esta materia. Es el caso de la creación de una Comisión de Inversiones, cuya misión es aprobar o rechazar las solicitudes de los inversionistas y supervisar la inversión extranjera y a las empresas en que estos participen. El principal beneficio que recibiría el inversionista, cuya solicitud

era aprobada, es el derecho a abrir cuentas bancarias en moneda extranjera y poder transferir al exterior sus capitales y utilidades después de cuatro años, siempre y cuando el inversionista o la empresa generaran las divisas necesarias. Por esta razón, el actual gobierno de Honduras está preparando una nueva legislación al respecto.

En marzo de 1990 Honduras aprobó una Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto No. 18-90) cuyos propósitos eran reducir el déficit fiscal, eliminar algunas distorsiones del sistema tributario y estimular la eficiencia y la competitividad externa de la producción nacional. Para lograrlo, una de las medidas fue realizar una reforma tributaria que eliminó gran parte de las exoneraciones y franquicias aduaneras, redujo el nivel y la dispersión de los aranceles, transformó varios gravámenes específicos a la importación en tributos sobre el valor, elevó las tasas de los impuestos sobre las ventas internas, la producción de ciertos bienes y algunos servicios públicos, modificó la tributación sobre la renta y derogó la Ley de Fomento a las Exportaciones, en el entendido de que la nueva tasa de cambio conllevaba un estímulo suficiente. El tipo de cambio de 2 lempiras por dólar, que había permanecido fijo durante los últimos treinta años, fue elevado a 4 lempiras por dólar y se anunció que de ahí en adelante la política cambiaría tendría en cuenta la evolución del mercado interbancario.

En este nuevo orden económico hondureño, los representantes de instituciones, tanto públicas como privadas, vinculadas al tema del capital extranjero consideraban necesario superar algunos inconvenientes existentes y reformular la legislación actualmente vigente, sintetizándola en un sólo cuerpo legal, cuyos principios básicos serían:

- a) No discriminación entre nacionales y extranjeros.
- b) Garantizar la repatriación de utilidades y capital.
- c) Facilitar los trámites que deben realizar los inversionistas, creando una "ventanilla única", eliminando así el proceso burocrático para acceder a los múltiples incentivos disponibles, administrados por diferentes instituciones con sus propios criterios.
- d) Incorporar todos los incentivos a este cuerpo legal, dando así estabilidad al régimen que enfrenta el inversionista extranjero.
- e) Superar algunas restricciones establecidas en la Constitución Política; como es el hecho de decir que la inversión extranjera es complementaria y no sustitutiva a la inversión nacional; y que no es posible para un extranjero tener actividades en las cercanías de las fronteras y de las costas. Este último punto impide un mayor desarrollo del sector turismo en las zonas costeras, actividad de mucho potencial en Honduras.

Con el objetivo de estimular y garantizar la inversión nacional, la inversión extranjera y las inversiones conjuntas ("joint ventures"), el 29 de mayo de 1992 se aprobó la nueva Ley de Inversiones, mediante el Decreto No. 80-92. Esta nueva legislación contempla un tratamiento igualitario para el inversionista nacional y extranjero, así como una serie de garantías a la inversión. Posteriormente, esta Ley de Inversiones fue reglamentada por el Acuerdo No. 345-92 en el cual se detallan todos los derechos y obligaciones a los que el inversionista extranjero pueda acogerse.

3. Definición de inversión extranjera directa

El reglamento de la Ley de Inversiones (Acuerdo No. 345-92) denomina inversión extranjera a todo aporte de capital en moneda extranjera, las utilidades reinvertidas que retribuyen inversiones extranjeras o aportaciones de bienes tangibles e intangibles de origen interno, destinados a la producción de bienes y servicios pertenecientes a inversionistas extranjeros. También se consideran como inversiones extranjeras las efectuadas por hondureños residentes en el exterior con recursos originados en el extranjero.

Todos los tipos de inversión que se efectúen en Honduras pueden realizarse en la siguiente forma:

- a) Moneda nacional o extranjera de libre convertibilidad.
- b) Bienes tangibles e intangibles en todas sus formas y estados, susceptibles de ser capitalizados.
- c) Créditos asociados a la inversión extranjera.
- d) Capitalización de créditos y deuda externa en moneda de libre convertibilidad.
- e) Capitalización de utilidades.
- f) Otras formas de inversión que sean aplicables, de acuerdo con la Ley de Inversiones.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

La Constitución de la República ofrece garantías a la inversión extranjera y reconoce la función social de la propiedad, garantiza la iniciativa privada, el ahorro y la inversión, así como la libertad de comercio, de contratación y de empresa.

El capital privado extranjero, recibe igual tratamiento que el nacional y goza de los mismos derechos y privilegios, no existe restricción alguna que limite las remesas al exterior de dividendos, intereses, regalías y repatriación de capital.

De acuerdo con el el Decreto No. 80-92, todas las empresas privadas que operen en Honduras serán tratadas de igual forma, sin distinción entre capital hondureño y extranjero.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

El reglamento de la Ley de Inversiones señala, en su Artículo No. 6, que el inversionista nacional o extranjero puede invertir en todas las actividades económicas, sin requerimiento de autorización o permiso previo excepto, en una lista de actividades establecida por el Estado, en las que se puede invertir sólomente después de obtener la autorización del Gobierno. Esta autorización se obtiene a través de la Secretaría de Economía y Comercio, la que consulta con otras instituciones del Estado, involucradas para determinar si procede o no el permiso mencionado.

Por otro lado, todo inversionista nacional y extranjero debe registrar su inversión en la Secretaría de Economía y Comercio, registro que lo hace acreedor a un Certificado de Inversión. Las inversiones realizadas antes de la vigencia de la actual legislación, también deben registrarse para acogerse a las garantías y beneficios ofrecidos por el Estado hondureño.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

En Honduras, no existe restricción alguna por las remesas al exterior de dividendos, intereses, regalías y repatriación de capital.

El reglamento de la Ley de Inversiones establece que las transferencias de divisas que se originen de inversiones extranjeras registradas se efectuarán en la moneda en que hayan sido inscritas o en dólares de los Estados Unidos. La repatriación de capitales se hará en la proporción que corresponda a la participación del capital extranjero, deduciéndose, si fuera el caso, las pérdidas acumuladas respectivas.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

El inversionista nacional o extranjero puede invertir en todas las actividades económicas, sin requerimiento de autorización o permiso previo. Sin embargo, la Ley de Inversiones, mediante su reglamento establece las siguientes actividades como sujetas a autorización previa del Gobierno para poder invertir en ellas:

- Servicios de salud prestados por el sector privado.
- Telecomunicaciones.
- Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Transporte aéreo.
- Actividades económicas desarrolladas en las áreas que delimita el Artículo 107 de la Constitución de la República y el Decreto 90-90.
- Preservación del medio ambiente.
- Caza, pesca y acuicultura.
- Explotación de bosques.
- Investigación, exploración y explotación de yacimientos de minas, canteras, hidrocarburos y demás sustancias asociadas.

Por otra parte, las actividades que por razones de interés público, de acuerdo con el Artículo

No. 332 de la Constitución de la República, requieren de autorización previa del Gobierno son las siguientes:

- Actividades agropecuarias y agroindustriales que excedan los límites del latifundio de acuerdo con la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Modernización Agrícola.
- Servicios financieros y de seguros.
- Servicios educativos prestados por el sector privado.

Finalmente, tal como lo establece la Constitución de la República de 1982, en su Artículo No. 37, los inversionistas extranjeros no pueden dedicarse a la industria y al comercio en pequeña escala, excepto aquéllos que hayan adquirido la carta de naturalización como hondureños, debiendo presentar la documentación que acredite la respectiva naturalización, siempre y cuando en sus países de origen exista reciprocidad.

8. Tributación

Las empresas con actividades en Honduras deben pagar un Impuesto a la Renta de 15% o 40.25%. Si las ganancias son inferiores a 100 mil lempiras la tasa aplicable es del 15%; si están entre 100 mil y 500 mil lempiras, la tasa es de 35%; entre 500 mil y 1 millón de lempiras, la tasa es 38.5%; si son superiores a 1 millón de lempiras la empresa debe pagar el 40.25%.

Los ingresos brutos obtenidos de fuente hondureña por personas naturales o jurídicas no residentes o no domiciliadas en el país, pagarán un Impuesto a la Renta de acuerdo a los siguientes porcentajes establecidos por el Artículo No. 7 de la Ley de Ordenamiento Estructural de la Economía (Decreto No. 18-90):

- a) Renta de bienes muebles o inmuebles 30%
- b) Regalías de las operaciones de minas, canteras, u otros recursos naturales .. 10%
- c) Sueldos, salarios, comisiones o cualquier otra compensación por servicios prestados, dentro o fuera del territorio nacional 35%
- d) Renta o utilidades obtenidas por empresas extranjeras a través de sucursales, subsidiarias, filiales, agencias y representantes legales 35%
- e) Rentas, utilidades, dividendos o cualquier otra forma de participación de utilidades o reservas, de personas naturales o jurídicas 15%
- f) Regalías u otras sumas pagadas por el uso de patentes, diseño, procedimientos y fórmulas secretas, marcas de fábrica y derechos de autor 35%
- g) Intereses sobre operaciones comerciales, bonos y títulos valores 5%
- h) Ingresos por la operación de naves aéreas, barcos y vehículos terrestres 10%

- i) Ingresos de operación de las empresas de comunicaciones 5%
- j) Primas de seguros y de fianzas de cualquier clase sobre pólizas contratadas después del 1 de enero de 1964 30%
- k) Ingresos derivados de espectáculos públicos 30%
- l) Otros ingresos 20%
- m) Las películas y video-tape para cine y televisión 15%

En Honduras, el impuesto al valor agregado alcanza al 7% sobre las ventas o servicios sujetos a gravamen y al 10% cuando se aplique en la venta de cervezas, aguardiente, licores compuestos y otras bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros productos elaborados con tabaco.

Por otro lado, existe un impuesto a la producción y consumo de productos derivados del petróleo importados y transformados o refinados en el país sobre el precio de venta en fábrica y para los combustibles importados el impuesto es de 7% sobre el valor CIF más los impuestos vigentes en otras Leyes.

En Honduras existen algunos regímenes especiales que exoneran a ciertos sectores del pago de impuestos. Este es el caso de Régimen de Importación Temporal (Decreto No. 37 del 20 de diciembre de 1984). Los beneficios correspondientes a este régimen son los siguientes:

- a) Suspensión de pago de derechos aduaneros, derechos consulares, tasa de 5% de servicios administrativo aduanero, impuesto sobre las ventas y cualquier otro impuesto a los que se encontraba sujeta la importación de:
 - Materia prima, productos semielaborados, envases, empaque para producir bienes y servicios que se exporten a países no centroamericanos.
 - Maquinaria y equipo, herramientas, repuestos y accesorios, si se usan exclusivamente para ensamblar, transformar, modificar y producir bienes para la exportación a países no centroamericanos.
 - Muestrarios, instructivos, patrones, maniqués y modelos de diseño.
- b) Exoneración total del pago del Impuesto a la Renta, sobre las utilidades provenientes de la exportación de bienes a países no centroamericanos, por un período de 10 años, cuando la empresa cumpla con los siguientes requisitos:
 - Ser empresa industrial o agroindustrial.
 - Proporcione como mínimo 25 empleos directos.
 - Exporte productos no tradicionales.

No gozarán de este beneficio las personas naturales o jurídicas cuando en su país se les permita deducir o acreditar el Impuesto sobre la Renta pagado en Honduras.

- c) Exoneración del pago del impuesto de 1% sobre las exportaciones.

Un segundo régimen especial es el que se aplica a la Zonas Industriales de Procesamiento para Exportaciones (ZIP). Los bienes y mercaderías que se importen y exporten al amparo del Decreto No. 37/87, gozan de exoneración total del pago de derechos arancelarios, consulares, cargos y recargos, impuestos internos de consumo, producción, ventas y demás impuestos, gravámenes, tasas y sobretasas. De igual manera, las ventas y la producción que se generen dentro de la ZIP y los establecimientos comerciales e industriales de la misma, están exentos del pago de impuestos estatales y municipales. Las utilidades que obtengan las empresas usuarias de la ZIP están exoneradas del pago del Impuesto sobre la Renta.

Finalmente, las empresas con actividades en la Zona Libre de Puerto Cortés y sus extensiones (Omoa, Choloma, Tela y La Ceiba), pueden introducir libre de todo impuesto las mercancías que requieran para su actividad productiva o comercial. Asimismo, las ventas y producción que se efectúen en la Zona y los inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma, están exentos del pago de impuestos y contribuciones municipales, mientras que las utilidades obtenidas están exoneradas del Impuesto sobre la Renta.

9. Royalties o regalías

No hay restricciones legales ni procedimiento de evaluación de contratos de tecnología. Para el pago de regalías debe demostrarse la obligación a cargo del pagador. La obtención de divisas para estos pagos no tiene prioridad. La legislación fiscal no contempla limitaciones en la deducción de pagos por tecnología.

En Honduras, el pago de regalías está sujeto a la cancelación de un impuesto del 35%.

Todo hondureño o extranjero que desee registrar una marca de fábrica, de comercio, de servicio o nombre comercial en Honduras, debe presentar en el Departamento del Registro de la Propiedad Intelectual de la Secretaría de Economía y Comercio, una solicitud que exprese: nombre, domicilio y profesión del solicitante, nombre y ubicación de la fábrica, descripción completa y detallada de las marcas, determinando la clase de productos que ampara según la clasificación industrial. Si ha sido registrada antes en otros países: en que oficina, bajo qué número, en que fecha y qué clase de productos ampara.

Las patentes, sean invenciones, modelos de utilidad, modelos industriales, diseños industriales y derechos de autor, también se tramitan en el Departamento del Registro de Propiedad Intelectual.

10. Incentivos a la inversión

Además de todos los incentivos vinculados al sector exportador anteriormente expuestos, Honduras garantiza a los inversionistas extranjeros bajo el Convenio sobre Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados. Bajo este convenio los inversionistas pueden recurrir a los tribunales arbitrales del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que administra el Banco Mundial.

Por otra parte, Honduras firmó en 1955 con Estados Unidos un Convenio de Garantías de Inversiones, el cual cubre los riesgos de inconvertibilidad, expropiación y guerra. La garantía del gobierno estadounidense opera por medio de OPIC (Overseas Private Investment Corporation) y reconoce la transferencia al gobierno de Estados Unidos de todo derecho, interés, o título de inversores nacionales de Estados Unidos a los que el gobierno haya pagado la garantía, y prevé la subrogación de ese gobierno en toda reclamación que surgiera en relación a esos derechos.

XVI. NICARAGUA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente El Comité de Inversiones Extranjeras, cuya Secretaría Ejecutiva está a cargo de la Dirección de Inversiones Extranjeras del Ministerio de Economía y Desarrollo, es el organismo competente para calificar y autorizar el ingreso de capital extranjero a Nicaragua.

Definición nacional de inversión extranjera directa Se considerará inversión extranjera a la que se realice mediante la transferencia a Nicaragua de capital extranjero, entendiéndose como tal el proveniente del exterior con independencia de la nacionalidad o lugar de residencia del inversionista.

El capital extranjero puede ser introducido a Nicaragua y valorado en una de las formas siguientes:

- a) Divisas extranjeras libremente convertibles, negociadas con el Banco Central de Nicaragua a la tasa de cambio que prevalezca en el mercado bancario.
- b) Activos tangibles, en cualquier forma o condición, que sean introducidos al país bajo las regulaciones generales aplicables a las importaciones realizadas con fondos propios. Estos activos son valorados de acuerdo con los procedimientos regulares que se aplican a las importaciones.
- c) Tecnología en sus diversas formas, siempre que puedan calificarse como capital, tomando en cuenta su precio real en los mercados internacionales.
- d) Capitalización de préstamos obtenidos por el inversionista en moneda libremente convertible.
- e) Reinversión de utilidades debidamente autorizadas por el órgano competente.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley No. 127* del 12 de abril de 1991. Establece los deberes, derechos, condiciones, beneficios y garantías a los que pueden acogerse las inversiones extranjeras en Nicaragua. Esta Ley está reglamentada por el Decreto No. 30-92 del 10 de junio de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 11 de junio de 1992.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, Año XCVI, No. 111, Managua, 11 de junio de 1992.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 125*, Ley para la Creación de la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, del 21 de marzo 1991. Esta Ley tiene por objeto crear la institución responsable de la autorización, supervisión, monitoreo e inspección de todos los bancos, sucursales y agencias bancarias que operen en el país, tanto estatales como privadas, nacionales o extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 10 de abril de 1991.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 64, Managua, del 10 de abril de 1991.
- Leyes sobre zonas de procesamiento de exportaciones** *Decreto No. 46-91* de junio de 1991. Establece la Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación.
Fecha de entrada en vigor: 22 de noviembre de 1991.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 221, Managua, del 22 de noviembre de 1991.
- Leyes sobre incentivos a las exportaciones** *Decreto No. 37-91* del 21 de agosto de 1991. Promueve las exportaciones de productos tradicionales y no tradicionales, fuera del área centroamericana, mediante el otorgamiento de beneficios e incentivos y el establecimiento de mecanismos especiales. Este Decreto ha sido modificado por el Decreto No. 22-92.
Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1991.
Fuente: La Gaceta, Diario Oficial, No. 158, Managua, del 26 de agosto de 1991.
- Leyes sobre privatizaciones** *Decreto No. 7-90*. Crea la Corporación Nacional de Empresas Públicas (CORNAP) para iniciar el proceso de privatización de empresas estatales.
Fecha de entrada en vigor: 17 de mayo 1990.
Fuente: Caldera, Dayton. "¿Qué es la Privatización", *Cuadernos Empresariales*, No. 27, abril-mayo de 1990, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Empresa Privada (INIESEP), Managua, Nicaragua.
- Decreto No. 11-90*. Establece las funciones de CORNAP en cuanto a la devolución de bienes confiscados.
Fecha de entrada en vigor: 1990.
Fuente: Caldera, Dayton. "¿Qué es la Privatización", *Cuadernos Empresariales*, No. 27, abril-mayo de 1990, Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Empresa Privada (INIESEP), Managua, Nicaragua.
- Acuerdos internacionales** *Tratado Bilateral sobre promoción y protección de inversiones* suscrito con Taiwán, República de China el 29 de julio de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 1992.
Fuente: Centro de Exportaciones e Inversiones, Managua, Nicaragua.
- Convenio de la Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)* firmado el 28 de septiembre de 1990. Este Convenio fue ratificado mediante el Decreto No. 10-92 publicado en La Gaceta, Diario Oficial, No. 40 del 28 de febrero de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 29 de febrero de 1992.
Fuente: Centro de Exportaciones e Inversiones, Managua, Nicaragua.
- Convenio de la Overseas Private Investment Corporation (OPIC)*, suscrito el 5 de octubre de 1990.
Fecha de entrada en vigor: 29 de febrero de 1992.
Fuente: Centro de Exportaciones e Inversiones, Managua, Nicaragua.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Nicaragua la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley No. 127 del 12 de abril de 1991. Esta Ley fue reglamentada por el Decreto No. 30-92 del 10 de junio de 1992.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

En Nicaragua se reglamentó por muchos años la inversión extranjera mediante la aplicación de la Ley de Inversiones Extranjeras promulgada según Decreto Legislativo No. 10 del 26 de febrero de 1955. Este reglamento, con carácter promocional, siguió vigente para las inversiones realizadas antes de 1979, año de la revolución sandinista.

Además, en el período anterior a la revolución, en Nicaragua existían otras normas generales que afectaban a la inversión extranjera. La primera de ellas es la Ley de Cambios Internacionales, dictada en 1963, a través del Decreto No. 1-L, que establecía el registro de las inversiones extranjeras para garantizar la posterior remisión de capital y utilidades al exterior. La segunda, la denominada de "contratos de gobierno", que se utilizaba en el caso de inversiones, privadas o públicas, en el sector público, las cuales se regían de acuerdo a las cláusulas específicas establecidas para cada caso en el respectivo contrato que se aprobaba por Decreto.

Al poco tiempo de instalado el gobierno sandinista, se elaboró un programa de gobierno que, estableció algunos principios básicos, en relación con las inversiones extranjeras:

- El capital extranjero debía ser complementario al esfuerzo de ahorro interno.
- El capital extranjero debía ajustarse a la legislación interna y no afectar la soberanía nacional.
- La inversión extranjera era aceptada en las áreas donde los recursos tecnológicos o financieros no pudieran ser suplidos por el capital nacional o por el Estado.
- En ciertos sectores como los de recursos naturales, industrial, financiero y de transportes eran considerados de especial interés nacional.
- No se aceptaban inversiones que afectarían negativamente la ecología o el ambiente social y moral del país.

A pesar de estas consideraciones generales, durante el gobierno sandinista la inversión extranjera siguió siendo regulada por el Decreto Legislativo No. 10 de 1955. Sin embargo, la nueva orientación política del gobierno sandinista redefinió el rol del Estado, que significó una serie de

restricciones sectoriales al capital extranjero:

- Las sucursales de bancos extranjeros establecidos en Nicaragua no pueden captar depósitos del público según lo señala el Decreto No. 25 de 1979.
- Las sucursales de compañías aseguradoras extranjeras no pueden vender nuevos seguros, según lo establece el Decreto No. 107 de 1979.
- Los servicios públicos de transporte son prestados por el sector privados bajo licencias temporales, según lo establecido por el Decreto No. 117 de 1979.
- La Ley de creación de la Corporación Forestal del Pueblo (CORFOP), Decreto No. 410 de 1980, faculta al Estado para ejecutar en todo el país las actividades forestales. Esta misma Ley declara la nacionalización del sector forestal.
- La explotación comercial de radio y televisión se reserva a ciudadanos nicaragüenses o a personas jurídicas cuyos socios sean nicaragüenses, según lo establece la Ley de Medios de Comunicación.
- En síntesis, se reserva al Estado el sistema financiero (Decreto No. 25 de 1979), las instituciones de seguros (Decreto No. 107 de 1979), las actividades forestales (Decreto No. 410 de 1980), la pesca (Decreto No. 233 de 1980 y Decreto No. 1009 de 1982), la minería (Decreto No. 137 de 1979 y Decreto No. 314 de 1980), la electricidad (Decreto No. 189 de 1979) y el comercio exterior de productos básicos.

En noviembre de 1987, fue aprobado un nuevo régimen con el carácter de Ley Marco, en el cual se daban los criterios básicos para una negociación caso a caso entre el inversionista y el gobierno nicaragüense.

En la actualidad, en especial a partir del Plan de Estabilización del 3 de marzo de 1991, el Gobierno ha comenzado a tomar algunas medidas tendientes a estimular la iniciativa privada y la atracción del capital extranjero. De esta manera se dictaron en marzo de 1991 la Ley No. 125, para la creación de la Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras; en abril la Ley No. 127, Ley de Inversiones Extranjeras; en junio la Ley de Zonas Francas Industriales de Exportación; y en agosto el Decreto No. 37, Ley de Promoción de Exportaciones.

La Ley de Inversiones Extranjeras fue reglamentada mediante el Decreto No. 30-92 del 10 de junio de 1992. Dicho reglamento establece las bases para la autorización y puesta en marcha de las inversiones extranjeras en Nicaragua, señalando los derechos, garantías y obligaciones del inversionista extranjero.

3. Definición de inversión extranjera directa

El Artículo No. 2 de la Ley de Inversiones Extranjeras define inversión extranjera como la que se realiza mediante la transferencia a Nicaragua de capital extranjero, entendiéndose como tal

el proveniente del exterior con independencia de la nacionalidad o lugar de residencia del inversionista.

El capital extranjero puede ser introducido a Nicaragua y valorado en una de las formas siguientes, según lo establece el Artículo No. 3 de la legislación nicaragüense:

- a) Divisas extranjeras libremente convertibles, negociadas con el Banco Central de Nicaragua a la tasa de cambio que prevalezca en el mercado bancario.
- b) Activos tangibles, en cualquier forma o condición, que sean introducidos al país bajo las regulaciones generales aplicables a las importaciones realizadas con fondos propios. Estos activos son valorados de acuerdo con los procedimientos regulares que se aplican a las importaciones.
- c) Tecnología en sus diversas formas, siempre que puedan calificarse como capital, tomando en cuenta su precio real en los mercados internacionales.
- d) Capitalización de préstamos obtenidos por el inversionista en moneda libremente convertible.
- e) Reinversión de utilidades debidamente autorizadas por el órgano competente.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

En Nicaragua los inversionistas extranjeros están en todo sujetos a las Leyes y Tribunales del país.

La inversión extranjera es protegida mediante la celebración de un Contrato de Inversión con las autoridades nicaragüenses. Cualquier controversia o diferencia que surja entre el Gobierno y un inversionista extranjero, en relación a la interpretación del Contrato de Inversión, se resuelve mediante arbitraje de conformidad con lo establecido en el mismo, o se somete a la competencia de los tribunales ordinarios nicaragüenses.

Los inversionistas extranjeros gozan de las siguientes garantías, que constituyen garantías del Estado para con ellos:

- a) Repatriación del capital extranjero neto, menos las pérdidas sufridas, la cual no puede ser realizada antes de 3 años a contar de la fecha de entrada al país.
- b) Remisión al exterior de las utilidades netas generadas por el capital registrado.
- c) Indemnización rápida, adecuada y efectiva en caso de expropiación por causa de utilidad pública o interés social.

Para la repatriación de capital y utilidades, los inversionistas extranjeros tienen acceso a la

adquisición de divisas, a la tasa de cambio vigente en el mercado bancario. Sin embargo, las divisas que el inversionista extranjero genere por concepto de exportaciones tiene que ser ingresadas al país.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La autorización de las inversiones extranjeras es formalizada en un Contrato de Inversión celebrado por el Comité de Inversiones Extranjeras y el inversionista extranjero. Asimismo, de acuerdo al Artículo No. 23 de la Ley No. 127, toda inversión extranjera que se realice en Nicaragua debe contar con la autorización del Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Ambiente, a fin de asegurar los recursos naturales y la conservación del medio ambiente.

Una vez suscrito el Contrato de Inversión, el inversionista extranjero deberá negociar con el Banco Central las divisas que constituyan el capital que se va a invertir en Nicaragua. Después de ello, la Secretaría Ejecutiva del Comité de Inversiones Extranjeras efectuará el registro correspondiente en el Registro de Inversiones a su cargo.

6. Remesas de capital y utilidades al exterior

Los inversionistas extranjeros tienen derecho a la remisión de las utilidades netas generadas por el capital registrado, así como a la repatriación del capital extranjero neto, menos las pérdidas sufridas la cual no puede ser realizada antes de los tres años de haber ingresado el capital al país.

Como parte de la repatriación de capital puede reexportarse el equipo y planta introducidos al país como inversión extranjera.

Las divisas necesarias para repatriar el capital o parte de él, sólo pueden ser compradas con el producto de la venta de acciones o derechos que representen la inversión extranjera, o de la venta total o parcial de las empresas compradas o creadas con dicha inversión.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Durante el gobierno revolucionario se dictaron una serie de normas tendientes a la nacionalización de ciertos sectores económicos y a la restricción a la inversión extranjera en muchos sectores reservados a nicaragüenses. Dichos sectores han sido mencionados al describir la evolución de la legislación sobre inversión extranjera. Sin embargo, no se posee información acerca de la vigencia de tales disposiciones ni de su derogatoria al iniciarse el nuevo gobierno en 1990.

Algunos sectores ya han sido desregulados como es el caso del sistema financiero, en el cual se ha permitido el funcionamiento de siete bancos privados. Asimismo, los sectores de energía, telecomunicaciones y recursos naturales están abiertos al capital extranjero.

Finalmente, el Artículo No. 12 del Reglamento de la Ley de Inversiones Extranjeras (Decreto No. 30-92) establece que cualquier inversionista extranjero puede efectuar en Nicaragua inversiones de capital con cualquier objeto lícito que no esté reservado al Estado o a sus nacionales por una Ley especial.

8. Tributación

La Ley No. 127 establece en su Artículo No. 13 que la inversión extranjera está sujeta al Régimen Fiscal vigente. Sin embargo, el Comité de Inversión Extranjera puede liberarla, total o parcialmente, al pago de impuestos fiscales y aduaneros.

La exoneración nunca podrá exceder de un período de tres a cinco años prorrogable. Las exenciones del pago de impuestos que se otorguen a la inversión extranjera no deben amparar aquellos rubros o montos que son gravados en el país de origen de la inversión.

De acuerdo a la nueva Reforma Tributaria del 7 de enero de 1992, las empresas tanto nacionales como extranjeras, con actividades en Nicaragua deben pagar un Impuesto sobre la Renta del 30% de sus utilidades.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros tiene un impuesto del 5%. La tasa de retención por concepto de pago de regalías y pago de intereses al extranjero es de 30%.

Finalmente, el Impuesto General a las Ventas en Nicaragua alcanza al 15%.

En el caso de las exportaciones, la Ley de Promoción de Exportaciones, Decreto No. 37-91, y sus modificaciones a través del Decreto No. 22-92, establecen los siguientes beneficios, tanto para las exportaciones tradicionales como para las no tradicionales:

- a) Exoneración de impuestos y derechos que gravan las importaciones de maquinarias necesarias para la producción, repuestos para las mismas, materias primas, artículos semielaborados, insumos y material de empaque o envase de los productos que hayan de exportarse. Estos bienes deben ser internados bajo el Régimen de Franquicias Temporales, el cual debe ser especificado en la reglamentación de este Decreto.
- b) Exoneración del Impuesto General a las Ventas para la compra de insumos o materias primas nacionales que haga la empresa para producir los bienes que exporte.

Sólo en caso de tratarse de exportaciones no tradicionales se conceden los siguientes beneficios adicionales:

- a) Exoneración del Impuesto sobre la Renta que grave la parte del ingreso neto obtenido por el exportador con la exportación no tradicional realizada, hasta un período máximo de 6 años, en los siguientes porcentajes:

Año 1992	80%
----------------	-----

Año 1993	80%
Año 1994	75%
Año 1995	70%
Año 1996	65%
Año 1997	60%

- b) Derecho a que se le extienda un Certificado de Beneficio Tributario (CBT) equivalente al 15% del valor FOB de los bienes exportados entre 1992 y 1994, 10% entre 1995 y 1996 y 5% en 1997.

Otro sector que mantiene un régimen tributario especial es el desarrollado en Zonas Francas. Todas las empresas que se establezcan en dichas zonas tendrán las siguientes ventajas fiscales:

- a) Exoneración del 100% durante los primeros 10 años de funcionamiento y del 60% desde el undécimo año en adelante, del pago de Impuesto sobre la Renta generada por la empresa en sus actividades.
- b) Exoneración del pago de impuesto sobre la enajenación de bienes inmuebles.
- c) Exoneración del pago de impuestos por constitución de sociedades mercantiles o de aumentos de capital de las mismas.
- d) Exoneración de todos los impuestos y derechos de aduana y de consumo conexos a las importaciones, aplicables a la introducción al país de materias primas, materiales, equipos, maquinarias y partes o repuestos destinados a habilitar a la empresa para sus operaciones en la zona.
- e) Exoneración de impuestos de aduana sobre los equipos de transporte que sean vehículos de carga, pasajeros o de servicios, destinados al uso normal de la empresa.
- f) Exoneración total de impuestos aduaneros y demás gravámenes conexos sobre la importación de repuestos, matrices, muestras, moldes y accesorios necesarios.

XVII. PANAMA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente El Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE) es la autoridad administrativa encargada de atraer la inversión extranjera mediante la promoción de oportunidades de inversión en el país. El IPCE no cumple labores de regulación ni control de la inversión extranjera, por lo que no deja ningún registro específico de este tipo de inversiones. El IPCE lo que sí hace es asesorar al inversionista extranjero y recomendarle a cuales incentivos acogerse, así como guiarlo en todo el proceso burocrático que debe cumplir para radicarse en el país.

En Panamá existen una serie de instituciones gubernamentales encargadas de la administración de los incentivos ofrecidos por el país. Tal es el caso de la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones, responsable del manejo de los Certificados de Abono Tributario (CAT), establecidos en la Ley No. 108-74, y del Ministerio de Comercio e Industrias, a través de la Dirección Nacional de Desarrollo Empresarial, que maneja el sistema de incentivos para las empresas industriales y exportadoras, básicamente los otorgados por la Ley No. 3-86.

En Panamá, la inversión extranjera directa no requiere de autorización previa. Tan solo se debe recurrir a las instituciones antes mencionadas para acogerse a alguno de los incentivos ofrecidos. Por esta razón no existe un registro sistemático de la inversión extranjera en el país, por parte de las instituciones que administran estos incentivos. La única institución que cumple con estas funciones es la Contraloría General de la República, quien a través de la Dirección de Estadísticas y Censos hace una encuesta anual a las empresas que tengan más de 50% de capital extranjero con actividades en Panamá.

Definición nacional de inversión extranjera directa Para fines estadísticos, la Dirección de Estadísticas y Censos, considera como inversión directa extranjera el monto de capital invertido por empresas o particulares residentes en el exterior, en sociedades o compañías que operan en la República de Panamá, y sobre las cuales ejercen un control efectivo.

Participación mínima del capital extranjero No existen disposiciones específicas sobre participación obligatoria del capital nacional en el capital extranjero, ni sobre la participación de este último en las empresas existentes.

Sin embargo, en Panamá se agrupan las empresas de inversión extranjera directa en las siguientes categorías:

- a) **Sucursal:** es una unidad de la empresa que funciona en una localidad diferente a la casa principal. No constituye una entidad jurídica separada, pero tiene ciertas funciones en su forma de explotación que la convierten en parte integral de la economía panameña.
- b) **Subsidiarias:** es una sociedad de capital subordinado a otra o a un grupo de sociedades afiliadas. Controla un número suficiente de acciones votantes como para permitirle ejercer influencia importante en la toma de decisiones.
- c) **Otras empresas:** Incluye el grupo de empresas no constituidas en sociedades de capital, que funcionan por separado en el país y que son de propiedad de no residentes, o en las que los socios no residentes tienen participación mayoritaria.

Para fines estadísticos, la Contraloría General de la República solamente considera aquellas empresas que tengan más de 50% de capital extranjero, dentro de la muestra sobre la que se aplica su encuesta anual.

Flujo de inversión extranjera directa

Es la variación de la participación del inversionista extranjero directo en el capital de una empresa de inversión directa.

Cráteros para el registro

La información incluida en este documento proviene de una encuesta anual, realizada por la Dirección de Estadísticas y Censos de la Contraloría General de la República, a las empresas que tengan más de 50% de capital extranjero con actividades en Panamá. La muestra es identificada directamente por esta Dirección mediante entrevistas a los gerentes de las empresas que se inscriben en el Registro Oficial de la Industria Nacional en el Ministerio de Comercio e Industrias. Esta encuesta se realiza en forma continua desde 1960, inicialmente con 77 empresas llegando a 99 en el año 1989, última encuesta procesada. Actualmente, se está trabajando en la encuesta correspondiente a 1990, además se está buscando mejorar la calidad de la muestra y su cobertura, ya que se pretende incorporar las empresas con actividades en la Zona Libre de Colón (zona de libre comercio y actividades productivas acogidas a múltiples beneficios e incentivos), además de las instituciones bancarias.

Stock de inversión extranjera directa

Se refiere al capital extranjero acumulado, invertido en empresas establecidas en el país a un período determinado.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica sobre inversión extranjera directa	<p>Panamá presenta características muy particulares: a) no cuenta con una moneda propia, se utiliza el dólar americano como medio de intercambio, lo que implica que no existen ningún tipo de restricciones cambiarias; b) existe una igualdad total entre nacionales y extranjeros ante la Ley, lo que queda consagrado en la Constitución Política del país. En este contexto, no existe una legislación específica que regule a la inversión extranjera directa en Panamá; pero si existe un grupo de cuerpos legales de incentivos a la inversión a los que se pueden acoger, tanto nacionales como extranjeros.</p>
Leyes sectoriales	<p><i>La Constitución Política de 1972</i>, establece en su Artículo No. 286, que las personas naturales o jurídicas extranjeras, y las personas jurídicas nacionales cuyo capital sea en todo o en parte extranjero, no pueden adquirir la propiedad de tierras, nacionales o particulares, situadas a menos de 10 kms. de las fronteras. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1972. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE), 1991.</p> <p><i>La Constitución Política de 1972</i>, establece en su Artículo No. 288, que el comercio al por menor está reservado a panameños de nacimiento, extranjeros nacionalizados y casados con panameños o panameñas. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1972. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE), 1991.</p> <p><i>Ley No. 8-56</i> y sus modificaciones, Código Fiscal, establece que el servicio de correos y telégrafos debe ser prestado exclusivamente por el Estado en el territorio nacional. Además dispone que otros servicios públicos sean prestados por entidades autónomas del gobierno, por ejemplo el servicio eléctrico por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Uno de los dos ferrocarriles que operan en el país es estatal, Ferrocarril Nacional de Chiriquí, el otro es privado. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1956. <u>Fuente:</u> BID-INTAL, <u>Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe</u>, Buenos Aires, 1984.</p> <p><i>La pesca en aguas panameñas</i>, cuyo producto está destinado a la venta dentro del país, queda reservada a inversionistas nacionales. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> sin información. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE), 1991.</p> <p><i>La radiodifusión</i> es una actividad reservada a ciudadanos panameños. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> sin información. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE), 1991.</p> <p><i>Decreto No. 238-70</i>, Ley del Régimen Bancario. Esta Ley establece que para operar en el país todo banco debe obtener una licencia que otorga la Comisión Bancaria Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1970. <u>Fuente:</u> BID-INTAL, <u>Regulación de la Inversión Extranjera en América Latina y el Caribe</u>, Buenos Aires, 1984.</p> <p><i>Decreto Ley No. 26</i> del 27 de septiembre de 1967, por el cual se crean incentivos para promover la construcción y rehabilitación de hoteles y otras instalaciones de naturaleza turística. Estos incentivos comprenden la exoneración del pago de impuestos de importación de maquinaria, equipo y repuestos. Asimismo exoneración del 100% del pago de impuestos por concepto de muellaje, aterrizaje en muelles y aeropuertos construidos por la empresa inversionista. Todo lo anterior por un plazo de 20 años. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 20 de junio de 1972. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior, 1991.</p> <p><i>Decreto de Gabinete No. 77</i> del 18 de marzo de 1991, por la cual se establecen incentivos para promover la programación de eventos de interés turístico. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 18 de marzo de 1971. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior, 1991.</p> <p><i>Decreto Ley No. 102</i> del 20 de junio de 1972, por el cual se establecen incentivos para promover el desarrollo turístico en el país mediante la denominación de zonas turísticas especiales. Entre los incentivos están las exoneraciones de pagos de impuestos por concepto de importación, renta, capital y activos y bienes y raíces. Los plazos de la exoneración varían entre 13 y 20 años según el impuesto. <u>Fecha de entrada en vigor:</u> 20 de junio de 1972. <u>Fuente:</u> Instituto Panameño de Comercio Exterior, 1991.</p>

- Leyes sectoriales (continuación)**
- Decreto Ley No. 26* de 1967. Se establecen incentivos y se facilitan la construcción y rehabilitación de hoteles y otras instalaciones turísticas.
Fecha de entrada en vigor: 27 de septiembre de 1967.
Fuente: Instituto Panameño de Comercio Exterior, 1991.
- Decreto de Gabinete No. 102* de 1972. Se establece una zona especial turística y se da una serie de incentivos para el desarrollo turístico.
Fecha de entrada en vigor: 20 de junio de 1972.
Fuente: Instituto Panameño de Comercio Exterior, 1991.
- Leyes sobre propiedad industrial**
- Código Administrativo de 1916*, Libro IV, Título VII, referido a las patentes de invención, marcas registradas. En el caso de las patentes se establece que la autoridad competente definirá la duración de la patente que variará entre 5 y 20 años. Asimismo, se establece en el caso de las patentes extranjeras que para su inscripción debe probarse su existencia en el país de origen y que la patente no será más extensa que el período de vigencia que haya obtenido el inventor en su país de origen.
Fecha de entrada en vigor: septiembre de 1916.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Código Penal de 1982*, Segundo Volumen, Título XII, Capítulo IV, Artículos Nos. 382 al 385. Se establecen penas para el uso indebido de patentes y marcas registradas. Se establecen penas de prisión que van de seis meses a tres años.
Fecha de entrada en vigor: octubre de 1982.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Ley No. 11* de 1974. Establece que el Ministerio de Comercio garantizará, a través de su Dirección General de Comercio todas las patentes, marcas registradas y marcas de comercio.
Fecha de entrada en vigor: 29 de enero de 1974.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Ley No. 45* de agosto de 1975. Deroga el numeral 15 del Artículo No. 57 del Código de Comercio. Se crea el registro de propiedad industrial.
Fecha de entrada en vigor: 20 de agosto de 1975.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Ley No. 19* de 1982. Se regula la producción de alimentos de origen animal y vegetal para consumo humano. Se establece en el Artículo No.7 que las agencias o representantes de equipos de producción y bienes no pueden negar asistencia técnica ni siquiera en el caso en que la importación de dichos bienes haya sido realizada directamente. De transgredir este Artículo, perderán la protección legal que tienen como representantes o agentes.
Fecha de entrada en vigor: 13 de octubre de 1982.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Decreto de Gabinete No. 344* de 1969. Se regulan las agencias de representación y distribución de productos o servicios de firmas nacionales y extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 18 de noviembre de 1969.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Decreto de Gabinete No. 389* de 1969. Se autoriza al Ministerio de Comercio a editar un boletín sobre propiedad industrial.
Fecha de entrada en vigor: 5 de enero de 1970.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Decreto Ejecutivo No. 1* de marzo de 1939. Regula las disposiciones referentes a patentes de invención, marcas comerciales, marcas registradas y nombres comerciales.
Fecha de entrada en vigor: 17 de marzo de 1939.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Decreto Ejecutivo No. 9* de 1970. Se adoptan ciertas medidas relacionadas con el Decreto de Gabinete No. 344 de octubre de 1969 que regulaba las agencias de representación y distribución de empresas comerciales nacionales y extranjeras.
Fecha de entrada en vigor: 7 de febrero de 1970.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.
- Decreto No. 107* de agosto de 1981. Mediante este Decreto se adopta la clasificación internacional de marcas registradas para productos y servicios.
Fecha de entrada en vigor: 21 de agosto de 1981.
Fuente: Arosemena, Noriega y Castro, Legal Provisions in Force on Industrial Property, Panamá, septiembre de 1985.

- Leyes sobre promoción industrial** *Ley No. 1* del 20 de marzo de 1986, por la cual se modifica la *Ley Laboral* y se introducen reformas para la promoción del empleo y la productividad. Se introducen cambios en la definición de pequeñas empresas en sectores como la agricultura e industria.
Fecha de entrada en vigor: 20 de marzo de 1986.
Fuente: Panamá: *The Most Logical Place to Invest*, Instituto Panameño de Comercio Exterior, Panamá, 1991.
- Ley No. 2* del 20 de marzo de 1986, por la cual se establecen medidas e incentivos en favor de la producción y exportaciones agropecuarias. La *Ley* tiene como objetivo incrementar el desarrollo del sector agropecuario e incentivar la producción de aquellos productos que más contribuyan al desarrollo del país. Se establecen mecanismos de asistencia técnica, algunas rebajas en el cobro por el uso de la energía eléctrica. Asimismo se establece que aquellos inversionistas que se acojan a esta *Ley* deberán mantener al menos tres años su inversión.
Fecha de entrada en vigor: 20 de marzo de 1986.
Fuente: Gaceta Oficial No. 20518, Año LXXXIII, del 24 de marzo de 1986.
- Ley No. 1* del 14 de enero de 1991, por la cual se adoptan medidas con respecto a bienes revertidos del Area del Canal.
Fecha de entrada en vigor: 18 de enero de 1991.
Fuente: Gaceta Oficial No. 21707, Año LXXXVIII, del 18 de enero de 1991.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Ley No. 16* del 6 de noviembre de 1990, por la cual se adopta un régimen especial de incentivos para la creación de Zonas Procesadoras para la Exportación (ZPE). Se definen como Zonas Procesadoras para la Exportación las áreas específicamente delimitadas en las que, por virtud de contratos celebrados por el Estado, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras dispondrán de infraestructuras necesarias y convenientes para la instalación y funcionamiento de empresas que tengan por objeto actividades económicas de producción de bienes o prestación de servicios de alta tecnología, exclusivamente orientados a la exportación. Se establecen incentivos tributarios como la exoneración de todos los derechos de importación de maquinaria, equipo y repuestos que se utilicen para el proceso productivo. Asimismo se eliminan los pagos de Impuestos a la Renta por 10 años entre otros beneficios.
Fecha de entrada en vigor: 6 de noviembre de 1986.
Fuente: Gaceta Oficial No. 21662, Año LXXXVII, del 9 de noviembre de 1990.
- Leyes sobre incentivos a las exportaciones** *Ley No. 3* del 20 de marzo de 1986, por la cual se acepta un régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones. Se establece que podrán acogerse a esta *Ley* todas las empresas que se dediquen a actividades industriales de manufactura o ensamblaje incluyendo a las pequeñas y medianas empresas. Entre los incentivos tributarios que se otorgan están la exoneración del pago de los impuestos de importación de maquinaria, equipo y repuestos que se utilicen en el proceso productivo, también la exoneración del Impuesto a la Renta, a las Ventas y a la Producción.
Fecha de entrada en vigor: 24 de marzo de 1986.
Fuente: Gaceta Oficial No. 20518, Año LXXXIII, del 24 de marzo de 1986.
- Ley No. 108* del 30 de diciembre de 1974, por la cual se otorgan incentivos a la exportación de productos no tradicionales. Las empresas exportadoras de productos no tradicionales elaborados total o parcialmente en el país, se benefician de los Certificados de Abono Tributario (CAT). El CAT es un instrumento transferible y nominativo exento de impuestos y no gana intereses. Para obtener el CAT los productos de exportación deben tener un contenido nacional mínimo del 20%.
Fecha de entrada en vigor: 30 de diciembre de 1974.
Fuente: Gaceta Oficial No. 17776, Año LXXIII, del 6 de febrero de 1975.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

Panamá presenta características muy particulares: a) no cuenta con una moneda propia, se utiliza el dólar americano como medio de intercambio, lo que implica que no existen ningún tipo de restricciones cambiarias; b) existe igualdad total entre nacionales y extranjeros ante la Ley, lo que queda consagrado en la Constitución Política del país. En este contexto, no existe una legislación específica que regule a la inversión extranjera directa en Panamá. Sin embargo, existen una serie de normas legales que proporcionan interesantes incentivos a la inversión, a los que se pueden acoger, tanto nacionales como extranjeros. Estas Leyes son:

a) Ley No. 1 del 20 de marzo de 1986, por la cual se modifica la Ley Laboral y se introducen reformas para la promoción del empleo y la productividad.

b) Ley No. 2 del 20 de marzo de 1986, por la cual se establecen medidas e incentivos en favor de la producción y exportaciones agropecuarias.

c) Ley No. 3 del 20 de marzo de 1986, por la cual se acepta un régimen de incentivos para el fomento y desarrollo de la industria nacional y de las exportaciones.

d) Ley No. 16 del 6 de noviembre de 1990, por la cual se adopta un régimen especial de incentivos para la creación de zonas procesadoras para la exportación.

e) Ley No. 108 del 30 de diciembre de 1974, por la cual se otorgan incentivos a la exportación de productos no tradicionales. Las empresas exportadoras de productos no tradicionales elaborados total o parcialmente en el país, se benefician de los Certificados de Abono Tributario (CAT). El CAT es un instrumento transferible y nominativo exento de impuestos y no gana intereses. Para obtener el CAT los productos de exportación deben tener un contenido nacional mínimo del 20%.

f) Decreto-Ley No. 26 del 27 de septiembre de 1967, por el cual se crean incentivos para promover la construcción y rehabilitación de hoteles y otras instalaciones de naturaleza turística.

g) Decreto de Gabinete No. 77 del 18 de marzo de 1971, por la cual se establecen incentivos para promover la programación de eventos de interés turístico.

h) Decreto de Gabinete No. 102 del 20 de junio de 1972, por el cual se establecen incentivos para promover el desarrollo turístico en el país mediante la denominación de zonas turísticas especiales.

i) Ley No. 1 del 14 de enero de 1991, por la cual se adoptan medidas con respecto a bienes revertidos del Area del Canal.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Panamá no tiene ni ha tenido una legislación específica sobre inversión extranjera directa. Su régimen jurídico general se aplica por igual a nacionales y extranjeros, igualdad que se encuentra consagrada en la Constitución Política de la República de 1972. Además, el Artículo No. 259 del texto constitucional, establece la ausencia de papel moneda de curso forzoso, lo cual significa que existe una total libertad para la transferencia de capitales y utilidades.

Históricamente Panamá ha ofrecido una abundante legislación sobre incentivos y estímulos, lo que ha permitido la captación de importantes volúmenes de capitales extranjeros.

Tal es el caso del desarrollo de la política de zonas libres, en el año 1946, que dio muy buenos resultados en la ciudad de Colón, donde está asentada la zona franca más grande de América Latina. La Zona Libre de Colón llegó a ser la única entidad estatal que, en medio de la crisis política y económica de 1987 a 1989, conservó su ritmo de funcionamiento y produjo superávit entre el valor de sus importaciones y el volumen de sus exportaciones.

Posteriormente, en la década de los cincuenta se dictaron varias normas sobre incentivos, es el caso de la Ley No. 20 de 1950, a la que siguió la Ley No. 25 de 1957. Desde entonces se han promulgado normas que promueven actividades vinculadas al sector turismo, creando incentivos de tipo fiscales y aduaneros, mediante el Decreto Ley No. 26 de 1967, el Decreto No. 77 de 1971 y el Decreto No. 102 de 1972.

En 1970, se aprobó para el sector industrial la Ley de Fomento Industrial, mediante el Decreto No. 413 de 1970 y sus modificaciones. Este régimen establecía que las empresas industriales, nacionales y extranjeras, podían gozar de los beneficios, tributarios y aduaneros, que brindaba el Estado por medio de contratos. Este régimen se limitaba a quienes transformaran materias primas u otros insumos, como asimismo, a las empresas ensambladoras. Esta Ley fue complementada por otras normas específicas para la industria de ensamblaje, la reinversión e inversión en activos fijos, etc.

En 1982 se creó el Consejo Nacional de Inversiones con la facultad de promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, pero sin atribuciones para intervenir en las operaciones de inversión que realizaban libremente, tanto los particulares como las empresas privadas.

Finalmente, en el año 1986 se consolida el régimen actualmente vigente en Panamá, con la dictación de las Leyes Nos. 1, 2 y 3 que liberalizan el mercado laboral, crean incentivos para la inversión en sectores como la agricultura, la industria y la exportación. En 1990 se dictó la Ley No.16 que establecen grandes incentivos para el establecimiento de Zonas de Procesamiento de Exportaciones.

3. Definición de inversión extranjera directa

Dado que no existe discriminación entre los inversionistas nacionales y extranjeros, no se encuentra en la legislación panameña una definición específica de inversión extranjera directa.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

El inversionista extranjero puede invertir en cualquier sector de la economía, con arreglo a las disposiciones establecidas en las Leyes que rigen la actividad a la cual destine su inversión. La constitución otorga igual trato a los inversionistas nacionales como a los extranjeros. La figura de las expropiaciones está considerada, pero sólo pueden hacerse en caso de utilidad pública o interés nacional y previo pago de justa indemnización.

La inversión extranjera no necesita de autorización previa, salvo para las inversiones que se acojan a los regímenes de incentivos y las destinadas a proyectos bajo contrato con el Estado o inscritas al Registro Oficial de la Industria Nacional o ambas. Asimismo, la Ley del Régimen Cambiario establece que para poder operar en el país, todo banco debe obtener una licencia expendida por la Comisión Bancaria Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro.

No existen disposiciones específicas sobre participación obligatoria del capital nacional en el capital extranjero, ni sobre la participación de éste último en las empresas existentes.

No existen disposiciones que reglamenten el derecho a giro al exterior. Las transferencias de capitales son libres.

Toda empresa nacional o extranjera antes de iniciar sus operaciones puede celebrar un contrato entre ella y el Estado donde se especifique, según la categoría de la empresa o rama a que se piensa dedicar, los beneficios tributarios a que se hace acreedora. El plazo de estos contratos variará entre 10 y 15 años según sea el caso.

En la solución de los conflictos derivados de la interpretación y aplicación de la regulación sobre inversión extranjera se aplica lo dispuesto en la legislación nacional. Los contratos celebrados en Panamá se sujetan a la Ley panameña y a la jurisdicción de los tribunales nacionales. En estos contratos debe constar que el extranjero renuncia a la reclamación diplomática, salvo el caso de denegación de justicia. Por último, en el caso de los acuerdos de garantía de inversión suscritos con otros países, se aplican las disposiciones señaladas en dichos acuerdos.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La inversión extranjera, en Panamá, no requiere autorización previa. El inversionista extranjero que desee acogerse al sistema de incentivos para las empresas industriales y exportadoras, debe dirigirse a la Comisión Técnica de Incentivos a las Exportaciones. Para las empresas que deseen adelantar proyectos a largo plazo con el Estado, el inversionista debe inscribirse en el Registro Oficial de la Industria Nacional en el Ministerio de Comercio e Industrias por un período de 10 a 15 años, según sea la ubicación de la empresa.

Si el inversionista va a establecerse en Panamá debe cumplir los siguientes pasos. En primer lugar deberá formar una sociedad anónima bajo las Leyes panameñas. Dos o más personas de cualquier nacionalidad pueden formar una sociedad anónima, pero es deseable que los trámites los realice un abogado del país. El abogado recabará información referente a la sociedad como el nombre, domicilio de la sociedad, duración, nombres de los directores, etc.. Además, se debe consignar el nombre y domicilio del Agente Residente quien tiene que ser abogado o firma de abogados de la localidad. Con dicha información se protocoliza el acta de constitución en notaría pública y posteriormente se registra en el Registro Público. El costo del trámite varía entre los US\$ 800 y US\$ 1500. Asimismo se establece que anualmente se pagará al fisco la "tasa única anual" que es de US\$ 150.

El siguiente paso es la obtención de la Licencia Comercial o Industrial a favor de la sociedad anónima, este trámite no es necesario para las empresas que se ubiquen en la Zona Libre de Colón. Existen tres tipos de licencia: i) Licencia Comercial Tipo A: es necesaria para la venta de bienes al por mayor, bancos, financieras, seguros, hoteles, transporte internacional y otros; ii) Licencia Comercial Tipo B: necesaria para la venta al por menor, menudeo al consumidor, bares, servicios a terceros, farmacias, agencias de bienes raíces, transporte dentro del territorio nacional (el comercio al por mayor sólo lo pueden ejercer panameños); iii) Licencia Industrial: se requiere para dedicarse a la industria de la construcción, actividades extractivas y manufactureras, inclusive el ensamblaje, así como la venta de productos extraídos o manufacturados por ellas mismas. El costo de este trámite oscila entre US\$ 300 y US\$ 800. Además, anualmente las empresas que operen con licencia comercial o industrial deberán pagar un impuesto de 1% sobre el capital invertido.

Si un inversionista ha invertido como mínimo US\$ 40000 puede solicitar a las autoridades del Departamento de Migración la visa de inversionista. Para ello tendrá que presentar una serie de documentos como certificados de salud, buena conducta, titularidad de las acciones que posee, declaración jurada y otros. El trámite de obtención de visa tiene dos etapas: i) en la primera obtiene el permiso provisional de residencia válido por un año y renovable por dos años más y; ii) al cabo de tres años se le otorga el permiso definitivo de residencia con derecho a cédula. Por último, una vez que el inversionista ha solicitado su visa de inversionista deberá obtener su permiso de trabajo que es por un año y debe renovarlo a su vencimiento.

En marzo de 1986, el Gobierno Nacional sancionó la Ley No. 3 con el fin de otorgar incentivos a la industria nacional de exportación. Dicho cuerpo legal creó el Registro Oficial de la Industria Nacional, ente adscrito al Ministerio de Comercio e Industrias, con el único propósito de que la sola inscripción de la empresa en este registro, le otorgue automáticamente los incentivos que ofrece la Ley No. 3.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Panamá no tiene circulante en billetes nacionales y por lo mismo no tiene controles de cambio. El dólar de los Estados Unidos es utilizado como el principal medio de cambio.

Dado este contexto, no existen restricciones en cuanto a la repatriación de utilidades, dividendos o capital.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

En Panamá los inversionistas extranjeros pueden invertir en cualquier sector de la economía, salvo en algunas actividades que presentan algunas limitaciones o están reservadas a los nacionales o al Estado, tal es el caso de:

a) La Constitución Política de 1972, establece en su Artículo No. 286, que las personas naturales o jurídicas extranjeras, y las personas jurídicas nacionales cuyo capital sea en todo o en parte extranjero, no pueden adquirir la propiedad de tierras, nacionales o particulares, situadas a menos de 10 kms. de las fronteras.

b) La Constitución Política de 1972, establece en su Artículo No. 288, que el comercio al por menor está reservado a panameños de nacimiento, extranjeros nacionalizados y casados con panameños o panameñas.

c) Ley No. 8-56 y sus modificaciones, Código Fiscal, establece que el servicio de correos y telégrafos debe ser prestado exclusivamente por el Estado en el territorio nacional. Además dispone que otros servicios públicos sean prestados por entidades autónomas del gobierno, por ejemplo el servicio eléctrico por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE). Uno de los dos ferrocarriles que operan en el país es estatal, Ferrocarril Nacional de Chiriquí, el otro es privado.

d) La pesca en aguas panameñas, cuyo producto está destinado a la venta dentro del país, queda reservada a inversionistas nacionales.

e) La radiodifusión es una actividad reservada a ciudadanos panameños.

f) Decreto No. 238-70, Ley del Régimen Bancario. Esta Ley establece que para operar en el país todo banco debe obtener una licencia que otorga la Comisión Bancaria Nacional, adscrita al Ministerio de Hacienda y Tesoro. Las utilidades sobre operaciones bancarias en Panamá están exentas del Impuesto a la Renta. Los bancos con operaciones en Panamá tienen que tener una reserva de capital de US\$ 250000 que debe estar suscrita en Bonos del Estado de Panamá o en efectivo en el Banco Nacional de Panamá. Los bancos que realizan operaciones bancarias exclusivamente en el

exterior, bancos con licencia internacional, deben mantener en Panamá, en activos libres de gravamen, una cantidad para garantizar el fiel cumplimiento de sus obligaciones. La Comisión Bancaria ha autorizado que una parte de esta cantidad sea documentada como una inversión en los Bonos del Estado de Panamá. Un banco establecido bajo licencia internacional tiene libertad de aceptar todo tipo de depósitos, pero únicamente aquellos depósitos extranjeros son pagaderos a los siguientes: i) ciudadanos panameños residentes fuera de Panamá; ii) sociedades establecidas bajo las Leyes de Panamá, cuyos ingresos son derivados de fuentes fuera del territorio panameño; o iii) bancos que operan en Panamá con licencia general, siempre y cuando los fondos hayan sido obtenidos de fuentes extranjeras por los bancos con licencia general.

8. Tributación

Las empresas extranjeras con actividades en Panamá deben pagar un Impuesto a la Renta progresivo que va desde 25 a 30%. Las empresas radicadas en la Zona Libre de Colón están sujetas a estas tasas sobre sus ingresos de fuentes panameñas, sin embargo pagan impuestos menores que van desde el 2.5 a 8.5% sobre sus ingresos por concepto de exportaciones.

El pago de dividendos a accionistas extranjeros tiene un impuesto que va de 4% a 10%. Por otra parte, en Panamá debe cancelarse un impuesto sobre las regalías que va desde el 12.5% al 15%. Finalmente, el pago de intereses pagados al exterior tiene una retención que va desde el 20% al 50%.

En Panamá el Impuesto al Valor Agregado alcanza al 5%, salvo los alimentos, los productos farmacéuticos y combustibles que están exentos.

En Panamá existen además múltiples incentivos de tipos tributarios a los cuales se pueden acoger los inversionistas extranjeros. Es el caso de la exoneración del 100% de los impuestos sobre exportación, ventas e ingresos a que pueden acogerse las actividades exportadoras, como de los derechos de importación de maquinarias, equipos e insumos. Además la Zona Libre de Colón ofrece una serie de incentivos adicionales.

9. Royalties o regalías

En Panamá, no existe ninguna regulación en torno a la transferencia de tecnología y pago de regalías. Tan solo existe la obligación de pagar un impuesto que va desde el 12.5% al 15%.

10. Incentivos a la inversión

La legislación panameña ha establecido en los últimos años una serie de incentivos para desarrollar ciertos sectores productivos como la industria, las exportaciones, la agricultura y el turismo. En la actualidad, las Leyes Nos. 1, 2 y 3 de 1986, la Ley No. 16 de 1990 y otras de apoyo al turismo,

constituyen la base del régimen legal para la realización de proyectos de inversión privada en el país. A continuación se señalan los incentivos que ellas ofrecen:

BENEFICIOS OTORGADOS A LAS EMPRESAS QUE INVIERTEN EN PANAMA

	Producción para exportaciones	Producción para consumo nacional	Ubicación en los polos de desarrollo	Producción Exportación parcial	Zona Libre de Colón	Pequeña y mediana empresa
BASE LEGAL	Ley No. 3-86	Ley No. 3-86	Ley No. 3-86	Ley No. 3-86		Ley No. 9-89
Exoneración de tributos importación a materia prima y repuestos	100 %	100 % <i>a/</i>	100 % <i>a/</i>	100 % <i>b/</i>	100 %	100 %
Exoneración de tributos de importación sobre maquinaria	100 %	<i>c/</i>	<i>c/</i>	<i>c/</i>	100 %	100 %
Exoneración del Impuesto a la Renta	100 %	---	100 % <i>d/</i>	100 %	95 %	100 % <i>e/</i>
Exoneración del Impuesto de Exportación	100 %	---	---	100 %	100 %	100 %
Exoneración del Impuesto a las Ventas	100 %	---	---	100 %	100 %	---
Exoneración del Impuesto a la Producción	100 %	---	---	100 %	100 %	---
Exoneración del Impuesto sobre Activos de Capital	100 %	---	---	---	100 %	---
Exoneración del Impuesto a la Renta sobre Ganancias Netas Reinvertidas	---	100 %	100 %	100 %	---	100 %
Régimen Especial de Arrastre de Pérdidas por un máximo de 3 años como deducción de impuestos	---	SI <i>f/</i>	SI <i>f/</i>	SI <i>f/</i>	---	---
Tasa de Depreciación Especial	SI	SI	SI <i>f/</i>	SI	---	---
Exoneración del Impuesto a la Propiedad	---	---	100 %	100 %	100 %	100 % <i>g/</i>
Crédito Fiscal por patrocinio de capacitación empresarial	---	---	---	---	---	20 %

Fuente: Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE).

- a/* Exoneración total durante los primeros 5 años. A partir del sexto año, un impuesto de importación equivalente al 3% del valor CIF de los insumos extranjeros.
- b/* Devolución del impuesto sobre la respectiva porción exportada.
- c/* Pagan impuestos de importación equivalente al 3% del valor CIF de insumos extranjeros.
- d/* Exoneración total durante los primeros cinco años. Durante los 3 siguientes años, 50% de impuestos sobre estas ganancias derivadas de ventas locales.
- e/* Exoneración total durante los primeros cinco años; de 75% durante los cinco años subsiguientes y de 25% durante la existencia del negocio.
- f/* La deducción puede realizarse en cualquiera de estos tres años o promediarse durante los mismos.
- g/* Exoneración total durante los primeros 10 años.

Las Leyes Nos. 1 y 2 de 1986, establecen respectivamente un nuevo Régimen Laboral y un nuevo Régimen de Promoción de Inversiones en el Sector Agropecuario. Con ello, se busca crear un clima de estabilidad que se traduzca en el incremento de la inversión privada en el país.

La Ley No. 3 de 1986, es la que introduce la mayoría de incentivos directos a las inversiones dirigidas a la industria local, como asimismo a la industria orientada a la exportación. En el caso de las industrias orientadas a la producción para consumo nacional, la depreciación de sus bienes puede efectuarse bajo cualquiera de las siguientes modalidades:

a) Aplicando anualmente un 12.5% del valor de sus maquinarias y equipos sin exceder el valor residual de los mismos.

b) Aplicando un porcentaje fijo y constante sobre el saldo decreciente de la inversión total, sin deducción del valor residual.

Las empresas dedicadas parcialmente a la exportación se benefician en la proporción de su producción que sea destinada al mercado foráneo. En el caso de las empresas orientadas exclusivamente al mercado externo se entiende como exportación, las ventas en jurisdicciones extranjeras, incluyendo las realizadas en la Zona Libre de Colón para reexportación y las hechas a naves que transiten por el Canal de Panamá hacia puertos extranjeros. Además se considera exportación a las ventas, que se realicen en el mercado local, de materias primas, productos intermedios, envolturas y contenedores a empresas que exporten no menos del 90% de su producción.

En la Ley No. 3 se establecen también las obligaciones de las empresas que se acojan al Régimen de Promoción. Entre éstas se pueden mencionar la obligación de iniciar la inversión dentro de los seis meses siguientes desde la inscripción de la empresa en el Registro Oficial de la Industria Nacional, iniciar la producción dentro de un plazo que no exceda los dos años desde la inscripción de la empresa y renunciar a toda reclamación diplomática cuando se trate de empresas total o parcialmente extranjeras, entre otras.

La Ley No. 3 establece, además, las sanciones en caso de incumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, a las empresas que se dediquen totalmente a la exportación y que importen productos terminados o con mayor grado de elaboración que el autorizado tendrán una multa de US\$ 25000. En el caso de vender la producción dentro del país se tendrá que pagar una multa de US\$ 25000 o en su defecto, una suma equivalente al 50% del valor de la mercadería vendida. En caso de reincidencia, se le cancelará el registro y perderán todos sus beneficios.

La Ley No. 16 de 1990, en su Artículo No. 2, define las Zonas Procesadoras para la Exportación (ZPE) como áreas específicamente delimitadas en las que, por virtud de contratos celebrados con el Estado, personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, disponen de la infraestructura necesaria y conveniente para la instalación y funcionamiento de empresas que tengan por objeto actividades económicas de producción de bienes y servicios de alta tecnología exclusivamente orientados a la exportación.

En las Zonas Procesadoras para la Exportación se podrán instalar las siguientes empresas:

a) Industrias manufactureras: empresas dedicadas a la fabricación de bienes destinados a la exportación mediante el proceso de transformación de materias primas y de productos semielaborados.

b) **Industria de ensamblaje:** empresas dedicadas a la fabricación de productos para la exportación mediante el proceso de acoplamiento de insumos y partes semiterminadas.

c) **Empresas de alta tecnología:** empresas que tienen por objeto el desarrollo de la tecnología aplicada a las comunicaciones, al transporte internacional, a la creación, almacenamiento, conversión y transferencia de informaciones y programas y otras actividades tecnológicas.

d) **Empresas de servicios especializados:** empresas orientadas a la prestación de servicios técnicos especializados a las empresas que están ubicadas dentro de las Zonas Procesadoras para la Exportación.

e) **Empresas de servicios generales:** empresas dedicadas a la prestación de servicios personales a los trabajadores que laboran dentro de las ZPE como restaurante, clínicas, etc.

En el Artículo No. 6, de esta Ley se establecen dos categorías para las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que se incorporen al Régimen Especial de Zonas Procesadoras para la Exportación:

a) **Promotores de ZPE:** aquellas personas naturales y jurídicas cuya principal actividad sea adquirir y/o tomar en arrendamiento terrenos, desarrollar su infraestructura, vender o dar en arrendamiento edificaciones e instalaciones a las empresas establecidas o por establecerse y promover la atracción de empresas al Régimen Especial de Zonas Procesadoras para la Exportación.

b) **Empresas o industrias exportadoras instaladas en las ZPE:** aquellas que destinan su producción de bienes y servicios de alta tecnología exclusivamente a la exportación.

Las personas interesadas en realizar sus actividades en las ZPE están obligadas a invertir lo solicitado, iniciar en el lapso de un año la inversión, ocupar trabajadores panameños con excepción de técnicos y personal capacitado autorizado. Se debe establecer un depósito a nombre del Estado de 1% de la inversión comprometida hasta un máximo de US\$ 250000 y proporcionar sin costo alguno, los locales necesarios para la instalación de escuelas, clínicas, dispensarios y centros deportivos, así como para las oficinas, retenes o agencias de las entidades públicas que deban fiscalizar a las operaciones que se realicen en las ZPE.

Esta Ley también incluye cierta flexibilidad en cuanto a la relación laboral, tal como la rotación del trabajador en diversas líneas de producción de acuerdo a las necesidades de la empresa, el empleador puede señalar uso de vacaciones en determinados períodos del año, no está obligado a celebrar convención colectiva durante cuatro años de operaciones, etc.

En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de los principales incentivos ofrecidos a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, que decidan iniciar sus actividades en las ZPE.

LEY No. 16 DE ZONAS PROCESADORAS PARA LA EXPORTACION DE 1990

(Resumen de incentivos fiscales)

	Promotor <u>a/</u>	Industria <u>b/</u>
Exoneración del impuesto de introducción, contribución o gravamen, así como el impuesto de I.T.B.M. <u>c/</u> en la importación de maquinarias, equipos, accesorios, repuestos y materiales para la construcción de infraestructura y para la conservación y mantenimiento de éstas y seguridad del área.	100 %	100 % <u>d/</u>
Exoneración del impuesto de inmueble, de los terrenos y edificios, la cual se hace extensiva a los que adquieran por compra ó título cualquiera, la propiedad de los bienes inmuebles.	100 % <u>e/</u>	100 % <u>e/</u>
Exoneración del Impuesto sobre la Renta.	100 % <u>f/</u>	100 % <u>e/</u>
Exoneración del pago del Impuesto a la Renta, sobre utilidades netas reinvertidas, en la que la reinversión sea superior al 20% de la renta gravable del año fiscal de que se trate.	100 % <u>g/</u>	---
Exoneración de los impuestos que graven el capital o los activos, salvo el Impuesto de Licencia.	100 %	100 %
Régimen Especial de Arrastre de Pérdidas, para efectos del Impuesto a la Renta, por un máximo de tres años.	SI	---
Exoneración de impuestos y derechos de importación de materias primas, productos intermedios, partes semielaboradas, elementos de empaque, repuestos de maquinaria y equipo.	---	100 %
Exoneración del Impuesto a la Exportación.	---	100 %
Exoneración del Impuesto a las Ventas.	---	100 %
Exoneración del Impuesto sobre Producción.	---	100 %
Tasa de Depreciación Especial.	---	SI
Exoneración del impuesto y derechos de importación de maquinarias.	100 %	100 %

Fuente: Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE).

- a/ Los incentivos serán otorgados por 20 años excepto el Impuesto a la Renta o ganancias. El contrato puede ser extendido por el mismo período (20 años) excepto los beneficios fiscales.
- b/ Los incentivos serán otorgados por 20 años a las empresas e industrias que se instalen en las Zonas Procesadoras de Exportaciones (ZPE) ubicadas en siete provincias y la comarca de San Blas. Ver Ley No. 16 de 1990. El contrato podrá ser prorrogado por igual término si no existen otras regulaciones en vigor.
- c/ Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales Muebles (ITBM).
- d/ Maquinaria para la producción.
- e/ Por 20 años.
- f/ Por 10 años.
- g/ A partir del décimo primer año.

Otro incentivo importante es el otorgado a través de los Certificados de Abono Tributario (CAT). Las empresas exportadoras de productos no tradicionales elaborados totalmente o parcialmente en Panamá pueden beneficiarse con estos certificados. Los CAT son instrumentos transferibles y nominativos exentos de impuestos y no gana intereses. Para obtener un CAT los productos de exportación deben tener un contenido nacional mínimo del 20%

También, mediante el Acuerdo para la Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe algunos productos procedentes de Panamá están exentos de impuestos por tiempo indefinido para

ingresar al mercado de los Estados Unidos. Los inversionistas extranjeros que exportan desde Panamá, al igual que las empresas panameñas, se benefician de las ventajas otorgadas por este sistema. Los productos elegibles exportados desde Panamá deben respetar ciertas reglas de criterio de origen, como por ejemplo, el artículo debe ser importado directamente desde Panamá, un mínimo de 35% del valor agregado del artículo importado debe consistir del costo o valor de los materiales producidos en Panamá y/o los costos directos de las operaciones de procesamiento hechos en Panamá y, el artículo debe ser producido en Panamá o ser transformado sustancialmente en un artículo nuevo o diferente. Ciertos productos como el azúcar, sirope y melaza están sujetos a restricciones de cuotas. Otros productos como textiles, artículos de cuero y caucho, petróleo y sus derivados y relojes están excluidos del trato libre de impuestos.

Los inversionistas en las actividades que promueven el turismo en Panamá pueden obtener grandes beneficios financieros. Al llenar ciertos requisitos en cuanto al tamaño de las instalaciones e inversión de capital, así como otros requisitos legales, los inversionistas pueden acogerse a los incentivos incluidos en el siguiente cuadro.

INCENTIVOS FISCALES DE LAS LEYES DE TURISMO

	Decreto Ley No. 26 de Septiembre de 1967 <u>a/</u>	Decreto Ley No. 77 de marzo de 1971 <u>b/</u>	Decreto Ley No. 102 de junio de 1972 <u>c/</u>
1) Exoneración de impuestos sobre importación de maquinaria, equipo y repuestos.	100 % <u>d/</u>	---	100 % <u>e/</u>
- Aviones, helicópteros, botes, lanchas, naves, artículos deportivos, propios o alquilados por la empresa comprometida en actividades turísticas.	100 % <u>d/</u>	100 % <u>d/</u>	100 % <u>e/</u>
- Omnibuses y automóviles	---	100 % <u>d/</u>	100 % <u>e/</u>
2) Exoneración de impuesto de muellaje, tasa de aterrizaje, en muelles o aeropuertos construidos o rehabilitados por la empresa.	100 %	100 % <u>d/</u>	100 % <u>e/</u>
3) Exoneración del Impuesto sobre la Renta	---	---	100 % <u>e/</u>
- Utilidades de la empresa	---	---	100 % <u>f/</u>
- Por arrastre de pérdidas como gastos imputables a los tres períodos fiscales.	---	---	100 % <u>f/</u>
- Capital y activos	10 % <u>g/</u>	---	100 % <u>e/</u>
- Bienes y raíces	100 % <u>g/</u>	---	100 % <u>e/</u>

Fuente: Instituto Panameño de Comercio Exterior (IPCE).

- a/ Incentivos para promover la construcción y rehabilitación de hoteles y otras instalaciones de naturaleza turística.
- b/ Incentivos para promover la programación de eventos de interés turístico.
- c/ Incentivos para promover el desarrollo turístico en el país mediante la denominación de zonas turísticas especiales.
- d/ Por 5 años.
- e/ Por 20 años.
- f/ Por 13 años.
- g/ Por 15 años.

PAISES DEL CARIBE

XVIII. BAHAMAS

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismo nacional competente	En Las Bahamas no existe una legislación específica que regule la inversión extranjera directa en el país, ni antecedentes que permitan identificar un organismo único encargado de la administración de este tipo de inversiones. Sin embargo, los flujos de inversión extranjera directa son supervisados por el <u>Departamento de Control de Cambios del Banco Central de Las Bahamas</u> (Exchange Control Department of the Central Bank of The Bahamas).
Definición nacional de inversión extranjera directa	El Banco Central de Las Bahamas utiliza como definición de inversión extranjera directa la entregada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en su Manual de Balanza de Pagos (Cuarta Edición, 1977).
Participación mínima del capital extranjero	No existen antecedentes al respecto.
Flujo de inversión extranjera directa	La información sobre los flujos anuales de inversión extranjera directa en Las Bahamas es un valor aproximado preparado por el Banco Central e incluido en la cuenta de capitales de la balanza de pagos.
Reinversión de utilidades	No hay registro de la reinversión de utilidades.
Criterios para el registro	La información sobre inversión extranjera directa es compilada para llevar un control de cambios por parte del Banco Central, en base a la legislación vigente en esta materia. Sin embargo, esta información no es recolectada ni desagregada por país de origen y sector de actividad económica, pero es consolidada y registrada de acuerdo a los formatos estándar de balanza de pagos, entregados por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Stock de capital extranjero directo	En Las Bahamas no existe un cálculo oficial del stock de capital extranjero directo en el país.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica sobre inversión extranjera directa

Ley de Compañías Extranjeras (Foreign Companies Act 1891). Esta norma regula el registro y la propiedad de bienes raíces o inmuebles de empresas extranjeras. Bajo esta Ley se obliga a las empresas a registrar los nombres, direcciones, ocupación y nacionalidad de los directores, empleados y administradores; así como cualquier otro cambio importante en la Oficina de Registro (Registrar's Office). Según esta Ley las compañías están sujetas a un pago anual por concepto de licencia de operación de US\$ 1000 y un pago inicial de US\$ 50.

Fecha de entrada en vigor: 1891

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Compañías (Companies Act 1866). Esta Ley regula la creación y liquidación de empresas de responsabilidad limitada (Limited Companies) en Las Bahamas. Los requisitos que se exigen son los siguientes:

- a) la empresa debe, al menos, tener cinco directores de cualquier nacionalidad;
- b) la empresa debe presentar al momento de registrarse un memorándum a la Oficina de Registro en donde se especifique el nombre de la empresa y sus objetivos;
- c) la empresa deberá presentar una declaración de sus pasivos y obligaciones y;
- d) la empresa deberá presentar un reporte anual de sus actividades.

Además, se establece un pago de inicio de operación de US\$ 330 y un pago anual de US\$ 1,000 por concepto de licencia de funcionamiento. Si la empresa es 60% propiedad de ciudadanos de Las Bahamas, el pago relevante se reduce a US\$ 300.

Fecha de entrada en vigor: 1866

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Licencia de Negocios (Business Licence Act 1980). Esta Ley establece que cada persona que maneja un negocio debe obtener una licencia y pagar una cantidad anual por ella. Esta regulación está dirigida principalmente a empresas y negocios que operan en Las Bahamas, más que a las empresas "offshore" (offshore businesses). Estas últimas son designadas como no residentes bajo las Regulaciones de Cambios y requieren un pago de US\$ 100. Las licencias de negocios para no residentes son autorizadas directamente por el Gobierno.

Fecha de entrada en vigor: 1980

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Compañías de Negocios Internacionales (International Business Companies Act 1989). Esta Ley brinda a los potenciales inversionistas una manera simple y menos costosa de inscribir y administrar una empresa que opera totalmente fuera de Las Bahamas, pero que tiene oficinas en el país. Estas empresas están impedidas de hacer negocios con cualquier residente de Las Bahamas y desarrollar actividades de banca, crédito y seguros. Las empresas que se rijan por esta Ley no estarán sujetas a control de cambios, no tendrán requerimientos mínimos de capital y estarán exoneradas de todo tipo de impuestos por un período de 20 años a partir de su instalación en el país. En Las Bahamas es posible registrar una empresa en menos de 24 horas. El pago correspondiente a la licencia es determinado de acuerdo al monto de capital autorizado para las empresas, partiendo en US\$ 100, si el capital no excede los US\$ 5,000, y llegando a US\$ 1,000, si el capital sobrepasa los US\$ 50,000.

Fecha de entrada en vigor: 1989

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Regulación y Control de Cambios (Exchange Control Regulations Act 1956). Todas las inversiones que tengan como destino Las Bahamas tanto como aquellas cuya fuente de recursos sean Las Bahamas, están sujetas al control de cambios. Sin embargo, la inversión de empresas residentes en el extranjero deberán contar con una autorización previa del Banco Central. Esta misma Ley hace una distinción entre residentes y no residentes.

Fecha de entrada en vigor: 1956

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Incentivos a la Inversión (Act 1990). Establece exoneraciones fiscales y otros beneficios para personas que establezcan empresas en las zonas de libre comercio (Free Trade Zones) y promuevan el desarrollo.

Fecha de entrada en vigor: 1990.

Fuente: Bahamas Agricultural & Industrial Corporation.

Leyes sectoriales

Ley de Manufacturas Agrícolas (Agricultural Manufactories Act 1913). Esta Ley tiene características similares a la Ley de Fomento Industrial. Se otorgan las mismas facilidades y se imponen las mismas restricciones a la operación de empresas agrícolas.

Fecha de entrada en vigor: 1913

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Leyes sectoriales
(continuación)

Ley de Fomento Industrial (Industrial Encouragement Act 1970, revisada en 1975 y 1981). Mediante esta Ley una compañía inscrita como empresa manufacturera está exonerada del pago de impuestos por un período de 15 años a partir del momento en que empieza a producir. Entre estos impuestos están aquellos que afectan a las exportaciones, los ingresos y la propiedad. Adicionalmente, estas empresas durante un período de diez años podrán importar libre de todo derecho maquinaria y materias primas para ser utilizadas en sus procesos productivos y elementos que permitan ampliar su capacidad de producción. Sin embargo, esta importación está sujeta a algunas condiciones, como es el hecho que estos artículos no pueden ser vendidos en Las Bahamas sin el pago de los correspondientes derechos y que debe mantenerse un adecuado registro y control de la producción y ventas de los productos aprobados como exigencia del control de aduanas. La autoridad encargada de otorgar la autorización de estas solicitudes es el Ministro de Industria.

Fecha de entrada en vigor: 1970

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Empresas Cerveceras y Destilerías. (Spirits & Beer Manufacture Act 1963). Esta Ley establece que una empresa con licencia para destilar licores o fabricar cerveza puede importar sin pago de derechos, todos los materiales usados en la construcción, mejoramiento o alteración de una planta o destilería junto con las materias primas y máquinas usadas en el proceso productivo. Estas facilidades son válidas por quince años y debe pagarse una licencia anual de US\$ 1000. Además se establece un impuesto que varía según el licor producido; para el Alcohol, el Gin y el Vodka US\$3 por galón, el Ron US\$ 6 por galón y, la Cerveza US\$ 2 por galón.

Fecha de entrada en vigor: 1963

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Fomento a las Exportaciones Manufactureras (Export Manufacturing Industries Encouragement Act 1989). Esta Ley permite a las empresas manufactureras exportadoras la importación, libre de impuestos, de las maquinaria y materias primas requeridas para su producción o para la expansión de su capacidad productiva. También estas empresas están exoneradas del pago de impuestos a exportación, ingreso y propiedad. Los pagos que deben hacerse anualmente por concepto de licencias varía dependiendo del tamaño de la empresa. Es así, como deben pagarse US\$ 300,000 cuando el valor de mercado de la empresa exceda los US\$ 20 millones, y US\$ 175,000 cuando este valor este entre US\$ 5 y 20 millones.

Fecha de entrada en vigor: 1989

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Petróleo (Petroleum Act 1971). Bajo esta Ley se otorgan concesiones a inversionistas extranjeros para explorar posibles reservas de petróleo en determinadas zonas de las islas. Si el petróleo es encontrado, los inversionistas extranjeros deben firmar un acuerdo de explotación, donde se fijan las condiciones para tal proceso.

Fecha de entrada en vigor: 1971

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Fomento de la Hotelería (Hotel Encouragement Act 1954). Esta Ley establece el reembolso de todos los aranceles pagados por los materiales y equipos que fueron importados para la construcción de hoteles. También se incluye la exoneración de impuestos a los ingresos por un período de 20 años, así como los impuestos a la propiedad por un período de 10 años. Para obtener estos beneficios deben haber como mínimo 10, 20 ó 50 habitaciones, dependiendo estos límites de la ubicación de los hoteles dentro de las islas. Asimismo se establece un pago anual de 20 dólares por habitación y se recomienda que el 75% de la mano de obra que intervenga en la construcción de los hoteles sea procedente de Las Bahamas.

Fecha de entrada en vigor: 1954

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Navegación Mercante (Merchant Shipping Act 1976). Esta Ley facilita el registro y regulación de naves con bandera de Las Bahamas. Para efectuar el registro de una nave no se requiere la presencia física de sus dueños y el trámite no excede de las dos semanas. Además se establece que las empresas propietarias están exoneradas de impuestos a las utilidades y que los barcos que se ingresen al país para operar estarán exentos de derechos. Se establece un pago por concepto de inscripción de US\$ 1.20 por tonelada para naves inferiores a las 2000 toneladas y US\$ 1.10 por tonelada para naves que excedan esa capacidad. A su vez, se establece un pago anual del orden del 10% del pago inicial más US\$ 900.

Fecha de entrada en vigor: 1976

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Leyes de instituciones
financieras y de
seguros

Ley de Bancos y Ley de Regulación de Bancos y Compañías de Crédito (Banks Act 1909 and Bank & Trust Companies Regulation Act 1965). Estas Leyes establecen que los bancos deben obtener una licencia para poder operar en Las Bahamas. También la Ley de Bancos estipula que estas instituciones financieras deben publicar sus estados financieros auditados dentro de los cuatro meses siguiente al término del ejercicio. La autoridad encargada de la supervisión de los bancos es el Banco Central de Las Bahamas. Es política del Banco Central que para que un banco tenga acceso a una licencia debe tener como mínimo un capital pagado de un millón de dólares.

Fecha de entrada en vigor: 1909 y 1965 respectivamente

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Leyes de instituciones financieras y de seguros (continuación) *Ley de Seguros y Ley de Regulaciones de Seguros (Insurance Act 1969 and Insurance Regulations Act 1970)*. Estas Leyes rigen la operación de compañías de seguros en Las Bahamas. Además, se exige que las compañías registren en forma detallada su capital y organización administrativa. La cuota de registro, para las compañías de seguros, varía dentro en rango de US\$ 500 a US\$ 5000 por año. En el caso de los corredores de seguros (Brokers) el pago varía entre los US\$ 550 y US\$ 1,000, asimismo se exige un mínimo de capital para otorgarles la licencia. En el caso de seguros de vida el capital mínimo es de US\$ 300,000 y, para otros tipos de seguros de vida se exige la mayor de las siguientes alternativas: a) US\$ 140,000 de capital, b) 20% de los ingresos por premio hasta US\$ 7 millones o c) 10% del ingreso por premio por encima de US\$ 7 millones. Se establece además que los estados financieros deberán presentarse dentro de los 6 meses después de finalizado el año a la entidad reguladora y deberá también publicarse en el Diario Oficial (Official Gazette).

Fecha de entrada en vigor: 1969 y 1970 respectivamente.

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Seguros Externos y Ley de Regulaciones de Seguros Externos (External Insurance Act 1983 and External Insurance Regulations Act 1984). Estas Leyes regulan la inscripción de compañías de seguros extranjeras y establecen las exoneraciones tributarias a que se hacen acreedoras estas compañías por un lapso de 15 años. A su vez se exigen montos mínimos de capital que varían entre US\$ 200,000 y ciertos porcentajes sobre los ingresos por premios. Además se asegura la confidencialidad de la información y se establecen los reportes mínimos que deban ser presentados a las autoridades.

Fecha de entrada en vigor: 1983 y 1984 respectivamente

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones *Ley de Zonas de Libre Comercio de Las Bahamas (Bahamas Free Trade Zone Act)*. Esta Ley regula el establecimiento y funcionamiento de zonas comerciales en el territorio de Las Bahamas. La entidad encargada de la administración de estas zonas, las cuales están principalmente orientadas a la exportación, es la Corporación de Agricultura e Industrias de Las Bahamas (The Bahamas Agricultural and Industrial Corporation). Se espera que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, contribuyan al desarrollo de Las Bahamas utilizando insumos y mano de obra del país. En estas zonas no existe ningún impuesto, pero los terrenos se rentan para determinadas actividades. No se permite el comercio entre una zona franca y otro lugar de Las Bahamas, salvo que sea otra zona franca. De lo contrario, se aplicarán todos los impuestos relevantes.

Fecha de entrada en vigor: 1984

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Leyes de Tributación *Ley del Impuesto a las Propiedades (Real Property Tax Act 1969)*. Están afectos a este impuesto:

- i) Todos los bienes inmuebles localizados en la isla de New Providence, excepto lugares cívicos y religiosos.
- ii) Todos los bienes inmuebles ubicados en las otras islas de propiedad de extranjeros.
- iii) Todos los terrenos no desarrollados en la isla de New Providence de propiedad de extranjeros, excepto en el caso de que estén destinados a uso agrícola.

Las propiedades con un valor superior a US\$ 50,000, deberán pagar un impuesto equivalente a 1.5% del valor de la propiedad. Aquellas propiedades con un valor menor a los US\$ 50,000 están exoneradas del pago.

Fecha de entrada en vigor: 1969

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Timbres (Stamp Tax Act 1925). Este impuesto se aplica a las remesas de fondos fuera del país, a la autorización de capital accionario, a la asignación o transferencia de personalidad jurídica y, a las escrituras de traspaso, hipotecas y obligaciones.

Fecha de entrada en vigor: 1925

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Impuestos a los Casinos (Casino Taxation Act 1967). Esta Ley establece que todas las loterías e instituciones de juegos de azar deben pagar por concepto de licencia US\$ 200,000 anuales. Además estas instituciones están afectas a los siguientes impuestos sobre sus ingresos brutos:

- i) Para ingresos brutos no superiores a US\$ 10 millones: 25%;
- ii) Para ingresos brutos entre US\$ 10 y US\$ 16 millones: 20%;
- iii) Para ingresos brutos entre US\$ 16 y US\$ 20 millones: 15% y;
- iv) Para ingresos brutos superiores a US\$ 20 millones: 5%.

Fecha de entrada en vigor: 1967

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

Ley de Aduanas (Customs Management Act 1976). Esta Ley regula las importaciones temporales y las exportaciones. Según esta regulación, aquellas empresas con importaciones temporales que no están sujetas a impuestos deben hacer un depósito de seguridad en una cuenta bancaria que será reembolsado una vez que el producto se haya reexportado. Asimismo, los bienes reimportados mientras no estén sometidos a ningún procesamiento, incluida la reparación, tampoco pagarán ningún derecho aduanero. En una reciente modificación a esta Ley se exige que las empresas que importen estos bienes deberán presentar una licencia del negocio y un certificado del Banco Central de control de cambios.

Fecha de entrada en vigor: 1976

Fuente: Commonwealth of The Bahamas.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Las Bahamas no existe una legislación específica sobre inversión extranjera directa. En términos generales, el trato a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, no es discriminatorio. Sin embargo, hay leyes específicas para ciertos sectores que regulan la inversión extranjera. Entre estas tenemos las Leyes para la banca, los seguros, la promoción de exportaciones, y los sectores agrícola e industrial.

2. Evolución de la legislación sobre inversión directa extranjera

Como se mencionó anteriormente, en Las Bahamas no existe una legislación especial para la inversión extranjera. Sin embargo, este tipo de inversiones ha tenido gran importancia en estas islas, principalmente en actividades como la banca y las finanzas, producto de una legislación muy liberal y la exoneración casi total de todo tipo de impuestos.

En 1908, se instaló la primera oficina de un banco extranjero, cuya procedencia era canadiense. Este banco fue el único con actividades en Las Bahamas hasta que en 1947, se instaló un banco inglés. Sin embargo, anteriormente se habían establecido algunos bancos especializados. Luego, durante la década de los cincuenta y sesenta, los países desarrollados aumentaron sus impuestos internos y modificaron sus legislaciones con el fin de mejorar los controles tributarios, esta situación significó que el establecimiento de oficinas "off-shore" en lugares como Las Bahamas fuera una actividad muy rentable. Estas instituciones estuvieron reguladas por la Ley de Bancos (Banks Act 1909) que rápidamente mostró algunas insuficiencias en controlar las actividades de los bancos y proteger al público. El número de bancos con operaciones en estas islas creció rápidamente, llegando al orden de 600 en el año 1965, los cuales operaban de manera muy liberal creando una imagen desfavorable para Las Bahamas. En dicho año se modificó la Ley de Bancos, regulando la actividad y estableciendo nuevos requisitos para el otorgamiento de las licencias para bancos y empresas financieras.

Durante los primeros años de la década de los setenta, el número de licencias otorgadas para nuevos bancos declinó sustancialmente, debido principalmente al esfuerzo de las autoridades por eliminar las operaciones financieras que estaban siendo cuestionadas. Es así como a partir de 1974, el Banco Central de Las Bahamas asumió el rol fiscalizador en estas materias, lo que permitió que para fines de la década, esta tendencia se revirtiera.

A partir de 1982, con la crisis financiera internacional, las autoridades dieron nuevos pasos en la promoción de inversiones en sectores diferentes al bancario, modificando en algunos casos la legislación vigente hasta aquella época. Los sectores donde se concentraron las reformas fueron los de la industria manufacturera, la agricultura, el turismo y la hotelería. También se concedieron mayores exoneraciones tributarias, menores pagos por concepto de licencias y trámites burocráticos

mas expeditos para la inscripción de empresas. Dos de los más importantes dispositivos puestos en vigor últimamente son la Ley de Compañías de Negocios Internacionales que permite registrar una empresa en menos de 24 horas y el "Programa de Promoción de Inversiones para el siglo XXI".

La primera de las normas mencionadas, permite que empresas extranjeras puedan establecerse en el país en un lapso de 24 horas, pero con la restricción de que no pueden hacer negocios con residentes de Las Bahamas, salvo en algunas actividades. El propósito de esta Ley es atraer a empresas extranjeras para que realicen sus negocios con el resto del mundo desde su sede en Las Bahamas, gozando de una serie de incentivos tributarios. Por otro lado, el Programa de Promoción de Inversiones busca incrementar el flujo de inversiones y transferencia de tecnología hacia Las Bahamas. Su objetivo principal es expandir la actividad económica en el país, colocando el énfasis en la creación de nuevos empleos y en el establecimiento de empresas conjuntas (*joint ventures*). Además se otorga la exoneración de todo impuesto por un lapso de veinte años y se brinda la posibilidad de optar por el status de residente permanente. Una persona natural o jurídica puede acogerse a este sistema bajo cuatro modalidades: a) inversionista individual; b) grupo de inversores; c) empresario y; d) especialista independiente. El programa recomienda algunos sectores donde sería deseable que se localice la inversión.

3. Definición de inversión extranjera directa

No existe en Las Bahamas una definición exacta de inversión extranjera directa. Sin embargo, dentro del Programa de Promoción de las Inversiones para el Siglo XXI, se establecen cuatro categorías de inversores:

- a) **Inversionista Individual:** Debe tener un capital neto de al menos US\$ 2 millones; debe tener la intención de residir en Las Bahamas por un periodo de al menos 2 meses cada año.; debe realizar y mantener durante 10 años una inversión mínima de US\$ 250,000 en la adquisición o la construcción de una residencia en Las Bahamas, y de un monto similar para la adquisición de títulos del Gobierno o el establecimiento, la adquisición, la expansión o el mantenimiento de un negocio o una empresa industrial aprobado en Las Bahamas.
- b) **Grupo de Inversores:** Consorcio de inversores administrados privadamente que ha sido aprobado y registrado por el Banco Central de Las Bahamas y que proporciona capital por acciones o en la forma de préstamos para establecer, adquirir, ampliar o mantener en Las Bahamas un negocio o empresa industrial, aprobado por el Consejo Económico Nacional.
- c) **Empresario:** Persona que tiene la intención, la capacidad, y los recursos financieros para efectuar inversiones y desarrollar actividades por un mínimo de 5 años en un negocio o en una empresa industrial que contribuya al desarrollo de la economía y que genere empleo permanente para 10 ciudadanos de Las Bahamas. El número de empresarios aprobados en el marco del programa se limita a 100.
- d) **Especialista Independiente:** Persona que se dedica a actividades que requieren niveles relativamente bajos de capitalización (profesiones intelectuales, diseño de ordenadores, etc.).

Se incluyen también, las personas que han logrado éxito en profesiones especializadas dentro de las artes, la cultura, la educación, los deportes, etc.

4. Tratamiento jurídico al inversionista

Como ya se ha mencionado no existe una discriminación explícita entre los inversionistas extranjeros y nacionales. Las Leyes regulan la inversión en términos generales, por lo tanto no existe ninguna restricción para colocar capital en la economía de Las Bahamas, salvo algunas limitaciones puntuales. Uno de los elementos donde se manifiesta esta no discriminación, es el hecho que las autoridades aseguran una gran confidencialidad en el manejo de la información de las empresas. En algunos casos, como en las compañías de negocios internacionales, se asegura que la información que entreguen a la entidad reguladora (Banco Central de Las Bahamas) no estará a disposición del público y que sólo los accionistas podrán tener acceso a ella.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera

En Las Bahamas no se considera el trámite de autorización. Sin embargo, todos los potenciales inversionistas pueden ser vetados por el Consejo Económico Nacional y la Oficina de Inversión Extranjera. Para poder operar normalmente en Las Bahamas, las empresas deben contar con el "Status Aprobado" (Approved Status) que otorga el Banco Central. Para obtenerlo es necesario presentar evidencias que los fondos invertidos o por invertirse, en moneda extranjera, fueron transferidos desde el exterior y que han sido convertidos en moneda local (dólar de Las Bahamas). Una vez que se obtiene el "Status Aprobado", el inversionista contará con todas las garantías para repatriar utilidades o ganancias de capital proveniente de la venta de cualquier activo. De la misma manera, en el caso de préstamos, el obtener el "Status Aprobado", facilita los trámites de cancelación de los mismos. La aprobación de un proyecto de inversión califica al inversionista extranjero para todos los incentivos, concesiones y derechos existentes actualmente en lo relacionado al desarrollo industrial y la diversificación económica.

Para la inscripción de una empresa, no es necesario que los directores, accionistas y empleados sean residentes de Las Bahamas. Las sesiones de directorio y acuerdo de accionistas pueden celebrarse en cualquier parte del mundo y los libros de contabilidad pueden ser llevados a cualquier punto en el planeta. Sólo se requiere que una lista de los directores, accionistas, hipotecas y cargos permanezcan en la oficina registrada en Las Bahamas.

6. Remisión de capitales y utilidades al exterior

No existe ninguna restricción a la remisión de utilidades y capitales al exterior. Para ello, al momento de inscribir una empresa debe obtenerse el "Status Aprobado", lo que le otorga el derecho a la libre repatriación de utilidades y capitales. Para ejercer este derecho, se debe informar al Banco

Central y obtener su autorización para convertir las utilidades generadas en moneda local a moneda de libre convertibilidad.

En cuanto al control cambiario, la actual legislación contempla dos casos:

- a) Una compañía registrada en Las Bahamas que es administrada dentro del país, es clasificada como residente para efectos del control de cambios. Los activos de dichas empresas deben ser mantenidos en Las Bahamas y deben realizar sus operaciones en dólares de Las Bahamas. Si una empresa o entidad que no opera en Las Bahamas desea comprar acciones de tales compañías, la operación deberá contar con la aprobación del Banco Central. Se espera generalmente que este tipo de operaciones sean financiadas desde el exterior. Se deben obtener autorizaciones del Banco Central para todas las sumas invertidas en forma de suscripción de capital, préstamos y adelantos si los inversionistas no son residentes de Las Bahamas. Si se cumplen todas estas reglas se obtiene el "Status Aprobado".
- b) Una empresa registrada en Las Bahamas pero que realiza todas sus actividades fuera de las islas es calificada como no-residente para los efectos de control de cambios. El Banco Central debe otorgar el permiso para la emisión y transferencia de acciones en esta empresa. Dicha empresa puede no tener activos en Las Bahamas o cuentas en dólares de Las Bahamas, en tal caso se puede abrir una cuenta en moneda local, pero financiada con recursos externos con el fin de cubrir sus gastos locales. Una compañía no residente puede mantener activos y valores externos, puede abrir y mantener cuentas en todas las monedas extranjeras. El "Status Aprobado" con respecto a las acciones que mantiene la empresa, es garantía para los inversionistas que dichas acciones son pagadas en moneda extranjera.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Si bien no existe a nivel general una restricción para la inversión extranjera, existen normas específicas para ciertas actividades. Los sectores con una prohibición explícita para la inversión extranjera son:

- a) Ventas al por mayor y menor hasta por un monto de US\$ 2 millones anuales.
- b) Empresas de construcción que tengan ventas netas de hasta US\$ 2 millones anuales.
- c) Periódicos y revistas.
- d) Hoteles hasta un máximo de 25 camas.
- e) Transporte público por tierra, mar y aire dentro de Las Bahamas.
- f) Operación de cines, teatros, clubes nocturnos y restaurantes.
- g) Corredores de propiedades.
- h) Agricultura en propiedades de hasta 25 acres.
- i) Pesca.
- j) Servicios de seguridad.

k) Artesanía.

Existen otros sectores donde se requiere un mínimo de participación de capitales de ciudadanos de Las Bahamas. Es decir, por lo menos el 60% de los accionistas con derecho a voto y los directores deben ser nacionales. Estas actividades son:

- a) Comercio al por mayor y menor con ventas anuales superiores a los US\$ 2 millones.
- b) Empresas de construcción con ventas anuales netas superiores a los US\$ 2 millones.
- c) Hoteles con capacidad de entre 26 y 100 camas.
- d) Transporte aéreo y marítimo internacional.
- e) Seguros de deudas.
- f) Agricultura en terrenos con una extensión de entre 26 y 500 acres.
- g) Industrias orientadas hacia el mercado de Las Bahamas.
- h) Generación y distribución de electricidad y agua.

8. Tributación

Como ya se ha mencionado, una de las principales características de Las Bahamas es la ausencia total de impuestos a la renta. Asimismo, para algunos sectores como la industria, el turismo, la agricultura, la navegación y las actividades orientada a las exportaciones existen incentivos adicionales de exoneración tributaria hasta por un máximo de veinte años.

En vista de que no existen impuestos a los ingresos, utilidades, propiedad, etc., Las Bahamas no tiene suscrito ningún acuerdo de doble tributación. Los recursos que sean remitidos al exterior quedan sometidos a la legislación que prevalezca en ese momento en su país de origen.

9. Royalties o regalías

No existe ninguna legislación específica al respecto. En cuanto a las marcas de fábrica, éstas deben ser registradas por los primeros catorce años y las patentes tienen una protección por 50 años después de la muerte del inventor.

XIX. BELICE

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica sobre inversión extranjera directa	<p><i>Código de Inversión</i> de octubre de 1985. Regulan la formación de empresas de capital extranjero en Belice y de asociaciones económicas del tipo "joint ventures".</p> <p><u>Fecha de entrada en vigor:</u> octubre de 1985.</p> <p><u>Fuente:</u> CET, <i>Las Empresas Transnacionales en el Desarrollo Mundial. Tendencias y Perspectivas</i>, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, Nueva York, 1989.</p>
Leyes sectoriales	<p>Acta de Tenencia Extranjera de Tierras (<i>The Alien Land Holding Act</i>) de 1973. Establece las condiciones para la compra de tierras por parte de inversionistas extranjeros.</p> <p><u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1973.</p> <p><u>Fuente:</u> Morgan, Murna, "Direct Foreign Investment in Belice", <i>Money Affairs</i>, Vol.V, No.2, julio-diciembre 1991, pags. 73-89.</p>
Leyes de tributación	<p>Acta de Incentivos Fiscales (<i>The Fiscal Incentive</i>) de 1990. Regula la concesión de zonas de desarrollo a potenciales inversionistas.</p> <p><u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1990.</p> <p><u>Fuente:</u> Morgan, Murna, "Direct Foreign Investment in Belice", <i>Money Affairs</i>, Vol.V, No.2, julio-diciembre 1991, pags. 73-89.</p> <p>Acta de Incentivos (a Empresas Industriales) Fiscales (<i>Fiscal Incentive [Industrial Enterprises] Act</i>) de 1973. Establece algunos incentivos fiscales para el establecimiento de empresas provenientes de inversiones extranjeras en Belice.</p> <p><u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1973.</p> <p><u>Fuente:</u> Morgan, Murna, "Direct Foreign Investment in Belice", <i>Money Affairs</i>, Vol.V, No.2, julio-diciembre 1991, pags. 73-89.</p>
Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones	<p><i>Acta de Zonas de Procesamiento de Exportaciones</i> de 1990. Regula el establecimiento y la autorización de zonas de procesamiento de exportaciones.</p> <p><u>Fecha de entrada en vigor:</u> 1990.</p> <p><u>Fuente:</u> Morgan, Murna, "Direct Foreign Investment in Belice", <i>Money Affairs</i>, Vol.V, No.2, julio-diciembre 1991, pags. 73-89.</p>

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Belice, la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en el Código de Inversión de octubre de 1985. No obstante, existen una serie de regulaciones específicas a ciertos aspectos económicos y sectoriales que complementan lo normado por dicho Código.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a 1985, la inversión extranjera en Belice no estuvo regulada por una legislación específica. Este tipo de inversiones estaba regulada por la normativa vigente para diferentes sectores de actividad económica.

Tradicionalmente, la mayor parte de la inversión extranjera se ha concentrado en el sector agrícola. Importantes montos de inversión han sido dirigidos a las industrias bananeras y de cítricos, así como a la producción y procesamiento de frutas y vegetales, cocoa, camarones, ganadería y productos madereros. La mayor parte de la producción se dirige al mercado exportador. Las inversiones en turismo, principalmente en hoteles, y en la industria de prendas de vestir, también han recibido gran atención por parte de los inversionistas extranjeros.

Durante las décadas de los sesenta y setenta, la inversión extranjera se concentró básicamente en la agricultura de plantación, el procesamiento de azúcar y en el sector financiero. En los inicios de los ochenta, el gobierno adoptó una política orientada hacia la diversificación de las exportaciones. De esta manera, la producción local fue atendida básicamente por inversionistas locales, mientras que las inversiones extranjeras se dirigieron a la producción para el mercado exportador.

A partir de 1985, la puesta en marcha del Código de Inversión introdujo ciertos cambios en la distribución sectorial de las inversiones extranjeras en Belice. Ello se debió al esfuerzo del gobierno por diversificar la economía y desarrollar industrias prioritarias en el sector agrícola, ganadero y agroindustrial, así como en el turismo y sus actividades paralelas, la industria forestal, la industria ligera y de ensamblaje orientada a la exportación y el procesamiento de productos provenientes de la pesca submarina.

De esta forma, a mediados de los ochenta, el flujo de inversión extranjera directa hacia Belice se incrementó notablemente dirigiéndose a aquellos sectores incentivados por la nueva legislación. Aunque no existen fuentes confiables de información acerca de los montos de la inversión extranjera directa, cifras basadas en 80 concesiones de desarrollo a inversionistas extranjeros durante 1985-1989, muestran que el sector agrícola fue el más favorecido, seguido por el turismo y el sector industrial.

Sólo entre 1987 y 1989, se autorizaron inversiones por un total de US\$ 186.5 millones, de los cuales US\$ 38.4 millones fueron materializados. Esta cifra equivale al 5% del PIB anual de Belice.

Algunos elementos que limitan un mayor flujo de inversiones extranjeras hacia Belice son la ausencia de capital, tecnología, infraestructura inadecuada, los altos costos en la preparación de la tierra y la falta de personal calificado para el manejo empresarial y de mercadeo.

**BELICE: DISTRIBUCION DE CONCESIONES DE DESARROLLO A INVERSIONISTAS
EXTRANJEROS POR SECTOR, 1985-1989**

SECTOR	No. de concesiones emitidas	Inversiones propuestas (Mill.de US\$)	No. de empleos propuestos	De las concesiones emitidas	
				No. aún activo	Inversiones propuestas (Mill. de US\$)
Agricultura	33	151.41	1499	27	144.64
Turismo	25	108.15	791	19	37.60
Manufactura	22	23.75	1499	14	14.56
TOTAL	80	283.31	3789	60	196.80

Fuente: Morgan, Murna, "Direct Foreign Investment in Belice", *Money Affairs*, Vol.V, No.2, julio-diciembre 1991, pag.85.

En cuanto al origen de la inversión extranjera, la mayor parte de ésta proviene de los Estados Unidos. Este país ha obtenido entre 1985 y 1989 cerca del 80% de las concesiones. De esta misma forma, sus inversiones representan el 91% de las realizadas en turismo, 78% en manufactura y 74% en agricultura.

Otros países como Hong Kong y Taiwán han realizado inversiones en Belice, buscando acceder al mercado norteamericano.

3. Definición de inversión extranjera directa

En Belice, se considera como inversión extranjera directa, el establecimiento de empresas con una participación de capital extranjero de hasta 100%. Se incluyen, además, como otras formas de inversión extranjera la formación de "joint ventures" y de subsidiarias o sucursales de empresas privadas extranjeras.

4. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

Existe un proceso de autorización de la inversión extranjera que depende de varias instancias del Gobierno de Belice. El proyecto de inversión extranjera no sólo debe ser autorizado por los organismos nacionales competentes, sino que también a las especificaciones dictadas por otras instituciones y dependencias gubernamentales:

Ministerio de Desarrollo Económico	Evalúa la viabilidad de los proyectos para concesiones de desarrollo.
Ministerio de Finanzas	Revisa las solicitudes de concesiones recibidas por el Ministerio de Desarrollo Económico.
Banco Central	Mantiene un registro de la inversión directa extranjera y autoriza las transacciones de divisas.
Departamento de Aduanas	Vigila y controla las actividades de exportación e importación.
Ministerio de Recursos Naturales	Concede licencias para la compra de tierras.
Ministerio de Medio Ambiente	Maneja los asuntos concernientes a la protección del medio ambiente.
Ministro de Trabajo	Regula las prácticas laborales.
Ministerio de Comercio e Industrias	Emite las licencias de exportación e importación.

El proceso de aprobación de los proyectos de inversión normalmente dura 60 días. Sin embargo, se requieren de 30 días adicionales para las evaluaciones interministeriales que se realizan.

El Ministerio de Desarrollo Económico al realizar la aprobación de las solicitudes, concede una serie de exoneraciones aduaneras y fiscales que varían caso a caso. La selección de los proyectos que reciben los incentivos es determinada por su contribución al valor agregado local, sus ganancias o ahorros de divisas, la rentabilidad de la empresa y la habilidad de la empresa para la creación de oportunidades de empleo.

En el caso de inversiones que supongan el 100% de participación extranjera en una empresa, la aprobación para concesiones de desarrollo se realiza sólo si el monto invertido es US\$ 125 mil.

5. Remisión de capital y utilidades al exterior

Los inversionistas extranjeros tienen garantizado su derecho a la libre repatriación de capitales, beneficios y dividendos, siempre que el capital invertido haya sido registrado en el Banco Central de Belice.

6. Sectores prohibidos al capital extranjero

La inversión directa extranjera ha sido excluida de ciertas actividades ya que el Estado ha buscado reservar esas industrias, que requieren una tecnología relativamente simple y bajos requerimientos financieros, a los inversionista locales. Entre los sectores restringidos están:

- Actividades comerciales de distribución.
- Pesca comercial dentro de la frontera marítima.
- Cultivo de azúcar y caña.
- Transporte interno.
- Apicultura.
- Restaurantes y bares de autoservicio.
- Manufactura de *souvenirs*.
- Operaciones de buceo.
- Tours de visitas a lugares de interés.

7. Tributación

Los incentivos fiscales concedidos a los inversionistas extranjeros incluyen exoneraciones tributarias y aduaneras. Los inversionistas extranjeros, según lo determine el Ministerio de Desarrollo Económico pueden recibir exoneraciones tributarias o las aduaneras, o ambas.

Las exoneraciones tributarias se conceden por un periodo que va desde 3 a 15 años para la industria y el turismo, hasta 25 años para la agricultura, procesamiento de alimentos, acuicultura y aquellas actividades intensivas en mano de obra y que producen sólo para el mercado exportador. Estos periodos rigen a partir de la fecha de inicio de la producción.

En cuanto a las exoneraciones aduaneras, su periodo de vigencia comienza a partir de la fecha de aprobación de la inversión extranjera.

El establecimiento de Zonas de Procesamiento de Exportaciones mediante inversión extranjera está sujeto, también, a ciertos beneficios tributarios. Se conceden exoneraciones aduaneras sobre todas las importaciones de bienes de capital, muebles de oficina, repuestos, materias primas, bienes intermedios y bienes de consumo. Adicionalmente, se exoneran a las empresas inversionistas del pago del Impuesto sobre la Renta, impuesto deducido de las remuneraciones, impuesto sobre las ganancias de capital e impuesto sobre el pago de dividendos. A excepción de la exoneración del pago del impuesto sobre el pago de dividendos, cuya vigencia es ilimitada, estas exenciones son concedidas durante los primeros 20 años de operaciones.

XX. CUBA

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Decreto Ley No. 50* del 15 de febrero de 1982. Establece el régimen jurídico mediante el cual pueden desarrollarse asociaciones económicas entre entidades cubanas y extranjeras en territorio cubano.
Fecha de entrada en vigor: 15 de febrero de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, No. 3, La Habana, 15 de febrero de 1982.
- Resolución No. 6-82* del 15 de septiembre de 1982. Se crea el registro bajo el control de la Cámara de Comercio, donde las asociaciones económicas adquieren personalidad jurídica y se definen la legalización e inscripción de documentos extranjeros.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 33* del 10 de enero de 1981. Describe particularmente el régimen administrativo especial para las zonas de alta significación para el turismo internacional.
Fecha de entrada en vigor: 12 de febrero de 1981.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 12 de febrero de 1981.
- Leyes de propiedad industrial** *Decreto Ley No. 63*, del 14 de mayo de 1983. Define el alcance y protección de los derechos sobre invenciones, descubrimientos científicos, modelos industriales, marcas y denominaciones de origen.
Fecha de entrada en vigor: 14 de mayo de 1983.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición extraordinaria, La Habana, 14 de mayo de 1983.
- Leyes de tributación** *Resolución No. 52-82* del Comité Estatal de Finanzas del 15 de septiembre de 1982. Define los conceptos de ingresos, partidas deducibles, estados financieros, impuesto sobre nóminas, recargos por mora y regula la inscripción en el Registro de Contribuyentes del Estado. Esta Resolución fue modificada por la Resolución No. 22-83 del 5 de mayo de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.
- Decreto No. 40* del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros del 22 de febrero de 1979. Define el tipo de vehículos por importar, los derechos arancelarios, etc.
Fecha de entrada en vigor: 17 de marzo de 1979.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 17 de marzo de 1979.
- Decreto No. 124*, del 15 de octubre de 1990. Regula lo concerniente a los aranceles de aduanas sobre la base de las disposiciones del GATT.
Fecha de entrada en vigor: 15 de octubre de 1990.
Fuente: Comité Estatal de Colaboración Económica.
- Ley No. 1092*, del 5 de febrero de 1963. Define los procedimientos para carga y descarga en las aduanas.
Fecha de entrada en vigor: 22 de febrero de 1963.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 22 de febrero de 1963.
- Resolución No. 1-82* de la Dirección General de Aduanas del 15 de septiembre de 1982. Define los procedimientos para las empresas mixtas o las partes de las demás formas de asociación económica para exportaciones o importaciones con o sin carácter comercial, en cuyo anexo se relacionan los productos de importación prohibida.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.
- Decreto Ley No. 22*, del 16 de abril de 1979. Establece el Arancel de Aduanas de la República de Cuba para las importaciones sin carácter comercial.
Fecha de entrada en vigor: 30 de abril de 1979.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 30 de abril de 1979.
- Leyes sobre aspectos financieros** *Decreto Ley No. 140* del Consejo del Estado, sobre la despenalización de la moneda libremente convertible.
Fecha de entrada en vigor: 13 de agosto de 1993
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, agosto de 1993.
- Resolución No. 660*, del Banco Nacional de Cuba del 15 de septiembre de 1982. Define las garantías y otras facilidades crediticias brindadas por el Banco Nacional de Cuba u otro banco del sistema para la obtención de financiamiento en el exterior.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.

- Leyes sobre aspectos financieros (continuación)**
- Resolución No. 229/89* del Banco Nacional de Cuba, del 22 de junio de 1989. Establece los tipos de cambio aplicables sólo a las transacciones de empresas mixtas y otras formas de asociación económica, basados en la proporción de un peso cubano por un dólar norteamericano.
Fecha de entrada en vigor: 26 de agosto de 1989.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 26 de agosto de 1989.
- Resolución No. 53-82* del Comité Estatal de Finanzas del 15 de septiembre de 1982. Establece las formas para la formación, utilización y liquidación de reservas legales y voluntarias para las contingencias que pudieran producirse en las operaciones de las empresas mixtas. Esta Resolución fue modificada por la Resolución No. 22-83 del Comité Estatal de Finanzas, del 5 de mayo de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Comité Estatal de Colaboración Económica.
- Resolución No. 25-83* del Comité Estatal de Finanzas del 5 de mayo de 1983. Establece el seguro de instalaciones industriales, turísticas o de cualquier tipo, explotadas por otras asociaciones económicas.
Fecha de entrada en vigor: 23 de junio de 1983.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 23 de junio de 1983.
- Instrucción No. 11-83* del Comité Estatal de Finanzas. Regula el mantenimiento de información estadística fundamental sobre las actividades de las asociaciones económicas.
Fecha de entrada en vigor: 1983.
Fuente: UNCTAD/ECDC, Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Regulación de las Inversiones Extranjeras en América Latina y el Caribe, 23 de octubre de 1991.
- Leyes sobre aspectos mercantiles**
- Decreto Ley No. 15* del 3 de julio de 1978. Establece normas para los contratos entre personas jurídicas o naturales.
Fecha de entrada en vigor: 7 de julio de 1978.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, La Habana, 7 de julio de 1978.
- Decreto Ley No. 71* del 4 de julio de 1983. Dispone que la Comisión facultada para autorizar la constitución de asociaciones económicas en Cuba regulará las condiciones de sus relaciones contractuales con las empresas estatales cubanas.
Fecha de entrada en vigor: 4 de julio de 1983.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición Extraordinaria, La Habana, 4 de julio de 1983.
- Resolución No. 24-82* del Comité Estatal de Precios del 15 de septiembre de 1982. Dispone que las empresas estatales cubanas no estarán sujetas a lo establecido en materia de precios por el Comité Estatal cuando contraten con empresas mixtas o con las partes de otras formas de asociación económica el suministro de compra de productos.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.
- Leyes laborales**
- Resolución No. 1647* del Comité Estatal del Trabajo y Seguridad Social del 15 de septiembre de 1982. Define las relaciones entre los trabajadores cubanos en una empresa mixta, la propia empresa mixta y la entidad cubana empleadora de la mano de obra.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.
- Resolución No. 659* del Banco Nacional de Cuba, del 15 de septiembre de 1982. Establece el régimen de remesas al exterior por concepto de haberes recibidos.
Fecha de entrada en vigor: 1 de octubre de 1982.
Fuente: Gaceta Oficial de la República de Cuba, Edición Extraordinaria, Año LXXX, La Habana, 1 de octubre de 1982.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY DE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En Cuba la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en el Decreto Ley No. 50 emitido el 15 de febrero de 1982, mediante la cual se establece el Régimen de Asociaciones Económicas entre entidades cubanas y extranjeras.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a 1982, en Cuba no se había legislado en materia de inversión extranjera, manteniendo sus vínculos con el mercado internacional sólo a través del comercio exterior, principalmente con otros países socialistas.

No obstante en febrero de 1982, Cuba enfrentó la necesidad de un mayor intercambio internacional que promoviera el desarrollo de diversos sectores de actividad económica, en especial los sectores de exportación y de turismo. De esta manera, se promulga el Decreto Ley No. 50 donde se establece un régimen de fomento a las inversiones extranjeras mediante la forma de "*joint ventures*". Leyes de este tipo ya habían sido establecidas con anterioridad en casi todos los países socialistas.

Con esta legislación sobre inversión extranjera Cuba buscó preservar su estilo de desarrollo, elevar sus ingresos de divisas, como asimismo, promover el fortalecimiento de su industria que funcionaba por debajo de su capacidad instalada, debido a la carencia de insumos y materias primas.

De la misma manera el establecimiento de estas empresas conjuntas buscaba contribuir al fomento de las exportaciones en ciertas industrias cubanas altamente competitivas. Tal es el caso de la biotecnología, la industria farmacéutica, equipos médicos y la ingeniería genética, entre otras. También se buscaba incrementar los ingresos por el turismo internacional y ampliar otras industrias en manos de capitales nacionales, tales como la del azúcar, el níquel, el acero, los cítricos, el tabaco y los mariscos.

Como regla general, la participación extranjera en la formación de asociaciones económicas puede alcanzar hasta 49% de las acciones. Sin embargo, no se excluye la posibilidad de que en determinadas ocasiones, por autorización expresa del gobierno, dicha participación pueda ser mayor. La política actual del gobierno ha sido la de autorizar hasta un 50%.

No obstante esta limitación, hasta el momento se han beneficiado de este tipo de asociaciones económicas, entre otros, capitales privados de México, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Austria, España, Francia, Finlandia, Italia y se está negociando con otros países de Europa Occidental y América Latina. Los proyectos incluyen inversiones en turismo, pesca, telecomunicaciones,

industrias ligeras, tecnología médica, industria farmacéutica, construcción y productos derivados del azúcar.

Por otro lado, la norma básica actualmente vigente ha sido modificada en varias oportunidades y de distintas maneras:

- A fines de 1990, Cuba anunció su deseo de considerar una participación extranjera mayoritaria en áreas prioritarias como el turismo. En el mismo sentido, la Cámara de Comercio manifestó en junio de 1991 la posibilidad de crear empresas de capital 100% extranjero.
- En la Cumbre de Líderes Iberoamericanos en Guadalajara, el presidente Castro expresó que se daría un tratamiento preferencial a los inversionistas latinoamericanos, incluyendo el 100% de propiedad de las inversiones.
- En octubre de 1991 durante el IV Congreso del Partido Comunista Cubano y más recientemente durante la Asamblea Nacional de Cuba en julio de 1992, el Presidente Castro ha expresado su decisión de facultar a las asociaciones económicas para que exporten e importen directamente y libres de aranceles e impuestos aduaneros.
- En mayo de 1992, fuentes oficiales cubanas informaron que la industria azucarera ya no estaría fuera de los límites de los inversionistas extranjeros.
- El 26 de julio de 1993, el Presidente Castro anunció la libre circulación del dólar estadounidense, situación que estaba penada por la ley.

*NUMERO DE ASOCIACIONES ECONOMICAS CUBANAS CON
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS*

Fecha	Número de Asociaciones Económicas			Fuente de Información Cubana
	Concluidas	Bajo Discusión	Total	
Diciembre de 1990			20	Cámara de Comercio
Abril de 1991	55	100	155	
Junio de 1991			70	J. García Oliveras, Cámara de Comercio
Julio de 1991	40	110	150	J. García Oliveras, Cámara de Comercio
Octubre de 1991	50	100	150	J. García Oliveras, Cámara de Comercio
Diciembre de 1991 (a)	50+	140	190+	Cámara de Comercio
Diciembre de 1991 (b)	60	150	210	J. García Oliveras, Cámara de Comercio
Marzo de 1992	200	150	350	J. García Oliveras, Cámara de Comercio

Fecha	Número de Asociaciones Económicas			Fuente de Información Cubana
	Concluidas	Bajo Discusión	Total	
Junio de 1992 (a)	60	100	160	H. Rodríguez Llompert, Banco Nacional de Cuba
Junio de 1992 (b)	250	Varios miles	Varios miles	O. Alfonso Montalván, Comité Estatal para la Cooperación Económica

Fuente: Cuba Business, varios números.
The Miami Herald, varias ediciones.
Fortune, varios números.
Journal of Commerce, varios números.
 Fittipaldi, Santiago. Developing Business Strategies for Cuba, Business International Corporation; marzo de 1992.
El Nuevo Herald, varias ediciones.

Uno de los principales problemas que han enfrentado las empresas extranjeras al invertir en Cuba ha sido la inconvertibilidad del peso cubano. Por esta razón es que hasta el momento la mayoría de asociaciones económicas se han producido en industrias donde los inversionistas reciben dólares por sus servicios, producción o exportaciones (por ejemplo, el turismo). Sin embargo, en la Novena Feria Internacional de Comercio realizada en La Habana, el Presidente Castro se comprometió a expandir los beneficios de la Ley de Inversión Extranjera, permitiendo la repatriación automática de las utilidades y dando una mayor flexibilidad en materia tributaria. Finalmente, la despenalización de la tenencia de moneda libremente convertible permitirá un mayor acceso a las divisas y a su repatriación para sectores menos intensivos en exportaciones.

Por otro lado, la ley no es lo suficientemente explícita en cuanto a las garantías que el gobierno concede a los inversionistas en caso de expropiación. De la misma forma, existen ciertas inconsistencias en lo que se refiere al arbitraje en caso de conflictos, dado que el gobierno cubano actúa como juez y parte en tales circunstancias.

Cuba también pretende incursionar en lo que a conversión de deuda externa se refiere. Aunque todavía no se ha formalizado ningún acuerdo, Cuba ha iniciado un proceso de renegociación de su deuda con Argentina, donde se había estudiado la posibilidad de realizar acuerdos *swaps* mediante la realización de inversiones argentinas en Cuba. Además, Cuba también estaría buscando realizar acuerdos similares con México por un total de US\$ 207 millones y con el Reino Unido. En el caso de este último, se habla de un acuerdo de asociación económica entre la empresa británica Technical and Manufacturing Services y la empresa cubana Quimimport para la fabricación de limpiadores químicos.

Por último, respecto de los posibles acuerdos "*swaps*" Cuba está buscando reducir la deuda de US\$ 1.7 miles de millones contraída con Japón. Para ello ha planteado la realización de un proyecto turístico, en el que se invertirían US\$ 3 mil millones, de los cuales US\$ 1.5 miles de millones serían ofrecidos por Cuba en la forma de tierra, mano de obra y recursos de construcción; US\$ 1,000 millones lo proveería Japón, y los restantes US\$ 500 millones los daría empresas japonesas a través de esquemas de "*debt-for-equity*"

3. Definición de inversión extranjera directa

No existe una definición exacta de inversión extranjera en la legislación cubana. Sin embargo, más que una Ley de Inversión Extranjera, existe una Ley que norma el establecimiento de asociaciones económicas ("joint ventures") con entidades extranjeras, con posibilidades de mercado, experiencia de producción y recursos financieros complementarios a los de la parte cubana. Estos negocios conjuntos pueden llevarse a cabo mediante la constitución de empresas conjuntas o a través de otras modalidades de asociación que no impliquen la creación de una empresa.

Las empresas nacionales que pueden tomar parte en las asociaciones económicas son empresas individuales estatales y grupos de empresas estatales. Durante la Asamblea Nacional de Cuba realizada en julio de 1992, se aprobó un nuevo artículo constitucional que permite la inversión extranjera en empresas de propiedad estatal. La parte extranjera puede estar conformada tanto por personas naturales como por empresas extranjeras públicas o privadas.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

La legislación establece que una vez constituida la empresa mixta, esta adquiere personalidad jurídica propia y con ella, independencia del Estado cubano. La empresa tiene absoluta libertad para designar la junta de directores y los gerentes, definir su programa de producción, fijar precios y planes de venta, exportar e importar directamente, determinar la planilla de personal y seleccionarlo, suscribir contratos con entidades nacionales y extranjeras, decidir el sistema de contabilidad más adecuado y diseñar su política financiera.

Recientemente, se ha facultado a las empresas cubanas para que importen y exporten sin autorización del Gobierno Central y se ha reconocido la propiedad extranjera de bienes raíces en empresas conjuntas.

Por otro lado, en el mes de julio de 1992, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó un cambio en la Constitución de la República, en el cual se ratifica las seguridades dadas a las empresas extranjeras que establezcan asociaciones económicas, empresas mixtas u otro tipo de inversiones en el país.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

La legislación cubana contempla el establecimiento de una Comisión Estatal facultada para autorizar a empresas estatales y otras organizaciones nacionales se unan en asociación económica con empresas extranjeras. Al otorgar cada autorización, dicha comisión establece las condiciones que deberán someterse las asociaciones económicas y está facultada para arrendar tierra y brindar facilidades a las distintas asociaciones económicas.

Por otro lado, el Artículo No. 4 del Decreto Ley No. 50 señala que el término de duración que se fije para las asociaciones económicas debe propiciar la recuperación del capital invertido y la obtención de ganancias que haga atractiva la inversión.

Las empresas conjuntas adoptan la forma de sociedades anónimas por acciones nominativas. Tienen nacionalidad cubana y pueden constituir oficinas, representaciones, sucursales y filiales en el extranjero, así como tener participaciones en entidades del exterior. Sin embargo, dichas asociaciones económicas deben ser temporales; domiciliadas en Cuba y deben estar sujetas a las regulaciones aplicadas a las empresas nacionales.

Las empresas de asociación económica adquieren legalidad una vez que han sido registradas en un Registro Especial establecido y mantenido por la Cámara de Comercio de la República de Cuba. Mediante la Resolución No. 6-82 del 15 de septiembre de 1982, la Cámara de Comercio ha establecido los procedimientos de registro y las condiciones para la formación, modificación y liquidación de las asociaciones económicas.

6. Remesas de capital y utilidades al exterior

Según lo establece el Artículo No. 23 del Decreto Ley No. 50, el Estado cubano garantiza al socio extranjero la libre transferencia al exterior, en moneda libremente convertible, a través del Banco Nacional de Cuba, de los dividendos o utilidades netas que obtenga; del pago que reciba de la parte cubana en caso de que acuerde transferir a ésta una parte o el total de su aporte; así como la parte que le corresponda de la liquidación de la asociación económica.

El Banco Nacional de Cuba puede dar garantía al socio extranjero de que, en caso de suspensión de actividades de la asociación económica por actos unilaterales del Estado cubano, podrá repatriar la parte que le corresponda de la liquidación de dicha asociación.

Los trabajadores extranjeros pueden remesar al exterior el porcentaje de sus salarios en divisas convertibles que determine el Banco Nacional de Cuba. De esta manera, mediante la Resolución No. 659 del 1 de octubre de 1982, el Banco Nacional de Cuba fijó dicho porcentaje en 66%. Sin embargo, este porcentaje puede ser reducido o elevado a través de una acción administrativa.

7. Sectores prohibidos al capital extranjero

La legislación cubana no establece específicamente reserva por parte del Estado o el capital nacional, en cuanto a la realización de inversiones en ciertos sectores de actividad económica.

8. Tributación

Según se señala en el Capítulo III del Decreto Ley No. 50, las empresas mixtas, sus socios, dirigentes y funcionarios en las demás formas de asociación económica, están exentos del pago de los siguientes impuestos establecidos por la Ley No. 998, del 10 de enero de 1981:

- a) Sobre ingresos brutos percibidos por empresas privadas.
- b) Sobre ingresos personales.
- c) Sobre transmisión de bienes inmuebles y establecimientos mercantiles.

Sin embargo, las empresas conjuntas y las participaciones en otras formas de asociación económica están sujetas a los siguientes impuestos, cuyo pago se realiza en moneda convertible:

- a) Una tasa de 30% sobre las utilidades netas anuales. Será deducible de las utilidades netas imponibles la parte de las utilidades que se reinvierta, la que se destine a los fondos de estimulación económica a los trabajadores, así como la que se reserve para cubrir contingencias.
- b) Una tasa de 25% sobre la totalidad de los salarios y demás ingresos que por cualquier concepto perciban los trabajadores cubanos (incluida la contribución a la Seguridad Social); excepto lo que reciban con cargo al fondo de estimulación económica.
- c) Aranceles y demás derechos recaudables en las aduanas.
- d) Impuestos sobre la propiedad o posesión de vehículos automotores de transporte terrestre.
- e) Sobre los documentos (tasas y derechos por la solicitud, obtención o renovación de determinados documentos).

En algunos casos, el Comité Estatal de Finanzas puede exonerar temporalmente a las asociaciones económicas del pago de Impuestos sobre la Renta o sobre la importación, si ello beneficia al país.

9. Inversiones sectoriales

TURISMO

Sin lugar a dudas, el sector turístico es el que ha sido más beneficiado desde la promulgación de la legislación sobre inversión extranjera. Una disposición especial del Decreto Ley No. 50 establece exoneraciones tributarias para las asociaciones económicas vinculadas a esta actividad y que

estén localizadas en áreas designadas como adecuadas para el desarrollo del turismo internacional. Además, el Control Estatal de Trabajo y Seguridad Social puede autorizar un régimen laboral especial y el Ministerio del Interior establecer un régimen particular de control que facilite los trámites de inmigración.

Desde la creación de la empresa de turismo Cubanacan en 1987, con el fin de desarrollar el turismo internacional a través de asociaciones económicas, dicha actividad comenzó a desarrollarse vigorosamente.

El primer contrato de asociación económica exitoso llevado a cabo en este sector fue el firmado por el Grupo Sol de España y la empresa turística cubana Cubanacan, que culminó con el inicio de las operaciones del Hotel Sol Palmeras, ubicado en Varadero, en mayo de 1990. La inversión total ascendió a US\$ 60 millones. Posteriormente, se acordó realizar la asociación Hocusa para la construcción de un hotel de cinco estrellas con 462 habitaciones, en mayo de 1992. Sin embargo, este proyecto ha enfrentado serias dificultades debido a la falta de personal cubano debidamente capacitado y la disponibilidad de los materiales de construcción necesarios.

XXI. ISLAS CAIMAN

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

Legislación específica sobre inversión extranjera directa La presencia del capital extranjero en Islas Caimán es regulada por la Ley de Control de las Compañías Locales, la Ley de Licencias para Comercio y Negocios y otras leyes sectoriales.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

Islas Caimán no posee una norma específica que regule la inversión extranjera. El tratamiento del capital extranjero se rige por la Ley de Control de las Compañías Locales, la Ley de Licencias para Comercio y Negocios y otras leyes sectoriales.

2. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

No existe ninguna discriminación contra los inversionistas extranjeros en favor de los inversionistas nacionales.

3. Autorización y registro de las inversión extranjera

Tanto las empresas locales, como las extranjeras con más de 40% de capital social y que deseen establecerse en Islas Caimán, requieren de una licencia emitida por el Consejo de Protección de las Islas Caimán. Están exceptuadas de este requerimiento las siguientes empresas:

- a) Una empresa que realiza actividades con personas, empresas o corporaciones en las Islas para fomentar sus propios negocios en el exterior de las Islas.
- b) Una empresa que compra, vende o negocia en acciones, bonos, letras, obligaciones, hipotecas u otros valores, emitidos o creados por una empresa exenta del pago de impuestos, una sociedad extranjera o una corporación residente vinculada al extranjero.
- c) Una empresa que maneja negocios bancarios en las Islas con y por medio de una licencia bancaria.

- d) Una empresa que realiza contratos en las Islas y que ejerce todos los poderes necesarios para continuar estas actividades fuera de las Islas.
- e) Las actividades entre empresas exentas del pago de impuestos.
- f) Una empresa que opera bajo la licencia de la Ley de Seguros de 1979.
- g) Una empresa que opera bajo la Ley de Regulación de Bancos e Instituciones Financieras.
- h) Una empresa que opera bajo la franquicia del gobierno local.
- i) Una empresa exenta que opera bajo la Ley de Compañías.
- j) Una empresa declarada como no residente por la Secretaría Financiera.

Antes de postular para la obtención de una licencia, la empresa debe publicar los detalles de su actividad en un periódico local durante cuatro ediciones consecutivas, especificando su naturaleza, el tamaño de la inversión, su capacidad, características de su producto, etc. e indicando su intención para postular a una licencia. La solicitud debe estar acompañada por la copia certificada del Memorando y los Artículos de la Asociación de la empresa, una lista certificada de los accionistas indicando los beneficios para los accionistas nacionales (si los hubiera), un esquema de la asociación propuesta detallando el personal que se empleará, copias de las publicaciones en los periódicos y CI\$ 200, como cuota de admisión.

Para tomar una decisión, el Consejo toma en cuenta la situación económica en las Islas y una adecuada protección a las empresas existentes. Asimismo, considera la naturaleza de la empresa que postula, las ventajas y desventajas de las actividades que realice, el deseo de mantener la economía de las Islas en manos de nacionales y la participación que los nacionales tengan las actividades de la nueva empresa.

Una vez obtenida la licencia, ésta tiene una duración mínima de 12 años sujeta a un pago anual por renovación de CI\$ 200. Periodos de duración superiores a 12 años son concedidos cuando el tamaño y la naturaleza de la inversión así la garanticen.

En el caso de las sociedades el tratamiento es un tanto diferente. Al menos un socio debe ser residente los socios extranjeros requieren de una licencia para recibir las ganancias que las actividades en las Islas les otorguen. Este tipo de licencias son concedidas por un periodo de 12 meses y son renovables.

4. Incentivos a la Inversión

El gobierno ha establecido algunas concesiones para incentivar la inversión en la industria y otras áreas de desarrollo en las Islas. La concesión más importante es la reducción de los derechos de importación normados por la Sección 49 de la Ley de Aduana.

Algunas concesiones para proyectos industriales son las siguientes:

- a) Las industrias que proveen al mercado exportador, con una inversión superior a los CI\$ 50,000 y que se comprometan a emplear al menos cuatro personas nacionales por un periodo mínimo de 5 años, están exentas del pago de derechos aduaneros a la importación sobre los materiales de construcción, equipos, maquinaria e instrumentos de comercio. Los materiales para ser usados en el proceso de manufactura también están exentos de derechos aduaneros.
- b) Las industrias que proveen al mercado local, con una inversión superior a los CI\$ 25000 y que se comprometan a emplear al menos cuatro personas nacionales por un periodo de 3 años, están exceptuados al igual que en caso descrito en a).
- c) Una empresa que no requiere una licencia bajo la Ley de Control de las Compañías Locales para poder operar, que posee una inversión de al menos CI\$ 10000 en una industria nueva, y que se compromete a emplear al menos dos personas nacionales por un periodo mínimo de 3 años, será examinada individualmente por el Consejo Ejecutivo para considerar su exoneración del pago de los derechos de importación.
- d) El gobierno no provee tierra para el desarrollo del sector privado, excepto en circunstancias muy especiales.

5. Regímenes Especiales

Existe un régimen especial de tratamientos para los negocios que se establezcan en el sector bancario y financiero. Las actividades bancarias deben ser llevadas a cabo bajo una licencia válida concedida por el Gobernador bajo lo que prevé la Ley de Bancos e Instituciones Financieras de 1989. Se pueden obtener las siguientes licencias:

- Categoría "A":** La licencia puede emplearse tanto para actividades bancarias locales como en el extranjero.
- Categoría "B":** La licencia puede emplearse sólo en actividades originados fuera de las Islas.
- Categoría "B" (restringida):** La licencia se limita a la conducción de actividades con personas nominadas y aprobadas fuera de las Islas.

Licencia para Instituciones: Licencia para operar con Instituciones Financieras.

Licencia para Instituciones (restringida): Sólo para personas nominadas y aprobadas.

Todas las licencias bancarias y de instituciones financieras deben tener una oficina registrada y un representante local en Islas Caimán. Una vez establecidas, las instituciones bancarias y financieras están exentas de controles cambiarios; se les permite la libre transferencia de fondos al exterior, en cualquier moneda; total libertad para la apertura de cuentas bancarias; ningún requerimiento de reservas; competitividad en los mercados de euro-monedas y confidencialidad, asegurada por la Ley de Preservación de las Relaciones Confidenciales.

6. Tributación

Después de abolirse el impuesto anual de CI\$ 100 sobre los adultos residentes entre 18 y 60 años, no existe en Islas Caimán ningún impuesto directo. Tampoco existen impuestos sobre el ingreso, impuestos a las empresas o corporaciones, impuestos a la herencia e impuestos a las utilidades. No existen impuestos a la propiedad y no hay control a la propiedad extranjera de bienes y tierras.

El gobierno establece un impuesto de 7.5% sobre el valor de los bienes inmuebles en venta, hasta los CI\$ 250000, y de 10% por sobre ese valor. Asimismo, hay un impuesto de 1% sobre las hipotecas y un cargo anual a la recolección de basura, cancelable en el mes de enero. Todas las personas mayores de 12 años deben pagar un impuesto de salida de CI\$ 6 (US\$ 7.5) y un recargo para seguridad del equipaje de CI\$ 4 o US\$ 5.

Las personas que remiten dinero al exterior hacia sus países de origen o efectúan la repatriación de sus capitales en Islas Caimán deben cancelar ciertos impuestos. Este proceso debe hacerse bajo la asesoría de consultores profesionales, dado que existen una serie de ramificaciones impositivas distintas para cada tipo de residente.

XXII. REPUBLICA DOMINICANA

I. ORGANISMOS COMPETENTES Y DEFINICIONES

Organismos nacional competente	En República Dominicana la institución responsable de la aprobación de la inversión extranjera es el <u>Directorio de Inversión Extranjera</u> , organismo dependiente del <u>Banco Central de la República Dominicana</u> . Una vez autorizada, la inversión extranjera es registrada por el Banco Central.
Definición nacional de inversión extranjera directa	Se define como inversión extranjera directa a los aportes provenientes del exterior, propiedad de personas físicas o morales extranjeras y de personas físicas nacionales no residentes en el país, al capital de una empresa, en monedas libremente convertibles, en maquinarias o equipos, en herramientas, en instrumentos, en accesorios y repuestos, con la finalidad de obtener el registro de la inversión en el Banco Central. Igualmente se considera como inversión extranjera directa, las solicitudes de registro de las inversiones en moneda nacional, generadas por inversiones extranjeras registradas.
Participación mínima del capital extranjero	En República Dominicana, no existe un porcentaje mínimo de participación extranjera. No obstante, se define como empresa extranjera a aquella cuyo capital perteneciente a inversionistas nacionales sea inferior al 51%, o cuando siendo superior a éste no se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa. Por otro lado, se define como empresa mixta a aquella cuyo capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción que fluctúe entre el 51% y el 70%, siempre que esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, administrativa y comercial de la empresa.
Reinversión de utilidades	La inversión extranjera directa, con fines de registro, realizada con todas o parte de las utilidades provenientes de una inversión extranjera registrada, en la misma empresa que las haya generado.
Inversión extranjera nueva	La inversión extranjera directa, con fines de registro, realizada con todas o parte de las utilidades provenientes de una inversión extranjera registrada, en una empresa distinta de la que haya generado la inversión.
Criterios para el registro	Los valores de la inversión extranjera directa, una vez registrados en el Banco Central de la República Dominicana, otorgan el derecho a la conversión de moneda local, en divisas libremente convertibles, para transferir al extranjero el valor de las inversiones registradas, así como las utilidades que generen. El registro de las inversiones extranjeras no es obligatorio, por lo que no todas las empresas con capital extranjero residentes en el país están registradas en el Banco Central. Además, la legislación existente sobre zonas francas no requiere la autorización de las inversiones extranjeras por parte del Directorio de Inversión Extranjera, lo que significa que éstas no están registradas en el Banco Central, ni se reflejan en sus estadísticas.

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley No. 861* del 22 de julio de 1978. Regula la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en República Dominicana. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 138 del 24 de junio de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 22 de julio de 1978.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
- Segunda Resolución de la Junta Monetaria* del 10 de mayo de 1985. Dispone la creación de registros sin obligación cambiaria, tanto para la deuda externa como para las inversiones extranjeras, asistencia técnica, transferencia de tecnología y afines. Esta norma fue modificada por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 16 de julio de 1985.
Fecha de entrada en vigor: 10 de mayo de 1985.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
- Leyes sectoriales** *Ley No. 146* del 4 junio de 1971. Permite la cesión de concesiones a compañías individuales privadas. Los Artículos Nos. 123, 125, 126 y 128 de esta Ley fueron derogados por la Ley No. 11-92 del 16 de mayo de 1992.
Fecha de entrada en vigor: 4 junio de 1971.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 299* del 23 de abril de 1968. Establece incentivos para industrias nuevas o existentes, nacionales o extranjeras, en el marco de la Ley de Promoción Industrial. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 145 del 22 de junio de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 23 de abril de 1968.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 153* del 27 de mayo de 1971. Establece incentivos para estructurar proyectos e inversiones en el sector turismo.
Fecha de entrada en vigor: 27 de mayo de 1971.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 409* del 20 de enero de 1982. Se declara de interés nacional la promoción, incentivo y protección de las empresas agroindustriales.
Fecha de entrada en vigor: 20 de enero de 1982.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 305* del 23 de mayo de 1968. Regula la posesión de propiedades en los 60 Kms. de zona marítima.
Fecha de entrada en vigor: 23 de mayo de 1968.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 290* del 29 de marzo de 1972. Establece ciertas restricciones sobre la posesión de tierras cultivadas de arroz.
Fecha de entrada en vigor: 29 de marzo de 1972.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Decreto No. 2543* del 2 de marzo de 1945. Establece el requisito de permiso de la Presidencia para la inversión en bienes raíces.
Fecha de entrada en vigor: 2 de marzo de 1945.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 221* de junio de 1971. Establece un régimen impositivo especial para las pequeñas industrias.
Fecha de entrada en vigor: junio de 1971.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 2005* del 17 de mayo de 1984. Regula las transacciones de intercambio comercial con el exterior.
Fecha de entrada en vigor: 17 de mayo de 1984.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.

- Leyes de transferencia de tecnología** *Ley No. 861* del 22 de julio de 1978. Regula la inversión extranjera y la transferencia de tecnología en República Dominicana. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 138 del 24 de junio de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 22 de julio de 1978.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
- Segunda Resolución de la Junta Monetaria* del 10 de mayo de 1985. Dispone la creación de registros sin obligación cambiaria, tanto para la deuda externa como para las inversiones extranjeras, asistencia técnica, transferencia de tecnología y afines. Esta norma fue modificada por la Segunda Resolución de la Junta Monetaria del 16 de julio de 1985.
Fecha de entrada en vigor: 10 de mayo de 1984.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
- Leyes de propiedad industrial** *Ley No. 4456* del 24 de mayo de 1956. Regula los contratos de explotación de conocimientos técnicos. Esta Ley fue complementada por la Ley No. 5690 del 1 de diciembre de 1961.
Fecha de entrada en vigor: 24 de mayo de 1956.
Fuente: CET, Leyes y Reglamentaciones Nacionales en Materia de Empresas Transnacionales, Volumen VI, Centro de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales, New York, 1987.
- Ley No. 5613* del 2 de agosto de 1949. Establece la Ley de Patentes.
Fecha de entrada en vigor: 2 de agosto de 1949.
Fuente: Banco Central de la República Dominicana.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Ley No. 299* del 23 de abril de 1968. Establece incentivos para industrias nuevas o existentes, nacionales o extranjeras, en el marco de la Ley de Promoción Industrial. Esta Ley fue modificada por la Ley No. 145 del 22 de junio de 1983.
Fecha de entrada en vigor: 23 de abril de 1968.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.
- Ley No. 96* de 1983. Permite el acceso a financiamiento interno a las empresas que operen en zonas francas nacionales.
Fecha de entrada en vigor: año 1983.
Fuente: CEDOPEX, El Exportador Dominicano, Año XVIII, No. 99, Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, 1990.
- Ley No. 08/90* de enero de 1990. Establece un marco legal unificado de manejo, organización, incentivos, derechos y obligaciones de las Zonas Francas Industriales y sus empresas.
Fecha de entrada en vigor: enero de 1990.
Fuente: CEDOPEX, El Exportador Dominicano, Año XVIII, No. 99, Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones, 1990.
- Leyes sobre incentivos a las exportaciones** *Ley No. 69* del 7 de noviembre de 1979. Establece incentivos para las exportaciones no tradicionales, con alto valor agregado nacional. Esta Ley fue reglamentada por el Reglamento No. 1609 del 13 de marzo de 1980.
Fecha de entrada en vigor: 7 de noviembre de 1979.
Fuente: Investment Promotion Council of The Dominican Republic, Investors Handbook and Business Guide, American Chamber of Commerce of the Dominican Republic, 1989.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEY SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

En República Dominicana la norma básica que regula la actuación del capital extranjero está contenida en la Ley No. 861 del 22 de julio de 1978 y su modificación mediante la Ley No. 138 del 24 de junio de 1983.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera directa

Con anterioridad a 1978, República Dominicana no contaba con una legislación que regulara la inversión extranjera en el país. Las inversiones se regían por la legislación general, por disposiciones sectoriales y por algunas normas cambiarias del Banco Central.

Al dictarse la Ley No. 861 del 22 de julio de 1978 y sus posteriores modificaciones, se definen los alcances de la inversión extranjera; los procedimientos de registro; la regulación de las remesas de capital, utilidades y dividendos al exterior; las áreas en las que se puede invertir, sin perjuicio de los sectores reservados y los incentivos y garantías a la inversión. Además bajo esta legislación, se regula el proceso de transferencia de tecnología.

3. Definición de inversión extranjera directa

El Artículo No. 1 de la legislación dominicana define como inversión extranjera directa a los aportes provenientes del exterior, propiedad de personas físicas o morales extranjeras y de personas físicas nacionales no residentes en el país, al capital de una empresa, en monedas libremente convertibles, en maquinarias o equipos, en herramientas, en instrumentos, en accesorios y repuestos, con la finalidad de obtener el registro de la inversión en el Banco Central.

Igualmente se considera como inversión extranjera directa, las solicitudes de registro de las inversiones en moneda nacional, generadas por inversiones extranjeras registradas.

4. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

Según lo señala el Artículo No. 41 de la Ley No. 861, no se concederá a los inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que el que le otorguen las leyes a los inversionistas nacionales.

5. Autorización y registro de la inversión extranjera directa

Las inversiones extranjeras directas pueden realizarse en República Dominicana previa autorización del Directorio de Inversión Extranjera. Después de su aprobación, la inversión debe registrarse en el Banco Central.

Al mismo procedimiento están sujetas la reinversión de utilidades y la inversión extranjera nueva. Esta última se refiere a la reinversión de utilidades en una empresa distinta de la que generó las utilidades.

El valor de la inversión extranjera directa se registra en moneda de libre convertibilidad. Adicionalmente, el Directorio podrá autorizar el registro de inversión extranjera directa consistente en maquinarias o equipos, herramientas, instrumentos, accesorios y repuestos necesarios para la instalación y funcionamiento de la empresa.

El registro en el Banco Central de una inversión extranjera directa otorga el derecho a la conversión de moneda local, en divisas libremente convertibles, para transferir al extranjero el valor de las inversiones registradas, así como las utilidades que generen.

Las inversiones extranjeras directas en zonas francas industriales, no requieren de la aprobación del Directorio. Además, el Directorio puede no autorizar el registro de una inversión extranjera directa en áreas que considere adecuadamente atendidas o cuando las inversiones no contribuyan al desarrollo económico del país, así como en las áreas reservadas al Estado o a inversionistas nacionales.

6. Remisión de capital y utilidades al exterior

Las utilidades netas de cada año fiscal provenientes de la inversión extranjera registrada, así como los dividendos, pueden ser remesados al exterior en divisas libremente convertibles, siempre y cuando no excedan del 25% del valor de la inversión extranjera registrada. Así lo establece el Artículo No. 16 de la Ley No. 861. Las utilidades que excedan el 25% no pueden agregarse a utilidades de otros años con el propósito de completar dicho porcentaje.

El Directorio de Inversión Extranjera puede autorizar un porcentaje mayor de reinversiones cuando éstas se destinen a empresas de exportación, turismo y en la industria de sustitución, siempre que las mismas generen un 30% mínimo de valor agregado nacional.

Por otro lado, el Artículo No. 21 señala que el inversionista extranjero tiene derecho a remesar el capital registrado cuando venda sus acciones, participaciones o derechos a inversionistas nacionales o extranjeros o cuando se produzca la liquidación de la empresa en la cual realizó su inversión.

7. Sectores prohibidos para el capital extranjero

Algunos sectores económicos son, por disposiciones legales restringidos para el capital extranjero, destacándose:

- a) El Artículo No. 23 de la Ley No. 861 establece las siguiente áreas de inversión reservadas:
 - Los servicios públicos, tales como agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, correos, telecomunicaciones y teléfonos.
 - La explotación de materiales radioactivos, minas e hidrocarburos.
 - Adquisición de acciones, participaciones o derechos de propiedad de inversionistas nacionales.

- b) En la misma legislación se consideran reservadas a empresas nacionales las siguientes actividades:
 - La producción de materiales y equipos directamente vinculados a la defensa y seguridad nacional.
 - Publicidad, radiodifusión, televisión, diarios, revistas, empresas editoras y medios de comunicación masiva.
 - Transporte terrestre interno, salvo los furgones que se relacionan directamente con la importación y exportación; transporte aéreo interno, marítimo de cabotaje y marítimo internacional.
 - Explotación forestal.

- c) Se considera del dominio de empresas nacionales y mixtas, donde la propiedad extranjera debe limitarse al 49%:
 - Explotación agrícola, avícola y ganadera.
 - Pesca.
 - Bancos comerciales y de inversión y otras instituciones financieras.
 - Seguros.

- d) Las personas o empresas extranjeras que deseen invertir en bienes raíces deben obtener permiso de la Presidencia. No obstante, no es necesaria ninguna autorización previa si al menos el 30% del capital pertenece a dominicanos. Ello es establecido por el Decreto No. 2543 del 2 de marzo de 1945 y sus posteriores modificaciones.

- e) Cualquier persona o empresa extranjera que participa en alguna licitación u oferta pública debe estar asociada con una empresa nacional o mixta para ejecutar la obra pública. En todos los casos, la participación de nacionales en el manejo o en los puestos directivos no debe ser menor del 50%. El porcentaje de participación nacional puede reducirse a 30% cuando a las personas o empresas nacionales que intervienen no les sea posible poseer un porcentaje mayor.

8. Tributación

República Dominicana ha firmado convenios de doble tributación con Estados Unidos y Canadá.

Impuesto a la Renta Personal: Este impuesto está basado en la combinación de una tasa uniforme, la cual varía según la categoría de ingreso y un impuesto complementario que es progresivo. Este impuesto se aplica a los individuos y a los negocios no corporativos. Los no residentes que reciban ingresos de fuente dominicana pagan sólo el impuesto uniforme, pero a una tasa mayor. Las categorías de ingreso son las siguientes:

-	CATEGORIA I:	Ingresos derivados de bienes inmuebles	6%
		No residentes	15%
-	CATEGORIA II:	Ingresos de inversiones en propiedades personales, incluyendo intereses, dividendos y royalties	12%
		No residentes	20%
-	CATEGORIA III:	Ganancias derivadas de negocios	8%
-	CATEGORIA IV:	Ingresos de independientes	4%
-	CATEGORIA V:	Salarios y otros ingresos derivados del empleo, menos una exoneración de RD\$ 2,400	2%

El impuesto complementario varía desde una tasa de 3% para ingresos inferiores a RD\$ 2000 a un máximo de 70% para ingresos superiores a RD\$ 900000.

Impuesto a la renta de las corporaciones: Este impuesto es progresivo, desde una tasa de 10% para ingresos netos de RD\$ 5000 o menos hasta 46% para ingresos superiores a RD\$ 250000. Adicionalmente existe un impuesto uniforme de 2% y un recargo de 3% sobre la cantidad del impuesto al ingreso. Para sucursales de compañías extranjeras, existe un impuesto de 20% del ingreso neto remitido a la casa matriz, después del pago del impuesto progresivo al ingreso corporativo.

Impuesto a las ganancias de capital: Las ganancias de capital están exentas de impuestos, salvo que se trate de la venta de activos de una empresa realizada por un empresario o empresa sujetos a los impuestos al ingreso.

Por otro lado, existen regímenes tributarios especiales para ciertas industrias:

CLASE A:	las establecidas en Zonas Francas.
CLASE B:	las industrias nuevas de alta prioridad para el desarrollo del país.
CLASE C:	las dedicadas a la transformación de materias primas o la manufactura de productos para mercado interno.

Entre los beneficios tributarios de estas industrias tenemos:

- Exoneración del 100%, 95% y 90%, para las empresas de Clase A, B y C, respectivamente, de todos los impuestos aduaneros y a la importación, incluyendo

aranceles, impuestos unificados e impuestos al consumo, que recaigan sobre materias primas, productos semielaborados y materiales que sirvan para la producción en las industrias beneficiadas.

- Exoneración del 100% de todos los impuestos aduaneros y aranceles sobre la maquinaria y equipo importados en perfectas condiciones de trabajo y que son usados estrictamente en la unidad industrial.
- Exoneración del 100%, 95% y 90%, para las empresas de Clase A, B y C, respectivamente, de todos los impuestos aduaneros y a la importación, incluyendo aranceles, impuestos unificados e impuestos al consumo que existan sobre combustibles y lubricantes usados exclusivamente para el proceso industrial, excepto gasolina.
- Exoneración del 100% de los impuestos sobre el ingreso personal.
- Exoneración del 100% del impuesto sobre las patentes y todos los impuestos municipales sobre producción y exportación.
- Exoneración del 100% del impuesto al capital.

El sector turismo recibe los siguientes incentivos tributarios:

- Exoneración del 100% del impuesto a la renta.
- Exoneración de los impuestos sobre la construcción.
- Exoneración de los impuestos sobre la incorporación o el incremento del capital.
- Exoneración de los impuestos nacionales y municipales sobre las licencias y espectáculos públicos.
- Exoneración del 100% de todos los impuestos a la importación sobre los artículos y materiales que no son obtenidos en la calidad y precio en el mercado local, los cuales son necesarios para la construcción y equipamiento de las actividades turísticas.

Las exportaciones de caña de azúcar, café, cacao, tabaco, ciertos minerales, etc. y que sean considerados de alto interés nacional, pueden recibir el beneficio del Certificado de Pago Tributario (CAT) en una cantidad no superior al 15% del precio FOB o CIF. Si se trata de productos que contienen un alto contenido agrícola de origen nacional, el porcentaje se elevará a 25%.

Para el sector agroindustrial, los beneficios fiscales son un tanto más complejos. En primer lugar, todas las actividades agroindustriales son clasificadas en dos categorías: **Primera Categoría:** Agroindustrias Integradas (producen materias primas de origen agrícola, las procesan industrialmente y comercializan los productos terminados o semielaborados); **Segunda Categoría:** Agroindustrias No Integradas (no cumplen con el criterio de la primera categoría).

Adicionalmente, los beneficios fiscales contemplados en la Ley No. 409 son aplicados a empresas en las que la participación de accionistas extranjeros no exceda el 49%.

En segundo lugar, las actividades agroindustriales son clasificadas de acuerdo con el porcentaje de uso de materias primas nacionales respecto del costo total de las materias primas, de la siguiente manera:

Sub-categoría A:	Entre el 50% y menos del 65% del costo total.
Sub-categoría B:	Entre el 65% y menos del 85% del costo total.
Sub-categoría C:	Entre el 85% y 100% del costo total.

En tercer lugar, el Directorio de Promoción Agroindustrial clasifica dichas actividades en tres áreas territoriales:

Zona 1:	Zonas con el más bajo nivel de desarrollo económico y social.
Zona 2:	Zonas con un nivel de desarrollo económico y social diferente del incluido en las Zonas 1 y 3.
Zona 3:	Zonas con el más alto nivel de desarrollo económico y social.

Después de haber ubicado a las actividades dentro de estas categorías de clasificación, las agroindustrias pueden acogerse a la Ley de acuerdo con las siguientes clases de incentivos tributarios:

Primera Clase:	Exoneración del impuesto a la renta.
Segunda Clase:	Exoneración de los derechos de importación o impuestos y otras cargas relacionadas, incluyendo, derechos, impuestos unificados e impuestos al consumo interno que afecten a los productos semielaborados incluidos en la composición del producto final.
Tercera Clase:	Exoneración de los derechos de importación o impuestos y otras cargas relacionadas, incluyendo derechos, impuestos unificados e impuestos al consumo interno que afecten a: <ol style="list-style-type: none"> a) Combustibles y lubricantes usados estrictamente en el proceso industrial, excepto gasolina. b) Maquinaria, equipo, partes industriales y accesorios que son importados exclusivamente para formar parte de la unidad industrial.
Cuarta Clase:	Exoneración del impuesto a la renta de la parte del ingreso neta imponible que personas físicas o legales reinvierten en industrias o promoción de nuevas industrias.
Quinta Clase:	Exoneración del impuesto a la renta de la parte del impuesto neto estimado que personas físicas o legales pueden invertir en títulos o valores, tales como bonos, hipotecas y otros similares, que no sean liquidados por al menos 5 años. Igualmente, los intereses percibidos por dichos valores están exentos del impuesto a la renta y otros impuestos que puedan ser establecidos en el futuro.

Para establecer los porcentajes en que las empresas agroindustriales son beneficiadas por estas exoneraciones, tales empresas son clasificadas de la siguiente manera:

CLASIFICACION I: Todas las agroindustrias integradas de la categoría C (todas las zonas) y B (excepto la Zona 3) y las agroindustrias no integradas de todas la subcategorías, pero exceptuando las de la Zona 1.

- Exoneración del 100% de la primera clase.
- Exoneración del 100% de la segunda clase.
- Exoneración del 100% de la tercera clase.
- Exoneración del 100% de la cuarta clase.

CLASIFICACION II: Todas las agroindustrias no incluidas en las clasificaciones I y III.

- Exoneración del 80% de la primera clase.
- Exoneración del 60% de la segunda clase.
- Exoneración del 80% de la tercera clase.
- Exoneración del 15% de la cuarta clase.

CLASIFICACION III: Todas las agroindustrias no integradas y que adicionalmente pertenezcan a las sub-categorías A o B.

- Exoneración del 50% de la primera clase.
- Exoneración del 40% de la segunda clase.
- Exoneración del 60% de la tercera clase.
- Exoneración del 50% de la cuarta clase.
- Exoneración del 10% de la quinta clase.

Por último, todas las empresas agroindustriales de cualquier tipo poseen los siguientes incentivos:

- Exoneración del impuesto a la construcción y las operaciones de bienes raíces.
- Exoneración del impuesto a la constitución de compañías comerciales o incremento de su capital.
- Exoneración del impuesto a las patentes.

Los propietarios de tierras también están sujetos a ciertos impuestos especiales. Así, la Ley No. 32 de 1974 establece un impuesto de 2% sobre el valor de la tierra envuelta en alguna venta o intercambio de inmuebles, incluyendo ventas condicionales y otras transacciones.

En cuanto al sector minero, la Ley de Minería (Ley No. 146 de 1971) fija un impuesto sobre la producción de las concesiones de compañías privadas en 40% de los beneficios, y un impuesto adicional de 18% sobre los dividendos enviados fuera del país.

Finalmente, las empresas que se establezcan en zonas francas reciben el 100% de exención en los siguientes impuesto: de la renta, sobre la construcción, de constitución de sociedades, municipales, de importación, aranceles, derechos aduaneros y conexos, de importación y reexportación, de patentes, sobre activos o patrimonios, transferencias de bienes industriales y servicios, derechos consulares, así como de otros impuestos relacionados con actividades secundarias o de servicios que beneficien a los empleados y sus familias.

9. Royalties o regalías

Los Artículos No. 34 y 35 de la Ley de Inversión Extranjera señalan que las contribuciones tecnológicas intangibles darán derecho al pago de regalías, pero no podrán computarse como aporte de capital a la empresa concesionaria. Además, el Banco Central no autorizará la remesas de divisas por concepto de regalías de los contratos previamente registrados, si no se presentan los documentos comprobatorios de la liquidación de los impuestos correspondientes al ingreso percibido por la empresa que concede la tecnología.

El impuesto pagado sobre las regalías es de 30%.

XXIII. TRINIDAD Y TOBAGO

II. MARCO LEGAL

A. RESUMEN

- Legislación específica sobre inversión extranjera directa** *Ley No. 16 del 17 de agosto de 1990, Ley de Inversiones Extranjeras de 1990.* Esta Ley facilita la adquisición de ciertos intereses en tierras o acciones en empresas públicas y privadas, así como la formación de empresas por parte de inversionistas extranjeros. Además, se facilita la inversión para ciudadanos de los países miembros del CARICOM.
Fecha de entrada en vigor: 17 de Agosto de 1990.
Fuente: Trinidad and Tobago Gazette, Vol 29, No. 235, Parte A del suplemento legal del 4 de septiembre de 1990.
- Leyes sectoriales**
- Ley de Incentivos Fiscales de 1979.* Se establecen situaciones en las cuales las empresas estarán exoneradas de impuestos.
Fecha de entrada en vigor: 1979
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Ley de Desarrollo Hotelero de 1963 y sus enmiendas.* Establece incentivos para el desarrollo del sector.
Fecha de entrada en vigor: 1963
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Ley de la Corporación de Desarrollo de Exportaciones de Trinidad and Tobago de 1984.*
Fecha de entrada en vigor: 1984
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Ley de la Corporación de Desarrollo Industrial. Ley No. 11 de 1959.*
Fecha de entrada en vigor: 1984
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Ley de Control de Cambios de 1970.* Establece mecanismos de control sobre las transacciones que involucren operaciones de cambio.
Fecha de entrada en vigor: julio de 1985
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Leyes sobre propiedad industrial** *Ley de Derechos de Autor. Ley No. 13 del 30 de junio de 1985.* Establece las atribuciones que se reconocen a los inventores.
Fecha de entrada en vigor: julio de 1985
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Leyes sobre Zonas de Procesamiento de Exportaciones** *Ley de Zonas Francas de 1988.* Se autoriza la Zonas Francas para el establecimiento de industrias que estarán exentas de impuestos.
Fecha de entrada en vigor: 1988
Fuente: Price Waterhouse, *Doing Business in Trinidad and Tobago*, 1991.
- Acuerdos internacionales**
- Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación),* suscrito con los Estados Asociados de los llamados países menos desarrollados del CARICOM (Belize, Grenada, Santa Lucía, Dominica, Saint Kitts and Nevis y San Vicente y las Granadinas), el 8 de enero de 1974.
Fecha de entrada en vigor: 8 de enero de 1974.
Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.
- Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación),* suscrito con Canadá el 24 de noviembre de 1966.
Fecha de entrada en vigor: 24 de noviembre de 1966.
Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.
- Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación),* suscrito con Dinamarca el 22 de octubre de 1969.
Fecha de entrada en vigor: 22 de octubre de 1969.
Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.
- Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación),* suscrito con Alemania el 22 de noviembre de 1976.
Fecha de entrada en vigor: 22 de noviembre de 1966.
Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.
- Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación),* suscrito con Francia del 22 de diciembre de 1987.
Fecha de entrada en vigor: 22 de diciembre de 1987.
Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Acuerdos
internacionales
(continuación)

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con Italia el 18 de diciembre de 1971.

Fecha de entrada en vigor: 18 de diciembre de 1971.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con Noruega el 18 de diciembre de 1969.

Fecha de entrada en vigor: 18 de diciembre de 1969.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con Suecia el 12 de diciembre de 1984.

Fecha de entrada en vigor: 12 de diciembre de 1984.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con Suiza el 31 de mayo de 1973.

Fecha de entrada en vigor: 31 de mayo de 1973.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con el Reino Unido el 21 de diciembre de 1982.

Fecha de entrada en vigor: 31 de diciembre de 1982.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

Double Taxation Relief (Tratado de Doble Tributación), suscrito con Estados Unidos el 28 de diciembre de 1970.

Fecha de entrada en vigor: 28 de diciembre de 1970.

Fuente: CEPAL, Sede Subregional para el Caribe, Puerto España, Trinidad and Tobago, 1993.

B. CARACTERISTICAS DE LA LEGISLACION SOBRE INVERSION EXTRANJERA

1. Norma básica actualmente vigente

Actualmente la inversión extranjera se rige por la Ley de Inversión Extranjeras de 1990 (Ley No. 16). En ella se levantan una serie de restricciones. El gobierno considera que las "joint-ventures" entre empresas nacionales y extranjeras o entre empresas estatales y extranjeras es la forma más conveniente de inversión. Bajo circunstancias especiales, se permite que el 100% del capital sea extranjero. Otro de los cambios es que ahora se permite la adquisición por parte de los inversionistas extranjeros de propiedades para propósitos tanto residenciales como comerciales. Además se permite adquirir acciones de compañías privadas sin restricción.

2. Evolución de la legislación sobre inversión extranjera

Si bien no existen muchos antecedentes al respecto, dadas las características de la economía de Trinidad y Tobago muy concentrada en la industria petroquímica, los esfuerzos reguladores estuvieron dirigidos hacia ese sector. En los demás sectores de la economía existían algunas leyes que daban incentivos para la inversión extranjera, tal es el caso de la Ley de Desarrollo Hotelero de 1963 que tenía por objetivo mejorar la infraestructura hotelera del país.

Como consecuencia de la caída de los precios internacionales, la industria del petróleo de Trinidad y Tobago entró en una profunda crisis. El gobierno, enfrentado a esta situación, inició una serie de esfuerzos para diversificar la estructura productiva del país. En ese sentido, se dictó la Ley de Incentivos Fiscales en 1979 estableciendo regímenes especiales para orientar la inversión hacia otros sectores. Luego vendrían la Ley de la Corporación de Desarrollo de las Exportaciones, la Ley de Zonas Francas de 1988 y, por último, la Ley de Inversión Extranjera de 1990 que implica un trato más liberal hacia los capitales de origen extranjero.

3. Tratamiento jurídico al inversionista extranjero

No existe ninguna diferenciación entre los inversionistas nacionales y extranjeros. Tienen acceso a todos los sectores económicos salvo prohibición expresa. Además, los inversionistas de origen extranjero gozan de los mismos incentivos que se establecen para la inversión nacional.

Trinidad y Tobago tiene firmado un acuerdo con el gobierno de Canadá mediante el cual las inversiones de individuos o empresas en proyectos aprobadas por el gobierno están protegidas por un seguro que cubre algunos potenciales riesgos, tales como guerras, insurrecciones, motines, expropiaciones, confiscaciones y la inconvertibilidad de la moneda de Trinidad y Tobago.

4. Autorización y registro de la inversión extranjera

En la mayoría de los casos, no existe el trámite de autorización. Sin embargo, el inversionista extranjero debe entregar al Banco Central información sobre su capital para generar empleos, su liquidez en moneda extranjera, el grado en que se sustituirán importaciones o se generarán exportaciones y su potencial contribución al bienestar del país. Con estos antecedentes el Banco Central le otorga un estatus determinado a la inversión.

Finalmente, con el fin de asegurar la repatriación de capital, el inversionista debe mantener una evidencia escrita del monto introducido al país.

5. Remisión de capital y utilidades al exterior

La repatriación de capitales, utilidades, dividendos e intereses por parte de inversionistas extranjeros está permitida. Sin embargo, las condiciones bajo las cuales se hacen las repatriaciones están reguladas por el Banco Central, en concordancia con el estatus asignado a la inversión. Generalmente, el permiso se obtiene acreditando el pago de los impuestos correspondientes o cuando se ha obtenido con anterioridad la aprobación de acuerdos técnicos.

6. Sectores prohibidos para el capital extranjero

En Trinidad y Tobago, los inversionistas extranjeros pueden invertir en cualquier sector de la economía. Legalmente no existen industrias cerradas a la empresa privada salvo los servicios públicos, el sector de energía y el transporte público que son operados directamente por empresas estatales. Sin embargo, debe mencionarse que el gobierno se encuentra actualmente buscando la creación de "joint-ventures" para la operación de ciertos servicios públicos, como ha sido el caso de la empresa telefónica.

Por otro lado la Ley de Inversiones de 1990 establece que un inversionista extranjero no puede adquirir acciones en una empresa pública sin la previa obtención de una licencia especial. Dicha licencia es otorgada en el caso que las acciones de la empresa pública en poder del inversionista extranjero le signifique, directa o indirectamente, una participación del 30% o más del capital social de dicha empresa. Además, un inversionista extranjero puede adquirir tierras en un área que no exceda los cinco acres, para propósitos comerciales o negocios sin obtener una licencia.

7. Tributación

Trinidad y Tobago tiene firmados acuerdos de doble tributación con los Estados Asociados del Caribe (Belice, Grenada, Santa Lucía, Dominica, San Vicente y St. Kitts-Nevis), Canadá, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Noruega, Suecia, Suiza, Gran Bretaña y Estados Unidos.

El impuesto a la renta para las empresas en general es de 45%, mientras que para las empresas sujetas al impuesto sobre los beneficios petroleros es de 50%. En el caso de las personas naturales, las tasas varían de 5% a 35%. El impuesto sobre los dividendos fluctúa entre 10% y 25%, aunque pueden especificarse tasa menores para los países con los que se ha suscrito acuerdos sobre doble tributación.

En cuanto a las regalías, el impuesto está en un rango de 5% a 30%, con tasas menores en caso de acuerdos de doble tributación. En el caso de los intereses, las tasas son de 10% a 30%, bajo las mismas condiciones que las regalías. El impuesto al valor agregado es del orden del 15%.

Por otro lado, la Ley de Incentivos Fiscales establece que para que una empresa pueda acceder a dicho régimen tiene que tener el carácter de residente. Los principales incentivos son la exoneración total o parcial hasta por un máximo de diez años del impuesto a las empresas y un régimen de arrastre de pérdidas por un lapso de cinco años.

Finalmente, la Ley de Desarrollo Hotelero, establece una exoneración del pago por un periodo no menor de cinco años ni mayor de diez del impuesto sobre los beneficios, y un régimen de depreciación acelerada. Del mismo modo, los proyectos podrán tener derecho a la exoneración de impuestos sobre la importación de todos los materiales necesarios para llevarlos a cabo, sin que esto implique la exoneración del impuesto al valor agregado.

Royalties o regalías

No hay restricciones al comercio de tecnología. Sin embargo, los pagos por este concepto están sujetos a un impuesto que fluctúa entre 5% y 30%.